AAR0853
TRAB
S2007
G36
V.2

Antonio García Ponce

Universidad Católica Andrés Bello
BIBLIOTECA
Caracas

Conocer Venezuela colonial

Capítulos para una escritura, sin mitos, de nuestra historia.

TOMO II

TESIS

Caracas, 2007

CAPÍTULO XIV

LA ESCLAVITUD NEGRA

Otro régimen clave para apreciar con claridad la fisonomía que adquirió la colonia española en estas tierras es el de la esclavitud negra, traída originalmente del territorio africano, y prolongada en sus descendientes nacidos aquí. Sus características principales han sido muy bien puntualizadas por los historiadores que han tratado el tema. Se trata de la incorporación, como mano de obra en la explotación de minas y haciendas, de decenas de miles de negros del África, movilizados y vendidos por grandes compañías negreras (portuguesas, españolas, inglesas, francesas, etc.). Los esclavos, comprados por el empresario español aquí radicado, pasaban a constituir un bien, tal como se ha escrito hasta la saciedad en la descripción de las sociedades de Grecia y Roma antigua, y también de otros países, es decir, que no eran personas libres, sino una propiedad más del amo, del mismo modo que lo eran la tierra, el ganado, sus frutos, las edificaciones y los instrumentos de trabajo. Al sacar cuenta del valor de sus pertenencias, el amo contabilizaba al esclavo y le atribuía un precio, pero estas cualidades de bien y precio se trasmitían a los hijos por vía materna, según el principio, universal para la época, de *partus sequitur ventrem*, es decir, hijo de esclava es esclavo Con el transcurso del tiempo, empezaron a llegar esclavos de otras posesiones españoles en América y, además, se les dio a los esclavos otra ocupación, que llegó a ser cuantitativamente importante: la de las labores domésticas. Hasta aquí lo esencial del régimen, porque de algunas otras características suyas hablaremos luego.

Un hecho que revela de modo patente la enorme ventaja de la utilidad de esta nueva mano de obra con la que opera el español es la rapidez con que se implanta en la explotación de los ostrales de Cubagua y zonas cercanas, y es que no sólo la tal rapidez llama la atención sino también la suscita el detalle de sustituir casi en su totalidad a la mano de obra indígena. Ya estos rasgos que adquiere la empresa perlera a los pocos años de la llegada de Colón nos están anunciando el decisivo papel que va a jugar la esclavitud negra en el desenvolvimiento de nuestra colonia.

Nadie como el historiador Ricardo Ignacio Castillo Hidalgo ha seguido con tanta fidelidad este tránsito inicial. Según sus investigaciones, «durante el florecimiento de Nueva Cádiz hubo ya mano de obra esclava traída de África» y, auque no pudo calcular a cuánto

alcanzó su número durante la etapa de florecimiento inicial de la explotación de los ostrales en Nueva Cádiz «sí sabemos que la primera licencia para introducir esclavos negros en la región fue dada el 12 de enero de 1526 a dos mercaderes vizcaínos...»[393], es decir, dos años antes de lo que muchos historiadores consideran como la fecha inicial de la apertura de estas tierras a la esclavitud africana, por lo menos a gran escala, según lo que asientan las capitulaciones firmadas por Carlos V con la casa alemana de los Belzares (Welser). Quizás por ser Cumaná el objeto principal de su estudio, Castillo Hidalgo no pudo hacer nuevas precisiones, pero al menguar Cubagua por el maremoto (*¿tsunami*?) de 1541, y descubrirse nuevos ostrales en la isla de Coche, ahora con mayor resonancia en Cumaná, él despliega una enorme cantidad de datos, encontrados durante su acuciosa investigación en el Archivo General de Indias, y dice que fue Luis de Leiva el descubridor de los nuevo ostrales, en 1574, adonde llegó desde Río de la Hacha con «una canoa de veinte negros»[394]. Hecho el magnífico descubrimiento, arribaron a Margarita siete canoas, y el capitán Luis de Leiva pidió la merced real de una licencia de 300 esclavos para reiniciar las granjerías de perlas[395]. Ya para 1580 las canoas eran 19. Nuevos ostrales se descubrieron en las costas de Margarita y hasta en Araya[396]. Es cuando el investigador precisa la forma de explotación en dichas granjerías o haciendas de perlas, como también se las llamó. Ha surgido el llamado "señor de canoa", un empresario español con una canoa por lo menos, «y un equipo de esclavos negros, que se encargaban de tripularla y de realizar las labores de pesca como buzos, al tiempo que otros esclavos se ocupaban de labores de tipo logístico en tierra, como podían ser el transporte de bastimentos y la preparación de la comida»[397]. La prolijidad con que Castillo Hidalgo describe el perfil del señor de canoa (una persona con buen caudal), el número de esclavos en cada canoa (entre 12 y 24), la cantidad de estas embarcaciones, qué es una canoa y qué es una piragua, las forma de pescar, los tipos de perlas, su precio, el impuesto del quinto real que se paga, las triquiñuelas de que se valen los esclavos para retener perlas de gran valor, y el modo de recuperarlas el señor mediante una especie de ingreso insólito que obtiene el esclavo, etc., nos impide seguir su apasionante relación[398]. De todas maneras, los hechos presentados por el historiador me hacen corroborar la apreciación siguiente: ya antes de completarse el primer siglo de los tres que duró la condición colonial española de estas tierras,

---

[393] Ricardo Ignacio Castillo Hidalgo, *Ob. cit.*, p. 99.
[394] *Ibíd.*, p. 200.
[395] *Ibíd.*
[396] *Ibíd.*, pp. 201 y 203.
[397] *Ibíd.*, p. 207.
[398] *Ibíd.*, pp. 197-265.

el trabajo de los esclavos negros empezó a desplazar en lo esencial a los indios en las ramas verdaderamente productivas de la economía. Y tal desplazamiento se debió a dos razones, tal como lo evidencia la empresa de las haciendas de perlas. Una, que el africano era un trabajador más rendidor que el indio por venir de unas agrupaciones humanas con siglos de progreso histórico mayor que las indígenas. Y la otra, que las órdenes reales que otorgaban al indio su calidad de vasallos libres, y consideraban como un acto ilícito su esclavitud, aminoraban las hipotéticas ventajas de su utilización.

La mayor productividad del africano está a la vista, empezó a verse en esa primera gran empresa colonial establecida por el español y continuó con la fundación y puesta en movimiento de las haciendas de cacao, caña dulce, tabaco, añil y otras. Y la condición libre del indio, distorsionada, violada, desconocida o no, como se quiera, por las artimañas del español, está muy documentada, y para referirme sólo a este primer episodio de la explotación de los ostrales, subrayo lo que trae Castillo Hidalgo en su libro, cuando apunta que muchos indios siguieron trabajando en los ostiales, pero con la advertencia implícita en la Cédula Real del 2 de diciembre de 1578, en la que se ordena al Gobernador y oficiales reales de la Nueva Andalucía que no se impidiese a los indios pescar perlas, aclarando textualmente que «por parte de los indios della nos ha sido fecha relación que se les impide el pescar perlas y en ello reciben agravio, suplicándonos mandásemos que no se les impidiese y se les dejase pescar las dichas perlas, como vasallos nuestros y libres *y como lo hacen los españoles*, pagándonos los derechos y quintos que deben [...] y ansí os mandamos que no impidáis a los dichos indios de esa provincia el pescar perlas [...] y que si trabajaren por su jornal, se les pague bien y en sus manos, y no se les haga agravio ni vejación alguna»[399].

Hay que agregar un detalle que refuerza la idea de las ventajas de productividad que tenía para el europeo el uso del esclavo africano en vez del indígena, no importa su costo, y es el alto precio que alcanzaban las así llamadas piezas de esclavos. Lo señala Castigo Hidalgo cuando hace referencia a los costos de una canoa, al extremo de existir señores de canoa «empeñados y perdidos»[400]. Hay diversas fuentes donde se pueden encontrar casos frecuentes de solicitudes de exoneración de los impuestos correspondientes cuando se piden licencias de importación de esclavos, o se solicitan plazos para cancelar las cuotas que comporta la compra a plazos de los esclavos.

---

[399] *Ibíd.*, p. 203, citando a Enrique Otte (comp.), *Cedularios de la monarquía española de Margarita*, tomo II, n° 373. Cursivas de R.I.C.H.

[400] *Ibíd.*, pp. 210-211.

En todo caso, muy pronto la presencia del esclavo en el aprovechamiento de la tierra para fines de siembra y pastoreo de ganado se hizo casi imprescindible. Es frecuente el hecho de encomenderos que, además de los indios a él encomendados, poseen esclavos que emplean en obras calificadas de riesgo en la época, como las operaciones en trapiches, en minas y en transporte de carga a grandes distancias. En Cumaná, por ejemplo, al menos siete testigos reconocen, durante la visita del Oidor La Riva Agüero, que en ciertos lugares de la provincia, los encomenderos han tenido casas en territorio de la encomienda «por el tiempo que ha querido con sus mujeres, hijos, y esclavos y sus labranzas»[401], aduciendo que los indios encomendados están ubicados en tierras de tales encomenderos; y al menos ocho encomenderos son acusados por indios testigos como incursos en el mismo asunto. Como se recordará, todas las provisiones y normas en los pueblos de encomienda y de misión estipulaban la prohibición del contacto de los indios con los negros esclavos. La violación de tal precepto era fácil, no sólo por lo ya dicho, sino también porque en numerosas ocasiones los indios eran reclutados como peones para trabajar en diversas obras lejos de su encomienda (en la ciudad, en los fuertes, en faenas de pesca, etc.) y allí se encontraban con los esclavos. Si la convivencia de indios y esclavos no pudo ser obstaculizada, el contacto del esclavo con el blanco era, naturalmente, diario. Por consiguiente, el mestizaje estaba a la vuelta de la esquina. Castillo Hidalgo inserta en su obra la existencia en Margarita, ya en 1561, de un mulato (posiblemente hijo de blanco y negra) llamado Juan Suárez[402]. Es posible que la mezcla estuviese en marcha desde años atrás.

De esta manera, se logran perfilar las dos características más importantes que asume la presencia de esclavos negros en nuestra colonia: su papel de mano de obra esencial en las ramas más productivas coloniales, y su aportación a la formación del grupo étnico de los pardos, un estamento social de significativa importancia en la sociedad colonial.

En el sentido más amplio del término, muchas veces se consideraba como pardo a toda persona que tuviese, exagerando las cosas, al menos una gota de sangre negra en sus venas (pero, también, por supuesto, producto de la relación con una persona blanca, en cualquier punto de los ascendientes). Era, no obstante, una variante del muy amplio espectro del mestizaje, aunque bajo el término pardo se

---

[401] Antoinette Da Prato-Perelli, *Ob. cit.*, tomo II, p. 170.
[402] Ricardo Ignacio Castillo Hidalgo, *Ob. cit.*, p. 103.

acogían de modo preferente, al producto de la unión carnal entre blancos y negros, colocado en una escala que iba desde el mulato hasta el quinterón y quizás más allá. En diversos documentos no se consideraba al mulato como pardo, sobre todo si la madre, y no el padre, era persona negra. Es posible convenir en que el mestizaje de blancos con indios debió de ser tratado de otra manera. Sabemos que el indio era tratado como vasallo, que los caciques y principales podían llevar cabalgadura y espada, y hasta solicitar certificación de limpieza de sangre, según documentación al respecto que puede consultarse en el Archivo General de la Nación. No se veía tan despreciable al producto de la relación establecida entre una india con un blanco. Allí está el caso de Francisco Fajardo, reputado como hidalgo, y tratado con el titulo de Don.

El pardo, a medida que corrían los años, fue haciéndose más numeroso, y por efecto de la propia dinámica social, el componente libre entre los pardos se hizo también proporcionalmente mayor, llegando incluso en algunos años y en algunas regiones a ser la capa social más numerosa. Pero, al lado de su cuantía, el pardo llegó también a descollar por encima del indio y del esclavo. Por encima del indio a causa de su mayor facilidad de acceso a la cultura y al saber y la práctica laboral, y por encima del esclavo porque era libre. La inmensa mayoría de los historiadores y sociólogos que han tratado el tema están contestes en afirmar el peso jugado por los pardos en el desarrollo de la Colonia, y se han hecho eco de su aguzada sensibilidad para pujar por un lugar más destacado en el entramado social. De ello es ejemplo muy evidente la Cédula Real llamada de las Gracias al Sacar, tan comentada en la historiografía nacional[403].

Cuantía de la esclavitud

Siguiendo a Federico Brito Figueroa, que es el historiador que se ha ocupado con más dedicación a calcular el número de esclavos en Venezuela colonial, vamos a insertar diversas cifras dadas por él, a las que agregaremos algunos montos suministrados por otros autores.

La mayoría de las estimaciones que incluye Brito Figueroa en su libro corresponden a la esfera de la explotación cacaotera. A partir de esas estimaciones, he tratado de confeccionar el cuadro siguiente, a fin de determinar números promedio, es decir, cuál era el promedio de

---

[403] Cf. Santos Rodulfo Cortés, *El régimen de las "gracias al sacar" en Venezuela durante el periodo hispánico*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1978 tres tomos.

esclavos por hacienda y el número de árboles de cacao por esclavo.

Cuadro N° 102
Relación esclavos por hacienda y número de árboles de cacao por esclavo, según Federico Brito Figueroa

Año	*Haciendas*	*Ubicación*	*N° árboles*	*Esclavos*	*Esclavos x hacienda*	*Árboles x esclavo*
1741	1	Chuao	39.664	190	190	209
1749	1	Caucagua	12.489	27	27	462
1745	7	Valles Aragua	84.000	283	40	297
1745	18	Centro	257.100	595	33	432
1750	555	Centro	5.132.921	18.108	33	283
1810	-	Venezuela	16.000.000	58.964	-	271

Fuente: Federico Brito Figueroa, *Historia económica y social de Venezuela*, tomo IV, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela, 1987, pp. 1156-1169.

Como es fácil apreciar, los promedios son muy dispares y no permiten extraer conclusiones firmes. Eso se debe a la diversidad de haciendas tomadas en cuenta, bien sea por su ubicación geográfica, por su extensión (ya que no se hace diferencia entre haciendas grandes y pequeñas) y también porque algunas estaban a cargo de sus propios dueños y otras en manos, circunstancialmente, de la Iglesia. Además, y esto lo señala claramente Brito Figueroa, el número de esclavos incluye a los que ejecutan servicios domésticos, a los menores de edad, a los inválidos y a los incapacitados por diversos motivos, lo cual puede provocar distorsiones a la hora de hacer los cálculos. Ya veremos que otros autores logran establecer diferentes promedios a los que aquí hemos insertado.

A continuación, Brito Figueroa hace una estimación sobre lo que él llama «la mano de obra esclava de origen africano o descendiente de pobladores africanos» en la que incluye a los esclavos de plantaciones (es decir, no sólo de cacao), hatos y centros urbanos, según sus investigaciones y con el apoyo de las cifras del historiador Eduardo Arcila Farías. He aquí el cuadro resultante:

Cuadro N° 103
Número de esclavos en las diversas provincias de Venezuela en la primera década del siglo XIX

Provincia	*Número*
Caracas	60.880
Maracaibo	10.520
Nueva Barcelona, Cumaná	6.720
Barinas	2.280
Guayana	5.130
Margarita	1.625
Los Andes	665
Total	87.820

Nota: No se incluyen a los negros cimarrones.
Fuente: Federico Brito Figueroa, *Ob. cit.*, p. 1163.

En cuanto a otros autores, la historiadora francesa Frédérique Langue, con amplias investigaciones sobre la sociedad colonial venezolana, afirma lo siguiente: «Se estima en 35.200 el número de esclavos africanos que se importaron a lo largo del siglo [XVIII], o sea el 10% de los esclavos llegados a América durante ese período»[404]. Y agrega: «...en los años 1630, la esclavitud africana supera a la encomienda en la región como fuerza de trabajo»[405].

A la abundancia de cálculos en torno a la cantidad de esclavos en la actividad agrícola cacaotera que suministran muchos historiadores, se opone la parquedad de estimaciones globales en las otras ramas productividad como son la cañera, tabacalera, triguera, minera, maderera, y del añil, el transporte, etc. Queda un poco vaga también la cuantía del servicio doméstico. En este último renglón, no obstante, existe un trabajo, por lo demás interesante, del profesor Robert J. Ferry, de la Universidad de Colorado. Me refiero a su libro *The Colonial Elite of Early Caracas, Formation & Crisis 1567-1767, Berkeley,* University of California Press, 1989. Allí, con una dedicación y una metodología admirables, expone el cuadro familiar de 37 casas de habitación de Caracas, donde vivían 44 familias de la élite caraqueña para mediados del siglo XVIII, entre ellas las que llevan los clásicos apellidos Liendo, Rada, Blanco, Pacheco, Mijares, Tovar, Martínez, Herrera, Mesones, Ascanio, Uribe, Ponte, Plaza, etc. Pues bien, el servicio doméstico en esas casas estaba formado por 664 esclavos, es decir, un promedio de 15 esclavos por casa; pero, a aquel número se añadían 146 sirvientes libres y apenas 4 indígenas[406]. Vale la pena tomar en cuenta estos datos.

El africano, más productivo que el indio

La esclavitud negra se implanta en el tiempo colonial, sobre todo en los terrenos de la agricultura, no porque empieza a escasear la mano de obra indígena, sino porque la mano de obra esclava resulta más productiva y, además, no tiene la protección real concedida a aquélla. En ciertas regiones como la de las provincias orientales el número de indios fue siempre comparativamente mayor que el de esclavos. Es que allí no lograron predominar las haciendas cacaoteras, cañeras o

---

[404] Frédérique Langue, "Orígenes y desarrollo de una élite regional. Aristocracia y cacao en la provincia de Caracas, siglos XVI-XVIII", en revista *Nuevo Mundo Mundos Nuevos,* BAC, mis en ligne le 22 février 2005, http://nuevomundo.revues.org/document769.html.

[405] *Ibíd.*

[406] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, pp. 271-288, http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft5r29n9wb/.

tabacaleras sobre los cultivos más tradicionales de maíz y yuca, a cargo de los indios encomendados o encuadrados en las misiones de religiosos. En cambio, en la provincia de Caracas, donde se ubicaron las mayores haciendas cacaoteras, su mano de obra arrancó siendo negra, y lo mismo ocurrió en los cultivos de trigo, añil y caña dulce. Y el incremento del trabajo esclavo no se explica tampoco, en este caso, por una correlativa disminución de la mano de obra indígena.

El esclavo puede ser también asalariado y hasta propietario

La idea muy extendida de que el esclavo trabajaba de sol a sol sin recibir paga o retribución alguna de su amo no es totalmente cierta. Son muchos los historiadores que se han ocupado de aclarar este punto. Resulta curioso el hecho de ser un acto furtivo, o ilícito, la primera noticia que hemos leído de un pago que recibían los esclavos por su labor. Se trata de la sustracción que hacían los negros de las perlas de más valor que pescaban durante su trabajo, cambiadas luego al amo, es decir, al señor de la canoa, por artículos de primera necesidad o indispensables para ellos, en una suerte de cambalache legalizado por la práctica. La manera cómo se realizaba esta operación, que constituía un fraude al fisco real, la cuenta un funcionario, Francisco Covos, hacia 1590, en la forma siguiente:

> Al tiempo que los negros sacan las perlas de las ostias que ellos llaman desburullar se hallaba presente el señor o su mayordomo de la tal canoa porque los negros no hurtasen alguna perla buena pero con toda esta diligencia y recato lo hacen y de tal manera que toman las mejores y ansí, para restituirlas a sus amos, los amos usan con ellos una diligencia y ardid y es que cada quince días o cada mes, según como anda la pesquería de perlas, un día de fiesta al año los manda llamar a su casa y alli todos juntos les pone delante camisas de ruán, zaragüelles, sayos greguescos, sombreros, bonetes de grana, zapatos, vino y naipes y otras cosas para que los dicho negros se aficionen y puesto allí les dice que tomen de allí lo que más gusto les diere y de que ellos lo han recibido dice que le den la cacona que es la retribución de lo que han llevado y tomado de lo que allí les ofreció y entonces cada uno saca de las perlas que así tomó al tiempo que las sacaba de las ostias, las cuales se ha visto por experiencia son las mejores y esta es la principal granjería de los señores de las canoas, porque son las mejores y más orientales perlas que se sacan[407].

Luego viene la otra retribución, bastante conocida, que consiste en las llamadas arboledillas o haciendillas, un pedazo de terreno que el amo cede voluntariamente al esclavo para que éste coseche o críe allí algunos frutos y animales necesarios para su subsistencia. A veces, lo obtenido por el esclavo iba más allá del mero cultivo para vivir. El esclavo Lázaro Aguilar, de la Obra Pía de Nuestra Señora de Candelaria, pueblo de Las Tinajas, San Felipe, poseía una arboledilla de 1.194

[407] Ricardo Ignacio Castillo Hidalgo, *Ob. cit.*, p. 241.

árboles frutales de cacao, a 8 reales cada uno; 648 horqueteados a 4 reales cada uno; y 41 malos a 2 reales cada uno[408].

Tal concesión lleva implícita la posibilidad de otorgar al esclavo algunos días y horas para él poder atender su granjería. El Administrador de la Obra Pía de Nuestra Señora de la Caridad, en San Felipe, Pbro. Francisco Yanes, atestiguaba que: «lo corriente en esta provincia es que a los esclavos se les dé el sábado y todo el resto del tiempo que le queda libre después de haber sacado la tarea y que el amo de la hacienda les dé tierras para hacer sus conucos y sostenerse así el esclavo y su familia, lo cual les agrada más a los esclavos que tener que trabajar de sol a sol y que los amos los tengan que mantener de comida y legumbres, y que solo por caso raro se ha encontrado que a los esclavos de la hacienda de San Nicolás y de la obra pía de Chuao se les haya permitido que en lugar del conuco siembren árboles de cacao». No es que el sacerdote, por parecerle piadoso el gesto, ha inventado lo que se ha trascrito, porque sigue diciendo que permitir arboledillas es perjudicial porque facilita el robo de cacao y porque ese usufructo «pueden reclamarlo los herederos, lo que encierra el peligro que la hacienda vaya perdiendo tierras»[409]. La académica Ermila de Veracoechea, en esa misma obra suya, pone el ejemplo de Felipe Santiago de Borges y su mujer, Paula Blanco, morenos esclavos de la hacienda de cacao de Cumanibare, quienes fundaron «por orden y voluntad» de sus primeros amos una arboledilla de cacao en dicha hacienda en los ratos que les permitían sus obligaciones. Un día, ellos piden un avalúo, tanto de la arboledilla como de sus propias personas en su condición de esclavos, para entonces poder comprar con el dinero obtenido, su libertad. El avalúo dio los siguientes resultados:

> 138 árboles de cacao frutales a 6 reales cada uno: 103 pesos y 4 reales.
> 509 árboles de cacao horqueteados a 3 reales cada uno: 190 pesos y 7 reales.
> 400 resiembros de cacao a 1 ½ reales cada uno: 75 pesos.
> 18 árboles de cacao malos a 1 ½ r cada uno: 3 pesos y 3 reales.
> Total: 372 pesos y 6 reales.

Presentan como testigos que apoyan su afirmación a don Domingo de Córdova, don José Andrade (que es un evaluador), y don Lorenzo Rabán (que es hacendado y perito evaluador). El Fiscal de Obras Pías, en vista de que son viejos, los avalúa en 200 pesos, y admite que les sea otorgada su libertad[410].

---

[408] Ermila Troconis de Veracoechea. *Los censos en la iglesia colonial venezolana (Sistema de préstamos a interés)*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1982, tomo I, exp. 18, 1821, p. 311.
[409] Ermila Troconis de Veracoechea, *Las obras pías en la iglesia colonial venezolana*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1971, p. 80, t. IX, sección obras pías, f.580/588.
[410] *Ibíd.*, p. 175.

Es probable que la facultad que tenían estos esclavos de vender los frutos de su arboledilla les daba también derecho para trasmitirlos a sus familiares en calidad de herencia. Así se desprende del testamento del padre Jerez de Aristeguieta cuando da cuenta de la situación de su esclava María Ignacia, mujer de Jacobo, al heredar en Curiepe unos árboles de cacao de su padre[411].

Por otra parte, una suerte de ingreso vamos a llamarlo salarial —término que se tiene como ausente en la relación de trabajo del amo y su esclavo— era el que se obtenía a través de la posibilidad de que el esclavo fuera alquilado por el amo para otras faenas. Los ingresos del esclavo por granjería para sí y por el probable alquiler de su mano de obra llegaron a ser admitidos por uno de los poderes más respetables de la sociedad colonial: la Iglesia. En efecto, así lo estableció el Concilio Provincial de Santo Domingo, celebrado en 1622 y 1623, con la participación de la Iglesia del actual territorio venezolano en razón de su subordinación al Arzobispado de Santo Domingo, que comprendía las Antillas (Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo), la costa caribe de la actual Venezuela y la de Nueva Granada (incluso, una de sus sesiones fue presidida por el obispo de la Provincia de Venezuela, fray Gonzalo de Angulo). Dijo el Concilio que no debía permitirse que «ningún dueño de etíopes [así se llamaba a los negros esclavos] arriende sus esclavos en días festivos para ejecutar trabajos serviles, ni nadie los contrate...»[412]. La existencia de estos pagos parece demostrarse en la obra pía de Chuao, donde se han localizado unos pagos hechos a esclavos que trabajaban los sábados en la fábrica de la iglesia, a razón de 4 reales a cada uno, con un horario entre 2 a 11 cada sábado, durante 19 semanas[413].

Pero, hay otro detalle de importancia en las resoluciones del Concilio mencionado arriba, y es el recordatorio de la obligación del pago de tributos a la Iglesia en razón de los frutos obtenidos en las arboledillas: «Cuando los etíopes, por permiso tácito o explícito de sus dueños, cultivan campos o crían animales y recogen sus frutos, deben pagar las décimas de los mismos; porque no hay ninguna costumbre o razón en contra, que tenga vigor»; por el contrario, consta que «a los

---

[411] Juan M. Morales Álvarez, *El mayorazgo del padre Aristeguieta, primera herencia del Libertador*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1999, p. 111.

[412] F.C. Armellada, *Actas del Concilio Provincial de Santo Domingo, 1622-1623*. Caracas, 1970, citado por María Eugenia Perfetti, "Vida cristiana de los esclavos en la Venezuela colonial. Estudio de la normativa eclesiástica venezolana.", inserto en la revista *Anales*, de la Universidad Metropolitana, Caracas, Vol. 4, Nº 2 (Nueva Serie), 2004, pp. 173).

[413] Varios autores, *La Obra Pía de Chuao, 1568-1825*, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Comisión de Historia de la Propiedad Territorial Agraria en Venezuela, 1961, apéndice documental.

ministros de la Iglesia se les deben, por derecho las décimas y primicias (...) de toda clase de frutos: como trigo, cacao, maíz, arroz...»[414].

La esclavitud podía no ser vitalicia

Aunque un principio fundamental del régimen de la esclavitud era su carácter vitalicio, es decir, que de por vida el esclavo pertenecía a su amo, la liberación del negro de tal yugo perenne no es una rareza en la vida colonial y así lo han resaltado todos los historiadores venezolanos. Por supuesto, la más publicitada, la más encomiada, es la que obtenía el negro al rebelarse contra el amo. Siempre, la rebelión del débil contra el déspota es digna de admiración. Las sublevaciones del negro Miguel, del zambo Andresote, de José Leonardo Chirino y muchas otras ocupan y ocuparán puesto preferente las páginas de la Historia. El historiador Federico Brito Figueroa contabiliza 22 conflictos significativos de la rebelión social donde intervienen esclavos, dentro del gran total de 54 que reseña en el tiempo colonial, así:

*Investigación de brujas y hechiceros, 1525-1555, en Margarita y costas de Cumaná.
*Insurrección del negro Miguel, 1552, en Buría y Yaracuy.
*Cimarroneras de la Guajira, 1583-1586, en Maracaibo.
*Sublevación de los negros perleros, 1603, en Margarita y costas de Cumaná.
*Sedición de Nirgua, 1628, en Nirgua.
*Rebelión de negros cimarrones, 1650, en valles del Tuy, Charallave, Yare, Pariaguán, La Guaira, Paracotos.
*Disputa de Nicolás Aular, 1703-1708, en Tocuyito.
*Incursiones a los hatos, 1726, en los llanos de Caracas.
*Rebelión de Andresote, 1730-1732, en Yaracuy.
*Conspiración del negro Guillermo y su mujer, 1749, en provincia de Caracas, Guarenas, Guatire, Capaya, Caucagua, Santa Lucía, Chacao, Ocumare del Tuy, Cuyagua, Choroní, Sepe, Cata, Güigüe.
*Rebelión de Guillermo, 1771-1774, en Tuy y Barlovento.
*Sedición de Juan Cayetano y su mujer, 1773, en Chuao.
*Cumbes de Siquisique, 1786, en Siquisique.
*Rochelas de los llanos, 1780-1810, en los llanos de Caracas.
*Rochelas y rebeliones, 1788, en Guárico.
*Cumbe de Caucagua, 1790, en Caucagua-Curiepe.
*Alzamiento de Miguel Guacamayo, 1794-1795, en valles de Barlovento y Tuy.
*Insurrección de José Leonardo Chirino, 1795, en la sierra de Coro.
*Conspiración de cimarrones, 1795, en Río Caribe, Carúpano, Cariaco y Cumaná.
*Conspiración de Maracaibo, 1799, en Maracaibo.
*Resistencia de los esclavos, 1799, en Curiepe.

---

[414] María Eugenia Perfetti, *Ob. cit.*, p. 191.

*Incursiones a los hatos, 1802, en San Jaime (La Unión). (Federico Brito Figueroa, *Ob. cit.*, pp. 1.253–1.262).

De ellas, una de las más importantes es la protagonizada por Andrés López del Rosario, mejor conocido como **el zambo Andresote**. Siguiendo la investigación llevada a cabo por el académico Carlos Felipe Cardot repetiremos que la misma ocurrió entre 1770 y 1733 en los valles de Yaracuy. Fue inicialmente una protesta de esclavos, alentada en cierta medida por los holandeses de Curazao, pero a la que se unen luego comerciantes y hacendados a causa del bloqueo de la navegación por el río Yaracuy, medida que, en vez de ir contra los insurrectos, lo que ha hecho, dicen ellos, es perjudicar los envíos de cacao fuera de la provincia. La rebelión de Juan Andrés del Rosario, Andresote, comienza en 1730. Uno de los primeros choque es el asalto, ejecutado por Andresote, el 30 de julio de 1731, al fuerte de Luis Arias Altamirano en las bocas del río Yaracuy. Más tarde, en julio de 1732, fracasa un intento de capturarlo en el cerro de Las Guabinas, jurisdicción de Nirgua. El Gobernador en persona se encarga, entonces, de las tareas de perseguirlo, pero regresa a Caracas en mayo de 1733. Es que Andresote se refugia en Curazao. No se sabe en lo adelante su paradero, pero hay quienes afirmaron que murió antes de terminar el año de 1732. En Caracas, se ha abierto juicio a diversos propietarios por apoyar la sublevación y el comercio con los holandeses[415].

Hay que mencionar la participación de los misioneros en la pacificación de la rebelión. Fray Salvador de Cádiz, capuchino de las misiones de Caracas, fue comisionado por el obispo de Caracas, doctor don José Félix Valverde, con el beneplácito del Gobernador y Capitán General de la provincia, que era Sebastián García de la Torre, para que pasara a la pacificación y reducción de la gente alzada en las costas yaracuyanas. Movido por esa intención, pidió al Teniente que comandaba las acciones su autorización para entrar él solo en el territorio de los alzados, a fin de persuadirlos de entregar sus armas, sobre la base de un perdón general, y así evitar nuevos derramamientos de sangre[416]. Al parecer así sucedió, pero fray Salvador, en carta a fray Tomás de Pons, le avisa que el convenio de salvoconducto a los negros reducidos se violó al no concedérseles el perdón convenido, en vista de lo cual los negros se han retirado hacia los desiertos del Orinoco, al ver gente en los caminos hostilizándolos, y amenazándolos con que los iban a "quintar por suertes", y a poner al resto a trabajar en Puerto Cabello.

---

[415] Carlos Felice Cardot, *La rebelión de Andresote (Valles del Yaracuy, 1730-1733)*, 2ª edición, Bogotá, Editorial ABC, 1957, pp. p. 43-69. La fuente del autor es AGI, Audiencia de Santo Domingo, signatura antigua, legajo 57-6-10, s. moderna 782, en Hermano Nectario María, ANH.

[416] *Ibid.*, pp. 109-112.

Fue cuando se detuvieron en Turmero y decidieron acompañar a fray Pons, quien se iba a reportar a su misión en el Orinoco. Fray Cádiz insiste con Pons, el 8 de febrero de 1733, en aconsejarle que los negros sigan para Caracas, que tienen asegurada su protección e indemnidad, que con el cambio de Gobernador se perfila mejor el perdón, y se conseguirá así con la predicación lo que no se pudo con un año de combate armado contra Andresote[417].

En esta correspondencia se revela que los negros se atrincheraron durante dos años en sitios inexpugnables, que recibían auxilio de los holandeses con pólvora, armas y municiones, y también de algunos españoles, malcontentos con las operaciones de los vizcaínos, es decir, de la Compañía Guipuzcoana. Con la predicación, los rebeldes se alejaron 150 leguas de las costas, dejaron libres varias haciendas de cacao que habían ocupado, y dejaron franco a los vizcaínos el comercio de cacao.

La lista de los rebeldes pacificados comprendía a 124 personas, agrupados de la manera siguiente: **A**) reducidos: 9 negros esclavos; 2 mulatos esclavos, 1 zambo esclavo, 2 negros libres, 2 mulatos libres, 1 zambo libre, 1 mestizo libre, 1 pardo libre. **B**) siguen levantados protervos: 14 negros esclavos, 5 mulatos esclavos, 3 negros libres, 1 mulato libre, 2 zambos libres, 2 blancos, 1 irlandés, 5 no especificados. **C**) cimarrones: 45 negros esclavos, 15 indios, 2 negros libres, 1 mulato esclavo. **D**) Mujeres y niños: 7 esclavas, con 2 hijos. Total: 124[418].

Hay que agregar, según se ve en un dictamen del Fiscal, en Madrid, en enero de 1734, que los negros que no siguieron al Orinoco fueron 40, quienes se desviaron a la costa y embarcaron en balandras a Curazao, desde donde invadieron de nuevo (ahora eran 50), acaudillados por el negro Mateo; atacaron San Nicolás, entre San Felipe y Barquisimeto, pero fueron resistidos con pérdida de 9 presos o muertos, y captura de fusiles, pistolas, alfanjes, y una caja de guerra. Al parecer, cada negro de éstos recibía, de creer al Fiscal, un sueldo de 10 pesos al mes y algún cacao. Se apresaron 13 más, que fueron enviados al presidio de San Juan de Ulúa, y a Nueva Veracruz. Hubo un cabecilla que murió en Cádiz y otro estaba preso en La Carraca[419].

El historiador José Marcial Ramos Guédez se ha ocupado de otra sublevación de negros esclavos, ocurrida en la provincia de Caracas en 1749. El autor ha localizado dos expedientes en el Archivo General de la

---

[417] *Ibíd.*, pp. 113-124.
[418] *Ibíd.*, pp. 125-132.
[419] *Ibíd.*, pp. 139-145.

Nación, que contienen una amplia información sobre lo acaecido el 30 de mayo de 1749 en la capital de la Provincia, y el 23 de junio del mismo año en la población de San Francisco de Yare, en víspera de la celebración de la fiesta de San Juan Bautista. Los hechos estuvieron inspirados en la supuesta existencia de una Real Cédula, emitida por el Rey de España, por medio de la cual se le otorgaba la libertad a todos los esclavos. Se trataba de iniciar acciones violentas, las cuales se iniciarían con el alzamiento de todos los cumbes y cimarroneras existentes en la provincia de Caracas, en vista de la existencia de una supuesta Real Cédula, que los amos habían ocultado. Al parecer, con ella se combinaba otra acción de los esclavos negros de la feligresía de Yare, contra la gente blanca en 1749. El autor invita a consultar dichos expedientes[420].

Un negro llamado Guacamaya hacia 1794 es acusado de soliviantar a la negritud, y a las rochelas de Morocupo y Aragüita. Incluso se habló de un levantamiento para el 24 de junio. Se forman patrullas militares para aprehender a los esclavos fugitivos de las cumbes (en 7 meses entre 1794 y 1795 se capturaron a 153 esclavos. Diferencia entre funcionarios y hacendados en cómo enfrentar la situación[421].

La insurrección comandada por **José Leonardo Chirino** ha sido estudiada por muchos historiadores, entre ellos José Gil Fortoul, Eloy G. González, Pedro Manuel Arcaya (con su trabajo clásico *Insurrección de los negros de la serranía de Coro en 1795*, publicado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, en 1949), Federico Brito Figueroa y Ramón Aizpurua. En síntesis, fue un levantamiento dirigido frontalmente contra los propietarios esclavistas y a favor de lo que llamaban los insurrectos Ley de los Franceses, es decir, la abolición de la esclavitud. Refleja, entonces, la influencia de las ideas libertarias que se propagaron en Haití desde 1789, y que fueron reforzadas por la decisión de la Asamblea Nacional francesa, en 1792, de otorgar ciudadanía a los hombres libres de color; y aún más, por el decreto de la Convención Nacional, en 1794, que declara abolida la esclavitud de los negros en todas las colonias de Francia. En Coro, el zambo libre José Leonardo Chirino, hijo de india y de esclavo negro, que ha acompañado a su amo

---

[420] José Marcial Ramos Guédez, *Una "Sublevación" de los esclavos de la Provincia de Caracas, 1749: fuentes documentales.* Internet. Fuente: "Autos generales y pesquisas sobre la sublevación de los esclavos de esta Provincia [de Caracas]. Año de 1749. A Nº 4. Jues (sic) al Sr. Theniente de Gobernador de esta Provincia, Nº 2452", AGN, Capitanía General. Sección Diversos, Tomo XXIX, 1747-1749, folios 276 a 470v. Y el otro, "Autos criminales seguidos contra diferentes negros, por sublevación contra los blancos... Valles del Tuy, 1749. Nº 19 Jues (sic) de Justicia Theniente de Gobernador y con su [asistente] el Sr. Don Pedro Blanco de Ponte", AGN, Capitanía General. Sección Diversos, Tomo XXIX, 1747-1749, folios 471 a 534.

[421] Lucas Guillermo Castillo Lara, *Apuntes para la historia colonial de Barlovento...*, p. 612.

en visita a Haití, en combinación con el negro libre José Caridad González, poseedor de cierto bagaje cultural, se alza el 1 de mayo de 1795, en la hacienda Macanillas, y enarbolan las consigna de abolición de la esclavitud (ley de los franceses) y eliminación de los impuestos de alcabala. Los sublevados armados matan al hacendado José Nicolás Martínez, saquean, imponen su autoridad y se dirigen a tomar Coro. Fracasan en el intento, cae muerto el jefe José Caridad González, los alzados se dispersan, Chirino se esconde, y al rato alguien delata su escondrijo, lo apresan, y es llevado a Caracas a enfrentar el juicio de la Real Audiencia. La sentencia tiene la crueldad de aquellos tiempos: ahorcado en la Plaza Mayor, descuartizado el cadáver, y expuestos la cabeza y los cuartos en varios lugares, para escarmiento de todos.

En 1796, Miguel José Sanz alerta sobre una sublevación negra en 1796[422].

En mayo de 1799 tuvo lugar otro intento de revuelta antiesclavista. La capitaneó un mulato de nombre **Francisco Javier Pirela**, sastre y subteniente de una compañía de milicias pardas, junto con el negro Joseph Francisco Suárez. Obtuvo el apoyo de unos corsarios, los hermanos Juan Gaspar y Agustín Bocé, de Puerto Príncipe, Haití, quienes habían atracado en el puerto de Maracaibo. Estos y su gente, y los complotados a reunir por Pirela atacarían la ciudad y, según las autoridades españolas, se dedicarían a saquear y matar hasta establecer una república. Todo quedó en veremos porque un cabo comprometido denunció el plan conspirativo, se apresaron a más de 60 conjurados, y Pirela fue condenado a 10 años de cárcel, en el castillo El Morro de La Habana[423].

Otra forma de sacudirse los esclavos su status fue la huida a los montes. Se contaron por miles quienes así lo hicieron. Y hasta algunas de esas aglomeraciones de fugitivos, que se llamaron cumbes, palenques, cimarroneras o rochelas, se convirtieron, andando el tiempo, en pueblos. El historiador José Marcial Ramos Guédez refiere, en este sentido, las poblaciones de Ocoyta, Soapire, Taguaza, Morocopa y Curiepe, en la región barloventeña y tuyera[424], aunque Curiepe no fue, en rigor, una cumbe sino un pueblo fundado por morenos libres con todas las de ley, desde sus comienzos.

---

[422] *Ibíd.*, p. 621

[423] Fundación Polar, CDROM.

[424] José Marcial Ramos Guédez, "Mano de obra esclava en el eje Barlovento-Valles del Tuy durante el siglo XVIII", en *Mañongo*, vol. IV, Nº 24, Valencia, Universidad de Carabobo, 2005, pp. 155-162.

Deben mencionarse, también, las otras vías de liberación de los esclavos y darles su justa ubicación en los anales de la sociedad.

Líneas arriba ya se mencionó cómo el esclavo podía dejar de serlo si compraba al amo su libertad. ¿Cuántas veces se repitió el caso de Felipe Santiago de Borges y su mujer, Paula Blanco, que pidieron el avalúo de ellos mismos y de su arboledilla para pagar así su libertad? Debe resultar muy engorroso hacer el cálculo de las libertades concedidas en una región y en un transcurso de años determinados, vista la cantidad y variedad de fuentes documentales donde reposan los testimonios del asunto. Y también sería conveniente tomar en cuenta que algunas libertades que se daban eran luego revocadas. ¿Cuántas veces sucedió esto? No se sabe, pero evidente es lo que le pasó a Julián Cayetano y su mujer Juana Inés, negros libertos de Chuao, cuando fueron acusados, a fines de 1773, de haber promovido la sublevación y fuga de 34 esclavos de la Obra Pía. Ellos alegaron su inocencia, pero por sentencia del Capitán General fueron declarados culpables, se le quitó a Julián Cayetano un caballo y una yegua que se remataron por 10 pesos para cubrir los daños y perjuicios de su acción, y se ordenó su extracción perpetua para Veracruz. La Obra Pía los consideró de nuevo esclavos y los amenazó con presidio perpetuo si regresaban a la hacienda. Un expediente parecido se le levantó al liberto Pedro Pablo[425]. De todos modos, es una tarea pendiente la de aproximarse a la cuantificación propuesta.

Pero, no tan difícil debe ser el cálculo de la cantidad de libertos que lo fueron por la voluntad, gracia o simple disposición de sus amos. Allí están los voluminosos expedientes de las testamentarías coloniales para poder cumplir esa tarea, o, en todo caso, para aproximarse en la calibración de su importancia. Sirva de ejemplo la liberación que hace en su testamento el padre Juan Félix Jerez de Aristeguieta:

> A la esclava Dominga Machado se le da la libertad y se le da una casilla de valor de 500 pesos donde se acoja con los muebles precisos para la labor y trabajo de una pobre, y también se le donan dos negritas bozales, María Merced y María del Rosario.
>
> A Lorenza, esclava cocinera de su madre, que se había salido de la casa de él, que no se le permita pedir limosna y que se la entierre a su costa.
>
> En señal de caridad se interesó en la libertad del mulato carpintero Matías, que es esclavo de don Martín Ascanio, y da un dinero para la operación, que debe completar el mulato con 20 pesos.

---

[425] Varios autores, *La Obra Pía de Chuao...*, apéndice documental.

A Remigia, morena esclava, mujer de su mayordomo Simón, se le concede la libertad.

También a Lauriano, paje de su ahijado doctor don Juan Vicente Echeverría.

Que sea libre el primer nieto, o nieta, de Josef Simón, su mayordomo de Macayra.

A Miguel Lorenzo, moreno esclavo, hoy libre, que viva en la hacienda de la Concepción en una casa, y se le dé así mismo recursos para obtener un conuco y demás servidumbres[426].

Como es fácil apreciarlo, el contenido de ese tipo de documentos permite tener una idea más precisa de las perspectivas que se le ofrecían al esclavo en su oscura y miserable condición, y permite que no se encasille el problema en sólo la antinomia amo-esclavo y en la durísima lucha de clases que de allí surge, para enjuiciar todo como si tal confrontación estuviera sucediendo ante nuestros ojos, en nuestra época —que es la época post-Ilustración— y, en consecuencia, bajo la forma de una solemne aberración del sentimiento humano. Ciertamente, el amo esperaba sacar todo el provecho posible de su bien, como lo hacia con el ganado y con la tierra y con sus aperos, y el esclavo estaba condenado a la resignación, so pena de los mayores castigos. Torturas, vejaciones y muertes jalonaron esa pugna. Pero, entre esta tensión tan polarizada, se movía un mundo de muchos matices. Reflexiónese, en punto a lo dicho, en el reglamento de trabajo propuesto en la obra pía de Chuao para la segunda mitad del siglo XVIII, donde es posible leer, en forma directa o entre líneas, tanto la ferocidad como la actitud realista del amo, y tanto la justa rebeldía como la degradación "anti-clasista" del esclavo.

Las normas en Chuao establecían que, al terminar sus tareas, los esclavos podían pasar a sus conucos, los cuales debían estar bien labrados y surtidos de plantas cadañeras tales como yuca, maíz, arroz, frijoles, caraotas, ñames, batatas, ajonjolí, para poder contribuir, primero, a su alimentación, y luego, con su venta, a la adquisición de sus vestidos. A tal propósito, se asignaba un pedazo de tierra a cada jefe de familia, pero en lugar convenido por el amo, y no donde el esclavo quiera, pues si se deja a la elección de éste, va a elegir las buenas tierras para sembrar cacao. Además de los frutos ya mencionados, el esclavo puede sembrar plátanos, pero nunca cacao, ni siquiera una sola mata. La contravención de esta disposición será considerada como un delito mayor. No está permitido que los esclavos

[426] Juan M. Morales Álvarez, *Ob. cit.*, pp. 167-191

posean bestias mulares o caballares, ni cerdos, cabras o carneros. No deben tener ni portar lanzas, puñales, ni otras clases de armas blancas, ni de fuego, a excepción de las herramientas de trabajo.

Hasta aquí, se ve la parte que alguien puede calificar de liberal o de concesiones graciosas que hace el amo al esclavo. De seguidas, viene la parte dispositiva realmente represiva donde decimos que se puede advertir la manera en que el régimen cierra y entreabre su conducta esclavista. La hacienda padece varios males, entre ellos el hurto de sus frutos, la falta de subordinación y la revolución de sus esclavos. Por tanto, la principal tarea del Teniente de Justicia y del mayordomo debe ser la de reducir la esclavitud a su debida subordinación y obediencia completa, pero a través de medios prudentes y suaves. Sólo cuando el libertinaje y la relajación lleguen a mucho, se utilizarán la fuerza y el castigo, es decir, prisiones y azotes. No debe consentirse la presencia de personas libres, por ser la causa principal de la perversión de los esclavos, y de su inclinación al hurto, entre ellas los llamados "maleteros de Aragua", compradores del cacao hurtado a cambio de aguardiente de caña y baratijas, quienes entran por las dos puertas de la hacienda, la del mar y la de tierra a Turmero y valles de Aragua, las que deben "celarse" permanentemente. Todo cacao debe considerarse como de la obra pía. Se prohíben las ventas de aguardiente, guarapo y otras bebidas nocivas. Los esclavos deben notificar a la autoridad si les llega algún huésped, y si no lo notifican, recibirán castigo de cárcel y azotes. En vista de que los esclavos tienen la costumbre de ir clandestinamente a Sepe, Choroní, Aragua y a las montañas a llevar bastimento a los cimarrones, sólo les está permitido moverse del repartimiento a su trabajo en la hacienda, y concluido éste, a sus conucos. No podrán salir de sus casas desde la puesta del sol hasta el amanecer. Las casas de los esclavos deben tener sólo una puerta por delante y nada más, y si hay ventana debe ser alta y tejida de vara, de modo que no quepa el cuerpo de una persona. Para transitar, es necesario portar un papel de licencia firmado por el Teniente y el mayordomo. Si no lo llevan, serán apresados como fugitivos. No pueden ir al mar cuando quieran, sino con licencia, por horas limitadas, no de noche, y cuando falte carne. Hay que castigar los amancebamientos y proteger a las jóvenes esclavas. La obra debe sufragar el mantenimiento de los niños, de las mujeres paridas y de los enfermos.

Como es fácil apreciar, muchas de estas disposiciones no podían cumplirse y es por ello que la Obra acusa a unos empleados mandadores, suerte de ayudantes del mayordomo, de no haber cumplido sus obligaciones. Además, la prohibición de las arboledillas de cacao supuso la indemnización a los esclavos que ya las tenían. De esta

manera, se ordenó el avalúo de las siembras de cacao, y si el valor de ellas llegase a cubrir lo que cuesta la libertad del esclavo, se libertará a quien lo solicite. El Patronato de la Obra pagó a dos esclavos sus haciendillas avaluadas en 41,1 pesos y 87,4 pesos cada una. Y hay el caso del liberto Juan Alejandro de Liendo, a quien se le pagaron, en 1768, 22 pesos y 5 reales en que fueron avaluados unos árboles de cacao que plantó cuando era esclavo. Sin embargo, se reportó que hubo un momento en que se detuvo la expropiación de las haciendillas porque los esclavos se resistieron a entregarlas al no recibir la prometida indemnización. Tampoco, podía cumplirse al pie de la letra el virtual enclaustramiento de los esclavos en sus viviendas. Está el caso de tres muchachos esclavos que en 1769 fueron enviados a Caracas para que en la capital los maestros de albañilería y carpintería les dieran clases y, de ese modo, contar en la hacienda con un oficial de herrero que trabaje en su fragua las herramientas de cultivo, y con un oficial de albañil y otro de carpintería para la reparación de la iglesia, de las casas y otros menesteres.

La condición artesanal de algunos esclavos

Y aquí llegamos a otra situación imperante en la esclavitud colonial, que es la presencia de ciertos oficios artesanales, adoptados por los esclavos gracias a la enseñanza que les suministran los maestros profesionales, trabajadores libres, del gremio de artesanos. Al ejemplo que acabo de citar arriba se une este otro: el negro Miguel Caro, propiedad de Juan Martínez de Vilela, es alquilado por éste, durante cuatro años, al cerrajero Juan Muñoz Ferrero, en 1598, a partir del 1° de enero venidero, para que aprenda el oficio, con la condición de que Juan Muñoz «no pueda sacarle de su poder»[427].

Las agrupaciones de las cofradías

Otra peculiaridad de la esclavitud colonial, al parecer común en otras latitudes de la América española, es la agrupación de los negros en sus propias cofradías. En la iglesia de San Mauricio de Caracas, por ejemplo, funcionaron tres cofradías: la de San Juan Bautista, fundada el 14 de marzo de 1611; la de Nuestra Señora de la Guía, fundada en 1701, por Cristóbal de Flores; y la del Santísimo Sacramento, fundada en 1751. La formaban negros de nación Tarí, aunque se admitían a

[427] Manuel Pinto C., *Ob. cit.*, p. 429.

indios y pardos en calidad de "hermanos redimidos". Para 1816, existían en Caracas 15 cofradías en 8 iglesias. Sus funciones eran de tipo religioso, tales como la devoción a su santo Patrono, la recolecta de limosnas y tributos, la celebración de las fiestas del Patrono, de la Cuaresma, de los Difuntos, y otras. También ejercían funciones sociales en cuanto a la ayuda de los cofrades enfermos y pobres, y la solidaridad en sus enfermedades y muerte. La actividad económica para sufragar sus gastos consistía, fuera de la limosna que cada cofrade daba de 8 reales a su ingreso, una cuota anual de 4 reales, para invertir en diversas ocasiones en la adquisición de bienes para la cofradía, y su incremento, mediante negocios con los bienes que les habían sido legados (venta de locales, censos, etc.). Puede decirse que la función esencial de las cofradías de negros era la del servicio a Dios y obtener la felicidad eterna de ir al Cielo. De allí que las ceremonias del entierro y rezos por el descanso eterno del alma de los difuntos tenían una brillantez especial.

Las cofradías tenían su mayordomo para la administración diaria, sus miembros tributarios (los esclavos) y redimidos (los indios y pardos), sus libros de registro llamados "abecedarios", donde además de los miembros citados, se anotaban los protectores, los defensores, los procuradores, el mayordomo-tesorero, y oficiales. Los protectores de la cofradía tenían un rango especial, eran dos eclesiásticos y dos seculares. Y el mayordomo, al principio, no podía ser esclavo por impedirlo el régimen legal, pero una sentencia de un juez, el 11 de julio de 1773, permitió a los esclavos tener voz activa y pasiva en todas las elecciones, en caso de que mostraran la licencia y consentimiento de sus amos para actuar en la cofradía. Otros problemas surgidos con cierta frecuencia en las cofradías fueron las acusaciones de dispendio en los gastos y hasta enriquecimiento personal de algunos directivos. Fuera de esto, las cofradías tuvieron problemas menores y uno de ellos provino de los frecuentes desórdenes que ocurrían en algunas procesiones de santos, al calor de los bailes de tambor[428].

En verdad, parece que fueron frecuentes tales excesos en las procesiones de los negros. Así lo da a entender el documento sinodal que arriba hemos mencionado cuando aprueba que es necesario guardar «la santa costumbre, que ha habido en esta ciudad [de Caracas], de que sus curas saquen en procesión, los domingos, y fiestas de la cuaresma, la gente de servicio, cantando por las calles las oraciones, el credo y los mandamientos»[429]. A juicio del Obispo, esta costumbre debía celebrarse

[428] Ermila Troconis de Veracoechea, "Tres cofradías de negros en la Iglesia de "San Mauricio" en Caracas", en Revista *Montalbán*, N° 5, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 1976, p. 339.
[429] María Eugenia Perfetti, *Ob. cit.*, p. 182.

en todas las demás ciudades, villas y lugares, «de este nuestro obispado, sin exceptuar las estancias, y haciendas, en que hay número de personas, negros, libres y esclavos, indios o cualquier otras, que en ella asistieren; de suerte que ninguno se escape ni escuse de tan necesaria enseñanza»[430]. Precisamente, porque estas celebraciones debían guardarse como "costumbre santa" y cristiana, se denuncia la inmoralidad de algunas danzas que perturban "la devoción cristiana" de los hombres. En consecuencia, la Iglesia establece que «las dichas danzas de mulatas, negras, e indias, no se hagan, ni permitan»[431].

El horizonte de los negros libertos

A los negros esclavos, cuando obtenían su libertad, se les abría un mundo de posibilidades, claro está, las que podía permitir una sociedad estamental como la colonial. Los cimarrones, es decir, libertos de hecho y por sus propios medios, a veces obtenían la libertad plena. Hay un caso, al parecer frustrado, pero que ameritó una Real Cédula en 1689. Tal fue la orden del Rey, trasmitida al Gobernador de Venezuela, marqués de Casal, para que se cumpliera el proyecto presentado por el sacerdote capuchino fray Gabriel de Sanlúcar, quien había ideado agrupar en un pueblo bajo la dirección de los capuchinos a cerca de 70 esclavos huidos de los vecinos de Caracas en los últimos 30 años. La orden no se cumplió, a pesar de que el documento real especificaba que este paso no debía sentar precedente, que quedaban libres los esclavos a condición de que no los reclamaran sus antiguos dueños, y que el pueblo se fundase tierra adentro, lejos del contacto con los indios. Debió de insistir el religioso en sus planes, porque una nueva Cédula Real, en 1702, recordó lo dispuesto en la anterior, pero, tampoco esta vez se hizo realidad el proyecto. ¿Por qué? El historiador Castillo Lara no lo dice, pero es probable que la idea naufragó en la espesura de la red burocrática española, donde se ahogaron otras intenciones[432].

Mejor suerte corrieron 30 negros escapados de Curazao que llegaron a Coro. La norma rezaba que, fugados así, obtenían su libertad al pisar suelo español. Sin embargo, las autoridades de la localidad rectificaron y los ofrecieron en venta. No contaban esos funcionarios con la capacidad de protesta de la Compañía de Milicias de Morenos Libres de Caracas, que logró llevar el asunto a la Real Audiencia de Santo Domingo. El supremo tribunal sentencia, con fecha, 15 de junio de 1704, la legitimidad de la liberación de los negros y ordena la anulación

---

[430] *Ibíd.*
[431] *Ibíd.*
[432] Lucas Guillermo Castillo Lara. *Apuntes para la historia colonial de Barlovento...*, p. 344.

de cualquier venta que se haya hecho de ellos. Sucede la consabida apelación de los compradores afectados, pero la libertad es definitiva. El pleito queda cerrado cuando el Gobernador Cañas y Merino incorpora a 16 de los negros curazoleños a la Compañía de Morenos Libres de Caracas[433].

Pero, el acontecimiento más elocuente del horizonte que se les abre a los esclavos libertos es el de la creación, por ellos mismos, de poblaciones y propiedades insertas en el mismo entramado de la sociedad colonial. Un ejemplo emblemático de este suceso es la fundación de Curiepe, que relata el académico Lucas Guillermo Castillo Lara. Sigamos, guiados con su pluma certera, el resumen de la historia de ese pueblo que todavía hoy pervive en el actual estado Miranda.

Juan del Rosario Blanco se llamaba el fundador de Curiepe. Era, para ese momento, 1721, capitán de la Compañía de Morenos Libres de Caracas, creada entre 1630 y 1635. Son 25 hombres los que proceden a levantar las primeras casas del pueblo. A partir de allí, se abre un largo conflicto, porque de inmediato surge la ojeriza de hacendados, cabildantes y hasta gobernadores. El Gobernador Diego Portales ordena la destrucción de Curiepe, pero los negros no se dan por vencidos y se quedan merodeando por los alrededores, a la espera del resultado de sus quejas y protestas. Es que Juan Rosario Blanco ha acudido en apelación a la Real Audiencia de Santo Domingo, en 1723. El máximo tribunal reconoce la existencia del pueblo, y Curiepe renace de sus cenizas. Ya para 1724 cuenta con 66 habitantes, de ellos 4 son hombres y 24, mujeres[434].

El lugar es propicio para habitarlo, tanto que unos isleños, entre ellos Nicolás López y José Manuel Betancourt, piden al Gobernador Portales que les conceda permiso para asentarse en el valle de Curiepe. Pero, quienes se oponen a tal asentamiento figuran en lugar destacado los propios morenos libres del capitán Blanco. No obstante, al ser más fiera la oposición de hacendados y funcionarios, los negros y los isleños terminan por hacer causa común contra sus adversarios. Son tantos los obstáculos y tan insistentes las presiones sobre el valle de Curiepe que los isleños desisten de poblar. Quien más se opone a tales poblamientos es Luisa Catalina Martínez de Villegas, quien alega ser la propietaria de esas tierras. Nuevamente, la Real Audiencia de Santo Domino falla a favor de los morenos libres. Surge ahora el Gobernador Lope Carrillo, quien, en 1730, interpone recursos en contra de la sentencia. Para

---

[433] *Ibíd.*, p. 346.
[434] *Ibíd.*, p. 348.

colmo de males, muere en ese año el fundador, Juan del Rosario Blanco. Una nueva esperanza para los morenos se abre cuando el 9 de noviembre de 1731, el Obispo José Félix Valverde autoriza el curato de Curiepe, a petición de sus pobladores, y se nombra capellán a José Hilario Tinoco. Es, en la práctica, una convalidación de la existencia de Curiepe. Otra vez se oscurece el panorama cuando llega a Caracas una Real Cédula, fechada el 16 de octubre de 1731, que revoca el fallo de Santo Domingo que permitía el asentamiento de Curiepe[435].

Entonces, el Gobernador Martín de Lardizábal, en 1733, da instrucciones para desalojar a los morenos de Curiepe, y cierra toda la costa y los puertos al comercio. El desalojo implica el pago de las bienhechurías levantadas por los morenos. Pero, como Luisa Catalina Martínez de Villegas no quiso pagarlas al precio establecido por un censo levantado al efecto, el Gobernador permitió que los negros siguieran viviendo allí, hasta obtener el justo precio de sus casas y labranzas[436].

Otro hecho que llama la atención es que los negros de Curiepe no se adhirieron al famoso levantamiento de Juan Francisco de León, en 1749, pese a que el canario los llamó a engrosar sus huestes. Por el contrario, los curieperos colaboraron con las autoridades para sofocar la rebelión[437].

La historia termina con otro episodio por lo demás curioso, y feliz (si se tratara de una película). El capitán del pueblo, Joseph Antonio Colmenares, en compañía de Juan Pedro Barrios, viajó hasta el propio Palacio Real de Madrid, en 1763, a implorar al Rey su justicia, y éste, luego de escucharles, dictó una real cédula, con fecha 26 de julio de 1763, que reconocía la posesión (aunque no la propiedad) de las tierras de Curiepe por los morenos libres, y su derecho a recibir el pago de sus bienhechurías, si hubiere lugar a ello[438]. Claro está, la dueña, entretanto, ni tonta, había vendido a terceros parte de sus presuntas propiedades (una fanega aquí, media fanega allá, fanega y media acullá) que poseían varios morenos, y esto dio pie a nuevos litigios[439].

---

[435] *Ibíd.*, p. 437.
[436] *Ibíd.*, p. 472.
[437] *Ibíd.*, p. 527.
[438] *Ibíd.*, p. 536.
[439] *Ibíd.*, p. 542.

Las pugnas y roces entre los esclavos

Es lógico pensar que en ese mundo tan abigarrado de los esclavos negros surgieran pleitos y diferencias. Hubo esclavos que no siguieron a sus compañeros en las rebeliones o cimarroneras, e incluso las combatieron. El hecho de que algunos esclavos recién liberados tuviesen como esclavos a antiguos hermanos de desgracia pone de manifiesto un grado elevado de antagonismo. La historiadora Ermila de Veracoechea sugiere que, detrás de muchas disputas en las cofradías de negros que ella describe, existía el celo de los esclavos de nación Tarí, opuestos a otras etnias africanas a la hora de asumir los cargos de dirección en tales agrupaciones[440]. No se crea que el pleito de los habitantes de Curiepe por la supervivencia del pueblo es posible encerrarlo en las solas fronteras reduccionistas de "la lucha de clases de ricos contra pobres", porque en 1748 estalla un conflicto intestino entre los negros criollos y los negros luangos, oriundos de Curazao. Más de una vez se observó en aquellos tiempos el surgimiento de rencillas entre los negros criollos libertos y los negros escapados de Curazao, y libres por esa misma huída. Ahora, la pelea se presenta cuando el capitán Agustín Hipólito Mejía, que es un negro criollo, es sustituido por José Miguel de Soto, que es un negro luango, en la dirección del pueblo. El choque degenera en enfrentamientos a puñaladas y a tiros entre los dos bandos; las autoridades libran una orden de captura de los Mejía, quienes emprenden la fuga y se refugian en la montaña. Vuelve a poco la calma, pero nuevos choques y disputas se registran en 1749 y en 1752[441].

¿Hizo crisis el sistema basado en el trabajo esclavo a finales de la colonia por una merma histórica de su productividad?

Se discute si la importancia económica derivada de una mayor productividad de la mano de obra esclava, sufrió una disminución a fines del tiempo colonial, en razón de ser más rentable la utilidad del peonaje o, en general, del trabajador libre en las haciendas, con el consiguiente incremento de los jornaleros y peones. Se cita, al respecto, el comentario del barón de Humboldt a propósito de los cambios que el conde de Tovar introdujo en sus haciendas, con el parcelamiento de la tierra a favor de agricultores libres. La idea de Humboldt era la de distribuir buena parte de sus tierras entre familias pobres de los valles

---

[440] Ermila Troconis de Veracoechea, "Tres cofradías de negros...", p. 339.

[441] Lucas Guillermo Castillo Lara. *Apuntes para la historia colonial de Barlovento...*, p. 480.

de Aragua, y mediante ejemplos como el del pueblo de Punta de Zamuro, en el valle de Cura, surgido por la prosperidad del cultivo del algodón a esfuerzo de arrendatarios, tratar de convencer a los dueños de plantaciones de sustituir a los esclavos por arrendadores[442]. Se estaba operando, según el autor, un incremento de la manumisión del esclavo por vía de su salarización en trabajos extras, que incluso llegó a institucionalizarse en los llamados "contratos de manumisión". Con diversos ejemplos (que a nuestro entender sólo prueban la coexistencia de unas explotaciones agrícolas movidas por esclavos con otras movidas por trabajadores libres, sin que se advierta que las primeras van siendo suplantadas por las segundas, no importa que aumente en líneas generales el número de libertos, lo cual se debe a otras causas), los profesores Federico Brito Figueroa y D.F. Maza Zavala sugieren con fuerza la crisis del modo esclavista y su sustitución por el modo feudal. Así, afirma Brito Figueroa:

> En el territorio venezolano a fines del siglo XVIII, en el sistema global de relaciones sociales de producción definidas por las relaciones de esclavitud, se perfilan rasgos de evidente descomposición: la manumisión –creciente- de la mano de obra negra (esclava), el incremento de la población libre jurídicamente y utilizada en condiciones de mano de obra "libre con percepción de salario", pero sometida a presiones extraeconómicas. Asimismo, el desarrollo de actividades económicas (añil, ganadería y otras) que requerían mano de obra temporal y libre, van socavando lentamente las bases del régimen esclavista de producción, contribuyendo de esta manera al fortalecimiento de una estructura de corte **feudal**, en coexistencia con la estructura esclavista y las reminiscencias en la población indígena marginal, de rasgos típicos de la antigua comunidad primitiva[443].

Y afirma Maza Zavala:

> ...la fuerza de trabajo libre o la "enfeudada" demostró ser más beneficiosa para los hacendados que la esclava. La carga de los ancianos, los inválidos, los enfermos, párvulos, etc., la fuga en ocasiones persistente de los esclavos, la necesidad de la fuerza para obligarlos al trabajo y otras circunstancias similares, determinaron que el mantenimiento de la población esclava se hiciese poco provechosa[444].

Se trata de un espejismo, inducido por la conocida tesis marxista de la ley del paso de la esclavitud al feudalismo a causa de la productividad mayor de los campesino siervos (o "enfeudados") sobre los esclavos. En realidad, no existe un estudio serio y sistemático sobre los índices de productividad o rendimiento del trabajo esclavo en las haciendas, en comparación con el trabajo libre de los peones, pero como se han dado apenas ejemplos aislados acerca de una sustitución del trabajo esclavo por el trabajo libre de peones gracias a la supuesta mayor productividad de éstos, me permito citar dos ejemplos que hablan de cómo el trabajo esclavo siguió siendo más productivo que el

---

[442] Federico Brito Figueroa, *Historia económica y...*, p. 1197.
[443] *Ibíd.*, p.1202-1203. Negritas de FBF.
[444] *Ibíd.*, p. 1203.

de los indios o peones libres en las haciendas. Un ejemplo es el que corre inserto en el expediente sobre el Colegio de Niñas Educandas "Jesús, María y José" de Caracas, fundado por don Simón Malpica y doña Josefa de Ponte, sostenido con el producto de la hacienda de caña de Tocorón, pues allí se hace constar que en los autos de la testamentaría de Doña Josefa de Ponte y Liendo, fechado en 1794, hay una suerte de solicitud de solucionar el problema del poco número de esclavos en la hacienda, que no es otro sino el de meter más, «para excusar el monstruoso gasto que se hace en los jornales del peonaje libre», además de que los peones causan «la ruina de las costumbres de la esclavitud que hay y los robos de los frutos sazonados, de los animales, etc.»[445]. Y el segundo ejemplo es el de la hacienda Cumanibare que en el año 1700 tenía 27 esclavos, y en 1776 la cifra había llegado a 35 (en 1716: 32 esclavos y 4,7 mil árboles de cacao; en 1728: 40 esclavos y 4,7 mil árboles; en 1730: 45 a 50 esclavos y 9,0 mil árboles; en 1733: 52 esclavos; en 1748: 36 esclavos y 23,8 mil árboles). En 1747, don Pedro Liendo había dicho que en esa hacienda del valle de Cumanibare (San Felipe) tuvo que emplear mano de obra asalariada, pero fue por la escasez de esclavos[446]. Hay una situación que podría demostrar también la vigencia de la mayor productividad del trabajo esclavo y es la que corre inserta en el libro de Yoston Ferrigni Varela titulado *La crisis del régimen económico colonial en Venezuela*, donde el autor demuestra, con cifras y documentos en la mano, cómo cuatro haciendas cacaoteras situadas dos en Caucagua, una en Santa Teresa y la otra en Ocumare, pertenecientes al convento de las monjas de la Inmaculada Concepción de Caracas, mantuvieron e incluso aumentaron su producción en las dos primeras décadas del siglo XIX, así: las dos de Caucagua vendieron 475,09 fanegas de cacao entre 1800 y 1810, y 673,34 fanegas entre 1811 y 1821; la de Santa Teresa vendió 1.367,92 fanegas entre 1800 y 1810, y 1.495,76 fanegas entre 1811 y 1821; y la de Ocumare vendió 4.597,42 fanegas entre 1800 y 1810, y 6.630,99 fanegas entre 1811 y 1821[447]. Y digo, en forma condicional, que esta situación podría demostrar la plena vigencia de la productividad del trabajo de mano esclava, porque el historiador citado no se refiere a la fluctuación del número de esclavos que tenían las cuatro haciendas durante esos años.

Por otra parte, es el propio Brito Figueroa, quien en páginas más adelante de las ya citadas arriba muestra un ejemplo que prueba cómo entre 1784 y 1800, la población esclava en 11 lugares de los valles de

---

[445] Ermila Troconis de Veracoechea, *Las obras pías...*, p. 182

[446] *Ibíd.*, p. 105 y 153.

[447] Yoston Ferrigni Varela, *La crisis del régimen económico colonial en Venezuela, 1770-1830*, Caracas, Ediciones del Banco Central de Venezuela, 1999, volumen II, pp. 31 y 42.

Barlovento sube del 54,73% al 56,68%, y la de los negros (se supone que sean libertos) apenas sube del 13,46% al 14,65%, mientras que la de los pardos permanece proporcionalmente estacionaria, en 15,4%. En números redondos, hay 1.378 nuevos esclavos, contra 744 nuevos negros (¿libertos?) y pardos. Indios nuevos son apenas 31[448].

Ahora bien, existe otra argumentación, esta vez de enorme solidez, que habla, es cierto, del descenso de la importación de esclavos en un periodo que abarca casi la mitad del siglo XVIII, pero por causas muy diferentes de las atribuidas a un posible descenso de la productividad del trabajo esclavo. Todo lo contrario. Se trata de unos datos precisos obtenidos por el historiador Robert J. Ferry, a quien citaremos en torno al significado y alcances de la insurgencia de Juan Francisco de León en 1749 y sus raíces y repercusiones en el terreno de la actividad cacaotera y su mano de obra esclava. En su libro *The Colonial Elite of Early Caracas, Formation & Crisis 1567-1767*, editado en 1989, Ferry habla de un *boom* del cultivo del cacao hasta 1739, año en que, por causa de la guerra entre Inglaterra y España, tocó a su fin el convenio establecido entre la compañía inglesa South Sea Company y la Corona española, para abastecer de negros la provincia venezolana. La introducción de esclavos venía experimentando un incremento notable. De un promedio de 100 esclavos por año entre 1715 y 1728, el ingreso anual pasó a un promedio anual de 350 esclavos entre 1729 y 1739. Era que a la explotación que desde el siglo anterior venían desarrollando los nobles caraqueños en la región centro costera, se sumaba ahora la de la cuenca del río Tuy, que atrajo, además, un flujo creciente de gente emprendedora, entre ellos modestos cosecheros, muchos de ellos canarios, y hasta esclavos libertos. Pero, la guerra, como ya se dijo, y el monopolio de la Compañía Guipuzcoana, provocaron casi la cesación de la trata negrera. Apenas 350 esclavos entre 1739 y 1784, o sea, un promedio de 7,7 esclavos al año, entraron por los puertos venezolanos, prácticamente nada, en los navíos de la Guipuzcoana. He aquí, en contraste, el lugar que ocupaba Caracas, junto con otros puntos del Hemisferio, en la importación de esclavos desde 1730 hasta 1739, según Ferry, quien toma estos datos de la siguiente fuente: Palmer, Colin A. *Human Cargoes: The British Slave Trade to Spanish America, 1700-1739.* Urbana, Ill.: University of Illinois Press, 1981:

Caracas: 3.683 esclavos
La Habana: 2.874
Veracruz: 1.353
Campeche: 730

[448] Federico Brito Figueroa, *Historia económica y...*, p. 1268.

Cartagena: 5.043 (de 1730 a 1736)
Buenos Aires: 6.473 (de 1730 a 1738)
Portobelo/Panamá: 9.168 (de 1730 a 1738).

Fue a partir de 1784 cuando la compañía de Baker y Dawson, de Liverpool, recibió permiso para renovar la trata, y logró vender en tres años más de tres mil africanos. Es cierto que los nobles caraqueños obtuvieron, con el transcurrir de los años, algunas ventajas, varias de ellas muy favorables, pero la acción de los gobernadores Martín de Lardizábal y Elorza (1732-1737), Gabriel de Zuloaga (1737-1747), Luis Francisco de Castellanos (1747-1749), Julián de Arriaga y Rivera (1749-1751, después ascendido en la Corte a Ministro de Marina e Indias) y Felipe Ricardos (1751-1757), unos más que otros, perjudicaron con fuerza los intereses de los grandes cosecheros, y condujeron al estancamiento, o a la ruina, a los pequeños cosecheros. La drástica merma de importación de mano de obra esclava figura en lugar destacado en los evidentes tropiezos de la explotación cacaotera de fines de siglo. Es muy elocuente, al respecto, la carta que envía el Gobernador Ramírez de Estenoz al Ministro Arriaga, con fecha 14 de marzo de 1761, donde le dice que «la casi general pobreza de los cosecheros se debió al hecho de que ellos no podían aplicar las medidas necesarias para su desarrollo, o sea, que debido a la gran falta de negros ellos no tienen otra opción que virar hacia el peonaje, pero sus costos han llegado a ser tan grandes que plantar cacao resulta más perjudicial que beneficioso, y por tal razón se resisten a sembrar, con el notable detrimento de sus haciendas. La experiencia nos muestra que muchas haciendas [trabajadas por peones] están declinando y por esta razón es cada día más necesario proveerlas con negros»[449].

Entonces, la pregunta ¿hizo crisis el régimen basado en el trabajo esclavo a finales de la colonia por una merma histórica de su productividad?, que sirve de subtítulo a este aparte, tiene dos respuestas: 1) **Sí**, porque "en el sistema global de relaciones sociales de producción definidas por las relaciones de esclavitud, se perfilan rasgos de evidente descomposición" 2) **No**, porque lo que vemos es "el debilitamiento y agotamiento de la bonanza del cacao como directa consecuencia de dos acontecimientos: la política comercial radical de la Compañía Guipuzcoana iniciada en los años 1730, y la declinación del suministro de esclavos disponibles para el mercado de Caracas después de terminar el asiento negrero inglés en 1738". Las recientes investigaciones parecen indicar que la respuesta negativa es la más cercana a la realidad.

---

[449] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, pp. 125, 126, 135, 242-249.

El silencio de la Iglesia ante la esclavitud negra

El historiador español Antonio Ignacio Laserna Gaitán, autor de una minuciosa investigación sobre la visita de don Luis de Chávez y Mendoza a las misiones de la provincia de Cumaná, en 1783, advierte lo siguiente: «Pese al talante humanitarista y de defensa de los marginados que desarrollan los capuchinos, no hemos encontrado referencia documental en la que estos religiosos, se compadezcan de la marginación del negro»[450]. Tenía razón. Llama mucho la atención la disparidad en el enfoque que hacen los misioneros, y la Iglesia en general, de cara a la situación de los indígenas y la de los negros esclavos. Ya habíamos observado que la defensa ardorosa de los indios, abrazada por los misioneros durante todo el tiempo de su apostolado en la Venezuela colonial, no puso nunca en cuestión los derechos adquiridos por la Corona sobre las tierras americanas y sus habitantes. Ambas conductas tienen, entonces, que examinarse con criterio histórico.

La Iglesia, y su sacerdocio, inmersos como estaban en un mundo que estaba saliendo de la Edad Media y que aún le faltaba largo trecho para entrar en el universo de la Ilustración y el imperio de la "Diosa Razón", tenían que seguir aceptando como verdades indiscutibles los postulados de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino acerca de la esclavitud. Su esfuerzo, en este campo, no pasaba de implorar a la conciencia de los hombres para que se cubriese con un manto de piedad, de caridad y de compasión a esa masa irredenta de los negros esclavos, sufridos trabajadores de las haciendas, minas, establecimientos y hogares de sus amos. Consciente de tal limitación, el padre Hermann González Oropeza escribió, al darle un vistazo a las Constituciones Sinodales de Caracas de 1687:

> El Sínodo no va a cuestionar la injusticia misma de la esclavitud; pero asentará principios morales que revelan un cristianismo que no se resigna ante la esclavitud existente, y por eso arbitra una sutil distinción para salvaguardar el principio evangélico de la igualdad y libertad de todo ser humano, aunque termine legitimando la realidad esclavista. El Sínodo establece una básica distinción de concepto al asentar: «Los señores de esclavos y esclavas, tengan entendido, que tienen dominio sobre el servicio que sus esclavos les deben o pueden hacer con el trabajo de sus manos, no sobre las almas redimidas con la sangre de Cristo, porque en esta parte les deben tratar de la misma manera que a sus hijos, cuidando que sean buenos cristianos, que vivan en el santo temor de Dios y hagan todo aquello que acerca de sus hijos y criados les advertimos» (Constituciones Sinodales: Libro segundo, Título XIX, § 3)"[451].

---

[450] Antonio Ignacio Laserna Gaitán, *Ob. cit.*, 268.

[451] Hermann González Oropeza, *Ob. cit.*, en Varios Autores, *Ob. cit.*, p. 235.

Por otra parte, el Sínodo caraqueño de 1687 recordó a los amos sus deberes para con sus esclavos: les darán de comer y vestir; serán moderados en los castigos; no los obligarán a trabajar en días festivos; asistirán a los enfermos; no interferirán en el cumplimiento de los deberes religiosos del esclavo; cumplirán con los tratos o promesas dadas a éstos; procurarán la manumisión en los casos permitidos por la ley[452]. Como se ve, una simple exhortación.

Una paciente búsqueda en numerosos archivos, entre ellos los del propio Vaticano, emprendida por el padre José Tomás López García, logró rescatar para la posteridad la insólita hazaña de dos frailes que quebraron lanzas contra la esclavitud colonial, solicitaron su erradicación total, y sufrieron por ello cárceles y persecuciones. Fueron ellos fray Francisco José de Jaca, nacido en Jaca, España, en 1645, capuchino aragonés, misionero en 1676 en los llanos de Caracas, y fallecido en 1686 ó 1688; y fray Epifanio de Moirans, nacido en Moirans, Franco Condado, en 1644, capuchino, misionero en Cumaná, y fallecido en Tours en 1689. Sus ardientes prédicas contra la esclavitud alcanzaron su clímax en La Habana, hacia 1681. Adoptaron la conducta de no confesar a nadie que tuviese esclavos si no se comprometía a darles libertad absoluta. Fueron tan radicales en sus planteamientos que las autoridades de la isla los encarcelaron. Recluido en el hospital de San Juan de Dios, fray Epifanio de Moirans escribió un libro, en enero de 1682, condenando sin ninguna clase de excusas a los que aceptaban la vigencia del trabajo esclavo. Aunque no polemizaba directamente con lo escrito por Santo Tomás de Aquino, interpretaba a éste arguyendo que sólo admitía la esclavitud bajo condiciones muy precisas, que no era el caso de América, por lo cual pregonaba los siguientes tres principios: «1) nadie puede comprar o vender alguno de los esclavos negros de África, como comúnmente se les llama; 2) todos los que poseen algunos de ellos están obligados sus señores a manumitirlos bajo pena de condenación eterna; y 3) están obligados sus señores a manumitirles, a restituirles sus trabajos y a pagarles indemnización»[453]. Y agrega que la libertad está en una orden superior a todos los bienes del mundo; por consiguiente, hay que hacer la restitución no importa que con ello vaya la extinción de todas las Indias, de España y de Francia[454]. Los dos frailes, luego de su prisión en Cuba, son trasladados a Roma, y luego de ser llevados a otras ciudades e introducir recursos de apelación, etc., terminan por ser absueltos, pero su libertad no es plena, sino que, en una especie de "exilio dorado", son enviados, uno a Valladolid y el otro a

---

[452] María Eugenia Perfetti, *Ob. cit.*, p. 183.

[453] José Tomás López García, *Dos defensores de los esclavos negros en el siglo XVII*, Maracaibo, Biblioteca Corpozulia; Caracas, UCAB, 1982, p. 268.

[454] *Ibíd.*, p. 296.

Segovia, por 6 meses. No obstante, se les restituye a sus provincias. Y, de nuevo ocurre otro arresto, Francisco José de Jaca es encarcelado, escribe una carta desde la prisión, el 22 de noviembre de 1688, a los cardenales de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide en Roma, donde protesta por su nueva prisión, pero termina por morir en Madrid. Epifanio de Morains vuelve a Francia, y muere en Tours.

El padre López García ha expresado en sus conclusiones: «Tuvieron un éxito, porque es cierto que fueron absueltos (y por lo menos aceptada teóricamente la tesis de la libertad de los esclavos), por parte de la Santa Sede y la Sagrada Congregación de Propaganda Fide»[455].

Lugar de la esclavitud en la historia

La esclavitud ocupa un lugar en la historia de la Humanidad, justificado por el desarrollo institucional y de las mentalidades de la época. Pensadores tan insignes como Aristóteles y Santo Tomás de Aquino escribieron muchas páginas para darle un basamento filosófico y, por ende, ético, a la esclavitud. Los historiadores y comentaristas de la Historia que quiebran lanzas fuera de tiempo y lugar contra los reyes de España e, incluso, contra los nobles muy caraqueños de fines del siglo XVIII, quienes al poco andar van a ser los Padres de la Patria, tendrían que estigmatizar también y hasta llevarlos como reos o encubridores de genocidio a todos los monarcas de Europa, Asia y África de la Antigüedad, y también a Pericles, a Demóstenes, a Licurgo, a Voltaire, y tantas figuras notables de aquellos tiempos. La historia y quienes la escriben están en el deber de mostrar, con la ayuda de toda la documentación posible, las dolorosas vicisitudes que tuvieron que soportar centenares de miles y hasta millones de africanos arrancados de sus tierras para venir a esta América a entregar su sudor y hasta sus vidas en aras del desarrollo social. En casi la totalidad de sus páginas, historiadores como Ermila Troconis de Veracoechea, Ricardo Ignacio Castillo Hidalgo, Lucas Guillermo Castillo Lara, John A. Lombardi y José Marcial Ramos Guédez, dibujan con más veracidad el lado cruel de la esclavitud colonial que las encendidas proclamas —que no pueden llamarse de otro modo— o las panfletarias descripciones sobre este aspecto "emblemático del motor de la lucha de clases", escritas por historiadores inficionados por el morbo anti-español o el ladrillo ideologizante marxista. A ellos, habría que decirles que no sean más papistas que el Papa, y que relean a Federico Engels, el más revolucionario de todos los revolucionarios marxistas del mundo, quien,

[455] *Ibíd.*, p. 106.

en su polémica con un pseudo anarquista, lo llama a capítulo y le canta estas verdades que escribe, en 1878, con eso que el coloso de historiador que fue Pierre Vilar llamó más tarde "espíritu histórico":

> Sólo la esclavitud hizo posible la división del trabajo entre la agricultura y la industria en vasta escala, y de ahí la expansión del mundo antiguo, el helénico. Sin esclavitud no hay Estado griego; no hay arte ni ciencia griegos; sin esclavitud no hay Imperio Romano y sin la base del helenismo y del Imperio Romano no hay Europa moderna. Jamás deberíamos olvidar que todo nuestro desarrollo económico, político e intelectual supone un estado en que la esclavitud era tan necesaria como generalmente reconocida[...] Fácil es tronar contra la esclavitud y otras cosas de ese género, en términos generales y dar rienda suelta a la indignación moral acerca de la ignominia de tales instituciones; pero así no se dice más, por desgracia, que lo que todo el mundo sabe, esto es, que esas antiguas instituciones ya no responden a nuestra situación presente y a los sentimientos determinados por esa situación, y nada nos enseña tocante al origen de esas instituciones, a la razón de su duración y al papel que han representado en la historia. Ahora, si estudiamos de cerca este asunto, nos vemos obligados a declarar, por contradictoria y herética que pueda parecer la afirmación, que la introducción de la esclavitud fue un progreso en las circunstancias en que se produjo. Es sabido que la humanidad, nacida de la animalidad, necesitó de medios bárbaros y casi animales para salir de la barbarie. Las antiguas comunidades, allí donde han subsistido, son desde hace millares de años, las bases del sistema político más grosero, del despotismo oriental, desde la India hasta Rusia [...] Dados los antecedentes históricos del mundo antiguo, principalmente del helénico, el progreso consistente en pasar a una sociedad fundada en antagonismos de clases no podía efectuarse sino mediante la esclavitud; y ello fue un progreso, aun para los esclavos, porque los prisioneros de guerra entre los cuales se reclutaba la masa de esclavos conservaban al menos la vida y no se les mataba o se les asaba, como antes[456]

Pero, resulta que si algún escritor venezolano elabora un enfoque histórico parecido, cosechará más de un ceño fruncido. Copio, entonces, una de las conclusiones del enjundioso trabajo del historiador Juan Morales Álvarez dedicado al mayorazgo del padre Juan Félix Xerez de Aristeguieta:

> Otro hecho significativo es la relación del Padre Aristiguieta con sus esclavos, a la que podemos clasificar de justa según lo hemos estudiado en el capítulo IV. Sin embargo, *es la justicia a la que podía llegar un mantuano del siglo XVIII, sin perder su condición de amo*. Por otra parte consideramos que lo peor que le podía pasar a un esclavo era obtener su libertad, ya que se enfrentaba a la vida sin capital, ni experiencia en el campo laboral, y sin suficientes herramientas intelectuales; a una sociedad esclavista, lo que lo imposibilitaba para triunfar. El destino de los libertos era la mendicidad o el bandolerismo. Conclusión desafortunada y contradictoria, pero descarnadamente real[457].

Dos enfoques a elegir

La lucha de los esclavos negros y de los indios abarca los tres siglos del régimen colonial, y forma parte de la lucha entablada en todas

---

[456] Federico Engels, *Anti-Dühring, o la subversión de la ciencia de Eugenio Dühring (Introducción al estudio del socialismo)*, Madrid, Editorial Ayuso, 2ª. edición, 1975, pp. 201 y 202. Internet.

[457] Juan M. Morales Álvarez, *Ob. cit.*, p. 152. Cursivas nuestras, AGP.

las épocas de la Humanidad entre los fuertes y los débiles, los invasores y los invadidos, los ricos y los pobres. Las provincias hoy venezolanas no escaparon de este conflicto dilemático. De la antiquísima pugna entre fuertes y débiles, invasores e invadidos, que tuvo sus peculiaridades en los milenios que antecedieron a la presencia española en estas tierras, se pasó al combate de los aborígenes con el forastero hispano, más entrenado en los afanes de la guerra y con una cultura y un régimen económico mucho más ventajoso que los correspondientes nativos. La llegada de los esclavos de África agudizó la pugna social, tal como se había presentado con sus peculiaridades en la Grecia y la Roma antigua y en la otra pugna, étnico-social, que también se desplegaba entre los africanos mismos. La historia recordará siempre los nombres de los cabecillas del lado débil (indios y africanos) que combatieron la iniquidad y el expolio económico a que fueron sometidos por el blanco, español o criollo, que los dominaba. Pareciera lógico, y hasta razonable y con alto sentido ético, que los historiadores y escritores simpaticen con el débil y exalten sus luchas. También debe parecer lógico y éticamente razonable que existan historiadores que ubiquen la lucha social en los propios marcos donde se desató, con sus miserias y sus justificaciones, y que no admiten que se le adorne con esos ribetes de una siempre heroica y olímpica gesta contra "el vil explotador". El historiador que actúa apegado a la documentación de los hechos y al "sentido de la época" podrá examinar la lucha social en sus verdaderos términos y compases. Si no, caerá lamentablemente en el canto apologético en favor de "los condenados de la tierra". Sirva de ejemplo un trabajo de la historiadora Zully Chacón, miembro del Departamento de Investigaciones de la Academia Nacional de la Historia, y autora de interesantes monografías, publicado en el boletín de la Academia y que lleva por título "Los hierros del conde de Tovar: la lucha de la élite ganadera contra el abigeato". El material documental adjunto, que sirve de motivo a la historiadora para escribir su estudio, reproduce una carta que le dirigen al Gobernador y Capitán General de entonces (sin fecha) don Martín de Tovar, conde de Tovar, don Felipe de Tovar, don Fernando Ascanio, don Bernardo Butragueño y don Luis Rivas, vecinos de Caracas y criadores en los llanos de la provincia, donde expresan su máxima preocupación por los «continuados, y considerables hurtos de mulares que estamos experimentando, como también de las demás especies de animales caballares, y vacuno»[458], situación que los está conduciendo a la ruina, como acostumbra decir en estos casos todo empresario. El modo de operar de los autores de los hurtos es el de agarrar los animales y llevárselos a expenderlos a otros sitios donde no sean conocidas sus

[458] Zully Chacón, "Los hierros del conde de Tovar: la lucha de la élite ganadera contra el abigeato", en *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, tomo LXXXVII, Nº 348, Caracas, octubre-diciembre de 2004, pp. 67-83.

marcas de herraje. Los que cometen los hurtos han mostrado preferencia por las mulas, que se han hecho muy apetecibles por la facilidad de darles «salida en las colonias extranjeras amigas». La tal sustracción se ha hecho tan grande «que de un día a otro faltan en los hatos partidas enteras de mulas»[459]. Agregan que en fecha muy reciente acaban de sorprender un cargamento de mulas en Puerto Cabello, donde pudieron reconocer a varias de su propiedad, entre ellas 14 pertenecientes a don Fernando Butragueño. Dicen que sus denuncias vienen de tiempo atrás, que hay un ganadero a quien «de un golpe solamente le llevaron una madrina de más de cuarenta mulas», y el propio conde denuncia que le «hicieron un robo de ganado de tanto montamiento que de solas las reses que iban dejando escarriadas en el camino recogí mas de setenta»[460]. Según los denunciantes, aunque reconocen «que hay repartidos muchos Jueces Generales de Llanos, y abundantes Jueces Territoriales», siguen los latrocinios porque «unos y otros duermen sobre la omisión, y se descuidan en sus principales institutos», en razón de lo cual «hemos habilitado a don Antonio Juan Zeballos hombre íntegro, y de conocida pureza a fin de que auxiliado de la protección de Vuestro Señor y llevando consigo las letras con que marcamos nuestros animales, y son las mismas que con la debida distinción se miran estampadas en el papel, que con la debida solemnidad presentamos, recorra los Llanos, y ocurra especialmente a Puerto Cabello en donde se hacen con más frecuencia los embarques de mulas, y quite todos los animales que estuvieran marcados con dichas letras», a menos que se acredite su venta con papel o documento, otorgado con la firma de sus dueños, y solicitan también del Gobernador que se franqueen inmediatamente cuantos auxilios se pidieren, para recuperar los animales y apresar a los ladrones. Y como no es sólo por Puerto Cabello por donde sale sustraído el ganado sino también por La Vela de Coro, Barcelona, Guarapiche, Teresén, Guayana, Angostura, y otros, piden al Gobernador que se sirva extender la comisión a la persona que con poderes de los ganaderos se presente ante los Justicias de dichos puertos. En otro documento añaden que han designado como comisionado de ellos a don Cornelio Hidalgo, vecino de la ciudad de Valencia, para que cumpla la misma «comisión amplia para Don Antonio Juan Zeballos, y para distintos Jueces Territoriales»[461].

Hasta aquí la descripción de los hechos, según los documentos trascritos como apéndice de su trabajo por la historiadora Zully Chacón. Ahora veamos la interpretación que ella le da a esos mismos hechos. Convierte lo denunciado en «una forma de "bandidismo social", que no

---

[459] *Ibíd.*
[460] *Ibíd.*
[461] *Ibíd.*

es más que la repuesta de lucha entre la población libre del llano —marginada— y los que desean monopolizar las tierras y el ganado cimarrón».

Agrega: «La aristocracia agropecuaria ve en la población escotera un rival para la apropiación del ganado sin dueño. Por lo tanto, era necesario eliminar la competencia, acusando de ladrones, a quién osara cazar el ganado, sin dueño, que ellos habían decretado como propios. Como se revela en el documento, estos cuatro miembros, unidos por lazos sanguíneos, según los apellidos de los tres primeros, y por intereses personales como criadores de ganado y bestias se unen para planificar una estrategia particular que proteja sus intereses y sus propiedades del constante latrocinio de ganado»[462].

Agrega: «El negro traído de otras tierras y el indio víctima de una guerra de conquista, responden ante el eurocentrismo con las únicas armas que puede responder, el uso de la violencia, saqueo y latrocinio no sólo del ganado y bestias de las fundaciones de hatos, que han logrado monopolizar los "amos del suelo", mediante el proceso de composiciones, compra-venta y confirmaciones de tierras apta para pastos. Esta masa de insurgentes, según la versión de los ganaderos, no solo se apropiaba del ganado de los hatos, también arremete contra las casas llevándose las mujeres, esclavos, joyas y cuanta cosa útil hallará»[463].

Justifica así el número crecido de mulas hurtadas: «El exagerado exterminio de ganado se debió a que el cuero se convierte en un producto de exportación, para las vecinas colonias extranjeras del Caribe».

Y sobre la designación que hacen los ganaderos de la élite caraqueña elabora una interpretación que no tiene ningún asidero, al decir que se trata de una medida al servicio de los intereses particulares de una sola familia, al margen de los Jueces de Llanos. Y termina con esta aseveración: «Si la petición de los Tovar fue aceptada o rechazada por parte del Gobernador y Capitán General, no es lo más importante, el hecho de intentar el monopolio de los Tovar particularizar un cargo, para sí, bajo el auxilio gubernamental, demuestra el poder que ostenta el grupo al pretender tal osadía»[464].

---

[462] *Ibíd.*
[463] *Ibíd.*
[464] *Ibíd.*

No puede ser más interesada la interpretación de los documentos, explicable sólo por motivaciones ideológicas, al estar llena de frases como «bandidismo social... la repuesta de lucha entre la población libre del llano -marginada- y los que desean monopolizar las tierras y el ganado cimarrón», «el hombre, es sometido en calidad de servidumbre o siervo de la gleba a un rey, conde, príncipe o señor feudal», «eurocentrismo». Cabe más bien preguntarse ¿por qué si la gente que roba el ganado lo hace para sobrevivir, ese robo adquiere dimensiones de un negocio que se extiende más allá de las fronteras de la provincia? ¿Desde cuándo el "bandidismo social" es la lucha contra "los amos del suelo", durante la colonia y en Venezuela y durante cualquier época y en cualquier lugar del mundo? Hasta para los fundadores del marxismo estaba claro qué era "violencia" y qué era "bandidismo". Da la impresión que la autora quiso hacer un estudio general sobre el tema de los hatos ganaderos de los llanos, sus dueños, la población pobre de esos lugares, el robo de ganados y las diversas normas legales que se ensayaron para castigar esos delitos. En ese propósito dice varias cosas interesantes. Pero, ni su argumentación ni la documentación exhibida están muy lejos de darle basamento histórico a su modo de encontrarle explicación al asunto.

CAPÍTULO XV

LA NOBLEZA CRIOLLA

El grupo social con méritos de linaje, bienes de fortuna e influencia muy destacada en los asuntos de la Venezuela colonial ha recibido, indistintamente, los nombres de nobleza criolla, nobleza territorial criolla, oligarquía criolla, aristocracia territorial, patriciado, mantuanos, élite. Incluso, se acostumbra también etiquetarlo con el apelativo de "grandes cacaos". He preferido utilizar el nombre de nobleza criolla por quedar encerrada en esta denominación sus dos características fundamentales, que engloban todo lo que se quiere expresar con las otras: nobleza, porque está formada por quienes, en razón de su sangre (linaje), méritos, títulos y patrimonio, también merecerían ser denominados nobles en la metrópoli española; y criolla, porque sus integrantes han nacido en el país, como descendientes, próximos o lejanos, de los primeros conquistadores y colonizadores del territorio, o de españoles que fundan familias estables una vez llegados aquí,

aunque ocurriese tal establecimiento muchos años después de los primeros tiempos de la conquista.

Como toda definición, admite sus excepciones. Hay nobles con un patrimonio muy disminuido. Y hay quienes no nacieron en estas tierras, pero la habitan desde hace muchísimos años, o se integran a sus filas, por diversas circunstancias, al no más llegar para quedarse definitivamente.

La nobleza española de los siglos XV al XVIII (es decir, la de los siglos coloniales de Venezuela) tiene rasgos muy precisos, incluyendo sus orígenes, estudiados en profundidad por muchos tratadistas e historiadores peninsulares. El notable historiador español Salvador de Moxó (1921-1980), al ubicar el surgimiento de la nobleza española entre los restos de la aristocracia visigoda luego de la invasión mora, en los siglos de la alta Edad Media, enmarca sus características principales en cuatro renglones:

1.- Fortuna patrimonial, es decir, su riqueza, y se apoya en una conclusión del historiador francés Georges Duby (1919-1996), según la cual «a la vista del horizonte social del siglo X, [...] en esta época los más nobles son simplemente los más ricos de los hombres libres»[465]. Y agrega que, entre otros procesos tales como la repoblación del valle del Duero, se abrió la oportunidad «para la apropiación de apreciables dominios agrarios, en un momento histórico en que la tierra constituye el más importante factor de riqueza, así como de poder y prestigio social»[466]. Sin embargo, Moxó indica otros componentes que se agregan a la base patrimonial noble cuando esta nobleza original, vieja, es reemplazada por una nobleza nueva, a raíz de la entronización de la dinastía de los Trastámara (iniciada en 1369 con Enrique II) y tiene su plena institucionalización en 1520, de manos del emperador Carlos V, mediante la celebración del capítulo general de la Orden del Toisón de Oro, en Barcelona, 1519-1520. Entre esos otros componentes, Moxó cita la actividad comercial, y comprueba su intervención, ante todo, en el comercio de largo alcance y, más concretamente, en el comercio internacional, especialmente con Flandes, de tal modo que está presente en las empresas marineras y comerciales de los castellanos en el norte de Europa y en los mares andaluces, donde toman el control de la riqueza pesquera. Moxó finaliza diciendo que «puede intuirse un interés

---

[465] Salvador de Moxó, *Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla medieval*, Madrid, Real Academia de la Historia, 2000, p. 239.
[466] *Ibíd.*, p. 240.

del grupo nobiliario por el comercio, que se va convirtiendo ya en fuente primordial de riqueza en la época de la nobleza nueva»[467].

2.- Privanza. Se trata del «influjo político y la actividad que en orden al gobierno o administración desarrollan los miembros de ciertas familias que gozan de la confianza del Monarca, motivado esencialmente por su pertenencia a un círculo o estamento social determinado y predominante»[468]. Es así cómo los nobles logran ocupar importantes posiciones en el aparato estatal y administrativo, lo cual, a su vez, incrementa su prestigio e influencia en la sociedad. Durante siglos, la Corona ha tenido en los nobles sus consejeros, ministros, y magistrados. La Corona mantiene el criterio según el cual el prestigio del reino se mantiene y exalta por el número y calidad de sus nobles. Las gracias y mercedes reales en el orden político elevan el piso de la nobleza. Y el desempeño político del noble demanda la gracia real. Incluso, un rey agradecido puede dar investidura de nobleza a un plebeyo.

3.- Nacimiento, la sangre. Moxó describe así la importancia de este rasgo: «La fuerza hereditaria de la sangre constituye —por su parte— elemento singularísimo en la configuración de una verdadera nobleza, diríamos que indispensable para que ésta reciba tal nombre y deje de ser un simple grupo aristocrático que ejerce ciertas funciones motoras en la sociedad»[469]. El nacimiento es el linaje, es la gloria de los antepasados, es esa herencia intangible de pertenecer a una vieja prosapia, es la nombradía que se ha ganado una estirpe. En la época, la nobleza está ligada, por tal motivo, a los hechos guerreros, a las hazañas bélicas, a las derrotas del enemigo, a la conquista de territorios o a la defensa de la propia tierra, a la gesta épica de los antepasados o de la suya reciente. La nobleza no cae del cielo: se conquista.

4.- Diferenciación jurídica. Se trata de una suerte de ordenación legal que rodea y protege al noble; y, por tanto, sirve para caracterizarlo ante el resto de la población. Tiene sus comienzos en el siglo X, cuando los señores que van a la guerra exigen una serie de derechos que les sirvan de privilegio. La condición de nobleza requiere, en dos platos, un soporte jurídico. Así, las normas de la época empiezan a hablar de los «mayores», de los «optimates», de los «potentes», de los «magnates», de los «milites», de los «infanzones», de los «ricos hombres». Los estatutos legales se nutren de las normas que configuran las relaciones feudo-vasalláticas, de las normas que rige el régimen de

---

[467] *Ibíd.*, p. 302.
[468] *Ibíd.*, p. 241
[469] Ibíd., p. 242.

señorío, de las exenciones fiscales e impositivas, de la jurisdicción que ejercen sobre villas y lugares y sus habitantes. Se van dibujando las agrupaciones nobiliarias en hidalgos, caballeros y ricos hombres; y entre titulares (duques, marqueses y condes) y grandes.

La nobleza criolla de nuestra época colonial se erige sobre la base de las mismas características, aunque, claro está, con diversas variantes, derivadas del lugar secundario que ocuparon estas provincias en al jerarquía de valores del Imperio español.

La fortuna patrimonial

Es ampliamente sabido que la cúspide social criolla derivaba su posición de un patrimonio más o menos considerable, representado en dinero, tierras, casas, cultivos, ganados, trapiches, utensilios, esclavos, indios encomendados y trabajadores a jornal, items todos que conformaban unidades productivas de tipo agrícola (siembras de cacao, trigo, caña de azúcar, tabaco, algodón, maíz, yuca, añil, principalmente; hatos y rebaños de ganado vacuno, caballar, mular, caprino, principalmente; y pescaderías de mar y río), de tipo comercial y de transporte; y de tipo financiero (operaciones de compra-venta al contado, préstamos, censos, giros, en su sentido más restrictivo, de acuerdo con la época). Secundariamente, ejercicio, en calidad de propietarios, de la minería y de ciertos obrajes como el del algodón.

Un patrimonio tal suministraba riqueza y vida holgada desde el punto de vista material.

Muchos de los conquistadores ya venían con un patrimonio, alcanzado en España. Recuérdese que la mayoría de las empresas conquistadoras se realizaron en los comienzos del siglo XVI mediante la figura llamada capitulaciones, una suerte de contrato establecido entre el Rey y los expedicionarios, quienes acometían su aventura a sus propias expensas (las de ellos solos o con la ayuda de financistas). Al echar raíces aquí, sus hijos heredaban el patrimonio paterno y lo acrecentaban con su personal actividad.

El origen primordial del patrimonio de muchos otros conquistadores reside en estas tierras. Venían escasos de fortuna y aquí se enriquecieron. De todos modos, no faltaron quienes vieron en la América esfumados sus bienes: perdieron todo lo que tenían, e incluso aquí se les fue la vida.

La propiedad de la tierra

Los primeros conquistadores no pensaron al principio que la tierra fuese su esencial fuente de riqueza. Creyeron que se repetiría aquí el hallazgo de yacimientos de oro y plata que colmasen sus aspiraciones. Aunque no era lo ideal, el descubrimiento de los ricos placeres de perlas en el oriente y algunos que otros "reventones" de oro en los lechos de los ríos ayudaron a mantener aquella ilusión. Es muy significativa, entonces, la inclusión de las siguientes solicitudes en el portafolio de súplicas y peticiones que lleva don Simón de Bolívar el Viejo a la corte española en marzo de 1590, en nombre de los vecinos de Caracas y de las otras ciudades importantes de la Gobernación: la rebaja a un décimo (en vez del quinto real) de lo que se paga por las perlas, la posibilidad de que tal derecho se pague en Caracas, la gracia de que no se cobren derechos por el maíz y otras cosas de mantenimiento que se envían desde Caracas para el mantenimiento y sustento de las canoas de pesca de perlas, la facultad que se conceda al Gobernador para que pueda nombrar un teniente general que lo alivie de la carga que significa la atención a los muchos pleitos a ventilar y a los asuntos del comercio de perlas nuevamente descubiertas en la costa oriental en razón de la existencia de «muchos vecinos de esta ciudad de Santiago de León que tienen sus canoas de sacar perlas en la isla de Margarita y en el término de la ciudad de Cumaná» y, finalmente, la autorización para que vengan 12 mineros ante la expectativa de las muchas minas de oro y plata[470]. Casi idéntica petición de licencia real y en ese mismo año hace Sancho del Villar, alcalde ordinario de Caracas, posiblemente incluida en la anterior, y es para traer 300 esclavos destinados a las minas de oro, y a las granjerías de perlas nuevamente descubiertas[471].

Pero, fue la posesión de la tierra el piso de sustentación de la nobleza criolla, su principal fuente de poderío económico. Con los títulos de propiedad territorial que han heredado de sus padres, y con la incorporación frecuente de nuevas tierras a sus posesiones, los criollos fueron conformando, con el transcurrir de los años, esa clase social que ejercerá un papel protagónico en el desenvolvimiento de la sociedad colonial durante tres siglos.

El establecimiento del régimen de propiedad de las tierras, minas, aguas, etc., inexistente en absoluto en las comunidades prehispánicas, como ya dijimos, conoce diversos compartimientos. Ellos son:

---

[470] Cf. Santos Rodulfo Cortés (comp.), *Antología documental...*, pp. 73-81.
[471] Mario Briceño Perozo, *Ob. cit.*, p 708.

◇ Las tierras, aguas, cazaderos, pescaderos y todo aquello que de naturaleza antiquísima toca y pertenece a los indios.

◇ Las tierras, prados, pastos, montes y aguas concedidas a las ciudades, villas, lugares y otras comunidades.

◇ Las tierras, prados, pastos, montes y aguas concedidas a particulares.

◇ Los realengos, es decir, lo que es de la Real Corona.

La tierra, en manos de los criollos, será la fuente de sus empresas económicas.

Al principio, pareció perfilarse el cuadro de una actividad extractiva, según la regla aplicada en otros parajes de la América española. La pesca de perlas en Margarita y Cumaná, y la obtención de oro en minas como las de Buría, y en corrientes de agua del centro del país, así lo indican. Pero, pronto, tales yacimientos se agotaron, y fue el cultivo de la tierra, en un inicio muy fugaz con sus productos autóctonos principalmente, y las labores ganaderas, lo que empezó a prevalecer.

Caracas, y su región circunvecina, es decir, el asiento principal de la nobleza criolla durante el periodo colonial, experimenta en sus primeros años ese mismo cuadro inicial. En una primera relación de Caracas, escrita por Juan de Pimentel en 1578, se lee:

> No es esta provincia muy abundante de pastos para ganados y tiene mantenimientos de mayz y ganado vacuno y puercos los necesarios para la tierra. Y se provee dellos la isla Margarita y las canoas de perlas que en ella ay[472].

Y agrega:

> Dáse en esta provincia trigo, cebada, garbanzos, habas, cebollas, lechugas, rrábanos, berenjenas, coles, navos, perejil, yervabuena, ajos sin dientes, culantro, berros, mostaza, eneldo, banagas, melones, pepinos, hinojo, poleo, rruda, mastuerzo, sábila, manzanilla, y mucho arroz. El trigo y cebada se coge ahora poco porque se comienza a sembrar ubas solo para comer[473].

Es de hacer notar también el testimonio de Juan Pimentel sobre la existencia de oro, y su valor precario:

> Oro se ha hallado en esta provincia de Caracas en quinze o veinte quebradas y arroyos que llevan agua ansi en sus vertientes. Y en las madres y fuera dellas, como un tiro de ballesta, ánse tomado puntas de ochenta pesos de oro e de hay para abaxo muchos porque por la mayor parte es oro granado y entremetido con mucha piedra. También se han hallado piedras que tenian la mitad de lo que pesaban de oro y otras las dos tercias parte sesta. (sic) Se han hallado en los altos, hazia el

---

[472] Juan de Pimentel, *Relación de Caracas*, Venezuela desde la UCAB, Internet.
[473] *Ibíd.*

> nacimiento de las quebradas, por donde se entiende que hay muchas vetas y nacimientos de mucho oro que por falta de espiriencia y conocimiento no se han descubierto el oro de las quebradas y madres como extranjero y no nacido allí. Se han ido acabando todo en los términos desta ciudad[474].

Finalmente, el Gobernador se refiere a la ya activa red comercial que se ha establecido con otros puntos del territorio:

> El trato que hay aquí y en Caravalleda es con la isla Margarita y perqueria de perlas en venderles y llevarles maiz, carne, tocinos, quesos, sevo, miel, cocuiza (que es el magüey, o caroata contenido en el capítulo veinte y dos) lienzo de algodón y hamacas. Para esto van y vienen de ordinario barcos y canoas de la isla Margarita y Cumaná a llevar lo dicho. Y traen sal de Araya, y mercadurias de España y perlas, conque compran y pagan lo que aquí se les vende. Y de las mercadurías que a esta provincia vienen algunos vecinos de aquí los llevan a los pueblos de la tierra adentro y allá las venden a oro, lienzo de algodón, hamacas, mantas y cera, que siempre en esta tierra es negra, y a viscocho y harinas que traen y llevan a la Margarita y a Santo Domingo[475].

Treinta años después, es decir, en 1607, una relación de Diego Villanueva y Gibaja, transcrita por el historiador Antonio Arellano Moreno, suministra un amplio panorama de la actividad productiva desarrollada en el territorio comprendido en la para entonces Gobernación de Venezuela, junto con una estimación del número de encomenderos. He aquí un resumen de esta relación:

*Caracas: Cuenta con 100 vecinos, de ellos 50 encomenderos, más 2.600 indios, que no pagan tributo, pero son puestos a trabajar en las sementeras de trigo, maíz, hatos de ganado, ingenios de azúcar y otras granjerías. Se produce algodón, trigo, maíz, caña dulce, tabaco, zarzaparrilla, ganado vacuno, jarcia para navíos. Algo de todo ello es llevado a España, Margarita, Puerto Rico, Santo Domingo y Cartagena.

*San Sebastián de los Reyes: Cuenta con 40 vecinos, de ellos 20 encomenderos, más 600 indios, que trabajan en sementeras de algodón, maíz, tabaco, miel, cera, hatos de ganado vacuno, «algún cacao», oro.

*Uchire: Cuenta con 15 vecinos, de ellos 5 a 6 encomenderos, más 100 indios. Se cultiva maíz, tabaco, ganado.

*Valencia del Rey: Cuenta con 20 vecinos, de ellos 7 a 8 encomenderos, más 300 indios. Se cultiva maíz, hay trapiches de azúcar, ganado, montería de venados, sal, pesca.

*Barquisimeto: Cuenta con 60 vecinos, de ellos 40 encomenderos, más 1.400 indios. Se obtiene maíz, trigo, tabaco, hay ingenios, ganado mayor y menor, curtiembres de cordobanes y venados, estancias de yeguas, burros, hechura de lienzos, colchas, hamacas. Mucho de esto es llevado con indios a Coro.

*Tocuyo: Cuenta con 50 vecinos, de ellos 38 encomenderos, más 1.300 indios. Se trabaja en maíz, trigo, ingenios, hatos, lienzos, curtiembres de cordobanes y venados, cría de mulas. El comercio va hacia Coro.

---

[474] *Ibíd.*
[475] *Ibíd.*

*Carora: Cuenta con 50 vecinos, de ellos 35 encomenderos, más 800 indios. Hay maíz, algodón, hatos, crías de mulas, curtiembres de cordobanes y venados, ingenios de azúcar. Comercio con Coro.

*Coro: Cuenta con 60 vecinos, de ellos 20 encomenderos, más 700 indios. Hay trigo, maíz, ingenios, hatos de ganado mayor y menor, crías de mulas, hechura de lana, quesos.

*Guanaguanare: Cuenta con 20 vecinos, de ellos 14 encomenderos, más 160 indios. Maíz, tabaco, pesquería de ríos, miel, cera, hechura de lienzos. Comercio establecido con Trujillo y Maracaibo.

*Trujillo: Cuenta con más de 100 vecinos, de ellos 60 encomenderos, más 3.500 indios. Hay mucho trigo, algodón, cacao, cría de mulas y caballos, ganado mayor y menor, hilo de pita. Se comercia con Maracaibo.

*Nueva Zamora de Maracaibo: Cuenta con 60 vecinos, de ellos 20 encomenderos, más 300 indios. Hay maíz, pesquerías, hatos de vacuno y cabras, tenerías de cordobanes, esteras, y dos salinas. Se comercia con Mérida, Trujillo, Pedraza, Barinas, Guanaguanare, Carora, Tocuyo, para lo cual sirve mucho de vía el río Motatán. También, de Maracaibo se hacen muchos envíos a Cartagena y Santo Domingo[476].

Cuadro N° 104
Vecinos, encomenderos e indios en la Gobernación de Venezuela, 1607

Lugar	*Vecinos*	*Encomenderos*	*Indios encomendados*
Caracas	100	50	2.600
San Sebastián de los Reyes	40	20	600
Uchire	15	5	100
Valencia del Rey	20	7	300
Barquisimeto	60	40	1.400
Tocuyo	50	38	1.300
Carora	50	35	800
Coro	40	20	700
Guanaguanare	20	14	160
Trujillo	100	60	3.500
Nueva Zamora de Maracaibo	60	20	300
Total	*555*	*309*	*11.760*

Como es fácil apreciar, ya para comienzos del siglo XVII, cuando se han calmado los fuegos de la conquista, se ha logrado la incorporación de muchos aborígenes a la nueva sociedad en formación y se han asentado los nuevos pobladores en los mecanismos de la producción y la vida pacífica, han empezado a copar el escenario los renglones de la agricultura y el comercio, comandados por un grupo de individuos, gracias a su radicación estable y duradera en tierras de su propiedad.

---

[476] Antonio Arellano Moreno (recop.), *Relaciones geográficas de Venezuela*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1964, p. 285 y ss.

Es el cultivo y comercio del trigo, aunque luce un tanto extraño a nuestros ojos, el primer ramo de explotación de la tierra que adquirió rasgo de importancia, al menos en la región de Caracas, como ya se intuye de la relación de Diego de Villanueva. También en la región andina, va a gozar el trigo de un papel primordial en la esfera de la agricultura.

En nuestro estudio, he encontrado en el historiador Robert J. Ferry, de la Universidad de Colorado, Estados Unidos, el más conspicuo analista de este rasgo tan particular de la agricultura colonial, aunque, por supuesto, la importancia del trigo ha sido enfocada con acierto por muchos historiadores venezolanos, con anterioridad, entre ellos Eduardo Arcila Farías.

Según Ferry, fue a fines del siglo XVI cuando empezó a tomar fuerza la producción y exportación de trigo y harina de trigo. El lugar de destino del trigo exportado era Portobelo, y también Cartagena de Indias[477]. Y ya a inicios del siglo XVII, el historiador mencionado da la cifra de 13.644 arrobas de promedio anual de trigo exportado en los 5 años que van de 1603 a 1607, cantidad que era, más o menos, la misma cantidad de trigo anual que se quedaba aquí (2.500 fanegas de grano), utilizado en la ciudad para el consumo y como semilla. (Para estos cálculos, Ferry calcula todo lo exportado como harina, sabiendo que 15.000 arrobas de harina provienen de 2.500 fanegas de grano)[478].

El investigador Fabricio Vivas Ramírez señala que el trigo en la provincia de Caracas ocupó en los años 1601-1605 el primer lugar entre los productos exportados, al alcanzar el 63% del valor de toda la extracción[479].

Quienes fueron atraídos por el negocio del trigo no fueron exclusivamente los encomenderos, sino también comerciantes, y Ferry cita el caso de Nofre Carrasquer, que era un vasco comerciante y, gracias al capital ganado en sus negocios mercantiles con el trigo, pasó a cultivarlo, para convertirse en vecino y encomendero, hacia 1610[480]. De modo que en el ramo existían los encomenderos y hacendados, los molineros —quienes poseían, a comienzos del siglo XVII, entre 5 y 6 molinos trigueros en Caracas— y los comerciantes[481]. La cantidad de

---

[477] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, p. 15.
[478] *Ibíd.*, p. 20.
[479] Fabricio Vivas Ramírez, "La economía colonial", en Varios Autores, *Los tres primeros siglos de Venezuela, 1498-1810*, Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, 1991, p. 410.
[480] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, p. 22.
[481] *Ibíd.*, p. 27.

trigo exportado en los 5 años de 1603 a 1607 fue de 68.220 arrobas, o sea, un promedio anual de 13.644 arrobas[482].

El cultivo del trigo, de todas maneras, experimentó en fecha temprana su fragilidad en una tierra situada en el trópico. Al comienzo, le fueron beneficiosos factores tales como la altitud de Caracas y lugares aledaños, y la relativa abundancia de corrientes de agua, a lo cual debe agregarse la virginidad de las vegas y valles centrales. Pero, pronto, las irregularidades de los periodos de lluvia y sequía, con la correspondiente variación en el caudal de los ríos y quebradas, se convirtieron en un trastorno para los planes de los hacendados. Ferry cita el caso de Juan de Riberos, quien en 1592 perdió su segunda cosecha consecutiva por la irregularidad de las lluvias. Hubo años espléndidos, como 1603, pero en 1609, 1610, 1611 y 1619, el Cabildo caraqueño informaba de las malas cosechas por falta de lluvias[483].

Para empeorar las cosas, aumentó la competencia del trigo cultivado en las zonas andinas, con mejores condiciones ambientales, tanto que cuatro siglos después, en los Andes se sigue cultivando trigo, aunque de modo marginal. Adicionalmente, el escaso rendimiento de la mano de obra indígena y la inestabilidad en su disponibilidad como población sedentarizada, como se ha comentado mucho en páginas atrás, contribuía a la baja triguera. Tal languidecimiento llevó en 1684 a que apenas se registraran 500 fanegadas (unos 800 acres) plantadas de trigo[484]. Aunque existían cultivos de trigo movidos por la mano de obra esclava africana, hay pocos datos para hacernos a respecto una visión global del asunto.

Otras opciones se abrían paso. El tabaco, fruto autóctono y de creciente consumo en Europa, fue una de ellas. Su progreso no fue tranquilo. Los hacendados y molineros del trigo trataron de evitar su expansión. El Cabildo pide su prohibición, y la Audiencia de Santo Domingo, en agosto de 1605, prohibió su siembra por 10 años, excepto si su licencia era concedida por el Gobernador, veda que se aplicó realmente a partir de 1606. El pretexto esgrimido fue que el tabaco se prestaba para el contrabando, y Arcila dice que fue tomada la medida porque los cultivadores de tabaco eran portugueses, sin influencia en el Cabildo[485]. En los 4 años de 1604 a 1607, el 88,8% (7.954 arrobas) del tabaco exportado de Caracas fue hecho entre mayo y septiembre. De esta cantidad, los vecinos españoles embarcaron el 51% (4.062

---

[482] *Ibíd.*, p. 20.
[483] *Ibíd.*, p. 32.
[484] *Ibíd.*, p. 33.
[485] *Ibíd.*, p. 34.

arrobas), los vecinos extranjeros el 15% (1.219 arrobas) y los no vecinos 34% (2.673 arrobas). La prohibición de agosto de 1605 parece no haber causado mucho impacto en los vecinos extranjeros de Caracas, la mayoría de los cuales eran portugueses, ellos embarcaron el 7% del total de tabaco exportado en 1605, el 16% en 1606, y el 18% en 1607. La mayoría del tabaco exportado de Caracas iba a España. En cambio, la élite de vecinos españoles de Caracas tenía el comercio de tabaco como un interés marginal, porque lo primordial para ellos era el trigo llevado a Cartagena y Portobelo. Ferry nombra a cuatro vecinos de Caracas (Francisco de Carvajal, portugués; Díaz León, portugués, factor de esclavos; Juan de Aguirre, y Alonso Rodríguez Santos, comerciante de Extremadura) como empresarios cuyo interés mayor era el comercio del tabaco con Sevilla antes que el comercio de trigo con Cartagena, pero que ante la veda de la Real Audiencia descubren, junto con otros vecinos de status marginal, como el encomendero portugués Diego de Ovalle, y emigrantes residenciados en Caracas a partir de 1607, los sustanciales beneficios que podían obtenerse del cacao y la esclavitud africana. Se da, entonces, una confluencia final entre estas dos corrientes: la corriente de los ligados al trigo, dotados de cierto poder político local, no interesados en la actividad tabacalera, pero testigos de la declinación persistente del trigo; y la corriente de los ligados al tabaco, sin el poder local que les impida combatir las restricciones a sus cultivos, pero descubridores de las potencialidades del cacao, y así es cómo, según deducción muy interesante de Ferry y bastante cercana a la realidad, pensamos nosotros, cuaja en la primera década del siglo XVII, entre unos y otros hacendados y comerciantes un grupo unificado por la posesión del poder político local y por lazos de parentesco, es decir, la élite de Caracas colonial[486].

Las cifras de exportación aportadas por Vivas Ramírez señalan que el tabaco alcanzó en los años 1606-1610 el 33% del valor de toda la exportación, y subió al 42% en los años 1611-1615[487].

Un nuevo patrimonio, de magnitud importante, surgió en los años de la colonia tardía: el añil. Resumiendo lo escrito por la historiadora Frédérique Langue, se da la fecha de 1770 para señalar el comienzo del cultivo del añil con fines comerciales. En 1744 se registraron las primeras exportaciones (los cabildantes de 1778 dan como inicio esta fecha cuando en uno de sus acuerdos señalan que el añil es «antiguo de hace cinco años»). Al parecer, sucedió lo mismo que con el cacao, que al principio silvestre y de escasa utilización, luego pasó a cultivársele en

---

[486] *Ibíd.*, p. 36, 40-42.
[487] Fabricio Vivas, Ramírez, *Ob. cit.*, p. 410-11.

firme, y se afirma que fue a instancias de la Compañía Guipuzcoana que el empresario Antonio de Arbide inició la etapa añilera de nuestra agricultura colonial. Pronto, en Aragua y zonas vecinas, incluso hasta Barinas, el añil prosperó, pero, al igual que el cacao y otros frutos, afrontó la negativa de la Guipuzcoana de subir su precio y de comprar la cosecha a tiempo. Los roces entre vascongados y hacendados, las oscilaciones de los precios, las prohibiciones y aperturas que experimentaba el comercio exterior, las facilidades de exención de impuestos de exportación y los cierres de destinos, fueron frecuentes en el transcurso del siglo. Un elemento singular en el cultivo fue la utilización extensa de jornaleros, y no esclavos. El jornal llegó a ser de 6 a 7 pesos al mes, y pudieron contarse hasta 20.000 jornaleros, aunque no fue despreciable la presencia de la mano de obra esclava. Hacia fines del siglo XVIII, la producción de añil se situó en 544.608 libras como promedio anual[488].

La situación en Los Andes

El historiador Eduardo Osorio C. escribe que el destino de la tierra en Mérida en el siglo XVI era «el cultivo de maíz, frutas, verduras y hortalizas para el consumo doméstico y urbano, la cría de ganado porcino y vacuno con el mismo fin, y apacentar caballos»[489]. Y agrega que el producto bandera de exportación era el trigo. No suministra las cifras de dicha exportación, pero más adelante da la interesante información de las cantidades de trigo despachadas a Santo Domingo y Cartagena en los meses de enero, marzo, abril y septiembre de 1592, las que sumadas alcanzan un total de algo más de 7.500 arrobas[490]. Por otra parte, en el petitorio de mercedes que hace al Rey Alonso Arias de Reinoso depositario general y regidor perpetuo de la ciudad de Mérida en el Nuevo Reino de Granada, y su procurador general, en 1609, se encuentra el dato de cómo Mérida era, ya antes de 1609, un constante suministrador de bienes comestibles a Cartagena, entre ellos «harinas, bizcochos, jamones, quesos, carne de vaca, miel, azúcar, y otros mantenimientos, para el sustento della y de las galeras, flotas y galeones y gente de guerra que asiste a ella». Y la perspectiva de estos suministros era muy halagüeña en caso de que Su Majestad hiciera «merced a aquella ciudad que por tiempo de veinte años no se pague alcabala ni otro ningún derecho de los mantenimientos referidos que

---

[488] Frédérique Langue, "El añil en la Venezuela ilustrada", revista *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, BAC, mis en ligne le 22 février 2005, référence du 20 avril 2007, disponible sur: http://nuevomundo.revues.org/document770.html.

[489] Eduardo Osorio C., *Historia de Mérida. Conformación de la sociedad colonial merideña 1558-1602*, Mérida, Universidad de Mérida, 2005, p. 102.

[490] *Ibíd.*, pp. 117, 120-121.

salieren della para la de Cartagena, con que se animarán los vecinos a que el trato se engrose y los mantenimientos serán más baratos»[491].

La relación de Diego Villanueva y Gibaja para 1607 suministra también datos interesantes acerca del número de vecinos y encomenderos, indios encomendados, y los renglones principales en el llamado Corregimiento de La Grita, así:

*Mérida: Cuenta con 150 vecinos, de ellos 60 encomenderos, más 3.500 indios. Se obtiene lienzo, trigo, cordobanes, azúcar, hay crías de ovejas y cabras, ganado mayor, sayales, frazadas. El comercio se orienta a Maracaibo por el puerto de Gibraltar.

*La Grita: Cuenta con 40 vecinos, de ellos 20 encomenderos, más 1.000 indios. Se obtiene trigo, cebada, maíz, algodón, lienzos, hay ganado mayor y menor, cría de mulas. También la vía del comercio es por Gibraltar. Se hace mención adicional de unas minas de cobre en la Loma del Viendo del valle de San Bartolomé; y de la posibilidad de la existencia de plata. El comercio se practica por la vía del río Zulia hacia Maracaibo, y de aquí a Cartagena. La relación hace mención de unos negros.

*Villa de San Cristóbal: Cuenta con 30 vecinos, de ellos 15 encomenderos, más 800 indios. Hay trigo, maíz, ingenios de azúcar, cría de mulas, ganado mayor y menor y de cerda, lienzos de algodón. El comercio se dirige a Pamplona y Ocaña.

*Salazar de las Palmas: Cuenta con 25 vecinos, de ellos 10 encomenderos, más 500 indios. Hay hatos de ganado mayor, menor y de cerda, cría de mulas, maíz, algodón, lienzos. Se comercia con Pamplona.

*Pedraza: Cuenta con 25 vecinos, de ellos 12 encomenderos, más 400 indios. Hay tabaco, maíz, algún cacao, miel y cera, lienzos de algodón, ganado mayor y de cerda, se curten cueros de venado. El comercio se orienta hacia Mérida, Trujillo y Maracaibo.

*Barinas: Cuenta con 25 vecinos, de ellos 12 encomenderos, más 400 indios. Hay tabaco, maíz, algún cacao, miel y cera, lienzos de algodón, ganado mayor y de cerda, se curten cueros de venado. El comercio se orienta hacia Mérida, Trujillo y Maracaibo.

*Gibraltar: Cuenta con 15 vecinos. Los indios son rebeldes, y con frecuencia impiden navegar por el río Zulia. No se sabe si hay encomenderos. Produce algodón, cacao, caña dulce[492].

Es de singular interés una breve relación que hace, en las tierras de Mérida, el investigador Luis A. Ramírez Méndez, miembro del grupo de investigación de historia y arte de las regiones americanas (Gihara), de la Universidad de los Andes, al describir con detalle algunas facetas importantes del patrimonio que fueron atesorando los criollos, injertado

---

[491] Cf. Enrique Obediente Sosa, compilador, *Documentos para la historia lingüística de Mérida. Siglos XVI-XVII*, trascripción de Grupo de Lingüística Hispánica. La fuente es: AGI, Santafé, 67, R. 2, N. 35.

[492] Antonio Arellano Moreno, *Ob. cit.*, p. 285 y ss.

con creces en la labor agrícola de la cultura aborigen andina, la que según los cronistas Aguado y Simón, estaba «caracterizada por labranza de frutos como el maíz, la papa, la yuca, ullucos, papayas, utilizando técnicas que impresionaron a los invasores, reseñados por Aguado y Simón, quienes describieron con indudable admiración cómo toda la zona cercana al sitio donde inicialmente se asentó la ciudad de Mérida estaba cultivada "...sin que holgara un palmo..." [...] andenes, catafós o terrazas, sobre las superficies inclinadas de la accidentada topografía montañosa, sostenidos por taludes de piedra... Esa práctica fue integrada con la técnica de regadío, que consistió en desviar los cursos del agua desde las fuentes de los ríos, o bien recoger la originada por las lluvias en estanques»[493].

Ahora bien, nuestra opinión es que tales prácticas agrícolas aborígenes, además de un probable estancamiento en su evolución, no podían satisfacer las demandas de la nueva sociedad que estaba generando la conquista, y fue así como entraron en función nuevos elementos, totalmente desconocidos con anterioridad, tales la rueda (los molinos), el trapiche, el ganado de tiro y de carga, los instrumentos metálicos, los nuevos frutos como el trigo y la caña dulce y los ya conocidos en la región, pero que de presencia silvestre fueron potenciados por el cultivo dirigido, tal el cacao. En este sentido, el investigador merideño describe la facilidad con la cual el trigo se adaptó a las condiciones climáticas de las zonas altas del valle del Chama. Pero, para nuestro interés, desglosemos algunas de las unidades patrimoniales que fundaron los criollos, tal como se describen en la primera mitad del siglo XVIII:

María Juana, Gertrudis y Luisa de la Peña eran propietarias de la hacienda de las Peñas, en La Punta, de 65 cuadras de extensión, con casa de vivienda, capilla, trapiche con su ingenio, 4 fondos de cocer miel, con el derecho a la mitad de la acequia, que bajaba del Carrizal[494].

Gregorio de Uzcátegui construyó la acequia del Carrizal, derivada del cauce del rio Albarregas, y con la cual regaba las unidades de producción de La Punta, donde se asentaban las haciendas del Carrizal (de 60 cuadras, con casa, trapiche, cercas de piedra, cultivos de caña de azúcar, plátano y membrillo) Las Tapias, La Sabana (de 8 cuadras) y La

---

[493] Luis A. Ramírez Méndez, "El sistema de regadío en una sociedad agraria: el caso de Mérida colonial", en *Procesos Históricos, revista semestral de Historia, Arte y Ciencias Sociales*, Nº 9, Mérida, enero 2006, pp. 3 y 4. Internet.

[494] *Ibíd.*, p. 5. Fuente: AGEM: Protocolos. T. LVI ff. 441v a 413r.

Esmeralda (de 8 cuadras, casa y trapiche), además de la ya citada Las Peñas[495].

Haciendas La Pedregosa, Los Curos, Las Ánimas y Mata de León, situadas en la otra banda del río de Albarregas. La Pedregosa era propiedad de las monjas de Santa Clara, abarcaba 60 cuadras de tierras y era regada por las aguas de la quebrada de la Resbalosa. Los Curos, de 100 cuadras, tenía siembra de caña dulce y plátanos, con ganado mayor y menor, y regada con dos acequias de la quebrada de Caravajal. Las Animas, de 60 cuadras, tenía casa, trapiche, y cultivos de caña dulce y plátanos[496].

En Ejido, sobresalían las haciendas de El Manzano, Las Monjas, Los Rondones, Pozo Hondo, y El Moral. La de Pozo Hondo, propiedad de Francisco Xavier de Osuna, y luego de Victorino de Osuna, tenía 15 cuadras, casa y cocina de teja, dos juegos de trapiche, 1.000 árboles de cacao, 1.000 matas de plátano, 80 árboles de membrillo. La hacienda de Las Monjas tenía 60 cuadras sembradas de cacao, plátanos y caña de azúcar, casa de vivienda y trapiche con su acequia que tomaban del cauce de la quebrada de la Portuguesa. La hacienda del Moral, propiedad de Sebastián de Angulo, tenía 100 cuadras de tierra, casa y cocina con techo de teja, siembre de caña, trapiche, con su acequia, que venía también de la quebrada de La Portuguesa[497].

En la zona del río Chama medio estaban las haciendas de Sulbarán, La Quebrada y Caparú. La de Sulbarán, llamada también en ocasiones Mucumbás, o las Barillas, y propiedad en un tiempo de Pedro Briceño, y luego de Francisco Rondón Sarmiento, tenía casas y 800 árboles de cacao. La de Caparú era también propiedad de Francisco Rondón Sarmiento, tenía pan y ganado mayor. La de La Quebrada, originalmente de las monjas de Santa Clara, fue vendida luego a Francisca Ana de Bethancur, con casa de vivienda, trapiche, árboles de cacao, platanal, cercas de tapia y su acequia de regadío en 1770[498].

En Cumaná

En los años similares a lo que hemos visto en la provincia de Caracas y el corregimiento de La Grita, surgen en Caracas, impulsados por los primeros conquistadores, y sus descendientes convertidos en

---

[495] *Ibid.*, p. 6. Fuente: AGEM: Protocolos. T. LXXVI. ff. 22r-23r., T. XLVI ff. 65r-66v.
[496] *Ibid.*, p. 7. Fuente: AGEM: Prot. T. LXXXV. ff. 240r.-243v., T. LXVIII. ff. 151v.-156r.
[497] *Ibid.*, p. 7. Fuente: AGEM: Prot. T. L. ff. 45v. a 47r., T. LXX. ff. 114r-122r, T. LXX. ff. 114r-122r.
[498] *Ibid.*, p. 8. Fuente: AGEM: Prot. T. LVI. ff. 394v. a 397v., T. XLVII ff. 116r.119, T. XLVI. ff.167v.-168v., T. LXIII ff. 29v 33r.

hidalgos y caballeros criollos, más los nuevos inmigrantes emprendedores de negocios, los ramos productivos representados por las canoas de perlas, los chinchorros de pesquería, los telares de algodón, los cultivos de maíz y casabe y, en fin, de manera incipiente, los cultivos de tabaco y caña de azúcar.

Una búsqueda minuciosa realizada por el historiador Ricardo Ignacio Castillo Hidalgo en el Archivo General de Indias, nos entera de pormenores del comercio del maíz, perlas, tabaco, pescado, y otros frutos, que salían de Cumaná o llegaban allí de otras regiones del territorio hoy venezolano, desde la segunda mitad del siglo XVI hasta 1620. En primer lugar, nos topamos con el maíz. Ya habíamos comentado que los primitivos habitantes de la región cumanesa cultivaban el maíz con los procedimientos rudimentarios de la roza y la quema, perfeccionados un tanto cuando los españoles introdujeron otros métodos y otra variedad del grano, llamada Yucatán, más productiva. De todas maneras, Cumaná fue un punto exportador y al mismo tiempo un foco importador de maíz, especialmente desde la provincia de Caracas.

Cuadro N° 105
Maíz, en fanegas, exportado desde Cumaná

Año	*Cantidad*
1606	90
1609	50
1610	1.556
1611	457
1612	1.000
1613	1.260
1614	40
1615	473
1616	360
1617	50

Fuente: Ricardo Ignacio Castillo Hidalgo, *Ob. cit.*, pp. 837, 838.

Cuadro N° 106
Maíz, en fanegas, importado a Cumaná o sus rancherías desde la provincia de Caracas

Año	*Cantidad*
1584	348
1585	2.718
1586	1.327
1567	525
1588	1.711
1589	462

Otros lugares de origen del maíz son Cumanagoto y Caruabo
Fuente: Ricardo Ignacio Castillo Hidalgo, *Ob. cit.*, pp. 831, 832.

El tabaco tiene, probablemente, más importancia que el maíz en cuanto a su campo de exportación, puesto que comprende, ante todo, la metrópoli española.

Cuadro N° 107
Tabaco, en libras, exportado desde Cumaná

Año	*Cantidad*
1594	30
1605	500
1606	7.765
1608	100
1613	50
1614	27.411
1615	37.180
1616	21.500
1617	18.000

Fuente: Ricardo Ignacio Castillo Hidalgo, *Ob. cit.*, pp. 839, 840.

El pescado fue otro renglón de exportación de Cumaná, como lo demuestra el cuadro siguiente

Cuadro N° 108
Pescado, en arrobas, exportado desde Cumaná

Año	*Cantidad*
1584	1.450
1585	310
1586	2.318
1587	1.680
1588	25
1589	200
1595	880
1596	350
1604	550
1605	250
1606	524
1607	1.218
1608	1.396
1609	136
1610	2.290
1611	4.585
1612	4.663
1613	600
1614	2.800
1.615	2.886
1.616	2.560
1617	100

Fuente: Ricardo Ignacio Castillo Hidalgo, *Ob. cit.*, pp. 841, 843.

Además del maíz, otros productos autóctonos llegaban a Cumaná desde diversos puntos del territorio venezolano, en la época que ha sido señalada en los cuadros anteriores. Entre ellos se cuentan guayucos (procedentes de Caracas en 1604-06), chinelas y zapatos (procedentes

de Margarita en 1601 y 1606), tocino (procedente de Caracas en 1606), biscochos, harina y azúcar (procedentes de Caracas en 1605), cordobanes (procedentes de Margarita en 1604), velas de sebo (procedentes de Caracas en 1695), cera (procedente de Guayana en 1605) (*Ibíd.*, pp. 869, 872, 873, 876, 878. Se sabe que provienen de los citados lugares porque se aclara que son "frutos de la tierra", lo cual puede entenderse como no importados de España o del Caribe).

Y en cuanto a la pesca de perlas, el historiador Castillo Hidalgo trae sólo la relación de los dueños de canoa y el pago que hicieron, en ochavas, por concepto del quinto real. De acuerdo con esa relación, existieron 31 declarantes en 1594, 17 en 1595, 26 en 1596, 17 en 1597, y 30 en 1598. De ellos, Francisco Vides declaró más de 5.000 ochavas en esos 5 años; Martín de Orozco, declaró más de 3.000 ochavas, y otros 7 dueños de canoa declararon más de 1.000 ochavas. La relación tiene un vacío y se reanuda a partir de 1608, año en que declaran 5 individuos, 20 declaran en 1609, 7 en 1610 y 1 en 1611. De ellos, sólo 2 dueños de canoa (Antonio de Herrera y Mateo Muñón Carvajal) declaran más de 2.000 ochavas, y uno sólo (Elvira de Montes) declara más de 1.000 ochavas[499].

Una impresión que se obtiene de estas cifras apunta a la idea de que hasta la primera década del siglo XVII, las personas ricas de Cumaná derivaban su riqueza de la pesca de perlas, y del cultivo del maíz y el tabaco, en condiciones todavía no plenamente boyantes, porque la pesca de perlas se agotó con rapidez, y los cultivos agrícolas dependían en mucho de la mano de obra indígena, poco rendidora. Da la impresión, por las cifras aportadas en relación con el tabaco, que este fruto se benefició con la veda de Caracas, pues crecen sus cifras a partir de 1606 y, sobre todo, después de 1614, es decir, cuando se estableció plenamente la prohibición de la siembra de tabaco en Caracas. Serán este fruto primero, y después el cacao y, en menor proporción, la caña dulce los protagonistas de los principales negocios de la nobleza criolla cumanesa.

Ya para el siglo XVIII el cacao y el añil se han agregado al tabaco. El barón Alejandro de Humboldt, al visitar la provincia, dijo que en toda la Nueva Andalucía se cosechan, hacia 1799, entre 18.000 y 20.000 fanegas de cacao, de las cuales 5.000 se contrabandean a Trinidad, y que el número de árboles de la almendra ha pasado de 428.000 en 1792 a cerca de millón y medio en 1799[500].

---

[499] Ricardo Ignacio Castillo Hidalgo, *Ob. cit.*, pp. 91-914.

[500] Alejandro de Hmboldt, *Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, hecho en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 y 1804*, Caracas, Ediciones del Ministerio de Educación, 1956, tomo II, p. 114.

Otros renglones

La rama productiva de la ganadería ocupó también un lugar destacado en el patrimonio inicial de los criollos. Los cueros vacunos alcanzaron el 32% del valor de las exportaciones de la provincia de Caracas en los años 1616-1620, y subió a un máximo histórico del 61% en los años 1616-1620, para bajar al 57,7% en 1626-1630, al 40,8% en 1631-1635, al 36,5% en 1641-1645 y al 19,1% en 1645-1650[501]. El tabaco, la caña dulce, el algodón, la zarzaparrilla, el café y el añil (estos dos en los últimos años coloniales) figuran también, pero en tono menor, con escaso poder de exportación, en la lista de recursos que tenían los criollos para sostenerse como figuras principales en la vida económica y política de las provincias venezolanas. No he creído conveniente referirme a tales renglones en subcapítulos especiales por no disponer de tiempo para acudir a las fuentes documentales que permitan crear una base sólida de su papel y funciones en la conformación y rumbo de la nobleza criolla. Por lo demás, no ha sido nuestra intención detenernos en todas y cada una de las propiedades de los criollos, fuente de su posición colonial.

Cacao, el gran fruto de los propietarios criollos

Hemos llegado a la fundamental fuente de poder, en todos los sentidos, de la nobleza criolla, a ese patrimonio que la califica como tal. Como iremos viendo, el cacao no es el protagonista exclusivo de tal hazaña, porque en la esfera de la economía está indisolublemente unido, formando un circuito cerrado y movido por un claro *feedback* o retroalimentación, a la esclavitud africana, sin la cual no hubiese ocupado la posición y la importancia que tuvo.

Robert J. Ferry, con la agudeza que lo caracteriza, intenta aclarar el origen de los primeros árboles de cacao que son aprovechados comercialmente y quiénes fueron los primeros propietarios que empezaron a explotar el negocio. Ya una pista estaba dada por el académico Lucas Guillermo Castillo Lara, quien en su libro sobre la historia provincial de Aragua, editado en 1977, había recogido la información sobre unas arboledas de cacao silvestre a partir de 1616 en Choroní[502]. Ferry, en todo caso, es el que da un panorama más completo sobre el particular. De acuerdo con la documentación

---

[501] Fabricio Vivas Ramírez, *Ob. cit.*, p. 412.

[502] Lucas Guillermo Castillo Lara, *Materiales para la historia provincial de Aragua*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1977, p. 241.

consultado por él, la mejor prueba existente para poder afirmar que el famoso cacao venezolano era nativo de la región de Caracas, o por lo menos creció allí antes de la llegada de los españoles está en el testimonio del comerciante vasco Juan de Ibarra, quien en 1618 va a recibir determinada cantidad en cacao de manos del encomendero portugués Diego de Ovalle —cacao que éste recolectaba de los árboles que crecían silvestres en sus propiedades de Choroní— en pago de telas, trigo, vino, pimienta, canela y cobre por un valor de 17.099 reales, que Ibarra le había vendido. Y fue 10 años más tarde, en 1628, cuando tuvo lugar el primer envío comercial de cacao a Veracruz, realizado por el vasco Pedro de Liendo, de sus posesiones en la costa de Cepe[503]. Con estos testimonios, el autor sostiene que años más tarde fue cuando los propietarios comenzaron a plantar las arboledas de cacao, y lo hicieron a partir de la especie silvestre, llamada en aquel tiempo «cacao de la tierra» y, a veces, «de Trujillo», aludiendo quizás a otro lugar de origen, allá en las zonas bajas de ese sector andino.

Muy pronto, el cacao se convirtió en una fuente al parecer inagotable de riqueza. Conquistó, de inmediato, el mercado de Nueva España, gracias a dos factores: su bajo costo de producción porque los primeros embarques, al hacerse del fruto silvestre, no había necesitado de cuido ni mucha mano de obra. Y a su precio bajo se unía su mejor sabor. Pero, el otro factor determinante del auge cacaotero fue la aceleración dada al negocio por la rapidez de la comercialización que le imprimieron los mercaderes portugueses de esclavos, al poder cambiar su carga de esclavos por un cacao barato, que lo vendían en Veracruz bajo el señuelo de abultadas ganancias. El circuito precioso se cerraba con el suministro al día de mano de obra esclava para las haciendas cacaoteras, mucho más rendidora que la antigua labor indígena, y el consiguiente incremento productivo de aquellas arboladas[504]. Las exportaciones de cacao subieron como la espuma. Las cifras aportadas por Eduardo Arcila Farías son elocuentes:

A Nuevo México:
En 1632: 1.906 fanegas
En 1647: 4.732 fanegas
En 1650: 4.148 fanegas
En 1691: 20.360 fanegas.

A España:
En 1666: 3.768 fanegas
En 1678: 7.762 fanegas
En 1681: 7.206 fanegas

---

[503] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, p. 46-47.
[504] *Ibíd.*, p. 48.

En 1683: 13.819 fanegas
En 1695: 9.038 fanegas[505].

A estas alturas, es conveniente aclarar que el negocio del cacao no transcurrió por un camino tan claro y limpio de obstáculos como las modernas autopistas de nuestros tiempos. Es cierto que su arranque inicial tuvo ribetes espectaculares y que muy pronto, hacia 1620, se adueñó del floreciente mercado de Veracruz, hecho que reportó a los cosecheros nativos inmensas y rápidas fortunas. Pero, a poco, sobrevinieron difíciles momentos. Sobre las matas de cacao cayó la plaga llamada alhorra, provocada por un hongo que en poco tiempo marchitaba los árboles y sus frutos. Para colmo de males, la cotización del cacao criollo sufrió en Veracruz, en los años que van de 1640 a 1660, una baja pronunciada que llevó el precio de la fanega a 5 pesos en 1647. Ferry agrega a estos hechos el terremoto de Caracas del 11 de junio de 1641, llamado de San Bernabé, que produjo, además de los 500 muertos, una serie de rencillas entre el vecindario y el obispo Mauro de Tovar, lo cual repercutió desfavorablemente en la marcha de los negocios, incluso el cacao; y explica la vileza de los precios en Nueva España por la depresión de la producción de las minas de plata de Zacatecas, porque cuando la producción de plata sube entre 1675 a 1690, se reactivan los precios del cacao[506].

La reanimación dura casi dos decenios. Un competidor inesperado, el cacao de Guayaquil, irrumpe en México con fuerza y amenaza con desplazar a la almendra de Caracas. El cabildo caraqueño, en su sesión del 9 de marzo de 1693, pone el grito en el cielo: si las cosas siguen así, será total la ruina de la Provincia[507]. Un informe presentado al cabildo el 27 de abril, preparado por su procurador general, don Francisco Antonio de Bolívar, pinta con trazos muy dramáticos la situación creada por la competencia del cacao de Guayaquil. Con su comercio, dice, se sustentan las milicias que defienden el territorio de los ataques de los piratas y corsarios enemigos; de allí salen los reales derechos para mantener el presidio del puerto de La Guaira, bastión donde se guarnecen las fuerzas, sitios y caminos de la renta real; de allí salen las rentas decimales para formar las rentas eclesiásticas, y las de los monasterios de religiosas, con sus congruas situadas en los árboles, en

---

[505] Tomado de Sheila Salazar, "Cacao y riqueza en la provincia de Caracas en los siglos XVII y XVIII", en *Tierra Firme*, vol. 22, N° 87, Caracas, julio de 2004. Internet). Estas cifras las toma la autora del libro *Economía colonial de Venezuela*, de Eduardo Arcila Farías, pero, a ese respecto, Ferry advierte que durante la primera mitad del siglo XVII las exportaciones estaban exentas del impuesto del almojarifazgo, por lo que no están registradas en las estadísticas, de tal modo que toda cifra entre 1620 y 1650 debe ser corregida en aumento (Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, p. 48.

[506] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, pp. 61 y 70.

[507] Enrique Bernardo Núñez (compilador), *Cacao*, Caracas, Banco Central de Venezuela, 1972, p. 107.

los réditos que perciben de sus censos y los tributos que mantienen el convento de religiosas de Caracas, más las innumerables obras pías y capellanías fundadas en las haciendas y frutos del cacao. Además, la Corona, con sus reales derechos, paga las fuerzas y milicias de Cumaná, Trinidad y Margarita, y de las cajas reales se pagan las misiones diseminadas en las provincias. En fin, don Francisco Antonio de Bolívar resume la importancia del cacao diciendo que es «el esencial medio, y sustento, y mantención de esta Provincia»[508].

Sin embargo, los barcos siguen navegando desde el Perú a México con sus bodegas repletas de cacao y, para burlar la prohibición real de tal vía comercial, se aducen diversos pretextos: que la avería de las embarcaciones obligan a descargar el cacao en México, que en vez de una prohibición absoluta debe permitirse pechar con doble impuesto los envíos no autorizados[509]. Es tan angustiosa la situación para los cosecheros que, en 1706, el procurador general del cabildo capitalino, don Juan Julián de Ibarra, considera igualmente perjudicial la posible llegada a La Guaira de un nuevo competidor, el cacao de Cumaná y de Trinidad, para participar en la feria de Caracas del cacao con destino a Nuevo México, razón por la cual solicita al Gobernador que prohíba la entrada de ese cacao oriental[510]. En 1707 surge un nuevo competidor con bajos precios, el cacao de Martinica[511]. En 1709 el precio de la fanega en Caracas baja a 8 pesos. El procurador general, don Francisco Blanco Infante, pide al Gobernador don Fernando de Rojas y Mendoza que autorice un gran embarque de cacao a España, donde puede cotizarse a mejor precio[512].

El Rey, que a todas éstas ha reafirmado en varias ocasiones la prohibición de la entrada a México del cacao de Guayaquil, autoriza, ante el creciente arribo a Cádiz de cacao extranjero caro, y la poca llegada de cacao de sus posesiones americanas, el tráfico exclusivo de la Real Compañía Guipuzcoana con Caracas, pero este nuevo capítulo, con su multitud de incidencias, problemas y contradicciones, lo comentaremos en páginas más adelante, cuando enfoquemos las relaciones políticas entre las autoridades y agentes de la Corona, y la nobleza criolla.

Un nuevo auge cacaotero se ha ido gestando desde inicios del siglo XVIII. Se trata de la fundación de nuevas haciendas en el curso del

---

[508] *Ibíd.*, p. 111.
[509] *Ibíd.*, p. 121.
[510] *Ibíd.*
[511] *Ibíd.*, p. 123.
[512] *Ibíd.*, p. 127.

río Tuy y algunos de sus afluentes, es decir, en la vasta zona llamada ahora Barlovento, y cuyos frutos llegan a desplazar, al menos en cuantía, a los de las antiguas plantaciones costaneras, de Macuto a Puerto Cabello. Las cifras aportadas por Ferry indican que entre 1684 y 1744, las matas de cacao de la provincia se multiplicaron por 5, para superar los 5 millones de árboles en este último año. Para 1720, el 60% del cacao que abastecía a Caracas provenía del Tuy y sus afluentes, proporción que subió a las ¾ partes en 1744. Hay que tomar en cuenta que los nuevos sembradíos tuyeros superaban en rendimiento a los costaneros, es decir, mientras éstos daban 10 fanegas de cacao por 1.000 árboles, los del interior daban entre 25 y 30 fanegas[513]. Contrastando estas cifras con las aportadas por Pedro José de Olavarriaga en su conocida *Instrucción*, hay que repetir que cuando Ferry, al utilizar esta misma fuente de la *Instrucción*, lo que hace es referirse al cacao que servía de abasto a Caracas, razón por la cual ubica en un 60% la cantidad que provenía del Tuy. Ciertamente, es lo que asienta Olavarriaga[514]. De todas maneras, según el mismo Olavarriaga, el cacao costanero que se obtenía desde Macuto hasta Morón y Tucacas provenía de 1.709.900 árboles, mientras que el cultivado tierra adentro, es decir, en el valle del Tuy, Caucagua y Guarenas, e incluso desde río Capaya hasta Cuyagua, provenía de 1.679.800 árboles[515]. Por otra parte, estima el total de árboles de cacao para toda la Gobernación de Venezuela en 4.546.564, para esos años de 1720-21, distribuidos así, según un criterio jurisdiccional:

Cuadro N° 109
Cacao en la Gobernación de Venezuela

Jurisdicción	*N° de árboles*	*%*
Caracas	1.679.800	37,0%
Valencia	1.272.900	28,0%
Barquisimeto	807.764	17,7%
Nirgua	565.100	12,4%
San Sebastián	165.000	3.6%
Coro	37.000	0,9%
Trujillo	13.00	0,3%
Carora	6.000	0,1%
Total	*4.456.564*	*100,00*

Fuente: Pedro José de Olavarriaga, *Ob. cit.*, p. 91.

Cuando al nuevo frente cacaotero del Tuy se une la actuación de la Guipuzcoana en sus primeros años, se produjo un aumento del precio del cacao. Los viejos hacendados de Choroní, Cepe, Chuao y otros

---

[513] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, p. 106.
[514] Pedro José de Olavarriaga, *Instrucción general y particular del estado presente de la provincia de Venezuela en los años de 1720 a 1721*, Caracas, Ediciones Fundación Cadafe, 1981, p. 58.
[515] *Ibid.*, pp. 50 y 58.

lugares de la costa han abierto haciendas muy rendidoras en el Tuy y, además, están acudiendo a esta región barloventeña nuevos inmigrantes y modestos cultivadores, sobre todo canarios, y tal situación se forja cuando hay dos compañías importando negros y exportando cacao: la inglesa y la vizcaína, Es decir, se ha creado una coyuntura que hace subir los precios en un 30% en los años que van de 1730 a 1738 sobre el promedio mínimo de toda la primera mitad del siglo XVIII[516]. Pero, es precisamente en ese año de 1738 cuando reaparece la amenaza de los bajos precios. En efecto, el Cabildo pide, en su sesión del 30 de septiembre de 1738, que el Gobernador convoque a un cabildo abierto para estudiar el problema y las razones que mueven a la Compañía Guipuzcoana a no comprar cacao aduciendo que tiene almacenado el fruto en una cantidad superior a la que debe enviar a España. En esa sesión, los ediles estiman en 15 pesos el precio mínimo de la fanega de cacao para que no ocurran pérdidas[517]. Dos acontecimientos complican la situación: el fin del asiento de la compañía negrera inglesa a causa de la guerra con Inglaterra, y el alzamiento de Juan Francisco de León de 1749. De esta manera, y en lo que resta de siglo, los hacendados mantienen un continuo pleito en solicitud de la prohibición de la entrada del cacao de Guayaquil a Veracruz, en busca de paliativos a la merma de la oferta de mano de obra esclava; y, finalmente, en rechazo a las medidas restriccionistas impuestas por la Compañía Guipuzcoana al convertirse ésta en el detentador exclusivo del virtual monopolio de los negocios de importación y exportación. Fue un pleito sostenido, lleno de altibajos, con enfrentamientos a veces virulentos, a veces atenuados; con divisiones y diferencias entre los propios cosecheros, pleito sobre el cual volveremos a hablar en otro capítulo, pero que, al final, resultó en la obtención de una serie de conquistas para los nobles (participación activa en la fijación de precios del cacao, posibilidad de compra de acciones de la Compañía, y ampliación de sus posibilidades de utilizar al máximo la carrera de Veracruz para sus negocios), a cambio del reconocimiento y ratificación de lealtad hacia la Corona, circunstancia que no es de extrañar en esa puja de siglos entre la realeza y la nobleza, apreciable en toda la historia de la España imperial, con su reflejo particular en sus colonias americanas.

Un punto demostrativo de cómo la nobleza criolla apreciaba la fortaleza de su patrimonio, y cómo, a su vez, este patrimonio se confundía con la pujanza y personalidad digamos propia de la provincia de donde era originaria, lo encontramos en la extensa queja que lanza

---

[516] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, p. 126.

[517] Enrique Bernardo Núñez, *Ob. cit.*, p. 152.

el Cabildo caraqueño el 14 de mayo de 1779 por estar sufriendo desde hace 50 años las maldades de un comercio pasivo y limitado. Allí se realzan con orgullo las características naturales y geográficas de la provincia de Caracas, con sus 11 ciudades, 8 villas, y diversos lugares, doctrinas y misiones, con sus más de 300.000 habitantes sin contar las naciones bárbaras que no se han reducido. Es una población que ha resistido la feroz epidemia de viruela de 1763, un territorio que produce cacao, tabaco, añil (antiguo desde hace apenas 5 años, dicen), azúcar, café, algodón, grana silvestre, vainilla, zarzaparrilla, cañafístula, raíz de china, tacamahaca, palo brasil, caoba; que da cristales, oro, plata, cobre, plomo; que cría ganado para carne y pieles. Luego de afirmar que su eje productivo esencial es el cacao, el Cabildo empieza a desgranar los males a su alrededor: es lamentable su bajo precio (que ha llegado hasta 7, 8, 9, 10 y 14 pesos entre 1730 y 1768), y su producción descendente (de 140.000 a 110.000 en ese lapso); es condenable el auge del contrabando; y es perjudicial la reaparición insistente de la competencia del cacao de Guayaquil, que a partir de 1773 ha inundado Veracruz y ha hecho cesar casi totalmente el giro en esta provincia, al punto de desaparecer casi la moneda, cuando antes entraban cerca de 300.000 pesos al año desde Nueva España. Los nombres de los firmantes de la queja son emblemáticos: el conde de San Javier, don Sebastián de Mier y Terán, don Luis Blanco y Blanco, don Josef Galindo, don Juan Félix Lira, don Diego Moreno y Piñango, don Fernando Blanco y Mijares, don Josef Escorihuela, don Josef Cocho de Iriarte[518].

Y ya en 1805, apenas 6 años antes de empezar el derrumbe de Venezuela colonial, el Cabildo, interpretando de manera fiel el sentir de la nobleza criolla, lanza sus críticas, en defensa del patrimonio criollo, ante la ceguera y pasividad del Gobernador y el Intendente al no abrir el comercio con los países neutrales. Apenas duró 11 días el que se intentó con los Estados Unidos y, en cambio, se ponen trabas a la introducción de negros. Es necesario, agregan los capitulares, el comercio libre sin restricciones con las naciones amigas y neutrales, a fin de exportar toda clase de frutos, y traer plata acuñada, oro, víveres, instrumentos de agricultura, hierro, lencería, y negros[519]. ¿Quién dijo que ya para la época el negro no era rendidor?

---

[518] *Ibíd.*, p. 257.
[519] *Ibíd.*, p. 560.

La privanza

En España, la privanza «se identificaba con el servicio en la corte, se confundía con el espacio cortesano y aludía a la relación de proximidad entre dos personas con un estatus diferente, lo que implicaba la superioridad de una sobre la otra y diferencias en el esquema doméstico del poder público. La privanza llevaba implícita la amistad y la confianza del privado con su señor y se relacionaba igualmente con la promoción y el ascenso»[520]. En estos nuevos dominios americanos, es la influencia política, el comando de altas tareas y la responsabilidad de gobierno que adquieren los individuos de patrimonio en las posiciones públicas de las provincias. ¿Con quién firma el Rey las capitulaciones del descubrimiento y conquista de las nuevas tierras? Con los nobles. ¿A quiénes eleva el Rey a las principales obligaciones de conducción de las nuevas administraciones coloniales? A los nobles. Y son estos nobles y sus descendientes nativos, convertidos en la nobleza criolla, los detentadores de los principales cargos de la Venezuela colonial, a excepción de los despachos de Gobernador y Capitán General, junto con sus Tenientes y más cercanos funcionarios; y también a excepción de las principales curules de la Real Audiencia, de algunas altas comandancias militares y también de algunas altas dignidades eclesiásticas. Si se quieren cuantificar los lugares de interés político general donde no están los criollos en presencia dominante, casi podrían contarse con los dedos de la mano, sobre todo si se les compara con todas aquellas funciones en el orden civil, administrativo, eclesial y militar que pasan a ocupar los nobles criollos. Veamos algunos ejemplos.

Pedro García de Gaviria, vasco de noble casa, integra la expedición fundadora de Mérida en 1558, al mando de Juan Rodríguez Suárez, y pronto llega a ser tesorero real de la ciudad, procurador, escribano público, regidor y alcalde ordinario. Recibe encomienda y, también, donación de tierras. Muere en 1601 y deja una numerosa descendencia, donde encontramos a encomenderos y hacendados con cargos de alférez mayor, alcalde de la Santa Hermandad, regidor perpetuo, teniente de gobernador, contador de cuentas, familiar del Santo Oficio, capitán, y otros[521].

---

[520] María del Pilar Carceller Cerviño, "Nobleza cortesana, caballería y cultura. La casa ducal de Albuquerque", en María Concepción Quintanilla Raso (Dir.), *Títulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad política. Fundamentos en la Castilla medieval*, Madrid, Sílex Ediciones, 2006, p. 223.

[521] Yuleida Artigas Dugarte y Robert Darío Castillo, *Linajes de la élite colonial merideña: Gavirias y Avendaños (siglos XVI y XVII)*, Mérida, Editorial Venezolana, 1998, pp. 28-38.

Gonzalo de Avendaño, nacido en Tunja, hijo del conquistador Juan de Avendaño y una india, fue alcalde, encomendero, propietario, refundador de la villa de Gibraltar, alguacil mayor, regidor[522].

De las 41 encomiendas de Cumaná que estudiamos en el capítulo correspondiente, aparecen consignados los siguientes cargos detentados por sus diversos encomenderos en los siglos XVI y XVII (Puede ser que en la suma resultante se escapen casos en que no se anotó el cargo o las funciones asumidas por los encomenderos, debido a no haberse asentado eso en el documento original, o en la trascripción de la fuente que utilizamos, pero, de todas maneras, el resultado evidencia con fuerza el factor privanza, o actuación política, incluyendo la militar, que alimentó la condición de noble en la región oriental):

Alcalde ordinario: 9 encomenderos
Alcalde de la Santa Hermandad: 14 encomenderos
Alférez real: 3 encomenderos
Procurador general: 4 encomenderos
Alguacil mayor: 3 encomenderos
Fiel ejecutor: 1 encomendero
Regidor: 2 encomenderos
Depositario general: 1 encomendero
Contador real hacienda: 1 encomendero
Teniente justicia mayor: 1 encomendero
Teniente de gobernador; 1 encomendero
Capitán: 40 encomenderos
Maestre de campo: 5 encomenderos
Alférez: 17 encomenderos
Sargento mayor: 10 encomenderos
Teniente de fuerza: 1 encomendero
Caballero de la Orden de Alcántara: 1 encomendero
Actuación en acciones de guerra contra el extranjero: 24 encomenderos
Actuación en combates contra los indios: 5 encomenderos.

En cuanto a la provincia de Caracas (o Venezuela), la historiografía ha insistido hasta la saciedad en el estudio de los lazos muy estrechos que se anudaron entre la nobleza y los puntos de dirección, comando, o influencia, sobre los asuntos de lo que se llamaba entonces la república (la esfera pública). Ya desde José Gil Fortoul, Pedro Manuel Arcaya y Laureano Vallenilla Lanz, a comienzos del siglo XX, la historiografía venezolana ha llamado la atención acerca de la privanza de que gozó la nobleza criolla en diversas instituciones de la época. En fecha reciente, se ha puntualizado mejor el fenómeno. La historiadora Frédérique Langue reconoce en los propietarios criollos su «ejercicio del poder local (Cabildo, papel de teniente de justicia en las

[522] *Ibíd.*, pp. 38-44.

jurisdicciones de las haciendas, de diezmeros, corregidores de indios, etc.)» y que «esta aristocracia no carece de poder político»[523]. Ferry resume en cifras el ejercicio de tal poder en la primera mitad del siglo XVIII así: los alcaldes ordinarios de Caracas ejercieron la autoridad de Gobernadores por más de 6 meses en no menos de 8 años desde 1700 a 1730. Y entre 1700 y 1749, de los 71 alcaldes ordinarios que fueron electos, 66 de ellos pueden ser identificados como hijos de las familias de la élite de Caracas, o inmigrantes que se casaron con tales familias[524]. Eduardo Arcila Farías y Manuel Nunes Días han documentado muy bien el práctico monopolio que ejercieron los nobles criollos sobre el Real Consulado de Caracas[525].

Ahora bien, si nos trasladamos a los terrenos del ejército y la iglesia, podremos apreciar también hasta dónde la privanza de los nobles mantenía allí su presencia. En cuanto a la fuerza armada colonial, un estudio de dos profesores de la Universidad de Sevilla, Juan Marchena Fernández y Braulio L. Flores Morón, pone de manifiesto que, entre 1750 y 1810, de los 606 oficiales regulares del así llamado Ejército de América destacado en Venezuela (en las armas de infantería, artillería, caballería y estado mayor), 291 eran criollos y casi todos ellos estaban calificados como nobles o de calidad conocida. Y los 487 oficiales de los cuerpos de milicias (de blancos, de pardos, de morenos) existentes entre 1778 y 1810, la mitad de los cuales eran criollos, se distribuían por su linaje así: nobles: 185 (38%), hijos de militares: 17 (3,5%), de calidad conocida: 131 (26,9%), humildes: 137 (28,1%), no especificado: 17 (3,5%). Y de esos 185 oficiales milicianos considerados como nobles de sangre y de vida, las dos terceras partes, 125, eran criollos[526]. Tales proporciones llevan a los catedráticos de Sevilla a afirmar lo siguiente:

> En un esquema más simple, el proceso [de copamiento] se explicaría indicando que, establecida la oficialidad como canal de ascenso social, y conformada esta oficialidad por las oligarquías criollas, este último grupo va a obtener el control de la institución militar para 1800-1810[527].

Pasando a la esfera eclesiástica, nos encontramos que entre los 29 catedráticos criollos del Seminario de Caracas, entre 1634 y 1718, estaban los siguientes caraqueños:

---

[523] Frédérique Langue, *Ob. cit.*

[524] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, pp. 197 y 200.

[525] Eduardo Arcila Farías, *El Real Consulado de Caracas*, 2ª edición Caracas, Contraloría General de la República, 1993 - Manuel Nunes Días, *El Real Consulado de Caracas (1793-1810)*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1971.

[526] Juan Marchena Fernández y Braulio L. Flores Morón, "Los laberintos de la fortuna - El ocaso del orden colonial en Venezuela y la generación militar de Simón Bolívar", en Alberto Filippi (Coord.), *Bolívar y Europa*, volumen III, Caracas, Editorial Arte, 1995, p. 97.

[527] Ibíd., p. 77.

Juan de Arrechedera, obispo, gobernador y capitán general que fue de Filipinas, hijo de la marquesa del Valle de Santiago, Luis Catalina de Tovar y de Berroterán.

Nicolás de Herrera y Ascanio, rector que fue del Seminario de Santa Rosa en 1709-1718, hermano de Juan Ascensión de Herrera y Ascanio, bisabuelo, por vía materna, de la madre de Simón Bolívar.

José Mijares de Solórzano, rector de la Universidad en 1732-1734, obispo de Santa Marta en 1739, hijo del marqués de Mijares.

Antonio de Tovar y Bañes, profesor del Seminario en 1716 y 1725, nieto del primer marqués de Mijares.

Los hermanos José Martínez de Porras, obispo de Puerto Rico en 1752, y Francisco Martínez de Porras, rector del Seminario en 1718, y de la Universidad en 1725, descendientes los dos del conquistador Damián del Barrio, su 5° abuelo. Además, entre 1734 y 1811, la Universidad tuvo 22 rectores criollos[528].

Nacimiento, la sangre

Ampliamente documentado por los historiadores ha sido este otro elemento que nos inclina a calificar el estamento social con el apelativo de nobleza criolla, aunque también conocido con otros nombres (aristocracia territorial, oligarquía criolla, patriciado, mantuanos, élite). Los grandes propietarios de haciendas y solares, los grandes comerciantes y negociantes del país, la crema de los miembros de los cabildos, de los altos rangos del clero y de los altos mandos del ejército y las milicias y, por ende, su extensa parentela, tanto la que viene asentada aquí desde muchos años atrás, como la recién incorporada que ha llegado del Reino, entran a formar parte de la nobleza criolla, que muestra apellidos ilustres, habita casas solariegas, posee ingentes medios de fortuna, y adquiere títulos universitarios, eclesiásticos y militares. Son conquistadores, encomenderos, ediles, monjas, frailes, catedráticos, capitanes, dueños de canoas, de barcos, de almacenes, de recuas mulares, pero también son segundones, venidos a menos, depauperados de ocasión, pero todos, los de muy arriba y los que no están tan arriba, apelando siempre a un tronco benemérito, a un origen en solar conocido, a la sangre común de los primeros conquistadores y pobladores de estas tierras, a los que a su "costa y minción" han

---

[528] Cf. Caracciolo Parra León, *La instrucción en Caracas, 1567-1725*, Caracas, Comisión Presidencial del V Centenario, J.A. Catalá, editor, 1996, edición facsimilar de Parra León Hmnos. Editores, Caracas, 1932. Y Ildefonso Leal, *Historia de la UCV*, Caracas, Ediciones del Rectorado de la UCV, 1981.

luchado por la gloria del Reino y por la victoria de Su Majestad. Cuando van ellos a optar a un cargo, o a solicitar una merced real, o a crear un nexo familiar o a defenderse de un agravio, sacan a relucir la gloria de sus antepasados. Es la sangre lo que los hace nobles, y no sólo el poder o la riqueza, porque en otras épocas de la historia, tanto pasada como futura, el solo poder o la sola riqueza hace aristócratas, hace oligarcas, pero no nobles, aunque los nobles poseen —es la regla general de aquellos tiempos— poder y riqueza.

En los territorios de esta tierra firme, semejante grupo social surge y se desarrolla al rescoldo de unas fuentes de inspiración muy características: la semilla conquistadora, es decir, el hecho militar, el engrandecimiento del Imperio con la apelación a las armas para doblegar al aborigen y para derrotar la intromisión del adversario de otros imperios; y la apelación al abolengo, al entronque prestigioso con esos primeros pobladores que son sus padres, abuelos, bisabuelos, a quienes se debe el lustre y esplendor de la familia.

Es sabido que entre los conquistadores ya vino gente de alcurnia. Los capitanes y principales de las expediciones lo eran en la mayoría de los casos, en vista de los altos costos que comportaba llevar adelante una capitulación. En nuestras tierras echaron raíces y dejaron vasta descendencia, salvo en los casos, no tan raros por cierto, de morir en la demanda, o de mudarse a otros lugares por orden real o deseos de aventura, o de accesos de nostalgia por la tierra natal. Citemos algunos casos, muy demostrativos.

Sebastián Díaz de Alfaro (San Lúcar de Barrameda 1533—Caracas 1606). Se casó en 1557 en San Lúcar de Barrameda con Mariana Rodríguez de Arteaga (1540—Caracas 1605). Formó parte de la hueste de Diego de Losada fundadora de Caracas, y él es el fundador de San Sebastián de los Reyes, en 1584[529].

El capitán Lorenzo Martínez de la Madrid y González, natural de Villacastín, Segovia, es encomendero y vecino de Caracas. Después de morir, su viuda, Juana de Villela, nacida en Palos, y su hija Mariana de Villela, nacida en 1578, viuda del regidor Bartolomé Masabel, erigen en 1617 el convento de la Concepción de Caracas, de notabilísimo abolengo[530].

Pedro Malaver de Silva, caballero extremeño de Jerez, «hombre rico de caudal», reúne 600 hombres, muchos de ellos gente noble y principal, para una expedición conquistadora que llega a Margarita en 1569. Van con él dos hermanos, nacidos en Alcántara, Alonso Brabo Hidalgo y Diego Brabo Hidalgo, «hombres ricos y acomodados». Un sobrino de don Pedro de Silva es el famosísimo capitán Garci González de Silva, «persona noble», nacido en Mérida (España) en 1536. A lado de sus notables andanzas guerreras, que se extienden desde Valencia hasta las tierras de los

[529] José de Oviedo y Baños, *Ob. cit.*, tomo II, p. 424 y 579.
[530] *Ibíd.*, p. 427.

cumanagotos, va dejando también la semilla noble. Tomemos apenas un vástago suyo, el capitán Juan Arráez de Mendoza, encomendero de Cumaná, quien se precia de ser «hijo legítimo, nieto y bisnieto por ambas líneas paterna y materna de los primeros descubridores y conquistadores, pobladores y pacificadores de la provincia de Venezuela» y, para ello, afirma que su madre es Margarita de Silva y Guevara, descendiente por vía directa de Garci González de Silva[531]. Doña Margarita había nacido en 1608 en Caracas, y su padre, Gaspar de González y de Silva y Rojas (que era hijo de Garci González de Silva) había nacido en Caracas en 1575.

Pedro Alonso Galeas (Almendralejo, Extremadura 1516—Caracas 1598) comanda la expedición contra los indios mariches en 1572. Se casó con la española Inés Rengel de Mendoza, y procrean 8 hijos[532].

Gabriel de Ávila, nacido en 1535, es de los fundadores de Caracas. El cerro de Caracas lleva su nombre. En 1575, cuando era alcalde ordinario de la ciudad, emprende una expedición contra los indios teques. Se casa con Luisa del Barrio, nacida ya en Coro, hija del conquistador Damián del Barrio, «progenitor de nobilísimas familias». Otro hijo de Damián del Barrio es Pedro del Barrio, dueño de esclavos en las minas de Buría, entre los que se contaba el famoso Negro Miguel.

Juan Fernández de León (Villanueva de Portimao Taviera, Portugal 1545—Caracas 1593). Pasó a las Indias en 1564, y llega a Borburata con siete esclavos suyos. Se incorpora a la expedición de Diego de Losada, razón por la cual figura entre los fundadores de Caracas. En esta ciudad ocupa los cargos de regidor, alcalde, escribano, encomendero, juez, y llega a ser capitán. En 1572 se ha casado en Borburata con Violante de Barrios y García de Samaniego, nacida en 1556 en El Tocuyo, hija de Antonio de Barrio, nacido en 1515 y casado en 1555 en El Tocuyo con N. García de Samaniego y Cuaresma de Melo, nacida en 1539 en Coro, pero de padre portugués y madre española.

Beatriz de Rojas y Francisca de Rojas son dos hermanas, hijas de Pedro Gómez de Ampuero (Agüero) y Ana Vázquez de Rojas, la que fue ahorcada por el Tirano Aguirre en Margarita. Se casaron con dos grandes conquistadores: Beatriz con Garci González de Silva, y Francisca con Francisco Infante.

Juan de Villegas (Segovia 1509—1553) fundador de Barquisimeto en 1552, se casa con Ana Pacheco en 1534, la hija de otro conquistador, Francisco Pacheco. Una de las hijas de Juan y Ana, Luisa de Villegas, se casa con otro conquistador, Francisco Maldonado, en 1565. Y una de los hijos de este último matrimonio, también llamada Luisa, nace en Caracas en 1579, de modo que la parentela se va extendiendo y se engarza con la de Simón Bolívar.

En Cumaná, el conquistador Diego Fernández de Serpa y su hijo, Garci González de Serpa, constituyen el tronco de una vasta nobleza cumanesa, junto a otros conquistadores como Juan Rengel el Viejo. Entre sus miembros destacan los encomenderos Fernando del Bastardo y Loaysa, Antonio Martín Jiménez, Pedro Rendón Sarmiento, Francisco Mejía de Serpa, Gaspar Zapata de Mendoza, Gabriel Centeno, Gaspar Márquez de Valenzuela, Rafael de Betancurt y otros.

---

[531] Antoinette Da Pietro-Perellli, *Ob. cit.*, tomo III, pp. 299-311.

[532] Gilberto Bodu Ayala, *Algunos linajes de Venezuela*, www.gilberto.bodu.net/ Esta fuente es válida para los otros apellidos citados en el presente capítulo y debe tenerse como tal, porque si no ha sido mencionada, débese a razones de redacción.

Hay criollos que basan su nobleza de nacimiento en el hecho de ser descendientes directos por ambas líneas paterna y materna de los conquistadores que llegaron ya con condición nobiliaria o que la adquirieron de inmediato, como los que hemos nombrado arriba. Hay otros que llegan cuando se están apagando los fuegos de la conquista o que no participan en ella, por ser funcionarios reales, pero que a poco sus descendientes se emparentad con hijos o hijas de vieja prosapia colonizadora. Entre ellos nombremos sólo a unos cuantos:

Domingo de Vera, depositario general del Cabildo, y Diego de Adame, financista de la reconstrucción de la Catedral, en su carácter de vecinos principales de Caracas, son bisnietos de Sebastián Díaz de Alfaro, quien con sus hijos Mateo, Ana, Marcos, Juana, Pedro y Leonor, se avecindó en Caracas.

Simón de Bolívar y Castro, llamado el Mozo, nace en 1569 en Santo Domingo, hijo de Ana Fernández y Castro, y de Simón de Bolívar de la Rementería, el Viejo (Villa Marquina, lugar de Bolívar, Guipúzcoa 1532—Caracas 1612). Padre e hijo habían llegado a Caracas en 1589, y el Mozo se casa en 1592 con Beatriz Díaz de Rojas, nacida en 1573 en Caracas, hija de Alonso Díaz Moreno (1530-1602), «vecino de conocida nobleza» y a quien varios historiadores le atribuyen la fundación de la ciudad de Nueva Valencia del Rey, en 1555. De esta manera, los dos Simones, el viejo y el mozo, que no habían participado en las expediciones conquistadoras pero que procedían de familias nobles peninsulares, llegaron a ser altos funcionarios, encomenderos, comisario del Santo Oficio de la Inquisición (Simón el Mozo) y, para remachar su nobleza, el Mozo se casa, como se acaba de decir, con Beatriz Díaz de Rojas, que es hija nada menos que del capitán Alonso Díaz Moreno, uno de los más soberbios y poderosos conquistadores de estas tierras, para mantener así un privilegio de sangre que va a abarcar más de dos siglos.

Pedro de Liendo y Origüén (Portugalete, Bilbao 1603—Caracas 1658) tampoco perteneció a las huestes conquistadoras. En 1630 se casa con Luisa Catalina de Mejía y Suárez del Castillo, quien es hija de Alonso Suárez del Castillo (1540—Barquisimeto 1603), Gobernador y Capitán General de Venezuela en 1602-1603. Y el otro hermano de Pedro, llamado Santiago de Liendo y Origüén (Portugalete, Bilbao 1606), se va a casar en 1637 con Paula Rodríguez de Santos y Vázquez, hija de Juan Rodríguez de Santos y Arias de Montano, hijo a su vez de Alonso Rodríguez de Santos y Gómez de Hidalga, empadronado como hidalgo en 1592 en Frenegal, España, llegado a Venezuela, luego de enviudar, junto con sus dos hijos, Juan y Benito, a comienzos del siglo XVII, y donde ejerció interinamente la Gobernación de la provincia, junto con el capitán Alonso Félix de Aguilar por muerte del titular Juan de Triviño y Guillamas.

Luis Arias Altamirano y Aragón (Margarita 1624—). Se ha casado en 1658 en Caracas, con María Úrsula Teresa de Ochoa de Aguirre y Oñate (San Mateo 1644—1659), emparentada con los primeros conquistadores.

Diferenciación jurídica

La nobleza criolla gozó de numerosas distinciones, prerrogativas y normas de comportamiento social, taxativamente expresadas en cédulas reales, leyes y ordenanzas. Entre tales condiciones de excepción se cuentan las siguientes:

◇ Limpieza de sangre

La normativa más invocada por los criollos para mantener sus privilegios fue la que prolongó en estas tierras el contenido de los estatutos de limpieza de sangre. Se trataba, en síntesis, del cumplimiento de un proceso legal mediante el cual la persona blanca, es decir, española, de origen europeo o americano, probaba ser un vecino de solar conocido, hijo y nieto de españoles, limpio de toda mala raza de judíos, moros, negros y mulatos. Para demostrar tal calidad, exhibía su partida de bautismo incluida en el libro de bautizos de blancos, y cualquier otro documento sobre el particular y, además, promovía diversos testigos que atestiguaran su calidad de blanco, cristiano y persona de bien. Era, en la práctica, una suerte de proceso judicial, que comprendía, además, requisitorias a autoridades civiles y eclesiásticas en demanda de pruebas y hasta convocatorias a personas que depusieran pruebas a favor o en contra, a fin de otorgar, o rechazar, la expedición del certificado de limpieza de sangre. En el Archivo General de la Nación reposan los expedientes de muchas solicitudes al respecto. En la generalidad de los casos, eran las personas nobles que formulaban tal petición en la ocasión de optar a algún cargo, o para contraer matrimonio, o para ingresar en la Universidad, o tomar los hábitos eclesiásticos, o para pertenecer a alguna sociedad civil o cuerpo militar de blancos, o aspirar a algún título nobiliario, o hacer valer su calidad en la ocasión de aspirar a un título, una prebenda o una gracia real. Se trataba de un proceso complicado y dilatado, en donde cabían interpretaciones caprichosas o intencionadas. Es curioso ver, por ejemplo, que en las numerosas alegaciones de méritos para participar en las oposiciones a encomiendas, que figuran en el libro varias veces citado de Mario Briceño Perozo, apenas en una o dos de ellas se añade el cognomento de negro a la redacción original española donde se habla de los individuos de mala raza. Tal mención de negritud se observa en el caso de la probanza de limpieza de sangre solicitada por Isabel de la Cruz, vecina de Jerez, cuando informa que los padres y abuelos de sus primos Álvaro y Diego Méndez fueron "cristianos viejos, limpios de toda raza y mancha de judíos, moros moriscos, negros ni de los convertidos a

nuestra Santa Fe Católica, y ninguno de ellos ha sido castigado ni penitenciado por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición..."[533].

Por otra parte, no faltaron datos falsos o mentirosos como los que relata la historiadora Elizabeth Ladera de Diez, al decir que en diversas alegaciones de méritos y parentescos encontró incongruencias y datos falsos, circunstancias en la cual debe haber influido el soborno en metálico, al menos en aquellos finales del siglo XVIII[534].

Debe advertirse también que no pocas solicitudes de limpieza de sangre fueron hechas por gente que no era blanca, tal como se lee en la documentación correspondiente del Archivo General de la Nación. En tal sentido, el historiador Ángel Almanza ha encontrado los expedientes de las siguientes personas que piden certificación de limpieza de sangre: el negro Francisco José Galdona, en 1698, quien dice ser hijo legítimo de negros; Diego Juan Caricoto, indio noble de San Agustín de Guacara, en 1716; y Juan José Torres, en 1769, quien pide ser considerado pardo, y no negro[535].

Los estatutos de limpieza de sangre tuvieron su origen en España durante el fin de la época medieval. Según el tratadista Jaime de Salazar Acha, el primer estatuto de limpieza fue aprobado en Toledo en 1449, con el objeto de excluir a los judíos de origen de los cargos y regidurías de esa ciudad[536]. Pero, no fue sino hasta 1556 cuando el rey Felipe II, lo aprobó definitivamente para todo el Imperio, luego de haber sido sancionado por un breve del papa Pablo IV en 1555[537], de modo que se hizo práctica habitual para quienes aspiraban a ingresar en las universidades y colegios mayores, las órdenes militares y las cofradías, y para obtener el título de abogado, y los oficios de maestro, escribano, etc. Es decir, se convirtió en un símbolo de distinción social.

Jaime de Salazar Acha mantiene la tesis de que los estatutos de limpieza de sangre no eran de naturaleza racista porque no tenían como finalidad la preservación o conformación de una raza pura especial, sino porque su contenido era esencialmente ideológico, destinado a

---

[533] Mario Briceño Perozo, *Ob. cit.*, p. 521.

[534] Elizabeth Ladera de Diez, *Contribución al estudio de la "aristocracia territorial" en Venezuela colonial. La familia Xerez de Aristeguieta, siglo XVIII*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1992, pp. 199-200.

[535] Ángel Almarza, "La limpieza de sangre en la provincia de Caracas durante el siglo XVIII", en *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, tomo LXXXVII, N° 348, Caracas, octubre-diciembre de 2004, pp. 127-160.

[536] Jaime de Salazar Acha, "La limpieza de sangre", en *Revista de la Inquisición*, Madrid, volumen 1, Madrid, Universidad Complutense, 1991, pp. 289-308, www.ucm.es/BUCM/revistas/der/

[537] *Ibíd.*

preservar la pureza de la religión católica frente al judaísmo. Para ello, se basa, entre otros razonamientos, en la ambigüedad de "sangre limpia" que siempre ha flotado sobre eminentes personalidades españolas tales como Teresa de Ávila, Luis de Góngora, Juan Luis Vives y hasta el mismísimo Miguel de Cervantes; pero, también, se basa en la frecuencia con que reyes y altos dignatarios y nobles de España tenían miembros bastardos en su parentela, muchos de ellos de sangre judía (Es el caso de Fernando el Católico, quien es hijo de la nieta del Almirante Alfonso Enríquez, quien es hijo bastardo del amancebamiento de Fadrique, hermano de don Enrique, rey de Castilla, con una judía apodada "La Paloma"[538]. De allí que se crea que la "limpieza" apuntaba más a impedir la propagación de la religiosidad judía que la contaminación de la sangre.

Pero, fuese ésa o no la razón fundamental de los estatutos de limpieza de sangre, en cambio, su objetivo en estas tierras, donde la presencia judía fue bastante escasa y casi irrelevante, comparada con el peso que tuvo en los años del Medioevo en España, fue el de establecer un muro infranqueable entre los nobles españoles, un sector minoritario entre la población, y la gran masa de pardos, mestizos y esclavos negros. Su función es, entonces, más amplia y se extiende hacia los terrenos de lo económico y sociocultural, porque en el supuesto de una búsqueda de preservación de pureza racial, sus resultados fueron muy magros, y la prueba está a la vista, en la muy acrisolada condición "café con leche" de nuestra población.

◇ Fueros y normas protocolares especiales

La nobleza criolla gozó de diversos fueros especiales, como fueron las puertas abiertas en funciones e instituciones civiles, militares y eclesiásticas ya anotadas arriba. Gozaron de la facultad de llevar el título de Don. No podían sufrir cárcel, sino multa, como castigo por delitos menores. No se les aplicada ciertos pechos. Por ejemplo, Pedro de Lovera y Otáñez, el fundador en Venezuela del linaje de los Lovera Otáñez, pues fue el primero en llegar a estas tierras, era originario de Castro Urdiales, valle de Otáñez, en la provincia de Santander, donde tenía casa y solar conocido, escudo de armas, familiares hijodalgos, exentos de pagar servicios ordinarios y extraordinarios, y pechos y derrames[539]. Muy especial era el derecho a ostentar un escudo de armas que simbolizara su privilegiada condición de benemérito. Ejemplo del honor de escudo de armas es el que ganó el mariscal y regidor Gutierre

---

[538] *Ibíd.*

[539] Cf. Elizabeth Ladera de Diez, *Ob. cit.*

de la Peña Langayo, otorgado por el rey Felipe II, por sus servicios, entre ellos, la aniquilación del Tirano Aguirre, hacia 1563, según la siguiente real cédula:

Por cuanto por parte de vos, Gutierre de la Peña, nuestro Mariscal de la Provincia de Venezuela, me ha sido hecha relación que vos tenéis que pasasteis a aquella tierra unos treinta años, donde nos habéis servido en todo lo que se ha ofrecido como vasallo y servidor nuestro, especialmente en el descubrimiento y población de ella, ocupándoos siempre en cargos de Capitán, Regidor y Alcalde y otras cosas de mucha calidad y que estando alzados contra nuestro servicio dos indios principales que tenían la tierra a punto de perderse os habían proveído a vos para ir contra ellos, a los cuales prendisteis y redujisteis a nuestro servicio y entregasteis a la Justicia de dicha Provincia para que los tuviesen debajo de nuestro dominio y señorío Real, y que después últimamente teniéndose noticia en la dicha Provincia que Lope de Aguirre estaba rebelado contra nuestro servicio y Real Estandarte y que iba a tierra adentro con toda su gente haciendo grandes y enormes delitos y crueldades y muertes, fuisteis proveído por nuestro Capitán General para ir contra él y sus secuaces para lo cual juntasteis toda la demás gente que pudisteis haber y recogidos, los animasteis y pusisteis contra el dicho Lope de Aguirre y lo prendisteis y entregasteis a mi Gobernador de la dicha Provincia para que hiciese justicia de él, como la hizo, en lo cual nos hicisteis un servicio muy notable y señalado, así para la conservación de la dicha tierra como para el bien y aumento de los naturales de ella en que os habéis puesto en gran peligro y riesgo de la vida, pasando grandes trabajos en todo ello; como todo constaba y parecía por informaciones ciertas de que ante Nos en el nuestro Consejo de las Indias por vuestra parte fueron presentadas, y me fue suplicado que en gratificación de vuestros servicios y porque de vos y de ellos quedase perpetua memoria y vos y vuestros descendientes fueseis más honrados, os mandásemos dar por Armas un escudo partido en contra mate en tres partes, que en la primera parte alta de la mano derecha esté una bandera caída hacia abajo, de color negro, orlada de oro, con dos espadas desnudas ella, la una puesta contra la otra, ambas a dos ensangrentadas, con las guarniciones de oro en campo colorado, que son las insignias que el dicho Lope de Aguirre traía en su bandera, y en el otro segundo cuarto de la mano izquierda esté un león rampante coronado, de color púrpura, en campo de oro, y en el tercer cuarto de abajo estén tres peñas de su color en campo de cielo cercadas de unas aguas de mar azules y blancas sobre la mayor de ellas, que es la de enmedio esté una encina verde con bellotas de oro y de un ramo de ella esté colgado un escudo y pintado en él un sol de oro en campo colorado que son las armas de vuestros pasados, y por timbre un yelmo serrado con su rollo torcido, y por divisa un estandarte Real, azul alzado derecho con las armas de Castilla, con sus trascoles y dependencias a follajes de azul y oro o como la Mía Merced fuese; y Yo, acatando los dichos vuestros servicios y porque de vos y de ellos quede perpetua memoria y vos y vuestros descendientes seáis más honrados, tuvímoslo por bien, por ende por la presente os hago merced y quiero y mando que podáis traer y tener pos vuestras armas conocidas las dichas armas de que arriba se hace mención, en un escudo a tal como éste, según va pintado y figurado, las cuales os damos por vuestras armas conocidas y queremos y mandamos y es nuestra merced y voluntad que vos y vuestros hijos y descendientes de ellos y de cada uno de ellos las hayáis y tengáis y podáis traer y poner en vuestros reporteros y casas y en los de cada uno de los dichos vuestros hijos y descendientes de ellos y en las otras partes y lugares y que vos y ellos quisiereis y por bien tuviereis y por esta nuestra Carta o por su traslado signado de Escribano Público encargamos al Serenísimo Príncipe Don Carlos, nuestro muy caro y muy amado hijo, y mandamos a los Infantes, Condes, Ricoshombres, Adelantados, Priores, Comendadores y Sub Comendadores, Alcaldes de los Castillos y Casas Fuertes y Llanas y a las del Nuestro Consejo, Presidente y Oidores, Alcaldes, Alguaciles de la nuestra Casa y Corte y Cancillería y a todos los Concejos, Corregidores, Asistentes, Gobernadores, Alcaldes, Alguaciles, Merinos, Prebostes, Veinticuatro Regidores Jurados, Caballeros, Escuderos, Oficiales y hombres buenos de todas las ciudades, villas y señoríos y de la dicha Provincia de Venezuela y de las otras nuestras Indias, Islas y Tierra Firme del Mar Océano, así a los que ahora son, como a los que fueren de aquí en adelante y a cada uno y a cualquier de vos en sus lugares y jurisdicciones, que os guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir a vos y a los

dichos vuestros hijos y descendientes de ellos y de cada uno de ellos la dicha merced que así os hacemos de las dichas armas, y las hayáis y tengáis por vuestras Armas[540].

Otro ejemplo, más reciente, y que indica la importancia de tal distinción, no importa el pasar de los siglos, lo da la petición hecha en 1917 por nuestro muy conocido beato José Gregorio Hernández, y la respuesta de certificación de genealogía, nobleza y blasones que al respecto emite don Félix de Rújula, decano de los cronistas reyes de armas de Su Majestad el rey don Alfonso XIII y de la cual copiamos los siguientes párrafos:

Por cuanto y por parte del Señor Don José Gregorio Hernández y Cisneros Manzaneda y Mansilla, natural de Isnotú de Betijoque y vecino de Caracas, República de Venezuela, se nos ha hecho relación de ser hijo legítimo de Don Benigno Hernández y Manzaneda y de Doña Josefa Antonia de Cisneros y Mansilla, naturales de Boconó y Pedraza, respectivamente; nieto por línea paterna de Don Remigio Hernández y de su mujer Doña Lorenza Ana de Manzaneda, y por la materna de Don Miguel Antonio de Cisneros y de su esposa Doña María de Jesús Mansilla. Y deseando perpetuar la buena memoria de sus antepasados nos ha pedido le organicemos y confirmemos el escudo de armas que legítimamente le corresponde por sus cuatro apellidos primeros, tratando especialmente del troncal paterno con sus enlaces y descendencias. Certificamos [...] y hacemos entera fe y testimonio a los que la presente vieren, que en los registros, libros de armería, nobiliarios, historia, minuteros, Reales provisiones de hidalguía, informaciones, privilegios, pruebas de órdenes militares y otros documentos impresos y manuscritos existentes en nuestro poder y Archivo y en los del Estado, consta la familia de Hernández en los términos siguientes: [...] Hernández de Yanguas: Apellido patronímico derivado del nombre Hernando o Fernando y familia originaria de los primitivos próceres montañeses [...],fue de los caballeros de mayor opulencia y representación que florecieron en el reinado de Don Alfonso V de León por los años de 980 [...] De la misma procede la que pasó de España a América, de que anteriormente hemos tratado, estableciéndose con gran lustre y estimación en Venezuela, de la que procede nuestro interesado [...] En consecuencia de todo lo referido, el escudo de armas personal de nuestro interesado, Señor Don José Gregorio Hernández y Cisneros Manzaneda y Mansilla, se organiza en la forma siguiente: Escudo cuartelado; primero: partido en palo; 1: En campo de gules tres castillos de plata, puestos dos y uno; 2: En azur tres flores de lis de oro puestas en el mismo orden (Hernández). Segundo: quince jaqueles de oro y gules (Cisneros). Tercero: en campo de rojo un león rampante de oro; bordura verde con ocho manzanas de oro (Manzaneda). Cuarto: escudo cortado: 1, en oro dos ríos azules, bordura de gules con cinco cabezas de sierpes verdes echando sangre; 2, en verde una torre de plata sobre una peña, y debajo, una fuente y un fresco con dos lebreles de plata atados a él (Mansilla). Va timbrado el escudo general de la militar insignia del casco o celada de acero bruñido con bordura y guilloque de oro forrado de gules, terciado hacia la derecha y surmontado de un penacho de plumas y lambrequines de los esmaltes correspondientes al campo primero y figura principal del primer cuartel, del apellido Hernández, que son rojo y plata, los mismos de las libreas de esta familia.

De dichas armas conforme quedan pintadas al principio de este documento y explicadas, podrá usar dicho Señor Don *José Gregorio Hernández y Cisneros Manzaneda y Mansilla*, sin que se le ponga impedimento por ningún Tribunal de Justicia de este Reino.

Y para que así conste donde convenga damos a su pedimento la presente Certificación de Genealogía, Nobleza y Blasones, de que queda copia en nuestro Archivo; firmada y sellada con el de nuestras armas en esta muy heroica villa y Corte de Madrid, a catorce de julio de 1917. Félix de Rújula[541].

---

[540] Mario Briceño Perozo, *Ob. cit.*, p. 73.

[541] *Boletín del Instituto Venezolano de Genealogía*, N° 7, Caracas, mayo de 1992. Internet.

A un noble le estaba vedado ejercer los llamados "oficios viles", es decir, hacer cualquier labor con las manos, es decir, todas las ramas de la artesanía o del mercado al menudeo.

Una diversidad de normas protocolares, entre las cuales cabe mencionar el uso de ciertas prendas de vestir, de armas, de cabalgaduras, y los lugares que podían ocupar en actos públicos, permitía a los nobles diferenciarse del resto de la población. Es emblemático el uso exclusivo de una manta especial entre las mujeres ricas, privilegio del cual derivó, para muchos historiadores, el nombre de *mantuanos* dado a los nobles. (Debió de tratarse de una manta o manto especial, porque en varios testamentos se lee que el difunto ha donado un manto a su sirvienta o esclava preferida). El uso del espadín, junto con otros arreos militares, fue un símbolo de gran distinción y de tal costumbre da fe, movido por gran curiosidad, el barón de Humboldt en su famosa visita a Caracas. En las iglesias, la distinción consistía en el uso de alfombra para arrodillarse y, a veces, de asientos especiales. La graduación en colegios y en la Universidad estaba revestida de un protocolo muy elaborado. Los abogados usaban en estrados golilla y manteo, con ropilla de falda cerrada y manga redonda ancha, gorra forrada de seda y de ala corta; y, a veces, puños de gasa[542].

◇ Títulos de nobleza

Un peldaño muy deseado a alcanzar entre los nobles es el representado por un título nobiliario. Así se forma en España, durante la Baja Edad Media, el estamento de la alta nobleza. Siguiendo a la historiadora María Concepción Quintanilla Raso, la titularidad está formada por las siguientes dignidades, siguiendo al *Ceremonial de príncipes*, escrito por Diego de Valera (1412-1488) hacia 1462:

-Duque: es la más elevada:

> Asý digo que la dygnydad ducyal es mayor después de la real, a la cual en Françia y Inglaterra se guardan las prehemynençias que se siguen: los duques traen coronel en la cabeça, del qual otra dyferençia no ay a la corona rreal, salvo que el coronel es estrecho y las flores son yguales: tráenles delante el espada, aunque la punta arryba en dyferençia de los rreyes; traen çetro de oro en la mano; asyéntanse en sylla en ausençia de los rreyes; tyenen doser a las espaldas; vesan el evangelio; oyen misa en cortynas donde los rreyes no están, y sy el rrey es presente todos los duques que enden están

[542] Cf. Rogelio Pérez Perdomo, "Los abogados americanos de la monarquía española", en *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, volumen XV, México, 2003, Internet.

oyen la mysa dentro en las cortinas con el rrey; quando los duques vienen de camino los reyes los salen a rrecebyr y les dan paz[543].

-Marqués: es la que sigue, y en esto el tratadista Valera enmienda el error que a su parecer está presente en las Siete Partidas:

Pues quien duda non ser mayor la dignidad de marqués que de conde, el qual error en nynguna parte del mundo se tyene, salvo en Castilla, el qual fue tomado de la orden de la letra de la onzena ley del týtulo prymero de la segunda partyda, donde hace prymero mençyón de los condes que de los marqueses, y dallý los secretaryos contynuaron este error en las cartas del rrey (...) A mayor abundancya digo que ésta es general costumbre en el mundo, a todos notoria y magnyfiesta, la qual haze derecho (...) donde los marqueses son antepuestos que los condes (...) se concluye la dygnydad de marqués ser mayor que de condes[544].

-Conde:

Este vocablo de conde el qual se deryua de comytiua, que quiere dezir compañýa, y asý antiguamente los condes no havýan jurydycyón ny señorýa, mas eran nobles onbres que servýan de contynuo en los palaçyos a los enperadores y a los rreyes, y eran llamados palatinos (*Ibíd.*, p. 32).

-Vizconde: Tienen las mismas prerrogativas de los condes, pero son menores que condes, y ocupan algún territorio dentro del condado por ser primogénitos o muy allegados al conde[545].

-Barón:

varones comúnmente se dyze los que han señorýa de alguna villa cerrada con término y jurydycyón y mero mysto imperio[546].

-Los grandes de España: Vistas así las diversas gradaciones de los títulos de nobleza, mediante los cuales se forma lo que se da en llamar una alta nobleza, hace falta referirse a otra distinción, que es diferente de la titularidad anterior, pero que, en cambio significa una distinción mucho más elevada y que va a dar lugar a lo que puede llamarse la cúspide o élite de la alta nobleza: es la condición de grandeza, es el grupo de los llamados Grandes de España. La ya citada historiadora María Concepción Quintanilla Raso los caracteriza, basándose en el tratado *Origen de la dignidad de grande de Castilla. Preeminencias de que goza en los actos públicos y palacio de los reyes de España*, escrito por Alonso Carrillo, editado a mediados del siglo XVII, como un grupo que se destaca del sector altonobiliario por su acreditada condición señorial y la universal estimación que los rodeaba. A esto se agrega la preeminencia de cubrirse en presencia de los reyes, y el trato de

---

[543] María Concepción Quintanilla Raso (directora), *Títulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad política. Fundamentos en la Castilla medieval*, Madrid, Sílex Ediciones, 2006, p. 29.
[544] *Ibíd.*, p. 31.
[545] *Ibíd.*
[546] *Ibíd.*

"primo" que les da el rey (a diferencia de "pariente", que es dado a los nobles titulares). Y, en fin, la diferencia la sanciona en forma definitiva Carlos V, al entregarles a nueve grandes señores de Castilla y Aragón (los duques de Alba, Béjar, Escalona, Frías, Infantado, Nájera y Cardona, el marqués de Astorga, y el almirante Henríquez), y sólo a ellos, la distinción del collar de la Orden del Toisón de Oro, celebrado en Barcelona en 1519[547].

A comienzos del siglo XVI existían en España 25 títulos con grandeza, discriminados en 11 ducados, 8 marquesados y 6 condados[548].

Por lo expuesto, tomando en cuenta las realidades de España y de Venezuela colonial, puede agregarse que, además de las distinciones vistas, la nobleza exhibe un contenido heterogéneo que permite hablar de alta, media y baja nobleza, de ricos hombres y de grandes hombres y, en otro plano, de diferencias entre blancos nobles y blancos del estado llano, entre caballería noble y caballería villana. Pero, además, surgen ciertas diferencias cuando se trata el tema en la metrópoli o en esta periferia venezolana. Así, resulta útil señalar que nuestra nobleza criolla, como estamento social, ni nació de un solo golpe con todos sus atributos, ni ha permanecido como un ente estático, fijo a lo largo de tres siglos. Nace en medio de balbuceos, y se va a renovar en el transcurso de 300 años. Adquiere, por consiguiente, diversos matices distintivos. La historiografía venezolana tiene una deuda a este respecto, que es la de superar la ausencia de un estudio pormenorizado y global de ese vértice de la pirámide social de la colonia en sus diversas etapas de desarrollo. Hay ya estudios muy densos sobre el particular. Pero, falta superar algunos clisés. Veamos algunos temas en discusión.

La tal nobleza criolla no constituye un bloque homogéneo. ¿Hubo, como en la metrópoli, diversas gradaciones: los infanzones, los hidalgos, los caballeros, los ricos hombres, los grandes? Sí, hubo gradaciones. Las fuentes hablan de hijosdalgo, infanzones, caballeros, condes y marqueses. Con frecuencia, se alude a nobles pobres, situados hasta en los linderos de la miseria. A grosso modo, es posible advertir las siguientes gradaciones:

◇ **Nobles titulares**: Son los que llegaron a adquirir títulos de nobleza del reino de Castilla. Entre ellos se cuentan los siguientes[549]:

---

[547] María Concepción Quintanilla Raso, *Ob. cit.*, pp. 82-85.

[548] *Ibíd.*, p. 96.

[549] Cf. Fundación Polar, *Diccionario de Historia de Venezuela*, Caracas, CD, 1998; y Gilberto Bodu Ayala, *Ob. cit.*

El marqués de Mijares: es Juan Mijares de Solórzano y Hurtado de Monasterio (1652-1704). Obtiene el marquesado en 1691. Era nieto de Pedro Miguel Mijares de Solórzano, nacido en España en 1568, y casado en Caracas en 1606 con Francisca Díaz de Rojas, hija del conquistador Alonso Díaz Moreno. El segundo marqués de Mijares fue Francisco Felipe Mijares de Solórzano y Tovar (1674-1739).

El marqués de Ustáriz: es Casimiro de Ustáriz el primer marqués, también caballero de Santiago. Obtiene el título, concedido en las Dos Sicilias el 14 de mayo de 1739, y reconocido luego como título de Castilla, según anota Rafael Valery Salvatierra[550]. Casimiro es hermano de Luis Jerónimo de Ustáriz, y éste es padre de Jerónimo Ustáriz y Tovar (1735-1809) quien se convierte en el segundo marqués de Ustáriz, al morir Casimiro de Ustáriz sin descendencia. El segundo marqués es criollo, aunque residenciado en Madrid desde 1759, y pasa a la historia como mentor de Simón Bolívar.

El marqués del Toro: es Bernardo Rodríguez del Toro (1675-1742), llegado a Caracas a fines del siglo XVII. Es nombrado marqués en 1732. Le suceden el segundo marqués, Francisco de Paula (1713-1753), el tercero (Sebastián Rodríguez del Toro y Ascanio (1739-1787) y el cuarto y último, pero el más famoso, Francisco José Rodríguez del Toro e Ibarra (1761-1851).

El marqués del Valle de Santiago: es Francisco de Aranaz Berroterán y Gainza (o Francisco de Berroterán). Obtiene su título en 1703, aunque lo había solicitado desde 1692. Nativo de Irún, fue gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela entre 1693 y 1699, pero al terminar su periodo, permanece en Caracas y entra a formar parte de la nobleza criolla al casarse en segundas nupcias con Catalina Luisa de Tovar y Mijares de Solórzano, viuda de Juan de Arrechedera y Peñaloza. Muere en Caracas en 1713.

El marqués de Torre-Casa: Es Andrés Manuel de Urbina y Landaeta, nacido en 1669. Fue maestre de campo y nombrado caballero de la orden de Santiago a la edad de 26 años. El real despacho de marqués le fue expedido en 1722. Contrajo matrimonio en Caracas el 1 de abril de 1720 con Juana María Rosa Rodríguez de la Madriz y Liendo, nacida el 11 de septiembre de 1698, con quien no tuvo descendencia. Pero, antes, en 1698, en Sevilla, se había casado con Isabel Antonia Hurtado de Mendoza y Rojas, nacida en 1682 en Sevilla, y tuvieron

---

[550] Cf. Rafael Valery Salvatierra, *La familia tachirense Moreno Pacheco*, Internet.

nueve hijos, entre ellos Ignacio Manuel Urbina y Hurtado de Mendoza, el segundo marqués de Torre-Casa, nacido en Caracas en 1707, quien se casa el 15 de abril de 1728 con Catalina Arteaga de Landaeta, nacida en Caracas en 1710. Tuvieron un hijo, Miguel José de Urbina y Arteaga, nacido en Caracas en 1730, quien es el tercer marqués de Torre-Casa.

El marqués de las Riberas de Boconó y Masparro: es José Ignacio del Pumar (Barinas 1738-Guanare 1814). Nieto de Plácido del Pumar y Villegas, nativo de Riolova, Santander, llegó a Venezuela a fines del siglo XVII. El marqués fue dueño de casas, hatos y haciendas en Barinas, alcalde ordinario de Barinas, su regidor y alférez real. En 1769 ocupó el cargo de teniente de gobernador, cabo principal de guerra y juez de comisos de la ciudad de Barinas y su jurisdicción. Fundó Guasdualito, San Jacinto de la Horqueta de Apure, Suripá y La Yuca. El rey Carlos III le otorgó el título de marqués en diciembre de 1787.

El marqués de Casa León: es Antonio Fernández de León. Se trata de un caso muy particular. Llega a Caracas, junto con su hermano Esteban, en 1529, se casa en 1785 con Josefa Antonia Carreras, obtiene grandes propiedades en los valles de Aragua, es fiscal y llega a ser Intendente del Ejército y Real Hacienda, participa en la conspiración de los mantuanos de 1808, y en lo adelante se le ve unas veces apoyando al bando realista y otras al bando patriota, aunque establece una larga amistad con Simón Bolívar. Obtuvo el marquesado en España en 1810.

El marqués de San Luis: Aunque al fin el peticionario y sus sucesores no pudieron tomar posesión del título, merece nombrarse por haberse cumplido en este caso todos los requisitos y pasos indispensables para el otorgamiento. La supuesta objeción aducida por algunos historiadores para no conceder el título, probablemente no sea válida, porque está descartado que el peticionario tuviera como antecesora una mujer de sangre negra (el famoso "nudo de la Marín"), y porque el argumento de que dicha mujer fuese hija bastarda, como en efecto lo fue, también se cae si se observa que la historia de la nobleza de España está llena de bastardías. La solicitud fue hecha en 1728 por Juan de Bolívar, abuelo paterno del Libertador y casado con María Petronila Marín y Ponte, hija de aquella dama bastarda. Todos sus pasos se cumplieron, pero la muerte del peticionario suspendió el procedimiento.

El conde de Tovar: Lo recibe Martín Antonio de Tovar y Blanco (1726-1811), según Real Cédula del rey Carlos III de 1771. Su hijo, Martín Tovar Ponte (1772-1844), habido en matrimonio con María Manuela de Ponte y Mijares, no lo usó. Según los datos de Gilberto Bodu

Ayala, hay un Fermín de Tovar y Tovar (1805-1859) que heredó el título de conde de Tovar por muerte de su hermano Manuel Felipe; y hay también un Domingo José de Tovar y Ponte (1762-1807), a quien le correspondía el título, pero al fallecer primero que su padre, el condado pasó a otro hijo, de nombre José Ramón de Tovar y Ponte, nacido en 1792, pero, al fallecer éste a muy temprana edad, el título pasó a la hermana primogénita, María Altagracia.

El conde de La Granja: Lo recibe como cuarto conde Fernando Ignacio de Ascanio y Hurtado de Monasterio (1754-1814), hijo de Juan Ignacio José de Ascanio y Oviedo (1727-1770) y de Josefa de Monasterio y Oviedo, descendientes de la estirpe de la Casa de Oviedo, según Real Carta de Sucesión fechada en Madrid el 12 de mayo de 1796. El título de este condado provenía de 1683.

El conde de San Javier: Lo recibe en 1732 Antonio Pacheco y Tovar (1694-1740). Se ha casado en 1714 con María Teresa Mijares de Solórzano y Tovar (1682-1742), y tienen de hijo a Juan Jacinto de Pacheco y Mijares de Solórzano (1720-1775), quien es el segundo conde de San Javier, casado en 1755 con Melchora Ana de Tovar y Blanco (1729-1764).

Hay otros titulares que no califican como miembros de la nobleza criolla, aun cuando participaron en la vida colonial venezolana, pero lo hicieron por breve tiempo, y recibieron su título luego de partir de aquí, como el marqués de Varinas y Guanaguanare, de nombre Gabriel Fernández de Villalobos (Cuenca 1646-Argel 1702), con corta residencia en la provincia en el siglo XVII[551] o sólo estuvieron en Venezuela para ejercer la función de Gobernadores, como son los casos del marqués de Marianela (Juan Meneses y Padilla), aunque se casó con una criolla; el marqués de Casal (Diego Jiménez de Enciso), el marqués del Socorro (José Solano y Bote) y el marqués de Bajamar (Joaquín Primo de Rivera), éste según la historiadora Ligia Barbesí de Salazar, apoyándose en fuentes documentales[552].

◇ **La élite**: En esta categoría cabe incluir a todos los titulares anteriormente nombrados, más los que ostentan otras dignidades como caballeros de las órdenes de Santiago, Calatrava, Alcántara y Carlos III, y, por otra parte, quienes ocupan de preferencia los más importantes cargos del régimen colonial ajenos a la exclusividad metropolitana

---

[551] Cf. Ramón Díaz Sánchez, *El marqués de Varinas, desagravio de un aventurero*, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1956.

[552] Cf. Ligia Barbesí de Salazar, "Genealogía social de los Gobernadores de la Provincia de Maracaibo, 1787-1812", en revista *Procesos Históricos*, No. 6, Mérida, Universidad de los Andes, julio 2004.

(gobernadores, etc.), entre los cuales destacan los concejiles, preferentemente. La élite son los mantuanos, son los "grandes cacaos". Robert J. Ferry aporta un dato sumamente gráfico acerca de la ubicación, casi trazada a la perfección, de esa élite en Caracas: en 1759, 574 criollos pertenecientes a la élite (de un total de población de 21.683 habitantes) vivían en un perímetro encuadrado en las seis cuadras más próximas a la catedral y la plaza mayor[553]. Para ello, se basó en el antiguo manuscrito que data de 1759, que reposa encuadernado (al parecer en 1914) en la Biblioteca Nacional de Caracas, bajo el título "Matrículas de las parroquias de Caracas y demás pueblos de su diócesis", una suerte de patrón de las casas y feligreses en Catedral, Altagracia, Antímano, Candelaria, villa de Araure, etc., además de tiendas, bodegas, sastrerías y otos talleres y comercios, junto con algunas instituciones como el Real Colegio. Es un volumen que merecería un estudio a fondo de especialistas en demografía y otras disciplinas.

◇ **El grueso**, que estaría representado por el resto de los hidalgos acomodados, pero sin titularidad, sin mayor presencia en los cargos concejiles, y poseedores de grandes, medianas y pequeñas propiedades cacaoteras, ganaderas y financiero-comerciales.

◇ Finalmente, habría que hablar de aquellos **hijosdalgo venidos a menos**, empobrecidos por cualquier circunstancia adversa, pero siempre diferentes del estamento conocido con el nombre de **blancos del estado llano**, o los llamados "blancos de orilla".

En realidad, se trata de una clasificación que tiene todos los vicios del esquematismo, pero que está hecha con el propósito de hacer ver que la nobleza criolla no es un estamento que está dado así de una vez, ni ausente de los vaivenes y cambios de tres siglos. Por tales razones, se hace preciso agregar las siguientes consideraciones:

El término "grandes cacaos" no es simplemente jocoso o folklórico, alusivo al origen de la fortuna de los nobles, sino que tiene, a mi parecer, cierto dejo despectivo, revelador de la relativa inferioridad de los nobles criollos con respecto a sus pares peninsulares. En efecto, a pesar de sus notables fortunas, exageradas por lo demás por cierta literatura que mira más con desprecio que con objetividad el papel dinamizador de la economía venezolana ejercido por ese estamento, ninguno de los nobles criollos llegó ingresar al "club exclusivo" de los grandes. Incluso, ninguno de ellos pudo aspirar siquiera al título de

[553] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, p. 218.

duque, el mayor en la jerarquía. Además, la fecha tardía de su distinción, ya bien andado el siglo XVII y en marcha el siglo XVIII, revela, por una parte, el tiempo que tardaron los criollos en disponer de los medios necesarios para materializar su aspiración, y por la otra, indica el momento en que la concesión de títulos se había liberalizado, sobre todo gracias al hecho de que su gracia dependía en buena medida de la cantidad de dinero que podía exhibir el aspirante para obtener sus papeles de marqués o conde.

Es aquí donde nos topamos con otra diferencia sustancial entre la titularidad castellana original y la que estaba al alcance de la mano de nuestros criollos. Se trata de que los marquesados y condados obtenidos por los Toro y los Tovar, y los Mijares, aparte de haber sido objeto de una tasa en dinero, no comportaban el derecho de señorío, vale decir, la entrega de los derechos de jurisdicción sobre poblaciones, tierras, propiedades y lugareños. Sirva como ejemplo, para apreciar la diferencia entre uno y otro caso, el señorío otorgado en 1466 por Enrique IV a Diego Fernández de Córdoba, conde de Cabra, que incluía la villa de Iznajar, con su castillo y fortaleza, y las aldeas de Rute y Zambra «con toda la dicha su tierra y término y jurisdicción alta y baja, civil y criminal y mero y mixto imperio, y con todos sus prados y pastos y montes, y ejidos y arboladas, y sotos y ríos y fuentes y aguas estantes y manantes, y con todas sus entradas y salidas y pertenencias y cuantas han y haber deben y les pertenecen de hecho y de derecho y con la dicha justicia y jurisdicción alta y baja, civil y criminal y mero y mixto imperio de ellos y con la tenencia de la dicha fortaleza y con el sueldo de dinero y pan que agora tenedes y vos es librado con la dicha villa y otrosí con el diezmo y medio diezmo de los moriscos de la dicha villa de Iznajar y su tierra, que vos hago merced, y con todas las rentas, pechos y derechos y martiniegas y yantares y escribanías y portazgos y penas y caloñas y jurisdicciones y otros cualesquier pechos y derechos al señorío de la dicha villa y lugares de Rute y Zambra, y los otros lugares de su tierra anejos y pertenecientes»[554].

Los titulares criollos carecen del poder de señorío. Es muy cierto que son ricos y poderosos, pero no poseen atribuciones jurisdiccionales en los pueblos y tierras y sobre sus habitantes, razón por la cual los asuntos y pleitos civiles y criminales, la "marcha y policía de la república" y los diversos actos de las esferas gubernativa y hacendística obedecen a los escalones ordinarios de los ayuntamientos, corregidores, gobernadores, tesoreros, cabos y capitanes, y sus tenientes. Por supuesto, tales compartimientos de tan netos perfiles donde los titulares

[554] Salvador de Moxó, *Ob. cit.*, p. 167.

criollos no ejercen ninguna jurisdicción, no excluye la influencia en sus decisiones que en muchas ocasiones ellos ejercen, en el entendido de que influencia no quiere decir jurisdicción.

Ahora bien, también en la apreciación de la dinámica social a la que está sometida la nobleza criolla, deben tomarse en cuenta las referencias que diversos autores han escrito sobre las vicisitudes sufridas por los hacendados criollos a raíz de los cambios de productividad de los cultivos de trigo, o tabaco, o cacao, a los que están dedicados y que, necesariamente, se reflejan en su status social. Igualmente, es digno de ser considerado el hecho de los continuos descalabros de los precios agrícolas, entre ellos el cacao, las dificultades del monopolio comercial ejercido por la Corona, las continuas guerras que emprende España contra otras potencias europeas, y cuyas repercusiones en la sociedad ya ha sido mencionada. En dos platos, unos propietarios suben, otros bajan. Hay mercaderes que se hacen hacendados, hay cosecheros de trigo que luego lo son de cacao. Citemos algunos casos individuales.

Terminando el siglo XVI, sumaban diez los más activos empresarios de trigo y tabaco en Caracas, a saber (según Robert J. Ferry): Nofre Carrasquer, Juan de Guevara, Diego Vásquez de Escobedo, Garci González de Silva, Diego de Villanueva, Antonio Rodríguez Jaramillo y Francisco de Carvajal, Díaz León, Juan de Aguirre y Alonso Rodríguez Santos. Entre ellos hay un maestro sastre, un factor de esclavos, alguien que exportaba más tabaco que trigo, unos tenían mucha figuración política y otros no[555]. Con frecuencia, sus nombres, especialmente los de Garci González de Silva, Nofre Carrasquer y Alonso Rodríguez de Santos, van apareciendo en las transacciones de tierras, hatos y solares, en el comercio exterior, compra y venta de esclavos, según la documentación que reposa en el Registro Principal de Caracas[556]. Y son ellos, entre otros más, los que logran la hazaña, esta vez pacífica, de explotar esa riqueza que es el cacao, dormida durante milenios en los espesos bosques de nuestro trópico, y convertir, junto con el esfuerzo sufrido y a la vez creador de los esclavos africanos, a estas provincias, situadas por su pobreza en los últimos escalones de las posesiones americanos, en la Venezuela que abrazará la libertad en 1811.

El hecho de que importantes hombres de negocios de las postrimerías del siglo XVI, como Nofre Carrasquer y Alonso Rodríguez

---

[555] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, pp. 40-41.

[556] Cf. Agustín Millares Carlo (edit.), *Protocolos del siglo XVI*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1966.

de Santos, aparezcan registrados con el apelativo de mercaderes en las oficinas de registro, plantea la discusión sobre dónde se traza la línea divisoria, si es que la hay, entre nobles y mercaderes. El problema puede ser dividido en dos aspectos: uno, la tendencia de algunos españoles de no atender su condición de hidalgo en estas tierras y asumir, por consiguiente, oficios considerados viles, en rigor; y el otro aspecto es la confusión, deliberada o no, de no considerar como nobles a los mercaderes. El primer aspecto lo refleja Solórzano y Pereira en su conocida obra Política indiana, cuando dice:

> Porque hay muchos en las Indias que aunque sean hidalgos, no andan, proceden, ni se tratan como tales y atendiendo a juntar dinero se aplican a granjerías y ocupaciones menos honestas[557].

Parecen ser ejemplos de tal actitud los casos, que recoge el historiador Eduardo Osorio C., de Hernán Cerrada, muy importante encomendero merideño, quien solicita en 1589 una propiedad para instalar una posada; y el de Juan Corzo, quien ejerce el trabajo de herrero, oficio que le ha enseñado su padre Juan Corzo, encomendero y compañero de conquista de Juan Rodríguez Suárez[558]. Y en cuanto al punto de la línea divisoria entre mercader y noble, es muy conocida la ácida querella entablada por la élite caraqueña contra Sebastián de Miranda, destinada a despreciar su rango social. Cuando a él lo nombran, en 1769, capitán de la sexta compañía de fusileros del nuevo batallón de voluntarios blancos, el Cabildo objeta el nombramiento por considerarlo un elemento de las clases bajas, alguien que se ocupa de oficios viles, pues posee una tienda donde varea y hace pan. Además, lanza la sospecha de la posible condición de mulato de Miranda[559]. Tan rotunda objeción puede ser objeto de varias lecturas. Una, la más a la vista, es la que refleja el profundo prejuicio de los nobles criollos contra los mercaderes y tenderos, a quienes tienen como gente inferior, tanto es así que el Cabildo critica acerbamente al Gobernador Solano por entregar despachos de oficial de milicias a españoles entre los cuales se cuentan a quien «había sido zapatero, otro que parece o pudo ser peluquero, otro era y es presuntamente pulpero, y otro que aun tiene en su casa tienda en la que varea, y fábrica de pan... y éste es Sebastián Miranda»[560]. Otra lectura es la que expresa la rivalidad nacida del hecho de ser considerados los mandos militares de las milicias blancas como terreno exclusivo de los nobles criollos. Y otra es la que puede indicar una antipatía muy personal hacia un español canario que desde hacía

---

[557] Juan Solórzano y Pereira, *Ob. cit.*, tomo III, p. 1910.

[558] Eduardo Osorio, C., *Ob. cit.*, p. 176.

[559] Carmen L. Bohórquez-Morán, *Francisco de Miranda, Précurseur des Indépendences de l'Amérique latine*, Paris, Éditions L'Harmattan, 1998, pp. 31-36.

[560] Santiago Gerardo Suárez, *Las fuerzas amadas venezolanas en la Colonia*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1979, p. 139.

cinco años fungía como capitán de la nueva compañía de isleños blancos, donde dio pruebas de aptitud, y que ahora pasaba a ser uno entre los jefes de los milicianos criollos, lectura que tomamos en cuenta por haberse esgrimido una acusación tan manida como la de ser mulato, puesto que muchos entendidos en la materia han encontrado en sus investigaciones que la acusación de "mala sangre" fue un arma usada con frecuencia para descalificar a alguien simplemente por celos y mezquindades. Se supone que en una ciudad tan pequeña como era Caracas en esos años, debió saberse que Sebastián y su esposa obtuvieron certificación de limpieza de sangre al casarse, que el bautizo de Francisco fue registrado en los libros de blancos y que más tarde ingresó y cursó estudios desde 1764, sin ningún problema, en la Universidad, donde debió ser apreciado por alumnos y profesores, porque si no, no hubiera incluido en su testamento el siguiente codicilo:

> A la Universidad de Caracas se enviarán a mi nombre los libros clásicos griegos de mi biblioteca, en señal de agradecimiento y respeto por los sabios principios de literatura y de moral cristiana con que administraron mi juventud[561].

Fue tan descaminada la acusación, que debió actuar la Corona para dar término al affaire, mediante cédula real del 12 de septiembre de 1770, que desautorizaba al Cabildo caraqueño y ordenaba perpetuo silencio sobre la indagación de la calidad y origen del padre del Precursor[562].

En todo caso, debe decirse que la discusión general acerca de la calidad de noble de los beneméritos y manejadores de la riqueza tuvo, en la metrópoli y aquí, sus altibajos. Un foro sostenido en el primer semestre de 2006 en el Casino de Madrid revela cómo fueron diversas las interpretaciones acerca de los límites de separación entre nobles, comerciantes, mercaderes, pobres, ricos, etc.[563]. De la ponencia presentada por Carmen Sanz Ayán, miembro de la Real Academia de la Historia, con doctorado en la Universidad Complutense de Madrid y Premio Nacional de Historia 1990, extractamos las siguientes consideraciones: 1) la cuestión de la incompatibilidad entre la condición nobiliaria y las actividades mercantiles o financieras ha sido uno de los tópicos más controvertidos; 2) investigaciones recientes han matizado y reducido a sus justos limites el desdén aristocrático hacia el comerciante, el banquero o industrial, y se sabe que comerciantes muy ricos se han ennoblecido, y que aristócratas se han dedicado al comercio mayor, sobre todo el comercio de las colonias; 3) según investigaciones

---

[561] Citado por Augusto Mijares, *Lo afirmativo venezolano*, en *Obras completas*, tomo IV, Caracas, Monte Ávila Editores y Comisión Centenaria Augusto Mijares, 1998, p. 79.
[562] Inés Quintero, *Francisco de Miranda*, Caracas, Biblioteca Biográfica Venezolana, 2006, p. 11.
[563] Cf. www.casinodemadrid.es

del historiador español José Antonio Maravall, ha habido un paulatino proceso de permisividad a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI y durante todo el XVII para que personas procedentes del mundo financiero y mercantil pudieran acceder al estamento nobiliario; 4) la nobleza, aún en los estadios más bajos, no podía alcanzarla cualquier mercader. La línea divisoria que marcaba la honorabilidad de la actividad era la escala a la que se practicaba. Dedicarse al comercio al por menor, a la llamada "tienda abierta" era un obstáculo serio. Pero hacerlo a gran escala y derivar capitales al mundo de las grandes finanzas no constituyó tacha para alcanzar el ennoblecimiento; 5) el recurso a la venta de las dignidades de hidalguía por parte de la monarquía española en los siglos modernos está documentado desde los tiempos de Fernando el Católico. Carlos V acudió a este medio desde comienzos de su reinado y lo mismo hizo Felipe II; 6) los hábitos eran indicativos externos de nobleza y de limpieza de sangre y por tal razón resultaron muy codiciados. En 1557 la orden de Santiago contaba con 242 caballeros, en 1625 su número llegó a 957, y continuó intensificándose durante el reinado de Felipe IV, lo que originó una oposición en el seno de las Órdenes; 7) sin embargo, la compra-venta de dignidades no puede verse sólo como un premio meramente profesional, sino también como el premio con una gracia real a un gesto de lealtad.

En la ponencia de Gonzalo Anes y Álvarez de Castrillón, Presidente de la Real Academia de la Historia se destacaron las siguientes precisiones: 1) en el siglo XVII se entendía como hombre noble "al que es hidalgo y bien nacido", es decir, los hidalgos, aquellas gentes que estaban exentas del pago de determinados impuestos y que estaban libres de prestar determinados servicios, por ejemplo, alojar tropa y dar paja a los caballos. El resto, formaba parte del estado llano; 2) cada siete años se confeccionaba un padrón con los hidalgos, hombres buenos y pecheros; 3) el número de miembros del estado noble variaba muchísimo en las distintas regiones de España. En la franja litoral cantábrica el mayor número de los vecinos pertenecía al estado noble, en los concejos de Navia al Eo, el 95% de los vecinos pertenecían al estado noble, y había alguna aldea en la que ni un solo vecino pertenecía al estado llano; 4) ser hijodalgo no estaba reñido con el trabajo manual y mecánico y fue Cervantes quien contribuyó a difundir la idea de hidalgo como personaje acomodado, con servicio; por el contrario, en el Norte de España, miles de hidalgos ejercían cualquier tipo de trabajo: labradores, herreros, carpinteros, albañiles, hasta podían ser también pobres de solemnidad, según se ve en un catastro del siglo XVIII; 5) de las 400.000 personas que en Castilla había hacia 1590, pertenecientes al estado noble, los titulados eran solamente unas

decenas. En 1520 había 20 grandes títulos del Reino y 35 títulos de Castilla, pero en el siglo XVIII fueron creados muchos títulos del Reino, aunque los títulos del XVIII no van unidos al señorío, ni a la propiedad territorial.

Volviendo a estas tierras, es de comprender también las vicisitudes y particularidades del estamento nobiliario. Hay que insistir, al lado de los factores de enriquecimiento y bienestar, en la otra cara, es decir, en las graves consecuencias que tuvieron en las familias criollas las andanzas expedicionarias contra los indios y los piratas europeos cuando algunos de sus miembros caen abatidos o quedan inválidos o endeudados. Se incursionaba en un medio difícil, a veces inexplorado en su totalidad, y lleno también de rencillas y ambiciones. Hay casos como el del conquistador Juan de Villegas, que termina su vida arruinado y tienen sus deudos que vivir de la caridad real, pues así lo ordena Felipe II, según Real Cedula del 1 de febrero de 1571, al decir que en las expediciones del conquistador, emprendidas con armas y caballos sufragados por él, «y en haber descubierto muchas minas había gastado mucha parte de su hacienda sin haber sido gratificado de ninguna cosa por lo cual ella [su esposa Ana Pacheco] y cuatro hijas y dos hijos que de él le habían quedado padecían necesidad y suplicándome le mandase dar de comer en esa tierra conforme a lo que el dicho Juan de Villegas nos había servido en ella»[564].

Entre los encomenderos de Cumaná, al leer sus expedientes levantados por la visita en 1688 del Oidor de la Audiencia de Santo Domingo, Fernando de la Riva Agüero, se observan también, como ya lo anotamos en el capítulo dedicado a las encomiendas, la existencia de beneméritos caídos en la pobreza. Recordemos que ellos son:

*El capitán Jorge de Figueroa y Albornoz deja en 1682 la encomienda que poseía en segunda vida, porque «se halla muy pobre y sin tener con qué poder sustentar las cargas de tal encomienda y pagarle a sus encomendados el medio real que Su Majestad manda les den y también por no tener tierras en que poder labrar por cuyas causas y no por otras le obligan a hacer dejación de la dicha encomienda de indios que hasta aquí ha poseído en segunda vida»[565].

*El capitán Francisco de Vallejo Cabreras, hijo del capitán Luis de Vallejo Cabreras, fundador de la fuerza de Araya, alcalde, procurador general, contador de Real Hacienda. Solicita que la multa aplicada a su encomienda se prorratee entre los herederos que nombra, «atento a la suma escasez de bienes que padezco y que me será necesario vender las ropas de mi vestir para poder satisfacer cualquier cantidad que se me determine»[566].

---

[564] Vicente Dávila, *Ob. cit.*, tomo I, Caracas, p. 245.
[565] Antoinette Da Prato-Perelli, *Ob. cit.*, tomo III, p. 278.
[566] *Ibíd.*, p. 330.

*El capitán Rafael de Betancurt, bisnieto paterno del capitán Gregorio Mumpierres Betancurt, casado con una sobrina del fundador Diego Fernández de Serpa. No fue multado en atención a la suma pobreza en que se hallaba[567].

*El capitán Juan Fernández Carrasquero, con una nutrida hoja de servicios rendidos a la Corona y casado con doña Juana Mejía Boza, emparentada también con el fundador Diego Fernández de Serpa. Alegó no poder pagar el estipendio del cura doctrinero por «hallarme como me hallo tan imposibilitado de pagárselo no teniendo bienes con que hacer dicho pago ni hacienda que me rente hallándome solo con la posibilidad de las demoras que tengo de percibir de la dicha encomienda siendo mi pobreza y cortedad tan grande...»[568].

*El capitán Luis de Castro y Castrillo, también con una buena hoja de servicios a la Corona, aunque no se cita en la documentación sus antecedentes familiares. Sus testigos dicen que es hombre pobre, y el Oidor no lo multa en atención a «la pobreza que padece»[569].

*El alférez Juan de Betancurt, familiar de Rafael de Betancurt y poseedor de una encomienda que en los primeros años de la conquista fue otorgada por Garci Fernández de Serpa. Tampoco se le multó «por ser notoria su miseria e imposibilidad de pagar maravedises algunos»[570].

*Juan Antonio Marcano, de familia proveniente de los primeros pobladores de Cumaná. No es multado por el Oidor «considerando la pobreza en que el susodicho se halla»[571].

*El capitán García Rengel Rondón, hijo y nieto por vía paterna de los primeros descubridores, conquistadores, pacificadores y pobladores de Cumaná. No lo multan a pago alguno «por ser notoria su miseria e imposibilidad de pagar maravedises algunos»[572].

Vale decir, de 41 encomenderos reseñados, 8 estaban en situación de pobreza o miseria, es decir, un 19,5%, la quinta parte.

En Mérida, reseña Eduardo Osorio, «los encomenderos siempre estaban pobres y necesitados y con deudas»[573].

A algunos les parece extraño cualquier intento de ubicar en el mundo de la pobreza a conquistadores tan potentes, tan ansiosos de oro, tan explotadores de la sangre indígena y tan cargados de hazañas beneméritas. Pero, la realidad es incontestable. La conquista de esta tierra ignota, dura, habitada por ariscos aborígenes y que va perdiendo

---

[567] *Ibíd.*, p. 386.
[568] *Ibíd.*, p. 427.
[569] *Ibíd.*, tomo IV, p. 142.
[570] *Ibíd.*, p. 298.
[571] *Ibíd.*, p. 370.
[572] *Ibíd.*, p. 463.
[573] Eduardo Osorio C., *Ob. cit.*, p. 186.

con el tiempo sus rasgos paradisíacos para convertirse en asiento de mil calamidades, como ya lo advertimos al apreciar la secuencia que va de lo bello a lo trágico en la lectura de los testimonios de los religiosos misioneros, deja de ser en muchos casos el acto heroico para dar paso a la simple aventura. Tomemos el caso de alguien a quien hemos nombrado mucho, Sebastián Díaz Alfaro. Figuró entre los fundadores de Caracas, fundó también San Juan de la Cruz y San Sebastián de los Reyes; fue alcalde, regidor, teniente de gobernador, capitán y cabo de guerra de diversas expediciones conquistadoras; y recibió, en vista de tan numerosos servicios, tierras, encomiendas y remuneraciones. ¿Cómo entender, entonces, que al morir «cansado y molido de cargar las armas», y al morir también, pasados dos años, su hijo mayor Mateo, los nueve hijos huérfanos de éste «están tan pobres como a vuestra merced consta»?[574] Pueden aducirse dos explicaciones: una, que al morir Sebastián Díaz Alfaro, su patrimonio fue repartido entre sus seis hijos, razón por la cual, sus haberes, un tanto mermados hacia 1606, llegaron a manos de los herederos más mermados todavía. Y la otra proviene de un acontecimiento no raro en esa época como fue la duda levantada por Francisco de Tostado, alguacil mayor y promotor fiscal, en nombre del Real Fiscal, al decir que las pruebas enarboladas por Sebastián Díaz Alfaro sobre sus méritos son superfluas y sin ningún efecto, porque no hay testigos avaladores de lo dicho (es que todos, o casi todos, sus compañeros en la expedición de Diego de Losada están muertos) y, en cuanto a las conquistas emprendidas por él, los testimonios de los conquistadores que lo acompañaron deben ser ventilados en las propias ciudades, San Sebastián de los Reyes entre ellas, para que tengan valor[575]. Hay que tomar en cuenta, además, que cuando alguien de esta gente benemérita aduce pobreza lo hace ante la imposibilidad, momentánea o no, de suministrar, en cierto momento, la dote adecuada para casar a sus hijas con hombres también beneméritos. En todo caso, son numerosos, y no excepcionales, los ejemplos de miembros de familias criollas nobles que ven venir a menos sus fortunas, circunstancia que debe ser tomada en cuenta por el historiador.

Es preciso aclarar que cuando se habla de nobles criollos venidos a menos, no los confundimos con ese grupo variopinto llamado el tercer estado, que algunos historiadores le dan el calificativo de blancos de orilla. No califican de nobles por no poseer los requisitos explicados arriba, y también porque se dedican a lo que se llamaba en la época "oficios viles". Junto con pardos, indios y morenos libres los vamos a ver

---

[574] Mario Briceño Perozo, *Ob. cit.*, p. 429.
[575] *Ibíd.*, p. 443.

dedicados muchos de ellos a las actividades artesanales o del comercio al menudeo, es decir, como albañiles, carpinteros, herreros, barberos, cirujanos, sastres, curtidores, zapateros, ebanistas, talabarteros, plateros, molineros, panaderos, textileros de algodón y cocuiza, loseros, cordeleros, alpargateros, carniceros, ceramistas, alambiqueros, joyeros, plateros, pulperos, bodegueros, tenderos, etc.

Papel de la endogamia y de las estrategias matrimoniales en la formación y existencia de la nobleza criolla

Un hecho que ha llamado la atención de todos los historiadores y estudiosos de nuestro pasado es la fuerte presencia de lazos endogámicos en las familias nobles de la Colonia. La mayoría lo atribuye a un elevado "egoísmo de clase", entendiéndolo en su versión más peyorativa. Nosotros preferimos enfocarlo como un fenómeno social, impuesto por el entorno de la época, enfoque que no deja de lado, por supuesto, los aspectos discriminatorios que encierra.

Una de las condiciones esenciales en la definición de la nobleza es la sangre, o el linaje, y su consecuencia inseparable es la endogamia, quizás la más sofisticada representación de lo que se ha dado en llamar las estrategias matrimoniales. En efecto, el núcleo primigenio de nuestra nobleza criolla está representado en la legión de los conquistadores, y son ellos los que van a legar a sus descendientes la honra guerrera y el blasón familiar. En Caracas, en Cumaná, en Coro, en El Tocuyo, en Mérida, en Maracaibo, la cúspide social va a estar formada, sin ninguna clase de competencia con otro grupo del lugar, por la estirpe de los beneméritos y sus hijos. Pero, sucede aquí una circunstancia que facilita enormemente el exclusivismo de esta capa social, y es el muy reducido número de tales beneméritos en las primeras décadas de la conquista si lo comparamos con el entorno de dimensiones oceánicas formado por los indios, los esclavos africanos y el mestizaje en ciernes. De manera casi obligada, los beneméritos casan a sus hijos con otros beneméritos o sus hijos, y el producto de tales uniones contraen, a su vez, matrimonio con sus primos, pues no hay otros pretendientes. Los cruces endogámicos, que vienen ya como un legado antiquísimo de las sociedades europeas, adquieren aquí también su plena carta de legitimidad. Los ejemplos saltan a la vista:

La benemérita pareja de Diego Gómez de Agüero (o Ampuero) —«noble montañés» lo llama Oviedo y Baños— y Ana de Rojas, víctimas de la furia del Tirano Aguirre en la isla de Margarita, tuvieron cuatro

hijas. Y, ¿con quiénes se casan ellas? Ana, con Alonso Díaz Moreno. Francisca, con Francisco Infante. Beatriz, con Garci González de Silva. Y Josefa, con Pedro Álvarez Franco, todos beneméritos conquistadores.

A su vez, el benemérito conquistador Alonso Díaz Moreno llega a ser padre de siete hijas. Y, ¿con quiénes se casan ellas? Juana, con Juan de Guevara, en 1581. Leonor, con Mateo Díaz de Alfaro, en 1587. Catalina, con Andrés de San Juan, en 1588. Germana, con Diego Vázquez de Escobedo, en 1589. Beatriz, con Simón de Bolívar el Mozo, en 1590. Ana, con Onofre Carrasquer, en 1599. Y Francisca, con Pedro Mijares de Solórzano, en 1606, todos grandes personajes del momento.

¿Y qué resulta de la presencia en un lugar tan estrecho socialmente hablando de los vástagos de estos dos grandes troncos de excelsos beneméritos? Pues, algo muy sencillo: la unión endogámica. En efecto, pongamos como ejemplo el matrimonio, en Caracas, en 1627, de **Diego** González de Silva y Rojas (hijo de Garci González de Silva y Beatriz Gómez de Agüero y Rojas), con **Melchora** Díaz de Alfaro y Díaz de Rojas (hija de Mateo Díaz de Alfaro y Leonor Díaz de Rojas). ¿Cuál es el parentesco de los novios? Diego es, por línea materna, nieto de los bisabuelos de Melchora. O sean, ellos son primos segundos, porque la madre de Diego es hermana de la abuela de su esposa, Melchora[576].

El estudioso de nuestro pasado tiene que tomar en cuenta esta circunstancia de la bajísima proporción de familias notables en los inicios de la Colonia, que conducía, casi obligatoriamente, al entrecruzamiento de primos y parientes cercanos o lejanos, porque así pueden explicarse algunos acontecimientos de la época. Está claro que, mirando el problema en su dimensión más amplia, nos topamos con la presencia, en el seno de las familias de la nobleza criolla, de una conciencia grupal que busca en los lazos endogámicos un freno a la dispersión del patrimonio familiar que obliga a repartir la herencia entre los hijos. Si primo y prima se casan, el patrimonio resultante de la unión se ve aumentado.

En su estudio sobre las encomiendas, Vicente Dávila expone una relación de la cantidad de encomiendas que llegaron a poseer los familiares (ascendientes y descendientes) del maestre de campo Juan de Liendo y su esposa Clara de Ochoa y Oñate. Forman una madeja inextricable y de ella saltan los nombres de los siguientes encomenderos:

---

[576] Cf. Gilberto Bodu Ayala, *Ob. cit.*

Pedro de Liendo y Origüén, Luisa Catalina de Mejía y Suárez del Castillo, Santiago de Liendo y Origüén, Alonso Rodríguez de Santos y Gómez de Hidalga, Juan Rodríguez Santos y Arias Montano, Diego de Adame, Alonso Rodríguez Santos, Juan de Liendo y Rodríguez de Escobedo, Juan de Ochoa de Aguirre y Pacheco, María de Vera e Ibargoyen y Díaz de Alfaro, Sebastián de Ponte y Villela, Diego Vázquez de Escobedo, Diego Vázquez de Escobedo II, Antonio Obel-Mejía y Vázquez de Escobedo, Manuel Francisco de Gedler y Rivilla, Juan Fernández de León y Díez, Tomás de Aguirre de Guezala y Martínez, Tomás de Aguirre de Guezala y Plasencia, Juan de Ochoa de Aguirre y Oñate, Juan de Ochoa de Aguirre y Pacheco, Fabián de Ochoa de Aguirre y Pacheco, Francisco de Brea y Lezama, Inés de Mendoza y Rebolledo y Maldonado, José Galindo de Aillón y Velazco, Luis Arias Altamirano y Aragón, Leonor Violante de Fernández y Acosta (Leonor Pacheco), Agustín de Herrera de Sarmiento y Rojas de Ayala, Juan Sarmiento de Herrera, José Vázquez de Rojas y Ayala, Juan de Ibarra y Gómez de Guerrero, Manuel de Sarmiento de Herrera y Fernández, Simón Fernández de León y Pacheco, Bartolomé Sánchez de Villanueva y Godoy[577].

Entre los nombres citados hay lazos endogámicos, en el conjunto de las llamadas estrategias matrimoniales. Aclaremos que si contamos las encomiendas como si cada nombra citado poseyera una encomienda, el número de éstas resultará mayor al real, pero es porque algunos encomenderos lo son en razón de haber obtenido una encomienda ya existente, gracias a la simple línea de herencia de sus padres (segunda vida). También, es necesario advertir que la presencia activa de estos personajes en la sociedad de entonces apenas corresponde a menos de cien años, entre 1560 y 1650 aproximadamente.

Con el tiempo, los lazos de parentesco aumentan. Según Frédérique Langue, tales lazos sumaban apenas el 6% de los matrimonios habidos en los años 1650-1670, aumentaron al 19% en 1675-1699, al 45% en 1700-1724 y al 52% en 1725-1749[578]. La autora escribe que tales porcentajes se refieren a los matrimonios contraídos «dentro de un mismo clan familiar», y es por eso que las cifras que aporta Robert J. Ferry son ostensiblemente menores. Según éste, en el año 1759, de las 47 casas de familias de la élite encabezadas por la pareja de marido y mujer, en 18 los tales esposos eran parientes consanguíneos, y eran primos hermanos en 12 de estos 18 casos[579]. Pienso que en el caso de Langue se cuentan los lazos con ingrediente endogámico estricto junto con los producidos por estrategia matrimonial en su sentido más amplio. Pongo un ejemplo simulado: si Juan (hijo de la familia A se casa con Juana, Juana entra en la familia A, de modo que si un hijo de Juan y Juana se casa con una hija de un hermano de Juan, se está haciendo un matrimonio endogámico (porque son primos). Pero, si un hermano de Juana se casa con una hermana de Juan no se hace

---

[577] Cf. Vicente Dávila, *Ob. cit.*, tomo II, p. 2 y ss.; y Gilberto Bodu Ayala, *Ob. cit.*

[578] Frédérique Langue, *"Orígenes y desarrollo de una élite...*

[579] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, p. 219.

un matrimonio endogámico, entendiéndolo en su sentido más estricto como la fecundación entre individuos genéticamente emparentados, pues son apenas concuñados. Sin embargo, es un enlace dentro del clan de la familia A.

En todo caso, lo comentado en este acápite refleja la fuerza adquirida por el parentesco en la nobleza criolla. Tiene su raíz cultural en la vieja España, adquiere más relieve en estas tierras por la pequeñísima cantidad de notables que habitan un ambiente desconocido, ignorado, amenazado de modo permanente por la hostilidad del propio medio geográfico y más todavía por la que proviene de las tribus autóctonas y los temibles rivales europeos. Sin embargo, la práctica de la endogamia comportaba peligros, es decir, provocaba estigmas biológicos. El historiador español que hemos citado con abundancia, Salvador de Moxó, al analizar las causas que confluyeron para inducir la transformación nobiliaria (de la vieja a la nueva nobleza) en Castilla durante la segunda mitad del siglo XIV dice que «hay que considerar muy atentamente a la endogamia predominante en aquella clase social y que contribuyó sin duda a agotar, o a debilitar al menos, la pujanza de viejas estirpes que integraban el círculo de ricos-hombres con anterioridad a los Trastámara»[580]. Sobre esta incidencia aquí se ha hablado mucho, aunque faltan estudios con una mayor profundización metodológica.

Repito, los lazos de parentesco en la nobleza criolla surgen estimulados por una fuerte lógica social. A pesar de los rasgos de mezquindad y enclaustramiento con que aparecen ante el observador de hoy, fueron proclamados en su tiempo a los cuatro vientos, y con orgullo, incluso. Don Miguel de Xerez Aristeguieta, al casarse en 1734 con doña Petronila de Bolívar y Ponte, solicita ante las autoridades eclesiásticas las correspondientes dispensas por ser ella hija de Juan de Bolívar y Martínez de Villegas, hermano de su abuela, Josefa de Bolívar y Martínez de Villegas, y expone entonces el siguiente argumento:

> ...causas las que según derecho se requieren para dichas dispensaciones como son el ser yo y la dicha doña Petronila de Bolívar de ilustre familia y de los nobles principales de esta ciudad y por esta razón querer conservarnos en nuestra misma sangre y familia sin extraños en otra cría, conservación es de derecho seguido ser conveniente al bien de la república. [Y agrega que con la dote de ella y el caudal de él, es capaz de mantener la decencia correspondiente a las dos familias]...y por ser así mismo conveniente a la república que las familias nobles se conserven íntegras y con riqueza[581].

---

[580] Salvador de Moxó, *Ob. cit.*, p. 341.

[581] Elizabeth Ladera de Diez, *Ob. cit.* La autora ha tomado estas citas de los *Documentos relativos a la familia Bolívar*, s/f, del Archivo Arzobispal de Caracas

A los lazos endogámicos y a los matrimonios concertados hay que unir la institución de los mayorazgos como otra manera utilizada por los criollos para proteger sus propiedades, y más que eso, según su propia conciencia, para preservar el buen nombre y lustre de la familia. La figura de los mayorazgos fue establecida en 1505 por la reina Juana La Loca con el objeto de permitir a los nobles la prolongación de su patrimonio territorial en manos de uno de sus descendientes o familiares, por regla general, sin que operasen las leyes de herencia y sin que recayesen sobre dicho patrimonio las operaciones normales de compra-venta, donación, hipotecas, censos ni fianzas, todo con el objeto de prolongar la permanencia en el tiempo del buen nombre, lustre y esplendor de la casa propietaria. Es así cómo, en estas tierras, el sacerdote Juan Félix Xerez de Aristeguieta funda, en 1784, el mayorazgo de la Concepción a favor de su primo hermano Simón Bolívar[582], y Francisco Gómez Cornieles funda un mayorazgo en Trujillo, en 1610, a favor de sus sucesores[583], entre otros.

Se trata, según muchos historiadores, de una faceta más de la lucha que a través de siglos emprendió la nobleza en defensa de sus privilegios, bien o mal ganados, pero ganados al fin, contra los empeños que a veces surgían de disminuir o neutralizar su poderío, entre los cuales figura la muy presente intención de la realeza de limitar la influencia económica y política de la nobleza, en un juego que no debe ocultarse bajo la comodidad de la etiqueta de que ambas categorías forman parte de las "clases dominantes". El historiador Juan Morales refiere este aspecto cuando incluye en su trabajo sobre el mayorazgo de la Concepción la siguiente cita:

> Desde el siglo XVII se inicia un clamor antimayorazguista que se hace fuerte en el siglo XVIII y obliga a los reyes a dictar medidas restrictivas[584].

Como la crítica de un funcionario de la burocracia real hacia los privilegios de la nobleza criolla debe calificarse estas palabras que hablan de una realidad, pero con cierto acento desdeñoso, del Intendente Francisco de Saavedra:

> Es muy difícil combinar las cosas de manera que habiendo de entrar en el Consulado los sujetos distinguidos del país no resulten algunos parientes porque los llamados aquí mantuanos están ligados con infinitas conexiones a causa de que, a manera de los judíos no se casan sino dentro de su tribu[585].

---

[582] Cf. Juan M. Morales Álvarez, *Ob. cit.*

[583] Cf. Zulay Rojo, *El mayorazgo de los Cornieles*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1997.

[584] Nelly Porro, "Concesiones regias en la institución de Mayorazgos", *Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos*, Madrid, tomo LXX, Nº 1-2, 1962, p. 82, en Juan M. Morales Álvarez, *Ob. cit.*, p. 39.

[585] Carta del 3 de mayo de 1793, citada por Eduardo Arcila Farías en *Economía colonial de Venezuela*, Caracas, 1973, 2a ed., tomo II, p. 103; y en *Documentos del Real...*, pp. 222-225.

Ciertamente, hay quienes reducen los enlaces endogámicos y grupales en la nobleza criolla a meras motivaciones dinerarias y a exclusivismos de "casta" y hay quienes llegan más allá, al atribuirle a estos empalmes la virtud de generar riqueza al decir que constituyen la base fundamental de la existencia de esa clase social. Tales criterios encierran una media verdad, y ocultan otro perfil. Aquí está el caso del matrimonio de Simón Bolívar. En Madrid, a los 17 años, se enamora de María Teresa Rodríguez del Toro y Alayza, dos años mayor que él. Y le escribe a su tío y tutor diciéndole que va a casarse por haberse «apasionado de una señorita de las más bellas circunstancias y recomendables prendas, como es mi señora doña Teresa Toro, hija de un paisano y aun pariente...»[586]. Estaba muy enamorado, según él mismo lo confiesa años después, cuando dijo a Perú de Lacroix que «volví de Europa para Caracas en el año de 1801 con mi esposa y les aseguro que entonces mi cabeza sólo estaba llena de los vapores del más violento amor»[587]. María Teresa tenía, en verdad, lazos endogámicos lejanos con su marido Simón, al ser bisnieta, por vía paterna, de María Margarita de Herrera y Ascanio y Herrera, hermana de Juan Ascencio de Herrera, quien era tatarabuelo, por vía materna, de Simón[588]. Pero, además, Simón Bolívar, en la carta a su tío Pedro, el 20 de septiembre de 1800, le da a éste un motivo adicional para contraer nupcias, y le dice lo siguiente:

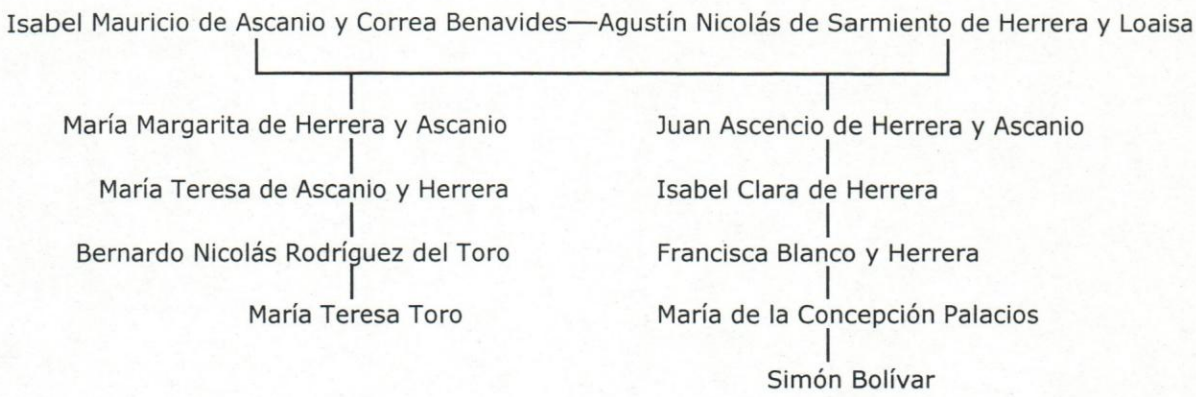
> No ignora usted que poseo un mayorazgo bastante cuantioso, con la precisa condición de que he de estar establecido en Caracas, y que a falta mía pase a mis hijos, y de no, a la casa de Aristeiguieta, por lo que, atendiendo yo al aumento de mis bienes para mi familia, y por haberme apasionado de una señorita de las más bellas circunstancias y recomendables prendas, como es mi señora doña Teresa Toro [...] he determinado contraer alianza con dicha señorita para evitar la falta que puedo causar si fallezco sin sucesión, pues haciendo tan justa liga, querrá Dios darme algún hijo que sirva de apoyo a mis hermanos y de auxilio a mis tíos[589].

Le pregunto a los historiadores "materialistas", ¿qué pudo más en esta «justa liga»: el amor o el interés?

La línea de parentesco es la siguiente, empezando por los dos hijos (María Margarita y Juan Ascencio) de Isabel Mauricio de Ascanio y Correa Benavides) y continuando con los respectivos hijos subsiguientes:

---

[586] Roberto J. Lovera De Sola, *La larga casa del afecto*, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 2000, p. 40.
[587] Según cita que hace Augusto Mijares en *Ob. cit.*, p. 186.
[588] Gilberto Bodu Ayala, *Ob. cit.*
[589] Simón Bolívar, *Obras completas*, vol. I, Madrid, Maveco de Ediciones, 1992.



¿La nobleza criolla formó parte de un régimen de castas? El régimen de las "gracias al sacar"

Ha obtenido una casi unánime aceptación entre historiadores e investigadores sociales la definición de casta para ubicar a la nobleza criolla en la pirámide que dibuja la estratificación social durante los trescientos años de colonia. Pero, hay algo que he observado en el uso de la palabra y es que mientras los historiadores de hoy la usan con más frecuencia para referirse a la élite, en cambio, he encontrado que los documentos de la época usan la palabra casta para referirse a los negros, mulatos, etc. En todo caso, pienso que la sociedad colonial no tipifica un régimen de castas, razón por la cual prefiero usar el término *sociedad estamental*.

Es cierto que las normas jurídicas y toda la conciencia cultural de la época buscan encerrar en compartimientos estancos a los diversos grupos sociales. Se trata de una línea general que le da vida a la conducta social colonial. En la cúspide de la pirámide se encuentra, en primer lugar, la burocracia real, entendiendo que aquí se ubican el funcionariado suministrado por la metrópoli (gobernadores y capitanes generales, sus tenientes, corregidores, administradores de la Real Hacienda, intendentes, presidentes y oidores de la Real Audiencia y otros altos empleados venidos de Madrid), el alto mando militar (capitanes generales, comandantes de batallones, regimientos, castillos, fuertes, fortalezas) y el alto clero (obispos y otros altos dignatarios de la Iglesia). Muy juntos, pero no revueltos, en la cúspide están los miembros de la nobleza criolla (grandes hacendados y comerciantes, dueños de haciendas, hatos, almacenes, y flotas y otros importantes vehículos de comunicación, además de la nobleza que podríamos llamar de medio pelo, y los hidalgos empobrecidos). Más abajo están los

blancos y pardos que ejercen oficios "viles" y mecánicos (bodegueros, pulperos, tenderos, canastilleros, artesanos de las muy variadas artesanías, empleados de segunda categoría) y un pequeño sector del clero que son los misioneros que hacen voto de pobreza. En la amplia base está la masa indígena encomendada o no, asimilada a la sociedad o montaraz, haciendo exclusión de caciques y principales a quienes se concede cierto estatuto de hidalguía o de limpieza de sangre. Y a esa masa se añaden, en el último escalón social, los esclavos negros y mulatos.

No es correcto tomar un solo criterio para ubicar a los habitantes de la colonia y sus familias en los estamentos cerrados descritos. Por ejemplo, si privilegiamos el factor económico, habría que excluir a los hidalgos pobres, a veces llamados blancos de orilla, del estamento noble. Si apelamos al manido uso del término "clases dominantes", tendríamos que unir en un solo bloque a la realeza representada en Caracas por sus funcionarios, y a los hidalgos criollos. La condición de vasallos que tienen los indios los hace diferentes, en muchos aspectos, de la masa esclava africana, y así por el estilo.

Visto de tal manera el panorama, la sociedad estamental colonial aparece dividida en sectores muy diferenciados unos de otros, y donde la cuantía o ausencia de patrimonio, el color de la piel, el tipo de trabajo o labor que se realiza, la normativa jurídica, el caudal genealógico recibido, y el bagaje cultural que se adquiere en el transcurso de la vida, deben ser tomados en cuenta. Ahora bien, si pudiéramos examinar el movimiento de esa sociedad en un periodo muy breve, de tres o cuatro años, por ejemplo, no veríamos ninguna modificación sustancial, pero si el examen se prolonga durante décadas y, más todavía, durante siglos, se advertirían cómo ciertas fugas en las láminas que separan unos compartimientos de otros le confieren permeabilidad al entramado social, que se aleja así del clásico régimen de castas. Y tal permeabilidad no depende del paso rutinario del tiempo, sino que está vehiculizado, bien por la costumbre de la bastardía que viene allende el mar, bien por la propia normativa del régimen. Así, los reyes pueden dar carácter nobiliario a sus guerreros; las normas recogidas en tomos legales dan personalidad libre al indio, permiten al esclavo comprar su libertad u obtenerla, al pardo limpiar su sangre, y así. Súmese a tales circunstancias las repercusiones aquí del proceso de modernización en España a medida que se acerca el Siglo de las Luces.

Un hito muy conocido en el cambio social español lo constituye la promulgación de la Real Cédula de Gracias al Sacar, bastante comentada por casi todos los historiadores. El régimen fiscal tributario

metropolitano tenía establecido desde antiguo una tarifa de los costos que había que pagar para obtener determinadas gracias y mercedes de la Corona. Según la obra del académico Santos Rodolfo Cortés sobre el tema del régimen de las "gracias al sacar", ya para 1773 una real cédula anunciaba una nueva tarifa para responder a las solicitudes de privilegios de nobleza y para las gracias al sacar, de tal modo que el servicio pecuniario de las gracias y privilegios de hidalguía, noblezas, caballeratos, ciudadanatos, dispensaciones de ley y otras mercedes a expedir por la Cámara con el nombre de gracias al sacar aumentaría en una tercera parte su valor actual[590]. La lista de dispensaciones es larga; anotemos algunas: facultad para fundar mayorazgos, suplemento de edad para escribanos, procuradores, médicos, cirujanos, boticarios y para acudir un menor a sacar venia para regir y administrar; suplemento para ser regidor en determinadas ciudades, licencia a una mujer para mantener abierta una botica regentándola un mancebo aprobado, legitimación de un hijo para heredar y gozar de padres solteros, licencia a un regidor para ser elegido alcalde, declaración de hidalguía y nobleza de sangre. Pero, es la real cédula de gracias al sacar del 10 de febrero de 1795 la que levantó la gran polvareda al ofrecer a los pardos la posibilidad cierta de ascender de manera oficial en la escala social. Obtener mediante tasa establecida el título de Don y ser dispensado de la calidad de pardo para cursar estudios superiores fueron los dos ítems de la tarifa que facilitaron la perspectiva de entrar en los lugares exclusivos de la nobleza. Se sabe que en los círculos sociales se era muy puntilloso a la hora de establecer las gradaciones a que daba lugar la mezcla de blancos, indios y negros. El mulato era hijo de blanco y negro; el tercerón, de mulato y blanco; el cuarterón, de tercerón y blanco; el quinterón, de cuarterón y blanco. El color y las facciones del quinterón no eran diferentes de las del blanco («no es perceptible su diferencia entre los blancos, así en el color como en las facciones»). Pero, la unión de cuarterón o quinterón con mulato o negro daba lugar al «salto atrás». El zambo era hijo de indio con mulato o negro, pero también era zambo el hijo de mulato con negro. La imaginación popular y la literatura de otros países latinoamericanos han acuñado otras denominaciones. Incluso, aquí en ocasiones se usaba el término «leopardo». Todo esto a veces creaba ciertos problemas o dudas. Ahí está el caso, en 1774, de Juan Bautista Arias, miembro de la milicia de pardos de Caracas. Su abuelo paterno era mulato, casado con una negra, y su abuelo materno era indio, casado con una mulata. El hijo del abuelo paterno se casa con la hija del abuelo materno y tienen de hijo a Juan Bautista Arias, a quien se le califica como «tente en el aire», no es legítimamente pardo (ninguna de sus cuatro abuelos es

[590] Santos Rodolfo Cortés, *El régimen de las "gracias al sacar"...*, tomo II, 1978, p. 11-19.

blanco), porque para ser pardo tiene que ser hijo de blanco y negro o, en todo caso, de tercerón con cuarterón o quinterón, porque se han alejado del negro para acercarse al blanco, es decir, empleando el lenguaje de la época, ni avanza ni retrocede en la mezcla[591].

Por otra parte, surgieron opiniones argumentando que el tratamiento de Don era privativo de los nobles en algunos reinos del Imperio español, pero en otros no, como en Castilla, particularidad que se había extendido a las Indias. Aunque se decía que si es verdad que a los nobles hay que darles su tratamiento de Don, también puede hacerse con los que no lo son[592].

Si bien es clara la intención real de derribar barreras, sea por el interés de mayores ingresos fiscales, sea por bajarle el copete a los blancos criollos, la frecuencia de aplicación en estas tierras de la real cédula de gracias al sacar fue escasa en su derivación beneficiosa hacia los pardos. Eso sí, despertó santa indignación entre los nobles. Entre los casos más publicitados están los protagonizados por el médico Diego Mexías y su hijo Diego Lorenzo Mexías, aspirante a sacerdote. Éste, hijo legítimo de Diego Mexías y su esposa Juana Antonia Bejarano, aspiraba a la provisión de una capellanía, fundada por su tía María Rafaela Landaeta, mediante el aporte de un principal de 1.200 pesos. Ya Diego Lorenzo ha estudiado primeras letras y gramática, y quiere ascender al sagrado orden de presbítero, por lo que pide sea dispensado de la calidad de pardo. Argumenta, además, que su familia ha dado muchas limosnas a la iglesia[593]. En su favor, una real cédula del 17 de julio de 1796 recuerda que ha dispensado al médico Diego Mexías de la calidad de pardo, y que en 1793 se le dio certificación de un decreto del Consejo de Indias a favor de la solicitud de habilitación a sus hijos para «que vistiesen hábitos talares y ascendieran al estado sacerdotal»[594]. A todas estas, el Cabildo ha levantado ardientes protestas. En su sesión del 21 de noviembre de 1796 se opone a las decisiones reales y aduce, curiosamente, que Mexías no es pardo sino mulato, por lo que ordena bloquear su solicitud[595]. No se crea, como algún ingenuo podría pensar, que los pardos adoptaban una actitud revolucionaria ante los egoísmos de los blancos. Jacinto Sánchez Tirado, apoderado del gremio de los pardos, dice desde Madrid, el 9 de junio de 1797:

> ¿Qué inconvenientes encuentra el Ayuntamiento de Caracas, en que a los pardos libres, y honrados se les conceda la dispensa de color? ¿Acaso se les quita por ella el uso, y posesión de los privilegios,

[591] *Ibíd.*, p. 19.
[592] *Ibíd.*, p. 23.
[593] *Ibíd.*, p. 29.
[594] *Ibíd.*, p. 42.
[595] *Ibíd.*, p. 44.

> que les corresponden por su origen? No ciertamente. No se hace otra cosa, que acercarlos a ellos, proporcionando los medios de que se enlacen, y unan entre sí, llegando a formar, y constituir, con el tiempo una sola, y única familia[596].

Ni tampoco eran desechables por egoístas, arbitrarios y muy clasistas todos los argumentos de los cabildantes. Hay uno que es, para muchos sociólogos, una verdad del tamaño de un templo, por tipificar un rasgo de conducta del venezolano de todas las épocas:

> En una palabra, que todos quieren ser caballeros en la América, ocupar empleos, y vivir de las rentas públicas, o a costa de la sociedad sin contribuir a ella[597].

Santos Rodulfo Cortés encontró cinco solicitudes de autorización de empleo del distintivo de Don mediante invocación de la cédula de gracias al sacar. Tres de ellas fueron formuladas por escribanos de origen español. Y, además de los Mexías, anota la solicitud del administrador subalterno de correos de Coro, en 1997, para que a su esposa se le eximiera de la calidad de parda[598].

Con el tiempo, menudearon las solicitudes de dispensa de diverso orden. Es conveniente recordar, a este propósito, la frecuencia de dispensas de ilegitimidad que obtienen numerosos hijos expósitos. El 10 de septiembre de 1791 se dispensa a José Domingo Díaz, profesor de medicina, el impedimento de ilegitimidad por ser hijo expósito[599]. El 24 de septiembre de 1792 se ordena no poner obstáculos ni impedimento alguno a José Ramón Madriz para que pueda recibir en la Universidad los grados literarios en las facultades que estudiare, esto por ser hijo expósito, pero, sin dudas, hijo de padres blancos[600]. El 27 de septiembre de 1795 se dispensa al expósito Lorenzo de Lassa la condición de ilegitimidad para optar al título de bachiller en medicina[601]. Fue en febrero de 1805 cuando, ya obtenida por Diego Mexías Bejarano la dispensación de su calidad de pardo, según real cédula comentada arriba, la Universidad hace el debido reconocimiento. También, la Universidad cita la real cédula del 15 de septiembre de 1797 que ha permitido a los hijos de Juan Gabriel Landaeta, en consideración a los méritos y servicios de los ascendientes de éste, obtener hábitos religiosos y beneficios eclesiásticos. Contradictoriamente, y debido a la oposición del cabildo de Caracas, la Universidad no ha querido admitir a

---

[596] *Ibíd.*, pp. 119-124.
[597] Sesión del 28 de noviembre de 1797. *Ibíd.*, p. 95.
[598] *Ibíd.*, tomo I, pp. 259 y 265.
[599] Ildefonso Leal (comp.), *Cedulario de la Universidad de Caracas (1721-1820)*, Caracas, UCV, 1965, p. 293.
[600] *Ibíd.*, p. 304.
[601] *Ibíd.*, p. 309.

Filosofía a Lorenzo, el hijo de Diego[602]. El 16 de julio de 1807, se concede permiso al clérigo José Félix Blanco, expósito, para que, a pesar de su ilegitimidad, pueda recibir los grados menores y mayores en filosofía y teología, que ya ha concluido y los de cánones y leyes, por concluir. Es aquí cuando la Universidad recuerda una real cédula de 1794 en que se legitima a los hijos e hijas expósitos, y se declara que, de esa manera, quedan en la clase de hombres buenos del estado general[603]. Es harto conocido el caso de Juan Germán Roscio, a quien se le hizo difícil el ingreso al Colegio de Abogados al alegarse que en el expediente de su limpieza de sangre no figuraban su madre ni su abuela materna como indias, hasta que un prolongado juicio pudo al fin, en 1805, abrirle las puertas del Colegio. Ya varios años después de estallada la guerra de independencia, pero todavía bajo el dominio real, la Universidad, en agosto de 1818, no opone obstáculos al expósito Juan José Romero, ni en 1819, a José Joaquín González[604].

Posiblemente, se seguirá hablando en los textos de historia del carácter de casta de la nobleza criolla colonial. Como el *Diccionario de la Lengua Española* de la Real Academia Española da, entre otras, dos definiciones de casta, una como un grupo social, en la India, de una unidad étnica mayor que se diferencia por su rango, que impone la endogamia y donde la pertenencia es un derecho de nacimiento; y la otra como un grupo, en otras sociedades, que forma una clase especial y tiende a permanecer separado de los demás por su raza, religión, etc., este autor prefiere el enfoque del profesor Fernando Peleado Sánchez, magíster en Estudios Sociales de la Universidad de Zaragoza, para quien existe un régimen de castas típico, que es el de la India, donde hay cuatro órdenes jerárquicos, muy influidos y determinados por el hinduismo, en la cúspide de los cuales se encuentran los bramanes, a quienes siguen los guerreros, el pueblo llano y los siervos, y fuera del sistema están los parias o intocables[605].

CAPÍTULO XVI

EL FUNCIONARIADO REAL COLONIAL

---

[602] *Ibíd.*, p. 344.
[603] *Ibíd.*, p. 351.
[604] *Ibíd.*, pp. 414 y 419.
[605] Cf. *Google, Internet*, o mpeleatos@wanadoo.es

La Corona siempre tuvo especial cuidado en nombrar a españoles para ejercer los altos cargos en las esferas política, administrativa, jurisdiccional, militar y eclesiástica. Agrupamos estos cargos, para comodidad de la disertación, bajo la denominación genérica de funcionariado real colonial. Como en otros campos, la escogencia sólo entre los funcionarios de la Corte y cercanos a ella para los cargos coloniales tuvo sus excepciones.

El Gobernador y Capitán General

Es el funcionario real de mayor categoría durante la época colonial, y reúne en sus manos, como era norma, el gobierno civil (administrativo y judicial) y el militar. Al mismo tiempo, dentro de la concepción institucional prevaleciente, preside el Cabildo, la Real Audiencia y es vice-patrono de la Iglesia, aunque estas funciones son desempeñadas por el Gobernador a título más bien protocolar, pero, de todos modos, entendiéndose que es él la cabeza de todo el gobierno y el representante más conspicuo del Rey.

Es bien sabido que en el territorio de la actual Venezuela funcionaban en la colonia varias provincias. Se recuerdan las de Venezuela o Caracas, Margarita, Mérida-La Grita, Trinidad, Nueva Andalucía y Guayana, pero hay momentos en que los límites de cada una varían, a veces sustancialmente, y lo mismo pasa con sus nombres. La provincia de Venezuela o Caracas englobaba a Maracaibo y Trujillo en sus inicios, pero luego no. La provincia de Trinidad deja de ser tal para convertirse en colonia inglesa finalizando el siglo XVIII. La provincia de Nueva Andalucía a veces incluye a Guayana, a veces tiene el nombre de Cumaná. La provincia de Barinas aparece a fines del siglo XVIII. Además, ciudades como Mérida y San Cristóbal, hoy 100% venezolanas, pertenecieron durante muchos años a la provincia de Pamplona y sobre ellas ejercía mando el gobernador presidente o el virrey del Nuevo Reino de Granada. Por otra parte, si bien estas provincias tienen siempre una conexión directa con la Corona, hay años en que para los efectos administrativos, judiciales, eclesiásticos y militares, están subordinadas en cada de una de estas esferas a una instancia intermedia, sea el virreinato de Santa Fe, sea la Audiencia de Santo Domingo, sea el Obispado de Puerto Rico. Coexisten, entonces, en esos largos 300 años, una corriente centralizadora con una madeja de escalones burocráticos, a veces difíciles de entender en cuanto a su poder de decisión. La situación tiene, a partir de 1777, un aspecto más homogéneo al crearse la Capitanía General de Venezuela, precedida por la creación de la Intendencia del Ejército y Real Hacienda y seguida por la creación de la

Real Audiencia y del Arzobispado. Aún en estas condiciones, el gobernador Juan Guillelmi, por ejemplo, ostentaba el título de «Gobernador y Capitán General de esta Provincia, la de Cumaná, Guayana y Maracaibo e islas de Trinidad y Margarita». Y hay más que decir, porque cuando se entabla el juicio de residencia al Gobernador Manuel González Torres de Navarra, ya creada años atrás la Capitanía General de Venezuela (cuyas fronteras reivindica el Congreso de 1811 como las de la naciente república independiente, según el *iutis posidetis juri*), se les va a examinar su labor, la de él y la de todos los funcionarios subalternos, en el solo territorio de la antigua provincia de Venezuela, excluyéndose, por supuesto, a los gobernadores y funcionarios de Cumaná, Margarita, etc. Puede decirse que, en una acepción muy laxa, la colonia venezolana no era un ente congelado, sino se parecía a un organismo vivo y proteico, a tono con la enorme extensión de las posesiones americanas de España, los siglos transcurridos y las cambiantes condiciones en que se movía el Imperio español.

Tomemos como ejemplo el nombramiento del Gobernador de la provincia de Venezuela otorgado al capitán Gonzalo de Piña Ludueña, el 18 de agosto de 1596. El Rey lo elige por un periodo de 5 años, o más. Podrá designar sus lugartenientes en las partes y lugares donde se suele hacer, y quitarlos y removerlos cuando quisiese. Entre sus atribuciones está la de tomar y recibir cualquier pesquisa, e informaciones en los casos y cosas de derecho, con ejecución de justicia y buena gobernación. Al llegar a la provincia debe ser recibido por el Cabildo de Caracas, que es la ciudad cabeza y más principal de todas. A continuación, debe oír, librar y conocer de todos los pleitos y causas, sean civiles o criminales. En acto solemne, se pondrán en sus manos las varas de la justicia. Deberá hacer y ejecutar las penas y condenaciones pertenecientes a la Cámara y Fisco reales. Podrá desterrar a las personas escandalosas que turben la paz y el sosiego común. En fin, cobrará de sueldo 650.000 maravedises al año[606].

Cuando se nombra Gobernador y Capitán General a José Francisco de Cañas y Merino, el 21 de abril de 1706, también se establece que su periodo abarcará 5 años. Se le especifican todas las atribuciones anteriores, y se agrega la de dar un buen tratamiento a los indios. El Cabildo de Caracas lo pondrá en posesión del cargo, y así lo tendrán por tal los caballeros, escuderos, oficiales, hombres buenos, jueces, justicias, vecinos estantes y habitantes. Su sueldo será de 650.000

---

[606] José Llavador Mira, *La Gobernación de Venezuela en el siglo XVII*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1969, pp. 135-137.

maravedises al año (el mismo de hace 110 años), a pagar por la Hacienda de Caracas. Y se le exonera de pagar el derecho de media anata por razones de la guerra[607].

El título de Gobernador se expedía aparte del de Capitán General, aunque casi siempre los dos tenían la misma fecha, como es el caso de los títulos otorgados a Sancho de Alquiza el 13 de noviembre de 1604[608].

La duración de 5 años se cumplió en muchos casos, pero en otros no. Hubo gobernadores que nunca tomaron posesión de su cargo, otros que abandonaron sus deberes por enfermarse de dolencias graves o de locura, o simplemente fueron removidos o murieron asesinados. Hubo también el muy raro caso de Marcelo Villalobos, nombrado gobernador de Margarita en 1525, heredado por su hija Aldonza de Manrique de Villalobos, única mujer con tan alta responsabilidad, y con la facultad de ejercer el cargo, ella y sus herederos, según especial dispensa real, de modo que los descendientes del primero fueron gobernadores hasta 1594. De allí en adelante, y hasta 1810, Margarita tuvo 34 gobernadores. Los de la provincia de Caracas o Venezuela fueron 65, entre 1528 y 1810. Y en Trinidad se contaron 30 gobernadores españoles, entre 1615 y 1797[609].

El nombramiento de Gobernador recayó en la mayoría de los casos en militares. Según José Llavador Mira, de los 20 gobernadores de la provincia de Venezuela que actuaron en el siglo XVII, 17 eran capitanes, o sargentos mayores o maestres de campo, más un almirante. Sólo 3 fueron civiles (dos jueces y un tesorero)[610]. La preferencia en elegir militares se acentuó luego de constituirse la Capitanía General de Venezuela en 1777, de modo que a partir de esa fecha ejercieron el cargo, sucesivamente, el brigadier Luis de Unzaga y Amézaga (1777-1782), el brigadier Manuel González de Aguilar Torres de Navarra (1782-1786), el coronel Juan Guillelmi (1786-1792), el coronel de infantería Pedro Carbonell Pinto Vigo y Correa (1792-1799), el brigadier Manuel de Guevara y Vasconcelos (1799-1807), el coronel Juan de Casas (1807-1809) y el capitán de navío Vicente de Emparan y Orbe (1809-1810). Como se verá más adelante, tal escogencia obedeció a una política dirigida a reforzar el estamento militar en la colonia.

---

[607] *Ibíd.*, pp. 233-234.
[608] *Ibíd.*, p. 237.
[609] Santiago Gerardo Suárez, "Instituciones panvenezolanas del periodo hispánico", en Varios Autores, *Los tres primeros siglos de Venezuela...*, pp. 277-375.
[610] José Llavador Mira, *Ob. cit.*, p. 11.

Entre los gobernadores más conocidos de la provincia de Venezuela, que fueron 124 entre 1529 y 1810, están Nicolás de Federmann, Pedro Ponce de León, Julián de Arriaga, Felipe Ricardos y Vicente Emparan. El alemán Federmann fue un auténtico expedicionario, conquistador y jefe a toda prueba. Pudo codearse con otros intrépidos capitanes como Sebastián de Benalcázar y Gonzalo Jiménez de Quesada en la fundación de Santa Fe de Bogotá, en 1539, luego de recorrer esas inmensas y casi inexploradas selvas, llanuras y montañas que separan a Coro del altiplano bogotano. Pedro Ponce de León tuvo el mérito de acertar en el nombramiento de Diego de Losada para que acudiese a la pacificación de los indios de los valles centrales, que ya tenían entre sus víctimas nada menos que a Juan Rodríguez Suárez, Diego García de Paredes y Luis de Narváez. No sólo Ponce de León le presta a Losada todo su apoyo sino que incluye a sus tres hijos, Rodrigo, Francisco y Pedro Ponce de León, en la hueste que a poco funda a Caracas. Julián de Arriaga es, quizás, el más encumbrado de los funcionarios que ejercieron el máximo mando colonial en Caracas. Luego de apagar los fuegos de la rebelión de Juan Francisco de León, ejerció la presidencia del Consejo de Indias, y Fernando VI lo nombró ministro de Marina y de Indias. Según John Lynch, formó parte, en este cargo, hacia 1763, ya reinando Carlos III, de una trilogía constituida por él, el muy influyente marqués de Esquilache como ministro de Guerra, y el marqués de Grimaldi como ministro de Estado, trilogía que en realidad fue «una junta de ministros, una especie de comisión para la defensa del imperio... y que se reunía todos los jueves para analizar la política colonial y comercial»[611]. Aunque Lynch lo califica de «ineficaz», comandó el ministerio desde 1754 hasta 1776, cuando murió, ya octogenario. Felipe Ricardos fue otro gobernador con una recia personalidad, y acometió la tarea de reordenar en ciertos aspectos la conducción colonial de la provincia a fin de hacer desaparecer cualquier resabio entre la nobleza criolla por los acontecimientos de la sublevación del canario Fernández de León y, en esa dirección, ejecutó prisiones (la de León, así como las de varios señores de la alta sociedad), aumentó los impuestos y dictó algunas medidas sobre la vida cotidiana de Caracas, que Robert J. Ferry interpreta como acciones de castigo contra la ciudad. Según él, Ricardos consideraba a Caracas como una ciudad desleal, pensó mover los tribunales eclesiásticos y seculares, el Obispado, el deán de la Catedral, el Cabildo, la administración de la Compañía y la residencia del gobernador de Caracas a Valencia, no lo logró, pero dejó pendiente la amenaza. Llevó 600 nuevos soldados a Caracas para sumar 800. Los dueños de casa debían, después de las 9 pm., poner luces y candelabros en las ventanas, y una campana en la

[611] John Lynch, *La España del siglo XVIII*, Barcelona, Editorial Crítica, 3ª edición 2004, p. 226.

puerta, so multa de 25 pesos, o bien 8 días de prisión para los plebeyos. Pidió que salieran de Caracas aquellos españoles que habiendo dejado sus esposas en España, no la hubiesen traído dentro de los próximos tres años. Castigó a los vagos y hasta expulsó a varios de la ciudad; asignó maestros a los huérfanos, intentó colocar a las mujeres sin trabajo en casas de virtuosas señoras, que pudieran aprender buenas costumbres. Prohibió que las mujeres merodearan por los cuarteles o permanecieran de noche en las plazas, y si se las hallaren de noche con soldados serían enviadas a un hospicio. Persiguió a la gente sospechosa, a los rebeldes y desertores, y no faltaron presiones suyas para que el cabildo aprobara sus medidas, nombró muchos funcionarios nuevos, alteró la vieja estructura de la plaza mayor, llenándola de tarantines llamados canastillas; y pidió al cabildo que pagara la ejecución de dichas obras, lo que hizo que éste se llenara de deudas. Por último, se las ingenió para que fuese el vecindario el que pagara los costos de las nuevas tropas situadas en la ciudad, calculados en 100.000 pesos, y los gastos que acarreó al fisco el levantamiento de Juan Francisco de León, calculados en 366.573 pesos. ¿De qué modo?: aumentando el derecho de alcabala del 2 al 5% sobre los precios de mercado de los bienes de exportación como cacao, tabaco, azúcar, cueros (que era la alcabala del mar) y aumentando también la alcabala de tierra (sobre toda venta de productos)[612].

Y, en fin, Vicente de Emparan, hombre preparado, acusado de "afrancesado", fue quien vio, luego de ejercer la gobernación de Cumaná, el principio del fin del régimen colonial al renunciar a su cargo en Caracas el 19 de abril de 1810.

Cumaná, que a veces se llamó provincia de Nueva Andalucía, Nueva Barcelona y Cristóbal de los Cumanagotos, tuvo, si iniciamos la cuenta a partir de 1569, más de 50 gobernadores, empezando la lista con Diego Fernández de Serpa. A varios de ellos nos hemos referido en los capítulos sobre las encomiendas y las misiones. Según el padre Buenaventura de Carrocera, fueron 42 los gobernadores entre 1650 y 1810. De ellos, 1 no aceptó, 2 mueren antes de tomar posesión del cargo, 1 no toma posesión, 3 mueren en ejercicio del cargo, 2 apenas duran unos meses, 2 son suspendidos del cargo y luego lo retoman, 8 son interinos, 3 duran dos años, 2 duran tres años, 5 duran cuatro años, 5 duran cinco años, 2 duran seis años, 2 duran siete años, 1 dura diez años, 2 duran doce años[613].

---

[612] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, pp. 241-254.

[613] Buenaventura Carrocera, *Misión de los capuchinos en Cumaná*...,tomo I, p. XXVI.

Otra de las provincias que se fueron conformando como tales y que luego sufrieron desmembramientos para dar lugar a otras provincias, fue la de La Grita y Mérida. Fue en 1622 cuando las ciudades de Mérida, La Grita, San Cristóbal, Barinas y otras poblaciones quedaron englobadas en lo que se llamó provincia de Mérida, con Juan Pacheco Maldonado como su primer Gobernador y Capitán General. Comprendía un vasto territorio, donde se contaban, además de las poblaciones nombradas, Pedraza de los Llanos, Gibraltar, casi todas las tierras por donde pasaban los ríos Zulia, Meta y Casanare, y Maracaibo que es incorporada en 1676[614]. A diferencia de Caracas y Cumaná, estuvo adscrita a la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá.

Entre los últimos gobernadores de Maracaibo figura Joaquín Primo de Rivera, que lo fue de 1787 a 1794, nacido en Veracruz en 1734 y murió en Maracaibo en 1800. Llegó ser coronel y marqués de Bajamar. Y otro es el muy conocido Fernando Miyares, caballero de la orden de Carlos III, nacido en Santiago de Cuba y fallecido en Maracaibo en 1818, gobernador entre 1799 y 1812, luego de ser gobernador de la provincia de Barinas durante 12 años y, más tarde, prácticamente, el último Gobernador de Venezuela, durante dos años, antes del cataclismo político de José Tomás Boves[615]. Dejó notable descendencia en el país, con familiares de muy sonada participación en la vida política, social y cultural.

Los subalternos del Gobernador, en orden jerárquico, eran los tenientes de gobernador, a veces llamados tenientes de justicia mayor, los corregidores, los tesoreros. Y también estaban los escribanos reales. Cuando estos funcionarios tenían un carácter de provisionalidad, podían ser nombrados por el Gobernador, pero en muchas otras ocasiones, eran nombrados por el Rey. Por ejemplo, el Rey, mediante Real Cédula, nombró Teniente de Gobernador y Auditor de Guerra al licenciado Manuel Bernardo Álvarez, el 20 de junio de 1728, con jurisdicción en todas las ciudades, villas y lugares de la Gobernación tal como se hacía en La Habana y Cartagena, y por un periodo de 5 años[616]. Y después de crearse en 1777 la Capitanía General de Venezuela, se le dio al Teniente de Gobernador un rango más permanente, al llamársele Teniente del Rey y con unas muy específicas atribuciones militares, todo dentro del espíritu más centralizador de las reformas borbónicas. El

---

[614] Cf. *Documentos para la historia lingüística de Mérida. Siglos XVI-XVII*, Internet, a partir de los escritos de los historiadores Guillermo Morón y Milagros Contreras Dávila.

[615] Ligia Barbesí de Salazar, "Genealogía social de los Gobernadores de la Provincia de Maracaibo, 1787-1812", en revista *Procesos Históricos*, Nº 006, Mérida, Universidad de los Andes, 2004. Internet: www.redalyc.com

[616] Santos Rodulfo Cortés (comp.), *Antología documental...*, p. 90.

primero fue el coronel de infantería Francisco de Arce, con retención del mando que tenía del batallón de Veteranos de Caracas, y así poder ser también cabo subalterno militar en todas las provincias, según real cédula del 2 de septiembre de 1778[617].

Los corregidores, casi siempre venidos de la metrópoli, tuvieron fama de poseer escasos conocimientos, tener bajos sueldos, y apelar a cuanta marramucia hubiera para aumentar sus ingresos. Hasta Solórzano Pereira midió su calaña, al recordar lo que de ellos dijo San Isidoro: «ningún robador o pirata es tan codicioso con los extraños como el corregidor malo e inicuo en los suyos»[618].

Los funcionarios citados, al ser sometidos a residencia cuando terminaban su mandato, tenían que responder por el cumplimiento o no de sus atribuciones, lo cual nos permite ampliar el conocimiento de la esfera de acción de sus funciones. Por ejemplo, en 1787, el Gobernador, los Alcaldes Mayores, Corregidores y Tenientes no podían designar ministros y oficiales naturales de la provincia, ni emplear a sus parientes (consanguinidad y afinidad dentro del 4° grado), sin licencia especial del Rey, ni podían ser nombrados para estos cargos los oficiales de la Real Hacienda. Debían preocuparse por el orden y la forma de vivir de los indios, vigilar que los funcionarios actúen bien en sus cargos, sin fraude. Que haya buen abastecimiento de carnes, pescados y otros, a precios razonables, que estén limpias y reparadas cercas, muros, calles, puentes, alcantarillas, calzadas, fuentes, carnicerías y otras obras públicas. Tienen que hacer visitas a los términos de su distrito, al menos una vez durante su función, sin cobrar salarios en ello, ver el estado de la justicia, si iban bien los asuntos, si los poderosos no agraviaban a los pobres. Visitar los pueblos de indios, y ver si usan sus haciendas y hay justicia. No pueden cobijarse en ningún aposento privado sin consentimiento de su dueño. Visitarán los mesones y ventas de los caminos, y los sitios de hospedaje de los caminantes. No conocerán de las causas que atendiesen los alcaldes ordinarios, ni pueden poner en libertad a presos. Vigilarán que nadie salga de la provincia sin la debida licencia, y que nadie se case sin previa licencia real. Los indios deben trabajar, no haraganear, y hay que pagarles por su trabajo, y estar pendientes de que vayan a misa. Deben evitar las molestias y vejaciones por parte de sus caciques, apremiarlos a hacer ropa para uso

---

[617] *Ibíd.*, p. 118.

[618] Juan Solórzano Pereira, *Ob. cit.*, tomo III, p. 1875.

de estos funcionarios, pero no más de lo necesario, y no hacer con ello granjerías[619].

Como es fácil observar, son atribuciones de muy variado tono, tanto de alta política como de sencilla atención rural, y que lucen como cabalgando sobre las atribuciones de otros funcionarios de esferas distintas, llámense alcaldes, jueces, regidores, clérigos. Así era el transcurrir de la vida colonial, y deben enfocarse con tal lente, sobre todo a la hora de analizar los frecuentes roces y discrepancias que se generaban por causa de una madeja de acusaciones y contraacusaciones, apelaciones y rogativas, pleitos que consumían con frecuencia muchos años a causa de un proceso lleno de papeleos disparados en ambas direcciones del océano, incluyendo a veces lo que para nuestros ojos es la sorpresiva y directa apelación a la autoridad real, y la respuesta no menos insólita de las audiencias que en la propia corte concedía el Rey a los litigantes envueltos en litigio, llámense gobernadores o mulatos libres.

Historiadores de la talla de Guillermo Morón y Luis Alberto Sucre, entre muchos otros, y cronistas de ciudades y estados actuales de Venezuela han escrito biografías condensadas o monografías de Gobernadores muy eminentes de la Colonia. Pero, es difícil, y quizás inútil, ensayar una historia de la época colonial dividiéndola en capítulos según el Gobernador de turno, tal como se hace hoy con la historia de Venezuela, cuando se escribe a través de sus sucesivos presidentes desde 1830. La razón es obvia: los gobernadores eran simples representantes del Rey, no importa la reciedumbre de la personalidad que a veces demostraban. Los presidentes de Venezuela, quiérase o no, han sido pequeños reyes en sus periodos constitucionales, o inconstitucionales, y resulta útil, por tal motivo, estudiar el país de acuerdo con el uso, especial o disparatado, de sus mandatos.

Ahora bien, los gobernadores coloniales, a pesar del inmenso poder que aparentemente se concentraba en sus manos, tenían las terribles limitaciones que suponían el corto periodo de su mandato y el juicio de residencia a que estaban sometidos al finalizar su gestión. Se trataba, en relación con los juicios de residencia, de un largo, complicado, tedioso y a veces costoso proceso mediante el cual el gobernador y los funcionarios civiles de la provincia, nombrados o no por éste, tenían que responder a largos cuestionarios y a múltiples deposiciones de testigos, y a evacuar pruebas que demostrasen lo útil

---

[619] Marianela Ponce, *El control de la gestión administrativa en el juicio de residencia al Gobernador Manuel González Torres de Navarra*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1985, tomo I, pp. 413-454.

de su gobierno, o refutasen las acusaciones que menudeaban y salían de todos los rincones de la provincia. Tomemos el juicio de residencia al gobernador Manuel González Torres de Navarra, para ventilar su gestión desde el 24 de diciembre de 1782 hasta el 13 de febrero de 1787, incluyendo la actuación de todos los funcionarios de la provincia, entendiéndose que la provincia a examinar es la clásica de Caracas o Venezuela, y no la constituida 5 años atrás, en 1777, o sea, que se va a juzgar a González Torres no como gobernador que fue de todas las provincias venezolanas, lo cual debe interpretarse como otra de las rarezas de la jurisprudencia española de la época[620].

Es impresionante la cantidad de funcionarios residenciados

En la jurisdicción de **Caracas**, donde se incluyen la capital, y La Guaira, Maiquetía, La Victoria, Cuyagua, Guarenas, Capaya, Valles del Tuy, Caraballeda, Cúpira, Choroní, Caucagua, Turmero, Cagua, El Valle, Santa Lucía, El Guapo, Petare, Baruta, Chacao, Macarao, Panaquire, Santa Teresa, Chuao, Chuspa, Caruao, Ocumare, Maracay, Curiepe, La Vega, Antímano, Paracotos, San Diego, San Antonio y Charallave, fueron sometidos a residencia 127 funcionarios. De ellos, 33 resultaron sentenciados.

En la jurisdicción de **Valencia**, en esa ciudad y en Tocuyito, Naguanagua, Güigüe, San Diego, Los Guayos, Guacara, San Diego, Guacara, Puerto Cabello, Patanemo, Ocumare y Los Guayos, lo fueron 52 funcionarios, De ellos, 42 resultaron sentenciados.

En la jurisdicción de **Nirgua**, en esa ciudad y en Montalbán, Canoabo, y Alpargatón, lo fueron 30 funcionarios. De ellos, 28 fueron sancionados.

En la jurisdicción de **San Felipe**, en esa ciudad y en Aroa, Los Cañizos, San Nicolás, San Francisco Javier, Nuestra Señora de las Tinajas, Guama y Cocorote lo fueron 34 funcionarios. Se produjeron 32 sanciones.

En la jurisdicción de **Guanare**, en esa ciudad y en Boconó, Guanarito, Nutrias, Mijagual, Tucupido, Sabaneta, Guanarito y Morrones, lo fueron 32 funcionarios. De ellos, 20 fueron sentenciados.

En la jurisdicción de **Araure y Ospino**, en esas villas y en La Corteza lo fueron 48 funcionarios. De ellos, 46 fueron sancionados.

En la jurisdicción de **San Luis de Cura**, en esa villa y en San Juan, lo fueron 26 funcionarios. De ellos, 24 fueron sancionados.

En la jurisdicción de **Calabozo**, en esa ciudad y en Guardatinajas y Camaguán, lo fueron 22 funcionarios. No aparece el número de sancionados.

En la jurisdicción de **San Sebastián de los Reyes**, en esa ciudad y en San Francisco, Chaguaramal, lo fueron 3 funcionarios, y los 3 sancionados.

---

[620] Marianela Ponce, *Ibíd..*, tomo I, p. 142

En la jurisdicción de **Carora**, en esa ciudad y en Aregue, Río Tocuyo, San Miguel, Siquisique, Moroturo y Baragua, lo fueron 28 funcionarios. De ellos, 23 fueron sancionados.

En la jurisdicción de **El Tocuyo**, en esa ciudad y en Quíbor, Cubiro, Sanare, Guarico, Humocaro Bajo, Humocaro Alto, Chabasquén, Valle de Curarigua y Barbacoas, lo fueron 47 funcionarios. De ellos, 42 fueron sancionados.

En la jurisdicción de **Coro**, en esa ciudad y en San Luis, Casigua, Río Tocuyo, y Paraguaná, lo fueron 40 funcionarios. Se produjeron 44 sanciones.

En la jurisdicción de **Trujillo**, en esa ciudad y en Boconó y Carache, lo fueron 23 funcionarios. Se produjeron 23 sanciones.

En la recopilación de donde hemos extractado los datos anteriores, no aparece la ciudad de Barquisimeto[621].

En total, en 11 ciudades, 3 villas, y 87 pueblos y lugares, 512 funcionarios fueron residenciados, entre ellos el Gobernador y Capitán General, 139 Tenientes de Gobernador y de Justicia Mayor y Corregidores; 112 Alcaldes Ordinarios; 99 Alcaldes de la Santa Hermandad; 63 Procuradores Generales; 42 Regidores; 24 Escribanos; 18 Abogados de la Real Audiencia; 7 Fieles Ejecutores; 6 Alguaciles; 4 Alféreces Reales; 3 Mayordomos de Propios, 1 Juez de Difuntos; 1 Tasador General, y 1 Fiscal de Juzgado. Hacemos la advertencia siguiente: Puede ser que no haya concordancia en las cifras que arroja el número de funcionarios, por un lado, y el número de sanciones por el otro, puesto que en varias ocasiones el cargo no está bien especificado, o una persona ostenta más de un cargo, o bien hay funcionarios sin sentencia, o, en último caso, los documentos originales están incompletos o presentan cierta vaguedad en estos renglones.

Tal despliegue de interrogatorios, testigos, emplazamientos, pesquisas, y el desplazamiento del juez, sus asesores y sus tenientes delegados en las diversas poblaciones, acarreaban gastos a veces considerables, con la particularidad de que eran los propios funcionarios residenciados quienes cargaban con semejantes costos. Hubo las protestas del caso. Por ejemplo, en 1677, el Cabildo de Caracas y el Gobernador entrante al finalizar el periodo de Francisco Dávila Orejón Gastón, consideraron excesivos los salarios y las cargas impuestos en la ocasión por el juez ejecutor de la residencia, licenciado Juan Baptista de Santiago, con el agravante de que el proceso de residencia duró más de 100 días, en vez de los 60 estipulados como norma desde hacía mucho tiempo[622]. Es que a aquellos funcionarios que debían pagar costas y gastos por el juicio de residencia se les ponía guardia en sus casas para

---

[621] *Ibíd.*, pp.455-487.

[622] Leticia Vaccari (recop.), *Ob. cit.*, p. 417.

que no salieran a la calle hasta que cancelasen lo debido, con el consiguiente desprestigio en el vecindario[623].

Un elemento importante del proceso de residencia es el llamado que se hace a las personas de las localidades para que atestigüen acerca de la labor realizada por los funcionarios, a objeto de obtener información de primera mano que permita valorar la gestión gubernativa del periodo. En tal sentido, las preguntas versan sobre los aspectos siguientes: si conocen al Gobernador y Capitán General, a los Tenientes de Justicia y Corregidores. Si administraron bien o no la justicia. Si castigaron alcahueterías, usuras, juegos prohibidos, amancebamientos, juramentos, blasfemias, y otros pecados públicos. Si han cometido vicios, fraudes u omisos en la tramitación de las causas judiciales. Si tratan mal e injurian a quienes acuden a la justicia. Si se ajustan al Arancel de costas y derechos. Si ejecutan las sentencias. Si tienen cárcel segura, y registran el movimiento de presos. Si defienden y conservan las regalías del Patronato Real y la Jurisdicción Real. Si proceden a cobrar la limosna de Bula de la Santa Cruzada y si piden limosna y fabrican colegio o convento sin la venia real. Si hacen y protegen obras públicas como puentes, fuentes, carnicería, y vigilan los pesos del pan y la carne, y otros artículos. Si hacen la limpieza de calles y caminos. Si cumplen por justas las ordenanzas de ciudades y que se hagan con rectitud las elecciones añales. Si hay buena inversión de los propios de la ciudad. Si los corregidores velan porque tengan los indios sus labranzas y cajas de comunidad. Si se convierten en revendedores de productos. Si han recibido cohecho, dádivas, regalos. Si aplican bien las condenaciones. Si el Gobernador tiene casa propia, estancias, ganado y otros bienes raíces, y embarcaciones, cosas que no deben ser. Si colocan en cargos a parientes, o toleran lo malo de funcionarios. Si hacen violencia o actos deshonestos a la mujer casada, soltera o viuda, y si tienen amancebamiento público. Si tienen interés particular en algunos juicios. Si hacen visita general a la provincia. Si dan buen trato a los indios, en paz, pidiendo solo los tributos legales, y si se sirvieron de algún indio sin pagarle, si permitieron que se les injuriase, o que los caciques los maltrataran. Si consintieron que entraran embarcaciones extranjeras sin licencia, o españolas sin registro, y si en el decomiso actuaron conforme a las leyes. Si se ha hecho lo correcto en la introducción e indulto de negros bozales. Si están en buen estado batallones, tropas, artillería, y fortificaciones. Igual las milicias. Si hay buen trato a soldados y si se evitan que los pongan a trabajar como criados. Si hay buen criterio en el gasto de la Real Hacienda. Si las presas tomadas por tierra y mar a los enemigos se repartieron conforme

---

[623] *Ibíd.*, p. 417.

a las Reales Cédulas. Si a los principales jefes de los piratas se les ahorcó o pasó por las armas, según la práctica de *ad modum belli*, y al resto se les mandó a galeras[624].

Un dato que ilustra la importancia atribuida al interrogatorio de los testigos es el número de preguntas que les son formuladas sobre la gestión de los funcionarios. El interrogatorio practicado sobre el Gobernador consta de 25 normas a responder. Le siguen en cantidad los escribanos, con 16 normas, y los regidores con ocho[625].

Lo interesante de esta relación es que da una idea de cuáles eran las principales ciudades, villas y pueblos del territorio en el último cuarto del siglo XVIII, la cantidad de funcionarios, nombrados o no por disposición real, y el número elevado de sanciones aplicadas. Se dirá que muchas de tales sanciones existieron apenas en el papel. Puede ser cierto, en virtud de la distancia con respecto a la metrópoli, y las muchas ocasiones de apelación, de soborno o de simple desconocimiento de las sentencias que estuvieron al alcance de los enjuiciados. Pero, de todos modos, es una verdad que los juicios de residencia permiten conocer un aspecto muy interesante, a veces menospreciado, del manejo de esta colonia por parte de la Corte metropolitana. Un hecho que habla de la importancia que en algunos casos se les daba los juicios de residencia es el nombramiento de una personalidad tan respetable en los medios oficiales como Francisco de Saavedra, quien detentaba el alto cargo de Intendente General de Ejército y Real Hacienda, para que fungiese como Juez del juicio a Torres de Navarra. El asesor va a ser otro reputado funcionario, el doctor José Antonio Osío, y de escribano actúa Juan Domingo Fernández[626].

El Intendente del Ejército y Real Hacienda

Fue ya en la tardía colonia, pero un año antes de crearse la Capitanía General de Venezuela, cuando la Corona creó esta institución, otra señal del interés real por consolidar las instituciones de la región, dentro del vasto plan de las reformas borbónicas. A su primer titular, José de Ábalos, se le llamó Intendente de Ejército y Real Hacienda de la Provincia de Venezuela y de las de Cumaná, Guayana, Maracaibo, Trinidad y Margarita, Superintendente de la Santa Cruzada, Presidente del Tribunal de Cuentas, y Juez General para la venta, composición y

---

[624] Marianela Ponce, *Ob. cit.*, tomo II, pp. 66-74.
[625] José Llavador Mira, *Ob. cit.*, pp. 283-294
[626] Marianela Ponce, *Ob. cit.*, tomo II, 1985, p. 11.

confirmación de tierras realengas de las referidas provincias e islas. El cargo obedece a la idea de que la recuperación del prestigio y el poder de España radicaba en la fortaleza de su gran imperio (incluido de modo sustantivo América) y en el florecimiento del comercio, tesis que fue sostenida en el siglo XVIII por prestigiosos ministros o teóricos de la Corte, entre ellos José Patiño, José Campillo y Gerónimo de Uztáriz, según comenta John Lynch[627], quien agrega a lo dicho la presencia de un proceso de hispanización de los gobiernos americanos con la creación de nuevos agrupamientos provinciales y nuevos cargos, y el aumento del porcentaje de españoles en la burocracia civil y militar[628].

Como su nombre lo indica, la Intendencia iba a cumplir dos finalidades: una, reforzar la dirección del ejército permanente, al mismo tiempo que garantizarle la oportuna y efectiva dotación de suministros de todo orden. Y la otra, centralizar con más vigor la recaudación de impuestos y el manejo eficiente de los recursos fiscales, todo dentro de la constante preocupación por alimentar la maquinaria bélica imperial y velar por la seguridad de sus posesiones de ultramar. Además, la Intendencia comandada por un hombre de confianza de la Corte, y mano derecha del Gobernador, constituía un punto de apoyo más en los conflictos con el díscolo, pero muy leal en definitiva, estamento de los blancos criollos. La nueva institución fue creada por cédula real de Carlos III el 8 de diciembre de 1776. Según su texto, el Intendente tendrá privativo conocimiento de todas las rentas, ramos y derechos, por lo que los gobernadores quedan separados de conocer de eso. Además, se suprimen los cargos de oficiales reales, y sus tenientes. En su lugar, se establecerán contadores. La Intendencia le dio una mayor importancia a la recaudación por concepto de impuestos y tasas, que adquirieron mucha actualidad, tales como el almojarifazgo, armada de Barlovento, armadilla, alcabalas de tierra y de mar, medias annatas de embarcaciones, novenos de diezmos, penas de cámara, ventas de oficios públicos y su media annata, comisos, papel sellado, pulperías, tributos de indios, entrada y marca de negros y su indulto, mesadas eclesiásticas, derecho de lanzas, medias annatas de títulos de Castilla, medias annatas de ministros y alcaldes, subsidio eclesiástico, Santa Cruzada, vacantes mayores y menores, venta y composición de tierras, confirmación de tierras, derecho de presas, impuesto de peso por carga de tabaco y cacao en la navegación del río Yaracuy, almirantazgo, quintos, aguardiente, expolios extraordinarios, monte píos, depósitos, y otros[629].

---

[627] John Lynch, *Ob. cit.*, p. 132, 133.
[628] *Ibíd.*, p. 304.
[629] Santos Rodulfo Cortés (comp.), *Antología documental...*, p. 114

Entre los principales intendentes figuraron José de Ábalos (1777-1783); Francisco de Saavedra (1784-1788); Esteban Fernández de León (1791-1802); Juan Vicente de Arce (1803-1809) y Vicente Basadre (1809-1810). Quizás el más renombrado de ellos fue Francisco de Saavedra, incluido como ministro de Hacienda de la Corte en 1797, dada su fama de experto en finanzas, en el gabinete que Godoy ofreció a Carlos IV. Pudo reemplazar a Godoy como primer secretario de la Corte, en 1798. Y salió del gabinete cuando Jovellanos fue depurado por el regreso de Godoy[630]. Recuérdese que Saavedra, en Venezuela, fue un declarado crítico de las aspiraciones de la nobleza criolla.

Los magistrados de la Real Audiencia

El historiador John Lynch ha escrito que las reales audiencias constituidas en territorio americano, junto con otras instituciones de la burocracia metropolitana, fueron objeto de apetencia por parte de los americanos, quienes se consideraban con el derecho de detentar sus cargos, aspiración que se facilitó por el interés de la Corona de vender dichos cargos, dada sus necesidades económicas, de modo que se vio cómo los peruanos dominaban la audiencia de Lima en 1750, igual que en Chile, Charcas y Quito, y añade Lynch que entre 1687 y 1750, de un total de 311 nombramientos para desempeñar cargos en las audiencias de América, 138, o sea, el 44%, recayeron en criollos, de los cuales las tres cuartas partes habían comprado aquellos puestos[631]. Pero, de 1750, esa alta proporción empezó a decaer[632].

Lo que aconteció en las provincias venezolanas valida en parte la observación de Lynch. En parte, porque nunca la proporción de funcionarios criollos de la Real Audiencia caraqueña llegó a alcanzar los porcentajes vistos en Lima o en Quito, aunque también existe el detalle interesante de que fue precisamente el Ayuntamiento de Caracas el que hizo la solicitud a la Corona, el 24 de abril de 1769, para que se estableciera en Caracas la institución de la Real Audiencia, fecha en que todavía no existía la Capitanía General del país, erigida ocho años después. La petición la basaban los cabildantes en el aumento del número y de la actividad social de ciudades y pueblos en estas tierras, y en la larga distancia que separaba el territorio de Costa Firme de la isla de Santo Domingo. Firmaban la petición Francisco de Ponte y Mijares, Juan Ignacio de Ascanio, José Galindo, Francisco Palacios y Sojo, el marqués de Mijares, Rafael de Tovar, Juan Félix Lira, José Francisco

---

[630] John Lynch, *Ob. cit.*, pp. 359, 361.
[631] *Ibíd.*, p. 300.
[632] *Ibíd.*, p. 304.

Landaeta y Diego José Montesinos. La Corte dijo que no, porque los argumentos edilicios no constituían motivos urgentes y eficaces si se contrastaban con el aumento de las erogaciones fiscales y la imitación que de dicho ruego harían Cuba y otros lugares, pero había una razón de mayor peso y era esa inclinación del cabildo a actuar por eso que llamaba el rey un «despótico» modo de pensar y obrar, sin consultar nada con el Gobernador, o con sus ministros o con el Obispo, o con el cabildo eclesiástico, o con otras ciudades, lo cual creaba un caldo de cultivo potencial de «movimientos que pueden ser turbativos y sediciosos», según respuesta del Rey, desde su real despacho de Aranjuez, en junio de 1770[633].

Cuando llegó la onda de "hispanización", se creó al fin la Audiencia de Caracas, en 1786. Ya el terreno se hallaba afianzado en esos diez años que siguieron a la constitución de la Capitanía General de Venezuela. En efecto, tal como lo puntualiza el historiador Alí López Bohórquez, se impuso «el marcado predominio de Ministros españoles, la escasa participación de americanos y la exclusión de juristas venezolanos en el tribunal como jueces de planta nombrados por el Rey, conformándose estos últimos en servir en la institución como abogados defensores o acusadores, en cargos menores, como conjueces en hechos particulares o interinamente en ausencia temporal del magistrado titular, como fue el caso del doctor Francisco Espejo»[634].

El cabildo caraqueño, a todas estas, perdió parte de sus antiguos privilegios, tanto los de carácter protocolar como los muy concretos en el ámbito administrativo y de la impartición de justicia, al fijar la Real Audiencia aranceles, hacer nombramientos, convocar elecciones concejiles, y proteger a la gente de color ante la posición edilicia prepotente en el caso de la puesta en vigencia de la Cédula de Gracias al Sacar[635].

Pero, a pesar de ello, la presencia y actuación de la Real Audiencia contribuyó a consolidar el cemento de unión de Caracas, con Cumaná, Mérida-Maracaibo, Guayana, Margarita y Barinas, para dar lugar a esa nueva entidad que al fin se llamó Venezuela. Y aunque la desproporción es notable, los criollos no estuvieron ausentes de la conducción del alto tribunal: de los cuatro regentes designados entre 1786 y 1809, dos fueron peninsulares y dos americanos (Joaquín Mosquera y Figueroa, natural de Popayán, y Cecilio Odoardo y Palma, dominicano), aunque en

---

[633] Cf. Alí Enrique López Bohórquez, *La Real Audiencia de Caracas (Estudios)*, Mérida, Ediciones del Rectorado de la Universidad de los Andes, 1998, p. 53, 55 y 58.
[634] *Ibíd.*, p. 25.
[635] *Ibíd.*, p. 220, 225 y siguientes.

la práctica actuaron en Caracas sólo tres regentes, dos de ellos españoles, y uno americano. De los ocho oidores en el mismo periodo, seis fueron españoles y dos americanos (José Patricio de Rivera y José Francisco Heredia, ambos dominicanos, aunque éste vino a posesionarse del cargo en 1812). Ningún americano fue fiscal de civil y criminal. Y juez de real hacienda fue el santafereño Francisco de Berrío y Guzmán. También hay que incluir en la nómina de funcionarios a dos venezolanos: uno es Rafael Diego Mérida (1762-1828), quien como escribano real estampa su firma en la sentencia de muerte de José María España, la que ordena descuartizar al reo; y el otro es Juan Germán Roscio (1763-1821), quien como fiscal del alto tribunal emite el dictamen, con fecha 2 de julio de 1808, según el cual se niega a Joaquina Sánchez, viuda de J.M. España, su petición de dejar en Caracas a sus dos hijos, por estar estudiando en la Universidad, mientras ella vaya a cumplir el confinamiento en Cumaná, una vez cumplida su pena de prisión de ocho años en la Casa de la Misericordia de Caracas, según orden real.

Otro detalle a mencionar es el de los pugilatos suscitados entre la Real Audiencia y los Gobernadores y Capitanes Generales, brecha que supieron aprovechar los criollos con ansia de poder. Tales disputas llenaron el saco de las susceptibilidades locales heridas por los mandatarios directos de la Corona, sobre todo cuando ya despuntaba el siglo XIX, y así lo recoge, en visión retrospectiva, el Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela en la América Meridional, de fecha 30 de julio de 1811, y firmado por Juan Antonio Rodríguez Domínguez, Presidente, y Francisco Iznardi, cuando se refiere a los choques de Emparan con la Audiencia, y que responsabiliza a Emparan por colocar en la plaza de oidor al fiscal de lo civil y criminal, por sorprender y abrir los pliegos que dirigía don Pedro González Ortega a la Junta Central, por arrojar a este empleado y al capitán don Francisco Rodríguez y al asesor del Consulado, don Miguel José Sanz fuera de la provincia, confinados a Cádiz y Puerto Rico, y por revocar y suspender las determinaciones de la Audiencia cuando no eran conformes a su capricho y arbitrariedad, después de mil disputas escandalosas con la Audiencia y el Ayuntamiento[636].

El Obispo, la iglesia católica

Cuando hablamos del obispo, nos referimos a la Iglesia católica colonial, por antonomasia, en vista de que, hasta 1804, sólo existió la dignidad de obispo, pues el obispado de Venezuela data de 1531 en

---

[636] *Ibíd.*, p. 266.

Coro, y trasladado a Caracas en 1637; el obispado de Mérida y Maracaibo fue erigido el 15 de enero de 1783 al nombrarse obispo a fray Juan Ramos de Lora, de la Orden de San Francisco; y el obispado de Guayana se decretó el 25 de mayo de 1789, y tuvo de primer obispo a Francisco de Ibarra, nombrado el 22 de febrero de 1792.

La alta jerarquía eclesiástica estuvo ocupada siempre por sacerdotes llegados de España, y el primer obispo de una diócesis venezolana fue el caraqueño Francisco de Ibarra, ungido con el arzobispado en 1804.

La Iglesia fue el más potente y sólido bastión anejo al gobierno civil. Su enorme influencia en la vida cotidiana, su papel de máximo educador en todos los órdenes, desde la enseñanza del culto, pasando por los rudimentos del idioma y la aritmética, hasta la elevada instancia universitaria; su papel indiscutido de orientador en la esfera de la moral y la ética; su atribución excepcional de abrir el camino del cielo a las almas en una sociedad regida por el fundamentalismo católico; su muy interesante función de llevar las cuentas del registro poblacional gracias a sus exclusivas facultades de mantener al día los libros de bautismos, matrimonios y defunciones; su interesante manejo de los fondos económicos a ella encomendados; y su activa labor en la fundación de pueblos, desbordan con creces su simple función evangelizadora y la convierten en un cuerpo omnipresente y multirrector en la sociedad colonial.

Desde los inicios del descubrimiento americano, la mano todopoderosa de la Iglesia se hace presente, a partir del momento en que el Papa consagra y le da validez institucional a la conquista española de estas tierras. Pero, es también el momento en que la realeza toma distancia del sacerdocio y consagra el llamado patronato eclesiástico, es decir, la facultad reservada al rey de nombrar a los integrantes de las altas jerarquías eclesiásticas, de modo que virreyes y gobernadores de la América van a ser también vice-patronos reales, es decir, jefes políticos de la Iglesia. Y fueron los miembros de la Iglesia, obispos, simples párrocos y misioneros quienes abrieron el trascendental debate sobre qué categoría de hombre era el habitante americano y cuál era su lugar en la sociedad.

Ya establecidas las primeras reglas del juego conquistador, la Iglesia armó su gran dispositivo en todas las provincias. Para 1690 éste era el panorama estructural: En la cúspide está el Obispo, que en el caso de la provincia de Venezuela recibe el título de Obispo de la Iglesia Catedral de Santiago de León de Caracas. Es nombrado por el rey,

dándosele el despacho necesario para que se le acudiese con los frutos y rentas acostumbrados, con la advertencia de que no se debe impedir ni estorbar la cobranza de los derechos y rentas reales, ni la de los dos novenos que en los diezmos le están adjudicados al Rey por cesión apostólica[637]. Luego, venían, en los siguientes escalones jerárquicos: deán, arcediano, chantre, provisor, vicario general, miembros del cabildo eclesiástico, directores de conventos, etc. En cuanto a los curatos y otras dependencias, Guillermo Figuera nos suministra el cuadro siguiente:

◇Curatos y doctrinas de la ciudad de Santiago de León de Caracas y su diócesis. Curatos: 1 sacristán mayor, 2 menores, 1 ayuda de parroquia en la iglesia de Nuestra Señora de Altagracia, con un teniente cura y un sacristán menor. Otro ayuda de parroquia en la iglesia de San Pablo, con 1 teniente de cura y 1 sacristán menor.
1 curato en La Guaira con 1 cura, 1 sacristán mayor y 1 sacristán menor.
Doctrinas: 1 en Guarenas con clérigo; 1 en Petare y Baruta con 1 religioso franciscano; 1 en Valle de la Pascua con 1 religioso franciscano; 1 en La Vega y Antímano (clérigo), 1 en La Guaira, Caypauro y Pariaguán (clérigo), 1 en Maiquetía, Torrequemada y Mamo (clérigo), 1 en Carayaca y Tarmas (clérigo), 1 en Choroní, Cagua y Cuyagua (religioso franciscano), 1 en Nuestra Señora de La Victoria (clérigo), 1 en San Mateo (religioso franciscano), 1 en Iniesta, de indios tomusas (1 padre capuchino), 1 San Juan de Cagua (clérigo).

◇Ciudad de Valencia: 2 curatos en iglesia parroquial, 2 curas y sacristán mayor. Doctrinas: Nuestra Señora de Candelaria de Turmero (clérigo), Los Guayos, Don Diego y Guacara (clérigo).

◇Ciudad de Santa Ana de Coro: en iglesia parroquial 2 curas, 1 sacristán mayor. Doctrinas: Santa Ana y Morui (clérigo), La Sierra y Cariagua (clérigo), Mapiare y anexos (clérigo), Tocuyo y Capadare (clérigo), Cumarebo y anexos (clérigo), Mitare, Sazárida y Autaquire (clérigo), Capatárida y Bohoro (clérigo).

◇Ciudad de Maracaibo: 2 curatos y una sacristía mayor con 2 curas y 1 sacristán mayor. Pueblos de la costa de la laguna (Paraure, Mopox, Tomoporo) (clérigo), Maquayes (clérigo), Los Alilas (sin clérigo).

◇Ciudad de Trujillo: 2 curatos, con 2 curas, 1 sacrista mayor, 1 sacristán menor. Tostoz (clérigo), Santa Ana (clérigo), Carache (clérigo), Niquitao, San Pedro, San Lázaro, San Jacinto, Bomboy, San Alexis, Borrusay (clérigo).

◇Ciudad de Carora: 2 curatos, 2 curas, 1 sacristán mayor. Nuestra Señora de Chiquinquirá, Siquisique, San Miguel de los Ayamanes (clérigo).

◇Ciudad de Tocuyo: 1 cura, 1 sacristán mayor. Guarico, Sanare, Cubiro, Umocaro, La Montaña, Umocaro Bajo (clérigo), Quibor (religioso franciscano).

◇Ciudad de Barquisimeto: 1cura, 1 sacristán mayor. Quara y Urachiche, Acarigua y anexos (clérigo), Carora y anexos (religioso franciscano).

---

[637] Cf. Guillermo Figuera, *Documentos para la historia de la iglesia...*, t. I, p. 100, con motivo del nombramiento de fray Antonio González, de la Orden de Santo Domingo, el 23 de enero de 1627, por muerte del anterior obispo, fray Alonso Briceño.

◇Ciudad de Espíritu Santo de Guanaguanare: 1 cura, 1 sacristán mayor.

◇Ciudad de San Sebastián de los Reyes: 1 cura, 1 sacristán mayor.

◇Ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Nirgua: 1 cura, 1 sacristán mayor.

◇Villa de San Carlos de Austria: 1 cura y 1 religioso capuchino (con sus misiones).

Faltaría mostrar la misma relación para las demás provincias (Cumaná, Mérida-La Grita, Margarita, etc.).

En cuanto a los cargos de capellanes existentes en las haciendas de la jurisdicción de Caracas y su diócesis, que se sirven con esclavos a quienes se administran sacramentos, se cuentan los siguientes lugares:

> Valles de Santa Cruz de Caparigua, Turca, Carguao, Los Caracas, Caraballeda, Cuyagua, Choroní, Cata, Macarao. Hatos de Tiznados, Paraima, Las Lajas, Caimán. En Valencia: valles de Mariara, Agua Caliente, Ocumare, Patanemo, San Esteban, Borburata, Guayguaza, Morón, Urama, San Sebastián de los Reyes, valles de Orikuco, La Cruz. En todas las capellanías, y en las doctrinas, sirven clérigos[638].

Hay capellanes también en los hospitales. Por ejemplo, el capellán del Hospital Real de San Lázaro gana una renta anual de 200 pesos, satisfecha de las reales cajas, pero su manutención está a cargo del hospital[639]. Sépase que los hospitales de la Colonia eran de escasa capacidad, a veces tenían tres o cuatro camas, y su principal función no era curativa, sino la de ayudar a los pobres enfermos a sobrevivir a duras penas o a bien morir.

Hacia 1786, el convento de la Inmaculada Concepción, de Caracas, tenía 70 monjas. El de las Carmelitas Descalzas, 21 monjas. El de Nuestra Señora de la Merced, 30 monjas. El convento de la orden de Santo Domingo, en Caracas, tenía 43 religiosos. El de El Tocuyo, 4. El de Trujillo, 3. Se están fundando uno en San Carlos, con dos religiosos, uno en San Felipe con un religioso y uno en La Guaira con un religioso[640].

En cuanto a las áreas de jurisdicción que cubrían los obispados, y a su dependencia de las instancias eclesiásticas superiores situadas en otras posesiones de América, es posible advertir muchos cambios. Por ejemplo, el 9 de septiembre de 1707 surge una petición que busca anexar tanto las islas de Margarita y Trinidad como la provincia de Cumaná al obispado de Caracas, en vista de la lejanía, el acoso de los

---

[638] *Ibíd.*, tomo I, pp. 157 y ss.
[639] *Ibíd.*, tomo I, p. 278.
[640] *Ibíd.*, p. 307.

piratas y lo costoso que resulta el viaje de ir al obispado de Puerto Rico, que es la jerarquía superior. El gobernador de la provincia de Caracas, don Fernando de Rojas y Mendoza, se opone, y aduce para ello la enorme extensión que ya tiene el obispado de Caracas, lo que hace difícil la admisión de otras provincias, y agrega que si bien la distancia de La Guaira a Cumaná es de 78 leguas y la de Puerto Rico a Cumaná es más larga, unas 140 leguas, en cambio el tiempo de viaje en las dos rutas es sensiblemente igual, entre 10 y 12 días, a causa del viento desfavorable que sopla yendo de La Guaira a Cumaná. A eso se añade el peligro de los piratas en estas costas y el inconveniente representado por los bajeles de la ruta La Guaira-Cumaná, usados para transportar pescado, sal, y maíz a Caracas. En cuanto a ponderar la ruta por tierra entre Cumaná y Caracas, ni hablar. Igual oposición muestra el cabildo de la catedral de Caracas, y aduce que el comercio entre Puerto Rico y Margarita, Trinidad y Cumaná es mayor que con Caracas, pues a Cumaná llegan la pimienta de Tabasco, azúcar y melado, tabaco de humo, sebo, manteca, carne de puerco, y sesinas, maíz, casabe. Y de dichas provincias van a Puerto Rico cacao, cordobanes, sal, losa, hilo, teñidos de añil[641]. Las argumentaciones son interesantes, al poner de manifiesto que en los problemas del culto se toman también en cuenta las circunstancias de tiempo e intensidad del intercambio comercial.

La unificación de las siete provincias en la Capitanía General de Venezuela en 1777, y luego, la erección de arzobispado de Caracas en 1804 lograron unir el ámbito eclesiástico de dichas provincias bajo un único mando jerárquico, de modo que ya no hubo instancias intermedias entre Venezuela y Madrid, o Roma.

Basada en su amplia y coherente estructura y en el peso del Evangelio en la vida corriente de todos los habitantes de las provincias venezolanas, la iglesia emitía su voz autorizada en todo lo humano y lo divino del discurrir social. Las Constituciones Sinodales de Caracas de 1687 representan el decálogo y faro que nuestra a todos los habitantes de la provincia el debido comportamiento cristiano en su vida pública y privada[642].

La inquisición fue una institución integrada al aparato eclesial. Las provincias de Venezuela dependieron del tribunal que funcionaba, desde 1610 en Cartagena de Indias, de modo que en estas tierras apenas ejercieron funciones del Santo Oficio funcionarios de segunda o tercera

---

[641] *Ibíd.*, p. 171, 180, 181.

[642] Cf. Manuel Gutiérrez de Arce, *El sínodo diocesano de Santiago de León de Caracas de 1687. Valoración canónica del regio placet a las constituciones sinodales indianas*. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1975.

categoría: comisarios en Caracas y una que otra ciudad, con sus fiscales, alféreces, alguaciles y notarios, como don Pedro Jaspe de Montenegro, quien era regidor perpetuo y alguacil mayor del Santo Oficio de la Inquisición, en 1691. Los delitos que fueron ventilados entraban más en el campo de las prácticas de hechicería que en la persecución de protestantes y otros enemigos de la iglesia.

Unas veces era invocada la autoridad eclesial para reforzar la política oficial de los gobernadores. Y otras veces, el parecer eclesiástico chocaba con el gubernamental. Una real orden, emitida en septiembre de 1776, pedía el auxilio de los eclesiásticos para difundir, a través de púlpitos y confesionarios, los males del contrabando, en el entendido de que tal delito merece no sólo penas corporales, porque cualquiera que incurra en ello «**peca gravemente** al usurpar los derechos debidos al Real Erario, que es el patrimonio de la justicia y el fondo más seguro para la defensa y la felicidad de todos los vasallos que componen el estado». Tales ideas deben difundirse en los púlpitos y confesionarios[643]. Francisco Ibarra, obispo de Guayana, se dirigió al Rey desde Santo Tomás de Guayana, en noviembre de 1793, para comunicarle que tiene entablada pelea con el Gobernador de Cumaná, por cuanto éste niega, sin derecho a ello, la atribución de los religiosos observantes de impartir sacramentos ante la ausencia de curas. Dice que los tiempos han cambiado, que ahora las Indias no son ese territorio de salvajes de los primeros años. Y se refiere a las tristes convulsiones que azotan a la Francia[644]. El obispo Antonio González de Acuña, en carta a Su Majestad, junio de 1675, le dice que resultaría embarazoso quitar los indios de las encomiendas y para ello alega que su visita a las provincias eclesiásticas de Guarenas, Petare, Valle de la Pascua, Maiquetía, Guaycamacuto y Torquemada, donde están las principales encomiendas de la Provincia de Caracas le ha confirmado que de las encomiendas depende la paga de los soldados del puerto de La Guaira, el subsidio de 4.000 pesos anuales de socorro a las misiones de Píritu, el salario del preceptor de gramática de Caracas, la casa de aposento de los ministros del Consejo, el suplemento de los salarios de los oficiales reales, la congrua de los curas doctrineros de indios, la reedificación de iglesias, y la provisión de ornamentos, vino, cera y aceite para las misas[645]. En realidad, se trata de una sobrestimación del peso de las encomiendas, más todavía en ese año de 1675, cuando su declinación es más que evidente. Puede ser que el genio del Obispo se prestaba a estos dislates, porque el 26 de agosto de 1683 publicó un edicto mediante el cual prohibía la ordenación de descendientes de indios y mulatos hasta el

---

[643] Guillermo Figuera, *Ob. cit.*, tomo II, p. 241.
[644] *Ibíd.*, p. 297.
[645] *Ibíd.*, tomo I, p. 101.

cuarto grado, decisión que estaba en plena contradicción con la doctrina del papado, razón por la cual el Papa tomó partido por la ordenación de indios y mulatos[646]. Son muy conocidos los escándalos que en la sociedad caraqueña provocaron las acciones del obispo Mauro de Tovar (de 1640 a 1654), con su cauda de excomuniones, peleas con gobernadores y religiosos de otras órdenes, con el Cabildo, y con familias. Al lado de estas querellas y posiciones de respaldo o en contradicción con las autoridades gubernativas, está claro que la Iglesia fue, en definitiva, un apoyo al rey, y más que al rey, al orden colonial. A la hora de la toma de importantes decisiones, el obispo o los arcedianos de la Catedral o los prelados de los grandes conventos eran llamados a las juntas o cabildos abiertos a exponer su experiencia y sus puntos de vista.

Sin embargo, la Iglesia no era un ente homogéneo, ni tampoco puede ser asimilada de manera total y permanente, en la vida real, a un supuesto bloque realeza-nobleza-sacerdocio, provisto de todos los privilegios de un sociedad estamental, en la que las cualidades de patrimonio, de sangre y de privanza sumergen el cuerpo social en una lucha permanente, polarizada y desigual entre los de arriba y los de abajo. En la iglesia hay apoyo y hay disenso. En la iglesia, hay subordinación y hay autonomía, cuando no entera discrepancia. En la iglesia hay pobreza y hay vida cómoda. En la iglesia hay virtud y conviven vicios. De inicio, en ese enfoque crítico, vamos a considerar una parte muy bien diferenciada de la Iglesia que es su cuerpo regular, representado en la época colonial por las órdenes misioneras venidas todas de España.

Ya reseñamos en el capítulo de los misiones la labor de las principales órdenes en nuestro territorio. Recordemos, para insistir en lo que se acaba de decir, que su papel poblador fue esencialmente pacífico, que el número de poblaciones fundadas y de indios "sacados de los montes" fue mucho mayor que los arrojados por las empresas puramente conquistadoras, que sus relaciones con el gobierno civil (gobernadores, sus tenientes y corregidores) fueron casi siempre malas y las establecidas con el clero secular, específicamente con los curas doctrineros, no fueron un dechado de compañerismo y solidaridad sino una puja frecuente en que, con cierta frecuencia, cada sector acusaba al otro de mezquindad o falta de celo evangelizador. Insistamos ahora en las difíciles condiciones de todo orden (materiales, físicas, económicas y de seguridad) en que aquellos misioneros, unos pocos en número y muy mal avituallados, adelantaban su labor. Copiemos, a continuación, el

---

[646] *Ibíd.*, tomo I. p. 120.

testimonio de fray Salvador de Cádiz, de las misiones de capuchinos de los Llanos de Caracas, cita extensa pero muy elocuente:

> De todas las referidas partidas se saca en limpio que los indios que se han sacado del monte en estos años [1706 a 1725], son 3.840; los soldados que se han llevado de escolta, son 1.748, los pueblos de misiones que se han fundado, son 10. Todo lo cual ha costado a los misioneros imponderables fatigas, trabajos, contradicciones y costos, pues, como consta de lo referido, raro ha sido el año que no se ha hecho entrada, y algunos años se han hecho dos o tres, en las cuales ha sido necesario ocupar tres o cuatro religiosos. En estas entradas se suelen gastar los dos o tres meses, en los que se padecen trabajos imponderables y superiores a toda fuerza humana, pues, fuera de los malos ratos que ocasiona lo áspero y desagradable del clima, son los penosísimos en los cuales se camina sin senda ni vereda, todo desierto e inculto, lleno de tigres y otras bestias fieras, por donde siempre se va con manifiesto riesgo de la vida; a que se añade los ríos caudalosos e insondables que hay que pasar, las dilatadas lagunas y pantanos que se han de atravesar a pie, con el agua muchas veces a los pechos, siguiéndose después de esto muchas montañas espesas y espinales de donde salimos con los hábitos despedazados, y muy de ordinario nuestras propias carnes; juntándose a esto lo ardiente de los soles que afligen mucho en estas partes; las muchas plagas de garrapatas, mosquitos y otras sabandijas que ni nos dejan dormir de noche ni descansar un rato de día; a que se junta el hambre y necesidad que de ordinario padecemos en semejantes empresas, el temor y susto continuado de cuando somos asaltados y acometidos de los indios bravos o de las fieras de aquellos montes.
>
> Todo lo cual, con otras cosas que no expreso, padecemos en cuantas entradas se hacen para reducir los indios gentiles, porque, como nunca sabemos de cierto el paraje o sitio en que se hallan, no podemos tomar punto fijo en la dirección de las jornadas; y así andamos de ordinario errantes por aquellos montes y buscando siempre lo más áspero y condenso de las montañas, por ser éstos los sitios en donde suelen habitar aquellos bárbaros, huyendo siempre de nosotros y evitando la ocasión de que puedan dar con ellos [...]
>
> Después de conseguidas las licencias de los ministros reales, tres o cuatro meses antes de salir a los llanos es necesario ocupar dos o más religiosos en las prevenciones que han de solicitar para dicha entrada, reclutando la gente que se juzga necesaria para escoltar a los misioneros, de la cual gente unos van voluntarios, por servir a Dios y al rey en esta expedición, y otros, que son los más, van pagados, llevando diez pesos de sueldo cada uno al mes. Y para estos dichos soldados es necesario alquilar una bestia de silla y otra de carga para cada uno, costando el alquiler de cada bestia otros diez pesos al mes. Fuera de lo dicho han de solicitar los religiosos el sustento, víveres y municiones para esta escolta, hasta las armas que han de llevar para la defensa, en caso que sea necesario; de tal suerte que la entrada que menos nos ha costado, no han bajado los costos de cuatro mil pesos, y esto estrechándose a lo más preciso. Y como quiera que los misioneros no tenemos rentas ni posesiones, ni el rey nuestro señor nos libra cosa alguna para estas expediciones, no es ponderable el trabajo y las diligencias que cuesta a los padres operarios el solicitar de la piedad de algunos devotos algo de estos costos, supliendo la mayor parte, por no poderlo hacer los cortos caudales de esta provincia, la divina providencia, de quien cada día experimentamos prodigios y milagros que fuera prolijo referir.
>
> Después de los trabajos padecidos en solicitar las referidas entradas, y en buscar los indios gentiles y sacarlos de los montes, restan todavía las mayores fatigas y aflicciones que se pueden considerar en la población y manutención de ellos, pues se ha de suponer que estos indios, así hombres como mujeres, salen desnudos de los montes, sin más alhajas que sus arcos y flechas, y la primera diligencia que se hace es solicitar el vestirlos, a lo menos con aquel preciso vestuario que pide la honestidad, siendo el género más vil y barato de que se pueden vestir, la coleta y lienzo de algodón, que en estas partes vale la vara de dicho género a tres o cuatro reales de plata, gastándose en cada indio en este primer vestido que se les pone, lo menos tres pesos; con que, si son cien indios los que se sacaron del monte en una entrada, son trescientos pesos los que nos cuesta aquel primer vestuario que se les da, el cual lo más que les dura son tres o cuatro meses. Luego se les ha de dar a cada uno su hacha, que cada una vale en estas tierras cuatro pesos, y demás se les han de dar cuchillos, machetes y otras precisas herramientas para cultivar la tierra, que importarán las dichas herramientas precisas para cien indios más de seiscientos pesos, que, juntos con los trescientos del vestuario, son ya 900 pesos. Después se sigue el haber de mantener a estos indios de carne, maíz y dándoles cada día su ración hasta que ellos puedan ganarlo con su propia industria, la cual, como es tan corta y ellos

tan inhábiles, nos dura siempre este cuidado. A éste se acrecienta el de la formación del pueblo, pues el religioso ha de asistir con ellos al trabajo y él les tiene de dar el modelo para hacer la iglesia y las casas en que tienen de vivir, pues para ninguna de estas cosas tienen habilidad. Síguese a esto el trabajo de haber el misionero de ir con ellos al trabajo de cultivar la tierra, porque, si los deja solos, no hacen cosa alguna. Y, en fin, todo lo que conduce a la vida política y aun natural, les tiene de enseñar el religioso, y éste tiene de ser el maestro para cuantas obras son precisas en el pueblo. Ha de ser el labrador que los ha de curar en sus enfermedades y el padre de familias que les ha de dar cuanto necesitan, pues no tienen otro recurso, y, finalmente, el párroco que con mucha paciencia los tiene de instruir en los misterios de la fe, enseñándoles la doctrina cristiana y explicándosela para que la entiendan. Todos estos trabajos tiene el religioso que padecer muchos años en cada pueblo, porque, como son tan rústicos y tan inhábiles los indios de esta provincia, se pasa mucho tiempo primero que llega habilitarse en la vida política y sociable. Y, después de todos estos afanes y fatigas, llegan algunos españoles poco temerosos de Dios, y con molestias, agravios y malos tratamientos que hacen a los indios, y con persecuciones y calumnias que levantan a los pobres misioneros, son causa que se pierda en un día lo que costó tantos trabajos, sudores, fatigas y sangre a los operarios evangélicos.

Por remedios de estos daños se necesitan especiales providencias y órdenes de Su Majestad, a fin de que los cabildos, justicias y regimiento de las ciudades y villas de las provincias, no embaracen a los misioneros salir con gente de escolta en busca de los indios, antes sí les den a los religiosos el auxilio y ayuda necesaria; y que, después de fundados los pueblos de misiones, no se entrometan las justicias ordinarias de dichas ciudades en el gobierno y disposición de las misiones, no consientan sean molestados los indios en sus pueblos. Y para continuar sin intermisión las entradas a la reducción de los gentiles y conservación de los ya reducidos, se necesita mucho del breve envío de operarios, pues el mucho trabajo que se tiene en la manutención de los indios y en la doctrina que se les da, necesita cada pueblo dos religiosos de asistencia, Y, fuera de estos que están ocupados de instruir y catequizar a los recién convertidos, se necesitan precisamente otros cuatro religiosos que se hallen totalmente desembarazados del cuidado de pueblos para poderse dichos cuatro religiosos ocupar a entrar a los montes a la reducción de los gentiles, y en solicitar la gente que les tiene de escoltar, y los víveres y mantenimientos que tienen de llevar, en cuyas diligencias, como queda dicho, es preciso gastar todo lo más del año. Y, fuera de estos cuatro últimos operarios, se necesitan cuatro más para poder suplir las faltas de los que enfermaren o murieren, pues, como el recurso está tan lejos, primero que llega la noticia a los reinos de España de la falta de religiosos, y primero que se dan las providencias para que pasen a estas misiones, se han experimentado ya en los pueblos y reducciones atrasos irreparables[647].

Huelgan los comentarios, pues aquí están resumidos, con la sencillez del cronista, los problemas que debieron afrontar los misioneros en su labor: tierra áspera, indolencia y hasta agresividad de las autoridades civiles, escasos recursos para los altos costos, apelación a la limosna de algunos, escasez de personal, necesidad de suministro al indio hasta de lo más elemental para vestirse y trabajar. Adviértase, además, que se está hablando, no de las selvas impenetrables de Guayana o del sur del lago de Maracaibo, sino de los parajes cercanos a San Carlos de Cojedes, Turén, Acarigua, Río Tocuyo, Calabozo e incluso de las jurisdicciones de las ciudades de Coro y Barquisimeto.

Puede alegarse que tal panorama no era el soportado por todas las misiones, y que la labor del misionero, en otros parajes, no fue tan sacrificada, penosa y tan llena de miserias como la de los llanos de

[647] Buenaventura Carrocera, *Misión de los llanos...*, pp. 140-144.

Caracas. En ese predicamento, se pone como ejemplo la prosperidad de las misiones de Guayana. En verdad, las misiones de los capuchinos catalanes de Guayana se diferencian de las otras por haber tenido, al menos hasta 1810, cierta estabilidad y coherencia en cuanto a su producción, basada, ante todo, en el hato de ganado vacuno que pudieron desarrollar, en cuanto a sus relaciones con las tribus que lograron reducir (salvo los caribes apoyados por los holandeses) y en cuanto a una red comercial a base de carne, cueros y otros frutos que establecieron con otras provincias e incluso con Trinidad bajo dominio inglés. Pero, semejantes rasgos no permiten arribar a las conclusiones expresadas por el académico Mario Sanoja Obediente en su trabajo *La historia que regresó del frío. Guayana siglo XVIII*, a resumir en los siguientes puntos:

1.- La labor de los capuchinos catalanes representó «la implantación de la modernidad capitalista de la Ilustración, lo cual requería la transformación de las comunidades aborígenes en una fuera laboral entrenada y organizada para la producción de mercancías».

2.- «El comercio entre el oriente de Venezuela y el Principado de Cataluña estaba controlado por una compañía mercantil, la Real Compañía de Comercio de Barcelona, la cual fue fruto de un importante esfuerzo de la burguesía manufacturera-industrial catalana, una de las nacionalidades más progresistas de España».

3.- «El algodón producido en las misiones de la Nueva Barcelona y el que se produciría posteriormente en las de Guayana, habrían contribuido a fundamentar el desarrollo capitalista industrial y comercial catalán en el siglo XVIII».

4.- «En su conjunto el sistema misional de los capuchinos catalanes desarrolló un conjunto de actividades extractivas, productivas y mercantiles, que les permitió en corto tiempo iniciar un importante proceso de acumulación de capitales que competía, quizás con ventaja, con el producido en el norte y el oeste de Venezuela mediante el sistema esclavista de monoproducción encarnado en las plantaciones de café y cacao».

5.- «El sistema misional funcionaba como una empresa de propiedad corporativa, gestionada por un reducido número de misioneros [...]

Gestionaban el negocio, según su expresión, como un fideicomiso en nombre de los indígenas quienes eran sus verdaderos propietarios»[648].

No nos vamos a referir a varias otras afirmaciones no bien sustentadas ni a varios errores cometidos por Sanoja como el de datar el inicio de las misiones guayanesas a comienzos del siglo XVIII cuando en verdad su actividad misionera empezó en 1687, y el de fijar en 28 los pueblos fundados en vez de 52, porque la cifra de 28 es la de los pueblos que subsistían en 1818. Lo más interesante es poner en discusión los 5 puntos anteriores. Digamos, en primer lugar, que las vinculaciones directas entre Cataluña y el oriente venezolano, comprendidas aquí las misiones de Guayana sugeridas por el autor mencionado, parecen no tener la envergadura señalada. En primer lugar, la Real Compañía de Comercio de Barcelona a Indias, creada en 1755 y extinguida en 1785, tuvo, según Tomás Martínez Vara, profesor titular de Historia Económica de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, unos resultados mediocres en su vida efímera[649]. Y la profesora Isabel E. Ruiz A. agrega que la tal compañía no gozó del monopolio de su giro a Santo Domingo, Puerto Rico y Margarita, ampliado a Cumaná en 1761 con registros especiales a Honduras y Guatemala, y tampoco pudo ejercer el corso, de modo que la ausencia de estos dos privilegios la coloca por debajo de la Compañía Guipuzcoana en su importancia comercial. Además, añade Ruiz, los navíos catalanes que llegaban a Cumaná, y no a Guayana, como es de comprender, no fueron frecuentes, y nunca llegaron a uno por año (promedios de 0,6 anual en 1761-1766; de 0,82 anual en 1767-1777, y de 0,75 anual en 1778-1785)[650]. Si era tan escasos los barcos que arribaban a Cumaná, puede deducirse hasta qué punto tan bajo quedaba reducido lo que llegaba de Cataluña a Tierra Firme si se sabe que la exportación directa de los puertos catalanes a la América representaba, en 1778, el 11% del total de las exportaciones españolas a América[651]. Por último, señala Isabel Ruiz que uno de los aspectos positivos que tuvo la presencia de la naviera catalana fue, contradictoriamente a lo expresado por Sanoja, la apertura de créditos a

---

[648] Estas citas son tomadas de Mario Sanoja Obediente, *La historia que regresó del frío. Guayana siglo XVIII*, 5 de agosto de 2004, Internet.

[649] Tomás Martínez Vara, "Algunas reflexiones sobre el comercio colonial", en *Cuadernos de Estudios Empresariales*, Nº 4, Madrid, Editorial Complutense, 1994, pp. 193-233. Internet.

[650] Isabel E. Ruiz A., "La Gobernación de Cumaná dentro del giro de la Real Compañía de Comercio de Barcelona (1761-1785)", en revista *Mañongo*, Valencia, Universidad de Carabobo, Nº 26, 2006, pp. 41-50, Internet: servicio.cid.uc.edu.ve/postgrado.

[651] Según Antonio García-Baquero González, en "Comercio colonial y producción industrial en Cataluña a fines del siglo XVIII", en Nadal y Tortilla, eds., *Agricultura, comercio colonial y crecimiento económico*, pp. 268-294, citado por John Lynch, *Ob. cit.*, p. 201.

los cultivadores del cacao oriental[652]. Hay otras dos afirmaciones de Martínez Vara que merecen ser discutidas a fin de arribar a una mejor comprensión del comercio americano-catalán: una, que es un tópico más la pretendida alza de las economías regionales españolas a raíz del momento en que sus puertos entraron en los circuitos del comercio colonial (Sevilla, Alicante, Gijón, Barcelona, Santander, La Coruña, Málaga y Cartagena, en vez del solo puerto de Cádiz); y la otra, que es polémico el asunto de si el libre comercio con América desarrolló o no la industrialización catalana[653].

Recordemos, de seguidas, el interesante documento del padre Eugenio de Alvarado (ver atrás el capítulo de las misiones de Guayana), donde este misionero del hato de la Divina Pastora, hacia 1755 narra con muchos detalles en qué consistían los ingresos económicos de la misión), porque allí queda aclarado de manera rotunda que el comercio misionero de Guayana no contenía ningún afán de lucro para los misioneros, información que hace caer por su peso la caracterización de una supuesta actividad capitalista que ellos adelantaban en sus lugares. El pretendido sesgo corporativo misional no era otra cosa que la creación de una especie de fondo común para paliar la crónica escasez de recursos, no sólo para cubrir los salarios de los religiosos que muy irregularmente llegaban desde Caracas, sino para levantar nuevas obras y mantener las construidas, fondo donde entraba lo aportado por las ventas de los frutos de las misiones y algún estipendio que caía de vez en cuando. La cifra de 32.000 pesos que se adeudaba a los religiosos en 1771 y que aumentó a 55.843 pesos entre 1776 y 1800 basta para medir el cariz precario del giro misional. La famosa Procura (presupuesto) citada por Sanoja, arrojaba en 1793 un déficit de 3.395 pesos. ¿Cómo es posible hablar de una acumulación de capitales en Guayana que supera el de los vastos cacaotales de Caracas, cuenca del río Tuy, costas de Choroní, cuenca del río Yaracuy, riberas del lago de Maracaibo y hasta San Cristóbal. En cuanto al algodón, casi no se menciona en la lista de productos comerciables de aquellas misiones, a diferencia de la carne fresca y salada, los cueros, sebo y, en menor cantidad, maíz, casabe. Es simple habladuría decir que, a diferencia de las haciendas de cacao, las tierras y los implementos de todo tipo de las misiones de Guayana eran propiedad de los indios, a través de la figura del fideicomiso, cuando todos los documentos hablan del carácter asalariado del trabajo de los indios, y esclavista de los negros africanos, que también fueron mano de obra en esas misiones.

---

[652] Isabel E. Ruiz A., *Ob. cit.*

[653] Tomás Martínez Vara, *Ob. cit.*, p. 210, 212.

Ahora bien, se dirá que el rol económico-social de los misioneros era muy particular porque nunca llegaron a disponer de los ingentes recursos económicos que acumularon las iglesias, los conventos y, en general, el clero secular. Es aquí donde el historiador se topa con una aseveración bastante difundida, tanto que ha adquirido categoría de verdad: "La iglesia colonial fue el poder financiero más grande de su época", o bien, "La iglesia colonial fue el banco de la época". Tomada así, literalmente, los partidarios de la concepción materialista de la historia afirman que fue este poderío económico lo que llevó a la Iglesia a ejercer su influencia dirigente en la estructura social. En otras palabras, la iglesia colonial formó parte de las clases dominantes a causa de la inmensa riqueza que pudo atesorar.

Nuestra crítica de tales asertos parte de un punto de vista completamente opuesto. Fue por su papel de portadora, difusora y cuna de la conciencia religiosa de la época, por lo que la iglesia pudo tomar en sus manos la función muy particular de manejar ingentes recursos económicos, destinados a mantener y preservar esa misión evangélica, imprescindible para que toda persona pudiera vivir a tono con la mentalidad, la moral, la religiosidad y la vida social en general. Y a estas consideraciones hay que añadir otra más: la riqueza de la iglesia no era la riqueza de los eclesiásticos. Si los blancos criollos debían sus privilegios sociales a su patrimonio y su sangre, si las haciendas y los esclavos que poseían eran propiedad privada de ellos y de sus hijos, y si los gobernadores y sus tenientes, los justicias y sus tenientes eran el poder colonial porque sus cargos provenían del poder real, y en el ejercicio del cargo adquirían o mejoraban su calidad de políticos y su patrimonio material, casi siempre orientados hacia peldaños más altos en el mundo de la política y de los negocios, en cambio, los eclesiásticos, en cuanto a la esfera de la propiedad privada productiva, eran simples administradores de los bienes bajo su custodia. El sacerdote Juan Félix Jerez de Aristeigueta era dueño de haciendas de esclavos y otras propiedades de mucho caudal en el Tuy, Caracas y otros lugares porque las heredó de su familia y no porque era cura de la catedral de Caracas. ¿Quiere decir esto que la iglesia no tenía bienes? No, al contrario, la iglesia, como institución, disponía de bienes. ¿Cuáles eran? Tierras, prados estancias y hatos, con casas, esclavos, aperos, ganado. Y los archivos donde reposan las escrituras de los censos, capellanías y aniversarios. Tales bienes se dividen en inmuebles o raíces (feudos, predios, casas, rentas, animales, censos, usufructos por largo tiempo, y semejantes) y bienes preciosos (vasos, joyas de oro y plata, casullas, hatos de ganado, esclavos). Ningún eclesiástico, prelado, cabildo eclesiástico, ni cura beneficiado puede enajenarlos por su cuenta, es decir, transferir su dominio a otra persona, sin que procedan

las disposiciones del derecho y bulas pontificias. Para enajenar un bien de la iglesia es necesaria la licencia de la sede apostólica, del obispo, de Su Majestad, del capítulo y de los curas, y cuando concurran circunstancias de necesidad, utilidad, incomodidad y piedad[654].

Entonces, queda claro que los bienes de la iglesia no pueden beneficiar a ninguno de sus miembros, individualmente hablando. Pero, ¿a quién beneficiaban las rentas generadas por los censos, cómo enfocar críticamente los censos, capellanías, obras pías, cofradías y otras instituciones manejadas por la Iglesia, provistas de un a veces inmenso tesoro? Es una tarea compleja. Pareciera evidente que con tales recursos, más los derivados de los diezmos, primicias y donaciones, la institución clerical se encontrase nadando en un océano de oro y plata. La clásica visión del prestamista de vientre hinchado y mirada torva acude a nuestra mente cuando se dice que las iglesias y conventos de la colonia, no sólo por su cerrazón monacal y la monotonía de su prédica celestial, sino también por las enormes cantidades de dinero que llenaban sus arcas, vivían el privilegiado mundo de la holganza y la hartura. Para apartarse de tales tópicos, el investigador necesita dos condiciones y, así, poder entrar provisto de un criterio objetivo y crítico en el análisis de las funciones crediticias de la Iglesia: primera condición, saber comprender el espíritu de la época, eso que pedía Fernand Braudel (1902-1985) para comprender a Felipe II: pensarlo en el tiempo en que vivió y en las reglas que, concientemente o no, recibió de ese tiempo[655]; y segunda condición, analizar la documentación original en todas sus facetas. De seguidas, el lector verá un intento de interpretar la función crediticia de la Iglesia colonial venezolana desde un punto de mira más objetivo.

Comencemos por ubicar de dónde partía la corriente que llevaba a las arcas de templos, conventos y sociedades católicas unas masas tan considerables de bienes.

Los censos, las capellanías y las obras pías de la Iglesia

En Venezuela, la académica Ermila Troconis de Veracoechea, junto con sus colaboradores Gladis Veracoechea y Euclides Fuguett ha condensado en tres tomos una muy detenida investigación sobre los censos eclesiásticos (*Los censos en la iglesia colonial venezolana (Sistema de préstamos a interés)*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1982), a lo que deben agregarse dos tomos sobre las obras pías. De estas obras tomaremos varios ejemplos al

---

[654] Manuel Gutiérrez de Arce, *Ob. cit.*, tomo II, título X, pp. 210-212.
[655] Fernand Braudel, *Carlos V y Felipe II*, Madrid, Alianza Editorial, 1999, p. 162.

respecto, algunos de ellos cotejados adicionalmente con los documentos que reposan en el Archivo Arzobispal de Caracas.

También, la historiadora Carmen Adriana Ferreira Esparza, de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, ha realizado densas investigaciones sobre el tema ("El crédito colonial en la provincia de Pamplona-Nueva Granada: usos del censo consignativo", en revista *Signos Históricos*, de la Universidad Industrial de Santander, Nº I.1, junio de 1999, pp. 59-83. Internet y también es suyo el trabajo *La economía espiritual entre lo terrenal y lo celestial. Pamplona. Siglo XVIII*. Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2001. Internet). Y cita a los siguientes historiadores que se han ocupado del asunto: Germán Colmenares (1983), Arnold Bauer (1983, 1986), Frederick Schwaller (1984), y Asunción Lavrin (1985, 1986), entre otros. Lamentablemente, no tuvimos oportunidad de consultarlos.

En México destacan los nombres de María del Pilar Martínez López-Cano, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México (Cf. "El crédito eclesiástico en Nueva España", revista *América Latina en la Historia Económica*, Nº 6, julio-diciembre de 1996. Internet). Y, sobre todo, Gisela von Woseber, quien fue presidenta de la Academia Nacional de la Historia de México (Cf. "La función social y económica de las capellanías de misa en la Nueva España del siglo XVIII", en revista *Estudios de Historia Novohispana*, www.ejournal.unam.mx/historia_novo).

Ermila de Veracoechea contabilizó 584 expedientes en el Archivo Arzobispal. Por su parte, Carmen Adriana Ferreira Esparza reunió 1.313 expedientes de los años 1700 a 1760. Y Gisela von Woseber examinó 1.785 registros pero de capellanías solamente, del siglo XVIII.

Pasemos, entonces, a formular algunas definiciones y a puntualizar algunos conceptos, a fin de despejar, hasta donde se pueda, las dudas y confusiones que a veces surgen en torno a una figura que desde el punto de vista jurídico está obsoleta y ya completamente suprimida. Siguiendo a la historiadora Carmen Adriana Ferreira Esparza, de la Universidad Industrial de Santander, Colombia, en su muy documentada y casi exhaustiva investigación sobre el crédito colonial en la provincia de Pamplona, de la Nueva Granada, se puede definir el censo como un contrato mediante el cual una persona o un ente, llamado **censualista**, adquiere el derecho de percibir de otro, llamado **censuario**, o censuatario, una pensión anual, o rédito, en virtud de haberle entregado a ese censuario una cosa, o dinero, que genera aquella pensión anual, estimada casi en la generalidad de los casos en

un 5%. En los censos eclesiásticos, el censualista es la Iglesia, y el censuario puede ser un hacendado, o un comerciante o alguna entidad colonial, como se verá luego.

Existen dos clases de censos: el censo de préstamo, y el censo de gravamen. En el censo de préstamo, el censualista entrega al censuario una cantidad de dinero, y este censo se llama censo consignativo, o bien entrega un bien, y este censo se llama censo enfitéutico. Y el censo de gravamen se llama así cuando una persona adquiere un bien ya sometido a censo y se convierte, por consiguiente, en el nuevo censuario de dicho censo, al responsabilizarse de la deuda ya establecida por el viejo censo.

Ejemplo de censo de préstamo consignativo es éste: doña Francisca de los Santos Chacón y su hijo Andrés Quintero, reciben 1.000 pesos de préstamo al 5% anual, otorgado por el convento de la Concepción, sobre la base de una fianza de su hacienda de cacao en el valle de San Esteban, más unas tierras en el valle de San Diego con 340 árboles de cacao y una hacienda de trapiche, con cañaverales, fondos y aperos[656].

Ejemplo de censo de gravamen es éste: En Mérida, el 6 de diciembre de 1621, el capitán Alonso Ruiz Valero cede, renuncia y traspasa por venta real, previa licencia de los eclesiásticos del convento de San Agustín, un solar que tiene precio de 100 pesos, al médico Francisco Díaz Sueyro, quien *se da «por contento y pagado sobre renuncia la pecunia y leyes de la entrega y paga»*, en vista de que pesa sobre dicho solar un censo de 100 pesos, con renta de 5 pesos al año, a favor del mencionado convento. Es un censo de gravamen porque el médico Díaz recibe el solar y no entrega al médico Díaz ningún dinero en razón de haber asumido el censo anterior[657].

No logramos encontrar un ejemplo de censo de préstamo enfitéutico.

En fin, el censualista presta una cantidad de dinero o un bien al censuario, y éste se obliga a entregar una pensión o rédito anual, y ofrece, además, como fianza del préstamo, una hipoteca de garantía. Se da el nombre de principal, al dinero que se presta en el censo, y se da el nombre de rédito, renta, pensión o canon, al interés anual que genera dicho principal.

---

[656] Ermila Troconis de Veracoechea, *Los censos de la iglesia*, tomo II, p. 80.

[657] Enrique Obediente Sosa, *Documentos para la historia lingüística de Mérida, (Siglos XVI-XVII)*, Archivo General del estado Mérida, Protocolos, Escribanías, Tomo 7, ff.174r-174r. Internet.

Hay censos redimibles (o al quitar) y censos irredimibles (o perpetuos). De los 588 censos consignativos otorgados en la provincia de Pamplona durante los primeros 60 años del siglo XVIII, el 36.6% se redimió en menos de 6 años[658]. Las capellanías que, como veremos adelante son una suerte de censo, tienen carácter perpetuo.

Examinemos el siguiente ejemplo:

> Sepan cuantos esta pública escritura de imposición de censo y tributo al redimir y quitar vieran, cómo nos Pedro Ramón Días como principal deudor y obligado, y don Nicolás Tachón como su fiador y principal pagador, vecinos que somos ambos de esta ciudad de Santiago de León de Caracas juntos de mancomún los dos de uno y cada uno de nos por un y por el todo insolidum renunciando como expresamente renunciamos [*etc., etc.*], yo el dicho Pedro Ramón Días digo que por cuanto habiendo a mi noticia llegado estaban para imponerse a censo tributo redimible cien pesos de a ocho de principal pertenecientes a la cofradía del Santísimo Sacramento en la iglesia ayuda de parroquia del Señor San Pablo de esta ciudad, los mismos que legó a dicha cofradía Francisco de Toledo, difunto vecino que fue de esta ciudad, y por hallarme con necesidad de dichos cien pesos presenté escrito ante el Señor Juez Provisor y Vicario General de todo este obispado pidiendo fuese servido mandarme dar la dicha cantidad al expresado censo, nominando finca y fiador para su seguro, de que se mandó dar vista a los mayordomos de dicha cofradía y mediante a allanamiento que dé sus respuestas constan que dicho Señor Juez eclesiástico se me mandaron dar dichos cien pesos al expresado censo como todo es expuesto del despacho que se me libró, el cual inserto a la letra es del tenor siguiente:
> Señor Provisor y Vicario General. Pedro Román Días, vecino de esta ciudad en la mejor forma y debido haya lugar parezco ante V. y digo que a mí noticia ha llegado están para imponerse a censo y tributo redimible cien pesos de a ocho de principal pertenecientes a la cofradía del Santísimo Sacramento Señor San Pablo de esta ciudad, los mismos que legó a dicha cofradía Francisco de Toledo, difunto, y mediante haber tengo necesidad de dichos cien pesos se ha de servir V. mandar se me den a dicho censo que estoy pronto a otorgar la escritura de su imposición situándolos sobre la casa de mi morada que tengo en esta ciudad, de tapias cubierta de teja, que linda [*aquí van explicados todos los linderos*] sobre la cual dicha casa sólo tengo cargado un censo de ciento y cincuenta pesos de principal que pertenecen al convento de religiosas de la Inmaculada Concepción de esta ciudad, y en lo demás es libre, y doy por mi fiador a don Nicolás de Tachón, vecino de esta ciudad, persona notoriamente abonada que se obligará conmigo a mancomún expositum en dicha escritura de imposición, por tanto a V. pido y suplico se sirva admitirme dicha finca y fianza y bajo de ellas mandarme dar los dichos cien pesos a censo y el recaudo necesario para el otorgamiento de dicha escritura precediendo autorización del mayordomo de dicha cofradía[659].

En la generalidad de los casos, vamos a referirnos al censo consignativo, es decir, a la modalidad censual caracterizada por la entrega a préstamo de cierta cantidad de dinero. La historiadora Carmen Adriana Ferreira Esparza hace suya la definición condensada de censo consignativo que da el historiador Enrique Florescano: «censo consignativo es un préstamo en dinero protegido por una hipoteca». Agrega que se convirtió en América en el mecanismo más utilizado por las instituciones eclesiásticas, que encontraron en el sector financiero el

---

[658] Carmen Adriana Ferreira Esparza, *El crédito colonial...*, p. 66

[659] Carpeta *Censos referentes a convento Concepciones, de 1692 a 1727*, 13 documentos, Caracas, Archivo Arzobispal, 1727-1728, f. 95.

mecanismo más rentable y seguro para invertir su riqueza. Y añade que la clara vocación rentística de la iglesia la llevó a ser el banco de la época colonial, o sea, el principal Banco Agrícola[660].

¿Qué hace una persona con el dinero obtenido a censo? Puede usarlo para completar el capital destinado a compra de casas y haciendas, o mejorar las que tiene. Puede usarlo para pagar la dote de un familiar que ingresa en un Convento. Puede usarlo para mejorar la hacienda o casa. Puede usarlo para pagar una deuda o para comprar esclavos, siempre caros. Pero, también lo hace con el objeto de ayudar a una cofradía o a una iglesia en sus actividades específicas. Y hay casos en que las personas que han disfrutado de un censo solicitan otro para redimirlo, porque tienen alguna operación en mientes con el bien hipotecado, sea una hacienda, tierra, casa, ganado, o tienda. Al pagar el préstamo, ese dinero va, casi inmediatamente, al convento o a la cofradía que han sido el censualista, y es entonces cuando el convento o la cofradía lo presta a otra persona que haya hecho solicitud.

Todo censo debía ser aprobado por el arzobispo, o el obispo, con la intervención del juez provisor y vicario general, el anotador de hipotecas, el anotador de censo, y uno que otro funcionario. Además, debía contar con el respaldo hipotecario de bienes inmuebles, como casas, terrenos, haciendas, instrumental, o muebles, como ganado o esclavos. Por último, era necesario el respaldo de un fiador[661]. Las operaciones a censo y tributo redimible se hacían efectivas luego de aprobarse la solicitud de la licencia correspondiente ante la superioridad eclesiástica.

En varios documentos aparece la calificación de señorío, usada para designar a las diversas personas que reciben un solo censo, dividido en las respectivas porciones.

En casi todos los documentos, se hace referencia a un fiador.

Los censos pueden traspasarse a otras personas. He aquí un ejemplo:

> Juan de vega Arredondo, mayordomo administrador de las rentas del Convento de Religiosas de la Inmaculada Concepción de esta ciudad, ante V.S. parezco y Digo: que se me ha dado traslado de un escrito presentado por Francisco González Guanche, vecino de esta ciudad en que se allana al reconocimiento del censo de dos mil y seiscientos pesos que tuvo a su cargo Luis de Azevedo, su suegro ya difunto, sobre lo cual se ha se servir V.S. dé mandársele de vista a las RR. MM. Abadesa y Discretorio de dicho convento. Y por lo que mira a los réditos que se estaban debiendo de dicho

[660] Carmen Adriana Ferreira Esparza, *El crédito colonial*..., pp. 59-83.
[661] Ermila Troconis de Veracoechea, *Los censos*..., tomo I, p. 22.

> censo es así haberme pagado y satisfecho íntegramente el dicho Francisco González Guanche todo lo que se estaba debiendo hasta el día dos de abril de este presente año en que se cumplió el último plazo mediante lo cual a V.S. pido y suplico se dé mandar otra vista a las RR. MM. Abadesa y Discretorio por ser de justicia que pido y en lo necesario juro (Firma). [Trae fecha 3 de septiembre de 1731, pero el censo original es del 28 de abril de 1692][662].

Además, de los censos otorgados por la iglesia, hay los otorgados por particulares. Ferreira, en Pamplona, estudió 167 censos de esa condición, que sumaron un valor de 145.114 pesos, de los cuales 47.549 pesos correspondían a censos consignativos, 55.185 a censos enfitéuticos, y 42.380 a censos de gravamen[663].

¿Qué son las capellanías? Las capellanías son, según afirmación de Arnold Bauer, citada por Ferreira, unos censos consignativos, simplemente. El sínodo diocesano habla de la capellanía como si fuera un legado pío[664]. Citemos la definición que hace Ferreira:

> Es la fundación hecha por una persona mediante la vinculación de un capital o de un bien, para que con su interés o renta se remunerara a un capellán que quedaba obligado a levantar ciertas cargas espirituales, por lo común la celebración de un determinado número de misas anuales o en periodos fijos por el alma del fundador, sus deudos y las almas del purgatorio[665].

Por tal razón, a veces se las denomina capellanías de misa.

Las capellanías tenían una doble finalidad: la salvación del alma de su fundador, y la generación de una renta para mantener a perpetuidad a un capellán (en el entendido de que si muere un capellán, o renuncia, se elige a otro). Se clasificaban en colativas (o eclesiásticas) y laicales (o profanas). Son colativas las constituidas con autoridad del obispo, y para ejercerlas es indispensable la colación o restitución canónica a presbíteros o que estén casi por ordenarse. Son profanas, también llamadas mercenarias, aquellas en que no interviene el obispo, no se emplean para ordenar a un sacerdote y dependen de la justicia civil. En el caso de México, la mayoría fueron colativas, como lo demuestra Gisela von Woseber al decir que de 78 capellanías que especificaban su condición colativa o laica, entre las 1.785 que estudió, 54 fueron colativas y 24, laicas[666].

---

[662] Carpeta *Censos referentes a convento Concepciones, de 1692 a 1727*, 13 documentos, Caracas, Archivo Arzobispal, Nº 1, f. 23.
[663] Carmen Adriana Ferreira Esparza, *El crédito colonial...*, p. 66.
[664] Manuel Gutiérrez de Arce, *Ob. cit.*, tomo II, p. 223
[665] Carmen Adriana Ferreira Esparza, "La economía espiritual...", p. 25.
[666] Gisela von Woseber, *Ob. cit.* p. 136.

También, las capellanías pueden ser líquidas (cuando se fundan mediante la entrega de dinero), dotal (cuando se fundan con la entrega de un bien), y censuadas (cuando se fundan mediante la imposición a censo de un bien)[667]. Según Gisela von Woseber, en México se fundaron con dinero en efectivo 993 capellanías, de las 1.785 estudiadas, es decir, el 55.63%[668].

Algo parecido dice Ermila Troconis de Veracoechea, cuando afirma que las capellanías se sostienen con los intereses de los préstamos a censo, invertidos por las iglesias y las cofradías, o del dinero que se entregaban con ese fin. Y agrega, que a veces, dicho interés iba dirigido también al sostenimiento de fiestas, misas, lámparas y otras ceremonias y devociones del culto.

Además del fundador de la capellanía existe su patrón, es decir, quien vela por el exacto cumplimiento de la misma. Se llama patrón de la capellanía a quien vigila el cumplimiento de la misma. Por ejemplo, en la capellanía fundada por don Lázaro Galindo y Sayas, el patrón fue don Francisco Domingo Galindo y Sayas. Su función se advierte en el siguiente caso, cuando el capellán se ausenta para Guadalajara y propone como su sustituto al presbítero licenciado don Juan Francisco de la Parra, quien recibe la autorización correspondiente el 4 de mayo de 1692 de manos del obispo de Caracas, don Diego de Baños y Sotomayor, al éste ordenar que se proceda a la colación y canónica institución a fin de ejercer sus actividades espirituales, religiosas y administrativas y pueda gozar de los beneficios económicos[669]. Semejante derecho de patronato no se puede vender ni transferir, por ser de orden espiritual; ni tampoco el patrono puede recibir dádiva alguna, bajo sospecha de simonía[670].

¿De qué manera podía sostenerse un capellán al ejercer una capellanía? Se calculaba en 150 pesos al año la congrua de sustentación (renta mínima para vivir con dignidad) de quien va a ordenarse, cantidad que corresponde a 100 misas al año (porque cada misa da, ordinariamente, una limosna de 12 reales), de modo que el capellán podrá disponer de tiempo para decir otras misas, aunque debe quedar claro que por una misa no puede recibir sino un solo estipendio[671]. Ahora bien, para el caso de México, Gisela von Woseber encontró que el 75% del monto de las capellanías oscilaba entre 2.000 y 3.000 pesos,

---

[667] Carmen Adriana Ferreira Esparza, "La economía espiritual…", p. 35.
[668] Gisela von Woseber, *Ob. cit.*, p. 136.
[669] Ermila Troconis de Veracoechea, *Los censos...*, tomo II, p. 44.
[670] Manuel Gutiérrez de Arce, *Ob. cit.*, tomo II, p.261-262.
[671] *Ibíd.*, p. 257-259.

cantidad que generaba una renta entre 100 y 150 pesos, suficiente para el sostenimiento del capellán[672]. En la recopilación de Ermila de Veracoechea sobre los censos, tomamos al azar 26 capellanías, de las cuales sólo 9 (35%) montaban entre 2.000 y 3.000 pesos. Por ser tan pequeña la muestra, nos abstenemos de hacer cualquier conclusión.

Muchas de las capellanías investigadas por los historiadores son fundadas por blancos criollos, generalmente en el momento de redactar sus testamentos. En México, en el siglo XVIII el 83% de las capellanías se fundaron en vida del fundador y sólo el 17% mediante testamento[673].

Ermila de Veracoechea cita el caso de una arboleda de cacao con 500 matas en el valle de Tácata, propiedad del pardo libre Francisco José Urbina, hijo de la morena libre María Petronila Urbina, hipotecada en 1765 por censo de 100 pesos a favor de Nuestra Señora de Altagracia[674]. Y también cita a Juliana de Ochoa, morena libre de Macarao, fundadora de una capellanía con sus bienes, que son rematados a su muerte por 107 pesos, en 1753. El capellán es el presbítero don Francisco Gutiérrez[675]. En fin, la historiadora de México Pilar Gonzalbo Aizpuru, en su reseña que hace de otro libro, que no hemos podido leer, de Gisela von Woseber, titulado *Vida eterna y preocupaciones terrenales. Las capellanías de misa en la Nueva España, 1700-1821*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1999, avanza un comentario a lo escrito por la von Woseber y dice que «tanto los fundadores como los capellanes pertenecieron a todos los grupos y a todos los niveles socioeconómicos, afirmación que puede aceptarse con la reserva de que no eran muchos los novohispanos que disponían de caudales de 1.000 pesos en adelante. El monto del mínimo capital necesario para dotar la capellanía excedía la capacidad de modestos artesanos o empleados, pero estaba al alcance de pequeños propietarios, burócratas y comerciantes. Ciertamente, la fundación de una capellanía no era privilegio de la élite, sino que estaba al alcance de grupos medios, ya fueran criollos, mestizos, indios o mulatos»[676].

La propia von Woseber ha afirmado que en el terreno financiero las capellanías fueron una fuente de crédito, pues sus capitales «estimularon la economía novohispana ya que contribuyeron a financiar

---

[672] Gisela von Woseber, *La función social y económica...*, p. 125.
[673] *Ibíd.*, p. 136.
[674] Ermila Troconis de Veracoechea, *Los censos...*, tomo I, p. 221.
[675] *Ibíd.*, tomo II, p. 377.
[676] Pilar Gonzalbo Aizpuru, reseña en revista *Estudios de Historia Novohispana*, www.ejournal.unam.mx/historia_novo/ehn/EHNO1608, p. 173.

diversas ramas de la economía», tales el comercio, la agricultura, la minería y la industria textil[677].

Hechas unas cuantas definiciones y precisiones sobre el tema, entremos a analizar los datos concretos de numerosos censos en estas tierras, que figuran en la copiosa obra de tres tomos, arriba citada, pacientemente acumulados por la académica Ermila Troconis de Veracoechea y sus colaboradoras, según la consulta de los expedientes que reposan en el Archivo Arzobispal de Caracas (AAC), donde hay 79 carpetas de 750 folios manuscritos cada una, para un total de 60.000 folios, o sea, 120.000 páginas. Hacemos una muy incompleta enumeración de aquellos casos que en dicha obra están mejor explicados, apuntalados algunos por la consulta directa que hemos hecho en la documentación del citado archivo.

Don José de Vargas recibe un censo de 250 pesos, del convento de la Concepción. Fiador: don Diego Blanco Infante. Finca: una casa, con el gravamen de reconocer un censo sobre ella. Año: 1721. Curso: El Mayordomo del Convento pide el cobro de los réditos y se decide ejecutar[678].

El licenciado Don Andrés Núñez, clérigo presbítero cura de Maiquetía, recibe un censo de 2.000 pesos, del convento de la Concepción, sobre una hacienda de cacao, tierras baldías y 6 esclavos que compró en el valle de Chichiriviche por 4.000 pesos que dejaron en su poder para que los reconociese a censo y tributo redimible a favor de diferentes señoríos, entre ellos, las monjas del monasterio de la Concepción, a quien pertenecían 2.000 pesos. Fiador: don Lorenzo Hermoso de Mendoza. Año: 1721[679].

Doña Francisca de los Santos Chacón y su hijo Andrés Quintero reciben un censo de 1.000 pesos, del convento de la Concepción, sobre una hacienda de cacao en el valle de San Esteban, unas tierras en el valle de San Diego con 340 árboles de cacao y una hacienda de trapiche, con cañaverales, fondos y aperos. Fiador: Juan José Quintero. El mayordomo y administrador del convento, don José de la Sierra, ha notificado que los censuarios deben 8 años de rédito, o sea, 400 pesos. Año: 1727[680].

Don Manuel de Uribe tiene un censo de 3.000 pesos, del convento de la Concepción. Finca: hacienda en el valle de Cata con 5.000 árboles de cacao, 15 esclavos y casa de vivienda. Debe de réditos 4.957 pesos. Los deudos solicitan prórroga del remate. Año: 1728[681].

Juan Francisco de León reconoce censo de 1.000 pesos de una capellanía fundada por el alférez Manuel de Quintana. Fiador: Nicolás Cristóbal de León. Finca: 40 fanegadas de tierra en el valle de Tapipa, sus casas en la plazuela del templo de Nuestra Señora de Candelaria en Caracas, y hacienda de 15.000 árboles de cacao en el valle de Panaquire, sobre la que pesa un censo de 200 pesos a favor del convento del

---

677 Gisela von Woseber, *Ob. cit.*, p. 132.
678 Ermila Troconis de Veracoechea, *Los censos…*, tomo I, p. 77.
679 *Ibíd.*, tomo I, p. 77.
680 *Ibíd.*, tomo I, p. 80.
681 *Ibíd.*, tomo I, p. 82.

Glorioso Santo Domingo. Los hijos de León, Juana Petrona y Baltasar de León, como herederos suyos, no pueden reconocer el censo porque los bienes están confiscados por el Rey, y no los tienen en su poder[682].

Francisco José Urbina, pardo libre, hijo de María Petronila Urbina, morena libre, recibe un censo de 100 pesos de la iglesia Nuestra Señora de Altagracia, sobre una arboleda de cacao con 500 matas en el valle de Tácata. Año: 1765[683].

Diego Jacinto Xedler recibe un censo de 500 pesos de la parroquia San Pablo, por capellanía de los curas de dicha parroquia, para ser utilizado en la fundación de una arboleda de cacao en Taguaza. Año: 1788[684].

Don José de Alvarenga recibe un censo de 1.700 pesos. Se trata de un censo de gravamen pues estaba a favor de una capellanía fundada por Juan Aguilar. Es sobre 2.000 árboles frutales y 2 esclavos de su hacienda en valle de Charallave. Año: 1723[685].

El provincial don Antonio Blanco y Uribe traslada en venta a su hermano don Miguel, hacienda y trapiche de caña dulce, con todas las tierras del valle de Izcaragua, provisto de 12 tablones de caña dulce de todos tamaños y calidades, una casa de vivienda, una casa de trapiche, pero tiene que reconocer los siguientes censos que pesan sobre dicha hacienda desde cuando la compró al presbítero bachiller don Francisco Rodríguez de la Madrid: 2.110 pesos (del licenciado don Juan de Acosta), 150 pesos (de la cofradía del Apóstol San Pedro), 2.000 pesos (del presbítero y licenciado don Ángel Bello). Total: 4.260 pesos. A esto hay que agregar más de 2.000 pesos del convento y religiosos de Nuestra Señora de la Merced, pero es un censo que estaba cargado a una hacienda y trapiche en el valle de Catia, en razón de haberlo comprado a don Juan Antonio López y su esposa doña Úrsula Teresa de Landaeta, aunque, de todas maneras, dicha carga la traslada también a la hacienda de Izcaragua. Fecha: 19 de agosto de 1756, ante escribano público[686].

Don Diego Moreno Villavicencio, de San Carlos de Austria, asume un censo de 1.000 pesos de los fondos económicos propiedad de la cofradía de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de la iglesia parroquial de la villa de San Carlos de Austria, con la garantía de su casa, otra casa en Orupe, 3 almudes de sembradura, 250 vacas, 700 reses, 1 burro, 100 yeguas, 100 caballos, en Apure. Fiadores: don Pedro Noda y doña Agustina Sosa; don Lorenzo de Luna y doña Rosa María Moreno. Fecha: 3 de diciembre de 1765[687].

Don Marcos López, en 1774, fundó una capellanía, con 100 pesos de principal, para que con sus réditos se dijesen misas rezadas por su alma[688].

Doña María de Carrasquer funda una capellanía para que con sus réditos se oficien 100 misas rezadas, anualmente, en las iglesias de Catedral, Candelaria y San Mauricio. Es su marido, don Juan Bautista Navarro quien, en cumplimiento de lo testado, impone a censo 1.500 pesos, que lo recibe el capitán don Diego Vásquez de

---

682 *Ibid.*, tomo I, p. 99.
683 *Ibíd.*, tomo I, p. 221.
684 *Ibíd.*, tomo I, p. 222.
685 *Ibíd.*, tomo I, p. 255.
686 *Ibíd.*, tomo III, p. 42.
687 *Ibíd.*, tomo III, p. 113.
688 *Ibíd.*, tomo I, p. 487.

Escobedo y su esposa Doña Ana de Mercadillo, quienes ponen como fianza todos los bienes de propiedad. Documento de 30/1/1699[689].

Doña Ana Correa de Benavides dispone en su testamento que se funde una capellanía de 2.000 pesos, para que se oficien misas con sus réditos. Ella designa capellán a uno de sus nietos que se va a ordenar de sacerdote. Nombra albaceas y ejecutores del testamento a su yerno y a un hijo. El obispo, en vista de que todavía no se ha ordenado ningún descendiente de ella, nombra a un capellán interino. 1699[690].

Las capellanías que tiene a su cargo don Francisco Salcedo y Quintanilla, clérigo de primera tonsura, sirven para obtener la congrua suficiente que le permitan el ascenso a las sacras órdenes del presbiterado. 1697[691].

El patrón de la capellanía fundada por Don Lázaro Galindo y Sayas es don Francisco Domingo Galindo y Sayas. Éste, cuando su capellán estuvo ausente en Guadalajara, Nueva España, propuso para ejercerla al presbítero licenciado don Juan Francisco de la Parra. El obispo de Caracas, don Diego de Baños y Sotomayor, recibe la solicitud el 4 de mayo de 1696, y nombra a Parra propietario de la capellanía, por lo que ordena que se proceda a la colación y canónica institución, a fin de que ejerza las actividades espirituales, religiosas y administrativas y pueda gozar de los beneficios económicos de dicha capellanía[692].

El obispo Diego de Baños y Sotomayor, con fecha 18 de noviembre de 1692, a petición del presbítero don Antonio Bolívar, capellán de una capellanía, le otorga la colación canónica y le da la catalogación de bienes espirituales[693].

Una capellanía es fundada por el sargento mayor don Alonso de Mendoza, alguacil mayor del Santo Oficio de la ciudad de Guanaguanare y encomendero de indios del Tocuyo, y su esposa doña Francisca de Torrealba y Sotomayor, por 3.000 pesos, a favor del alma de ellos, y de sus parientes y encomendados. Su patrón es don Nicolás Francisco de Mendoza, que es su hijo. Y éste llega a ser también el capellán de la misma, con la función prioritaria de decir las misas en memoria de sus padres. Están nombrados suplentes y sucesores una serie de personas. 1689[694].

El capitán don Miguel Varón, como albacea testamentario de doña Lorenza de León, al morir ésta, redime un censo de 500 pesos de la capellanía fundada por don Antonio José Núñez Serrano, de la cual era patrón y capellán el presbítero licenciado don Juan Torres Maldonado. Entonces, al quedar liberada esta suma, la solicita a censo don Juan Hidalgo Lozano, para lo cual exhibe fianza y fiador. 1688[695].

El deán y el cabildo eclesiástico de la catedral de Caracas son capellanes y patronos de dos censos, de 1.000 pesos y de 500 pesos. 1687[696].

Don Juan Urbano de Mendoza funda una capellanía para misas por su alma, con el agregado de una limosna de 8 reales por misa. 1687[697].

---

[689] *Ibíd.*, tomo II, p. 53.
[690] *Ibíd.*, tomo II, p. 52.
[691] *Ibíd.*, tomo II, p. 46.
[692] *Ibíd.*, tomo II, p. 44.
[693] *Ibíd.*, tomo II, p. 36.
[694] *Ibíd.*, tomo II, p. 29.
[695] *Ibíd.*, tomo II, p. 29.
[696] *Ibíd.*, tomo II, p. 24
[697] *Ibíd.*, tomo II, p. 26.

El presbítero don José de Heredia renuncia al usufructo de una capellanía. La renuncia es admitida por el obispo Diego de Baños y Sotomayor, quien la remite al patrón de dicha capellanía para que proponga nuevo capellán, y también al vicario foráneo y juez eclesiástico de San Sebastián de los Reyes, por corresponder la capellanía a los valles de Aragua. 1686[698].

Un capellán y los herederos del fundador se oponen al remate de una hacienda de cacao en el valle de Tarma, propiedad del capitán don Francisco Milano, que fue ejecutada por el convento de Nuestro Señora de la Merced por deuda acumulada de 1.450 pesos. El remate fue por 1.600 pesos, suma que se destinó, en 1684, al convento mencionado. A causa de la apelación, la sentencia fue anulada y el capitán Milano recuperó su hacienda. El pleito seguía en 1732[699].

Juan José Paz coloca 200 pesos a favor de la fábrica de la iglesia de Nuestra Señora de Altagracia para que se pongan a censo, y con sus réditos celebrar los maitines de Noche Buena. 1761[700].

Juliana de Ochoa, morena libre de Macarao, funda una capellanía con el dinero proveniente del remate de los bienes de su propiedad, al ella morir. Se obtienen 107 pesos, que se ponen a censo y los obtiene don José Ortega y Samaniego, quien ofrece como fianza casas en Caracas, y un fiador. El capellán agraciado es el presbítero don Francisco Gutiérrez[701].

Capellanía de 4.000 pesos fundada por el Ilustrísimo señor doctor don Diego de Baños y Sotomayor, obispo de la diócesis de Caracas. El capellán es el presbítero y doctor don Javier de Monasterios. De este capital hay 2.700 pesos gravados sobre persona y bienes del doctor Domingo Antonio Gómez de Castro, abogado de la Real Audiencia del distrito, y vecino de Caracas, con fianza en hacienda y arboleda de cacao en el valle del Tuy. La hacienda la compra don Sebastián del Toro, marqués del Toro y vizconde de San Bernardo, mediante redención del censo haciendo la exhibición de dichos 2.700 pesos, previa solicitud a la superioridad eclesiástica, admitida el 8 de junio de 1765. Entonces, el capellán reclama que Antonio Gómez de Castro debía 600 pesos de réditos, situación que lleva al marqués a pagar dicho atraso. El vicario general del obispado, don José Fernández de León declara, el 24 de julio de 1766, libre y exento de gravamen dicha finca. Al entrar en depósito los 2.700 pesos del desgravamen, se reciben varias peticiones, pero gana la puja don Juan Ignacio Rodríguez de la Madrid y su esposa, doña Josefa Lovera, el 4 de noviembre de 1766[702].

Opción a censo de 700 pesos a favor de capellanía que había sido fundada por Matheo Manuel González en la cantidad original de 1.000 pesos abierta ante el escribano público, y tres testigos, el 24 de marzo de 1719. Su capellán fue el presbítero don Juan Rodríguez de Mendoza, comisario del Santo Oficio. El censo lo había obtenido el alférez don Juan Antonio Bermúdez y su esposa doña Inés Caldera, siendo fiador don Simón Piñate. Muchos años después, el 13 de diciembre de 1765, renuncia quien era en ese entonces su capellán, el presbítero don Juan José Cuervo, quien lo era desde el 30 de enero de 1765, por muerte del anterior capellán, presbítero don Melchor Avilés. También, en esos años, la hacienda había pasado a manos de don

---

[698] *Ibíd.*, tomo II, p. 21.
[699] *Ibíd.*, tomo II, p. 362.
[700] *Ibíd.*, tomo II, p. 366.
[701] *Ibíd.*, tomo II, p. 377.
[702] *Ibíd.*, tomo III, p. 26.

José Francisco Bermúdez, y luego a Juan Manuel de Azagra, quien se atrasa en los réditos, de modo que la hacienda gravada la embarga don Juan Ignacio de Lecumberri, por deuda de pesos y redime la deuda del censo. El dinero a disposición, entonces, es disputado a censo por varias personas, hasta que lo obtiene don Florencio de la Plaza, recibiéndolo el 9 de abril de 1766, en su cantidad original, es decir, 1.000 pesos[703]. Obsérvese cómo en este caso, la hacienda cambia varias veces de mando, incluso es gravada por deudas y, a pesar de tales avatares, no pasa a la iglesia.

Al parecer, se necesitaba licencia real para derivar las sumas colocadas a censo, hacia la compra de propiedades para la iglesia, institución que a través de sus voceros debía justificar plenamente el desvío. Tal se desprende de la Real Disposición, de fecha 25 de octubre de 1741, que autoriza al convento de las Concepciones a emplear y convertir las dotes de las religiosas que tomasen hábito, y el capital de los censos que se redimieren, en la construcción de casas y tiendas en la ciudad y en el aumento de las tres haciendas que posee en los valles de Ocumare, las cuales por su fertilidad y extensión producirían copiosos frutos si se surtieran de esclavos y acequias, pero es imposible llevar a cabo dichas mejoras por la ausencia del dinero suficiente, y porque se le hará cuesta arriba obtenerlo, en vista de lo difícil que se ha hecho la cobranza de los réditos de los censos ante la depresión del comercio que padece Caracas[704].

Capellanía fundada por don Bartolomé de Ugueto, 5.400 pesos, cuyos réditos estarán destinados a estudios en el Seminario, mediante congrua a cursantes seminaristas próximos a recibir órdenes menores o las superiores del presbiteriado o, en su defecto, para que el párroco del puerto de La Guaira lo distribuya entre mujeres pobres enfermas, mortajas, y limosnas a marineros robados por piratas. Don Sebastián Tadino se hace parte de la capellanía, previa licencia de la superioridad, al obtener censo de 500 pesos, sobre una casa, ya gravada con 1.000 pesos del convento de la Inmaculada Concepción, y con 400 pesos a favor de la fábrica de la catedral de Caracas. Su fiador es Félix Pantoja. Fecha: 20 de junio de 1752[705].

Capellanía fundada por doña Eufemia de Burgos. Capellán es el presbítero licenciado don Baltasar de Fuenmayor. El censo es por 1.000 pesos, recibido por don Gabriel de Mena y su esposa Doña María Feliciana de Medina, vecinos de San Carlos de Austria. Fiador: el maestre de campo don Francisco de Mena. Los réditos servirán para el pariente que primero se ordenase. El anterior deudor del censo, Julián Montoya, no correspondió a la deuda ni a sus réditos. Fecha: 25 de abril de 1765[706].

Mediante testamento de octubre de 1637, el reverendísimo fray don Juan López Augusto de la Mata, obispo de Caracas, destinó a censo 2.000 pesos para que se oficiasen 67 misas rezadas, a 12 reales de limosna cada una, y para que el capellán viviese en el hospital de San Pablo, a fin de servir de ayuda temporal y espiritual de los pobres. Designó como patrono de la capellanía a los obispos. El capellán es en la actualidad el padre Gregorio de Aguilar. El deudor del censo fue doña Manuela de Silva, con 1.000 pesos, censo que redimió el 28 de mayo de 1766. Entonces, la cantidad depositada la pide el doctor don Domingo Gómez de Castro, clérigo tonsurado y abogado de las Reales Audiencias de Santo Domingo y Santa Fe. Fianza: un trapiche de moler caña dulce, con sus fondos y aperos, en el valle de Macarao, con 2 esclavos y 16 tablones de caña dulce, que tenían un valor de 12.000 pesos, más o menos. Pero, sobre esos bienes pesan 3.000 pesos de una capellanía, 1.000 pesos de censo del

---

[703] *Ibíd.*, tomo III, p. 27.
[704] *Ibíd.*, tomo I, p. 97.
[705] *Ibíd.*, tomo III, p. 29.
[706] *Ibíd.*, tomo III, p. 49.

peculio de sor Petronila de San José y Torres, religiosa de la Concepción, y 500 pesos de la obra pía de Cata. Fecha: 14 de julio de 1785[707].

Capellanía de 3.814 pesos, instituida por los albaceas y herederos fideicomisarios del presbítero doctor don Lucas Casimiro de Salas, deán dignidad de la catedral de Caracas, al redactar ellos el testamento, según documento presentado ante escribano público, con 3 testigos. El capellán es don Juan Borges Ruth, y en sucesión serán don Domingo Patricio Borges Ruth, su hermano y don Juan Manso Blanco. Un deudor hipotecario resulta ser don José Ignacio de Aristeguieta. Fiador: don Juan Ignacio Suárez. Monto: 75 pesos. Finca: 1.500 árboles de cacao en el valle del Tuy, de la hacienda Santa Bárbara. Censo registrado el 17 de abril de 1747. Y hay un segundo censo, esta vez de 3.514 pesos, atribuido a don Agustín de Herrera por haber adquirido una casa del fundador que tenía un gravamen precisamente de 3.514 pesos. Fiador: don Manuel de Herrera. Fianza: la misma casa. Fecha: 23 de junio de 1747[708].

Don Francisco Silvestre Pérez Bello y su esposa doña Bernarda Rodríguez reciben un censo de 1.000 pesos para fundar una capellanía. Son vecinos de San Sebastián de los Reyes. Él había comprado a doña Josefa de Laya, viuda del alférez real don Nicolás García Mujica y herederos, una hacienda de cacao en el valle de Suata, gravada con ese censo, cantidad perteneciente a la cofradía del Santísimo Sacramento. Capellanes y patronos son los curas rectores y el sacristán mayor. Fianza: 2.000 árboles de cacao de dicha hacienda, más dos esclavos, 2.000 árboles de cacao en el valle de Orituco, vega del Corozal y otros esclavos y una casa. Fecha: 24 de enero de 1741. Hubo un juicio por demora en el pago de los réditos, que se prolonga más allá de junio de 1768[709].

Don Miguel Rodríguez de Freitas, del pueblo de La Victoria y su hermana, doña María Paula de Freitas, del pueblo de Petare, son recíprocos deudores y fiadores de dos censos que tenían como fiador a su padre, don Juan Francisco de Freitas. Anteriormente, esos dos censos habían pertenecido a don Juan Bravo y Doña Rita Pizarro, uno de 3.000 pesos para capellanía, sirviendo de capellán el presbítero doctor don Felipe González; y el otro, de 2.000 pesos, cuyos réditos van como limosna al convento de San Buenaventura de religiosos recoletos y de la orden de San Francisco de la ciudad de Nueva Valencia. A Miguel y María Paula les embargan trapiche y hacienda en La Victoria como herederos de su padre, para asegurar censos y réditos atrasados considerablemente. Por esta razón, María Paula asume el censo de 3.000 pesos y Miguel el de 2.000 pesos, haciéndose la debida representación al señor juez, provisor y vicario general del obispado, y lo registra el anotador general de hipotecas, todo ante el escribano público el 3 de julio de 1769[710].

Don Domingo Ignacio Marrón asume un censo de 650 pesos, que están depositados en el tribunal del señor provisor y vicario general del obispado, correspondientes a la capellanía fundada por doña Elvira y doña Leonor de Montes. Capellán: presbítero don Cristóbal de Silva. Fianza: «además de la general de sus bienes», hacienda de cacao en el valle de Caucagua, con 3.000 árboles. Fiador: don Juan José de Castro. Fecha: 9 de febrero de 1770[711].

---

[707] *Ibíd.*, tomo III, p. 54.
[708] *Ibíd.*, tomo III, p. 73.
[709] *Ibíd.*, tomo III, p. 85.
[710] *Ibíd.*, tomo III, p. 103.
[711] *Ibíd.*, tomo III, p. 115.

Don Teodoro José de Castro asume un censo de 2.000 pesos para capellanía. El censo había sido instituido originalmente por su fundador, don Domingo López Borricón de la Torre, en febrero de 1756, por la suma de 3.000 pesos, en depósito a cargo de su albacea testamentario. Fiador: don Domingo Marrero. Fianza: sus casas de alto en Candelaria. De la misma capellanía hay otro deudor por los 1.000 pesos, que es don Juan Cristóbal Hernández, junto con su esposa Doña Josefa Pereira. Fiador: Don Lorenzo Antonio de Ponte y Villegas. Fianza: sus casas de morada, que tenían gravamen de 1.300 pesos, pertenecientes a convento de religiosas; y además hipoteca en censo profano de 1.000 pesos, con garantía de hacienda de cacao, con fecha 9 de noviembre de 1742[712].

El capitán José Hernández Sanabria ordena en su testamento que con sus bienes se funde un patronato de 3.000 pesos, para que con sus réditos anuales se le dediquen 33 misas rezadas, que es la edad de Cristo. Nombra primer capellán a su hijo, el bachiller don Domingo Antonio Sanabria, y establece que a éste lo puedan suceder sus otros hijos y nietos. Mientras ellos estudian y se ordenan, será capellán su hijo fray Marcelino de Sanabria, como interino. Patrono: su esposa doña Margarita Velásquez. La base de los 3.000 pesos está dada por una hacienda de más de 29.000 árboles de cacao en el valle de Santa Lucía, con aperos, esclavos y casas[713].

Capellanía fundada por don Ruy Fernández de Fuenmayor, por un monto de 10.000 pesos. Su función será la de cubrir los gastos de permanencia del catedrático de Prima de Sagrada Teología de la Real y Pontificia Universidad de Santa Rosa. Censuarios: doctor don Domingo de Berroterán, rector del real colegio seminario de Santa Rosa, don Miguel de Berroterán, marqués del Valle de Santiago y caballero de la real y distinguida orden española de Carlos III, doña Ana Catherina y doña Juana Josefa de Berroterán. El monto acordado es por 4.000 pesos. Fiador: don Sebastián Tadino. Fianza: casa de habitación que ya tiene gravamen de 1.000 pesos de una capellanía que sirve el doctor don Lorenzo José Fernández de León. Fecha: 13 de mayo de 1777[714].

Don José Rodríguez recibe un censo de 1.500 pesos, que tiene dos señoríos: uno de 1.000 pesos de capellanía fundada por don Lorenzo González y su esposa doña María Rafaela Núñez, y el otro de 500 pesos, exhibidos por don Filiberto Carreño, que dependen de la capellanía fundada por don Marcos Melchor Caravallo. Es capellán de las dos capellanías el presbítero don José Lorenzo González. Fianza: casa de habitación, que ha tenido censos anteriores. Fiador: don Tomás Losada. Fecha: 26 de septiembre de 1795[715].

Doña Catalina Jerez de Aristeguieta obtiene la licencia necesaria de la autoridad eclesiástica para realizar operación a censo y tributo redimible por la cantidad de 700 pesos, a favor de la capellanía fundada por don Santiago García, a nombre de las criadas del convento de Nuestra Señora de la Purísima Concepción, y ejercida por el capellán mayor del referido convento La peticionaria alegó que la suma obtenida a censo era para «emplearla en labores agrícolas»[716].

Capellanía fundada por doña María Eusebia Jedler. Capital: 2.000 pesos. Objeto: misas cantadas por las almas de don Mateo Jedler y doña María Eusebia de

---

[712] *Ibíd.*, tomo III, p. 148
[713] *Ibíd.*, tomo III, p. 156.
[714] *Ibíd.*, tomo III, p. 215.
[715] *Ibíd.*, tomo III, p. 267.
[716] *Ibíd.*, tomo III, p. 228.

Ponte, sus padres, don José de Ponte, su tío, difuntos, por sus esclavos, vivos y difuntos, por su alma y la de su marido don José Miguel Jedler, las de sus hijos. Primer capellán fue don Juan José Cuervo, clérigo de órdenes menores. Si éste falta, lo será su hijo, don Diego Juancho Jedler, pero si se casa, tendrán que ser sus otros hijos y, en su defecto, los hijos de doña Ana María Jedler, su hija, y en defecto de ésta, los hijos de su otra hija, doña Ángela Sebastiana Jedler y, en su defecto, sus bisnietos, etc., prefiriendo el varón a la hembra, y el mayor al menor y, siendo iguales lo será «el más hábil, virtuoso y próximo a recibir órdenes sacras». Y si se extingue su linaje, serán los religiosos del convento de San Francisco. Actuarán como patronos sus hijos. Censuario: don Francisco Rodríguez de Letra. Fiador: don Juan Rodríguez de Letra. Fianza: un hato de ganado mayor en El Sombrero, jurisdicción de la ciudad de San Sebastián de los Reyes, con todas sus cabezas, pero que tiene dos censos, uno de 2.000 pesos, para dote de sor Úrsula de Santa Gertrudis, religiosa carmelita; y el otro de 1.000 pesos, que no se especifica. Fecha: 12 de enero de 1765[717].

Capellanía fundada por el marqués del Toro, don Bernardo del Toro. Capital: 5.000 pesos. Serán capellanes, si es que se ordenaren, don Pedro y don Tomás del Toro, cadetes del regimiento de Reales Guardias Españolas, y don José María del Toro, que son sus nietos. Censuario: don Francisco Pérez González, justicia mayor del puerto de La Guaira por la cantidad de 250 pesos. Fiador: don Juan Bautista de Eizaguirre. Fianza: hacienda de cacao, con 23.000 árboles, hacienda y trapiche con 12 tablones de caña dulce, casa, fondos, aperos, 40 piezas de esclavos, en el valle de Choroní y una casa en La Guaira. La hacienda de cacao tiene una hipoteca de 1.500 pesos a favor del convento de religiosos de Nuestro Padre San Francisco. Fecha: 17 de marzo de 1741[718].

Capellanía fundada por doña Juana Simona Caballero, mediante cláusula 12 de su testamento, donde ordena que con el valor de sus casas-tiendas en la Candelaria se imponga capellanía perpetua, de misas rezadas, por su alma. Serán capellán y patrón cualquiera de los hijos de don Lázaro de Argain y doña María de Jesús Blandín, siempre que tomen el estado eclesiástico y, en su defecto, los descendientes de doña Mariana Blanco y don Pedro Blandín y, en su defecto, los religiosos del convento de Nuestro Padre San Francisco. El testamento reza que «el capellán que en todo tiempo fuere de esta capellanía, no obteniendo órdenes in sacris, tan ínterin lo consiga y para mejor seguir los estudios pueda mandar decir las respectivas misas por la limosna de 4 reales llevando para sí, el demás superávit». Cada misa ira a razón de 2 pesos por limosna, o sea, que el superávit para sí será de 1,5 pesos. Para ser efectivo este punto del testamento, nombra como albacea testamentario a don Juan y don Lázaro de Argain, y a don Bartolomé Blandín. Censuario: don José Díaz Damián y su esposa, doña María de la Encarnación de Orta. Fiador: don Antonio de Orta y su esposa, doña Antonia Poleo. El censuario remató en pública subasta 2 casas-tiendas de la fundadora, por 2.092 pesos y tal cantidad la reconocía como censo, con fianza «además de la general obligación de todos mis bienes», las 3 casa-tiendas mencionadas, y con el agregado de que los fiadores ofrezcan por fianza 2 casas-tiendas. Fecha: 18 de junio de 1783[719].

En la capellanía a favor del cura de la parroquia de Altagracia, los réditos del censo se dedican a cantar misa a Nuestra Señora de Altagracia todos los sábados del año. 1752[720].

---

[717] *Ibíd.*, tomo III, p. 292.
[718] *Ibíd.*, tomo III, p. 352.
[719] *Ibíd.*, tomo III, p. 359.
[720] *Ibíd.*, tomo III, p. 218.

El censo que asume Don Andrés Arias Altamirano por 2.000 pesos genera rédito anual de 100 pesos que se distribuyen entre 4 doncellas pobres, blancas y virtuosas, a entregar el día de San Andrés. 1756[721].

En 1803, don Juan Bautista Orvezagasti redime un censo de 54 pesos, entregando esa cantidad a la cofradía de la iglesia de Altagracia, para que con sus réditos anuales se hicieran las fiestas de Navidad a Nuestra Señora de Altagracia, afincado en una casa de su propiedad en la cuadra del Platanal, parroquia Candelaria. El dinero devuelto de la redención es pedido por el mayordomo de la cofradía, José Julián del Barrio, para reparar las otras piezas destinadas a los pobres[722].

Un fiador ofrece como garantía hipotecaria 3 esclavos y 100 reses de ganado manso, en 1759[723].

Resulta de interés el caso de Juan de Bolívar y Villegas y su esposa, Petronila de Ponte Jaspe y Montenegro, quienes asumen censos a tributo redimible por las siguientes cantidades correspondientes a dotes de monjas del convento de la Inmaculada Concepción: 2.000 pesos (dote de sor María Jacinta de San Pedro), 2.000 pesos (dote de sor María Catharina de San José), 2.000 pesos (dote de sor Isabel Rosalía de la Concepción), 2.000 pesos (dote de sor Paula de Bolívar) más 500 pesos (perteneciente a dicho convento). Total: 8.500 pesos. Fiador es el capitán Martín Jerez de Aristeguieta. Ahora bien, los esposos y el fiador mueren. El mayordomo pide la cancelación de los censos o su renovación por los herederos, junto con nuevo fiador. Doña Luisa Bolívar, que es la viuda del fiador fallecido, aparece afirmando que la finca de tales censos es la hacienda de cacao del valle de San Nicolás, jurisdicción de la ciudad de San Felipe. Un último expediente de la documentación tiene fecha de 3 de octubre de 1740, y contiene la solicitud que hace el provisor y vicario general del Obispado de embargar parte de la cosecha de cacao de dicha hacienda[724]. El caso sugiere la posibilidad, en vista del parentesco que une a censuarios y monjas, de la existencia de una suerte de reciclaje del dinero entregado en dote y luego entregado en censo a los mismos donantes, y los apuros que a veces encierra la operación de censo en vista de la amenaza de embargo que llegó a pesar sobre tan acaudalada familia.

Las anotaciones que acabamos de hacer son enteramente aleatorias, y no todas han podido ser confrontadas con la documentación original. A eso se agrega que no fue posible establecer una data precisa, porque los casos analizados oscilan, al parecer, entre los 20 últimos años del siglo XVII, y buena parte del siglo XVIII. Ojalá que en el futuro se pudiera extraer una estimación estadística completa, siguiendo y ampliando los pasos andados por la historiadora Troconis de Veracoechea, y añadiendo la revisión crítica de la documentación original del repositorio eclesiástico. Es lo que ha podido hacer la historiadora Ferreira, de Colombia, al armar unos cuadros estadísticos bastante completos, como son los siguientes:

---

[721] *Ibíd.*, tomo III, p. 219.
[722] *Ibíd.*, tomo III, p. 229.
[723] *Ibíd.*, tomo III, p. 23.
[724] *Ibíd.*, tomo III, p. 163.

Cuadro Nº 110

Tipos de censos. Pamplona 1700-1760

Década	*Censo préstamo*				*Censo gravamen*		*Total*		*%*		*Promedio*
	Consignativo		*Enfitéutico*								
	Nº	**$**	**Nº**	**$**	**Nº**	**$**	**Nº**	**$**	**Nº**	**$**	
1701-1710	87	24824	19	7247	95	54401	201	86472	15.3	13.2	430
1711-1720	51	13107	17	10735	112	52751	180	76593	13.7	11.7	425
1721-1730	87	30630	25	8468	96	45796	208	84894	15.8	12.9	408
1731-1740	142	52010	38	30512	99	52182	279	134704	21.2	20.6	482
1741-1750	110	60710	16	11476	74	31472	200	103658	15.2	15.8	518
1751-1760	111	58706	16	17699	118	91065	245	167470	18.6	25.6	683
Total	588	239987	131	86137	594	327667	1.313	653791			497
%	44.7	36.7	10	13.2	45.3	50.1					

Fuente: Escrituras de censos del Archivo Notarial de Pamplona. Libros 1700-1760 (Carmen Adriana Ferreira Esparza, *El crédito colonial...*, p. 63).

Cuadro Nº 111

Bienes hipotecados como respaldo a censos. Pamplona 1700-1760.

Bienes rurales	*Censo préstamo*		*Censo gravamen*		*Total*		*Porcentaje*	
	Nº	**$**	**Nº**	**$**	**Nº**	**$**	**Nº**	**$**
Hacienda	44	144236	131	161881	175	306117	18.7%	50.0%
Estancias	305	102850	218	89259	523	192109	56.0%	31.3%
Pedazos	64	31151	64	26470	128	57621	13.7%	9.3%
Árboles	75	38567	23	14366	98	52933	10.5%	8.6%
Hatos	4	1766	5	2700	9	4466	1.0%	0.7%
Total	492	318570	441	294676	933	613246	71.0%	93.7%

Bienes urbanos	*Censo préstamo*		*Censo gravamen*		*Total*		*Porcentaje*	
	Nº	**$**	**Nº**	**$**	**Nº**	**$**	**Nº**	**$**
Casa	92	28011	100	26849	192	54860	71.7%	73.4%
Solar	6	1230	4	627	10	1857	3.7%	2.4%
Casa-solar	44	12983	16	3522	60	16505	22.2%	22.1%
Tienda	5	1026	3	426	8	1452	2.9%	1.9%
Total	147	43250	123	31424	270	74674	20.5%	11.4%

	Censo préstamo		*Censo gravamen*		*Total*		*Porcentaje*	
	Nº	**$**	**Nº**	**$**	**Nº**	**$**	**Nº**	**$**
Otros	91	42509	101	83914	192	126423	14.6%	19.3%
Ganados	291	127602	228	153662	519	281264	39.5%	43.0%
Esclavos	175	125746	145	139818	330	265564	25.1%	40.6%

Fuente: Escrituras de censos del Archivo Notarial de Pamplona, Libros 1700-1760. Los datos corresponden a los casos que incluyen alguno de estos bienes como hipoteca *(Ibid.*, p. 69).

Atribuimos importancia a lo investigado por la historiadora colombiana por el hecho de que en su estudio están incluidas varias jurisdicciones que hoy forman parte de Venezuela y que la producción agrícola de la provincia colonial de Pamplona guardaba muchas similitudes con las de las correspondientes provincias venezolanas. En efecto, ella subraya que el 33% de las propiedades rurales hipotecadas se hallaba ubicada en el valle de Cúcuta, Táchira y San Cristóbal, que son las zonas cacaoteras de la región, y agrega que tales regiones originaron una demanda creciente de crédito a medida que avanzaba el

siglo, pues el auge de la comercialización del cacao en los mercados extranjeros obligó a los productores a invertir altas sumas de dinero en mejoras tales como acequias, barbacoas, adecuación de terrenos, compra de esclavos, entre otras, para obtener un mayor rendimiento de sus unidades de producción, destacándose Táchira y San Cristóbal. Añade que a mediados del siglo XVIII, se utilizaba el cacao como forma de pago[725].

Cuadro Nº 112 (parcial).
Ubicación de bienes rurales que respaldaban censos consignativos.
Pamplona 1700-1760

Ubicación	*No.*	*$*	*Promedio $/censo*
Cúcuta	72	45.119	627.7
Táchira	54	30.766	569.7
San Cristóbal	36	22.791	633.0
Salazar	25	7.586	303.4

Fuente: Escrituras de censos del Archivo Notarial de Pamplona, Libros 1700-1760. (*Ibíd.*, p. 71).

Hay una observación suya que merece prestarle atención. Según ella, el auge cacaotero permitió que fuesen relativamente pocos en Pamplona los bienes que pasaron a manos de la Iglesia mediante embargos ocasionados por atrasos en el pago de los réditos. El auge cacaotero en Venezuela, considerablemente mayor ¿no haría que, al menos, la transferencia de bienes a las manos de la iglesia fuera igual a esa baja incidencia observada en Pamplona, de modo que el préstamo eclesial, así ponderado, sólo podría haber ejercido en Venezuela su marcada influencia en el ámbito puramente religioso, y no en el financiero, es decir, que no constituyó un instrumento esencial y óptimo para el supuesto engorde del tesoro de la Curia? Habría que comparar lo que ella dice con lo sucedido aquí, es decir, que es posible que se repitiera en Venezuela las cifras según las cuales en Pamplona, durante los primeros 60 años del siglo XVIII, el 38.6% de los préstamos quedaron redimidos en menos de seis años, y que únicamente en el 5.1% de los casos se recurrió al remate de los bienes hipotecados[726].

Visto todo lo anterior, resulta difícil aceptar la comparación que se hace de la iglesia colonial con un banco. Los Welser, los Fugger, los banqueros venecianos que tanta influencia tuvieron en la Corte española en los siglos XVI al XVIII, prestaban dinero y ejecutaban múltiples operaciones financieras para enriquecerse. Abrieron, así, el camino que condujo al capitalismo, donde impera el principio del máximo beneficio. Pero, tal camino no es el que obligatoriamente tienen que transitar al

[725] Carmen Adriana Ferreira Esparza, *El crédito colonial...*, p. 70.
[726] *Ibíd.*, p. 80.

pie de la letra todos los países. La sociedad colonial en Venezuela nace de una conquista, donde el conquistador es representante de una sociedad que está abandonando con rapidez la Edad Media feudal y está marchando hacia el estado imperial centralizado, y el conquistado es una sociedad hundida en la etapa de los grupos recolectores y cazadores o que apenas transita por los primeros peldaños del neolítico. Y en esa confluencia de la Europa moderna y la Venezuela aún nómada se injertan fórmulas tan originales como las encomiendas y las misiones, en combinación con el ya viejo sistema esclavista y el también añejo sistema de mercado, o mercantilista, sin que todavía estén cerca los profundos cambios que en Europa nacen por la confluencia del surgimiento lento de un nuevo agrupamiento social llamado burguesía, con las innovaciones de la revolución industrial y las luces de la Ilustración.

Los hechos mismos que nos depara la colonia demuestran la falsa sobrestimación que a veces se hace del papel de la iglesia como entidad financiera o bancaria, emparentada con lo que hoy se entiende como tal. Del examen de los casos incluidos arriba se deduce que casi todas las sumas de dinero que le servían a la iglesia para sus préstamos, en el caso de las capellanías, estaban atadas a la voluntad del testador o fundador. Que en caso de redención del préstamo, el dinero que volvía a la iglesia regresaba casi de inmediato a la circulación censual. Que en caso de muerte del fundador, el dinero se reinvertía en la misma función, o bien el fundador había establecido diversas cláusulas que permitían la continuación *sine die* de la función de préstamo del dinero involucrado. Que no se vio a la iglesia atiborrarse de haciendas o demás bienes por remate a causa de morosidad en los pagos de los réditos de los censos, o por muerte del fundador o donador de la suma involucrada, sencillamente porque en el censo el censuario sigue siendo dueño del bien afincado, de modo que si este censuario se convierte en moroso total, la finca es rematada para que la adquiere otra persona, la cual redime así el censo que pesaba sobre ella, tal es el caso reseñado arriba de la hacienda que había pasado a manos de don José Francisco Bermúdez, y luego a Juan Manuel de Azagra, quien se atrasa en los réditos, de modo que la hacienda gravada la embarga don Juan Ignacio de Lecumberri (un guipuzcoano, nacido en 1740 y casado en Caracas con María Petronila de Gedler y Bolívar), por deuda de pesos y redime la deuda del censo. Cuando una hacienda era embargada por morosidad, y no era rematada por ausencia de compradores, quedaba en depósito. Que no se vieron a obispos, clérigos o religiosos enriquecerse con el manejo de los censos, aunque quizás alguien pueda encontrar algunos casos. Y que, en definitiva, la riqueza, en el terreno concreto venezolano, tuvo como origen fundamental algo que está a la

vista, la explotación de las haciendas cacaoteras y de otros frutos exportables, los cañaverales y trapiches, y los hatos de ganado, y las ganancias en el tráfico comercial. En todo caso, la iglesia, por intermedio de sus censos, se constituyó en un acicate más de la producción colonial, pero actuando en función retroalimentadota y no conductora, y menos aún como máximo o prepotente productor o empresario.

Incluso, en su papel de prestamista, la iglesia sufría de los vaivenes de aquella economía colonial sensible a las crisis de diversa índole. Como una simple muestra, véase lo establecido por el Sínodo de 1678, es decir el máximo cónclave generador y codificador de las normas de conducta de la sociedad católica, donde se pone de manifiesto la rapidez que debe darse a las operaciones del censo y las precauciones a seguir para que el dinero no se quede ocioso ni menos aún en manos de los sacerdotes:

> Como están malparadas las rentas de las capellanías por retardo y no hacer las imposiciones a tiempo, perjudicando a las almas de los difuntos que dejan sus haciendas para sacrificios y obras pías, y a los capellanes que no reciben su renta, se orden a rápidamente al redimirse un censo, advertir a la persona que lo toma de nuevo reciba la cantidad, otorgue nueva escritura, y no pase el dinero a los patronos. Pero, si se redime el censo y no hay nueva persona que lo tome, se pondrá el principal en fiel deposito, en persona segura y abonada, que no sea patrón ni capellán[727].

Se habla mucho de la pomposidad del convento de la Concepción de Caracas, pero ¿se recuerda cómo era el convento de Santo Domingo de la Inmaculada Concepción de la ciudad de El Tocuyo para el siglo XVIII? Se trata de un convento fundado hacia 1592, y que casi un siglo después alberga a cuatro religiosos y recibe al año 274 pesos y 3 reales por concepto de los intereses de varias escrituras de censos concedidos, discriminados de la siguiente manera, según informe que presenta fray Luis González en 1697:

4 p., 1 r. del censo de doña Andrea de Losada, con principal de 82 p., afincado en la estancia y tierras del valle de Buena Vista, jurisdicción de El Tocuyo, y otros bienes. Curso: va bien.

10 p. del censo de doña María Polanco, con principal de 200 p., afincado en 4 esclavos, una estancia y tierras en el Valle de Quibor. Curso: va bien.

30 p. del censo de doña María de Silva y Peña, con principal de 600 p., afincado en bienes muebles y raíces. Curso: va bien.

8 p., 2 r. del censo del alférez Francisco Pacheco de Escorcha, con principal de 170 p. Curso: «está casi perdido por haber venido a suma pobreza el referido, postrado en una cama". Debe más de cien pesos.

27 p., 4 r. del censo del capitán Gracián de Alvarado, con principal de 475 p., afincado en las tierras de composición de la otra banda del río de El Tocuyo en los cuatro quebradas, y una casa de tapias cubierta de cogollo y su solar, cerca de 200

---

[727] Manuel Gutiérrez de Arce, *Ob. cit.*, tomo II, pp. 257-259.

yeguas de vientre, 4 burros hechos, 200 cabezas de ganado vacuno, 1.000 cabezas de ganado menudo y la estancia y tierras que tiene en el Valle de Quibor. Curso: pago irregular «por haberse partido los dichos bienes y haber habido menoscabos grandes».

7 y ½ p. del censo del capitán don Alonso de Escalona, con principal de 150 p., afincado en las tierras de composición del valle de San Jacinto jurisdicción de El Tocuyo, con lo labrado y edificado en ellas: una paila de cobre batido, 16 bestias, 12 burros, 6 caballos de molienda, 70 reses vacunas, 150 reses de ganado cabrío y ovejas, y 6 esclavos. Curso: va bien. [Inserto de seguidas otro censo que parece repetir el anterior, aunque tiene algunas variantes: 5 p., del censo de don Alonso de Escalona, con principal de 100 p., afincado en las tierras de composición que tiene en el valle de San Domingo jurisdicción de El Tocuyo, con todo lo labrado y edificado: una paila de cobre que hará diez y seis botija, 4 yuntas de bueyes, 12 burros, 6 caballos moledores, 50 reses vacunas, 150 cabezas de ganado de cabruno y ovejuno, 6 esclavos. Curso: va bien].

10 p. del censo de Catalina de Riberos de Albujar, con principal de 200 p, afincado en las casas y solares de tapias y cubierta de cogollo que tiene en la ciudad, y en las tierras de labor que tiene en el valle de Boro, y en 40 mulas. Curso: paga bien, pero las hipotecas están ya deterioradas y no ha quedado más que la casa maltratada.

35 p. del censo de María de Vargas, con principal de 725 p., afincado en una casa de bajareque cubierta de teja, las tierras de Guacara de esta jurisdicción, con dos casas de bajareque cubiertas de cogollo, 70 reses vacunas, 12 burros y 12 bestias caballares; las tierras de los cuibas y 15 mulas mansas, más 3 esclavos y 4 vacas mansas. Curso: paga bien, pero las hipotecas están casi perdidas.

10 p., del censo del alférez Luis Francisco de Silva y Peña, con principal de 200 p., afincado en sus tierras de labor, trapiche y una casa de teja de tapias en dichas tierras, con los demás bienes habidos y por haber. Curso: no paga «por estar deteriorado por falta de indios que trabajen haciendo encomendero».

20 p., del censo de don Alonso de Mujica y Santillán, con principal de 400 p., afincado en las casas que tiene en la ciudad Barquisimeto, cubiertas de teja con todo lo que tiene labrado dicho solar, más las tierras y estancia y arboleda de cacao en las tierras de Chorobobo, jurisdicción de dicha ciudad, con más de 12 piezas de esclavos para beneficios de dichas tierras, y los potreros de Yaritagua y tierras de labor que están en el valle de Vimiquirí, términos de dicha ciudad, con 300 cabezas de ganado vacuno, y cien mulas de Sarría. Curso: está en deuda, y algunas de las fincas están totalmente deterioradas. Las cuales fincas algunas de ellas totalmente están deterioradas y el censo no esta corriente

15 p., del censo de don Nicolás de Lucena y sus herederos, con principal de 300 p., afincado en la casa de bajareque y solar que tiene en la ciudad, y deja bienes habidos y por haber. Curso: la redacción del documento es oscura y se puede interpretar como si se hubiera hecho el pago de 500 pesos, más 300 pesos «de tributo», porque al final se dice que «es verdad que está corriente el tributo», aunque la finca está algo deteriorada.

9 p., del censo de Joseph Antonio de la Lira y su mujer, que hoy pagan sus hijos y su suegro, con principal de 180 p., afincado en sus casas cubierta de cogollo y bajareque y solar, en las dos partes que tiene de tierra en la Garrapatera en la otra banda de la ciudad, más 10 mulas mansas, y un esclavo. Curso: muy mal, porque «las dichas hipotecas declaro que están perdidas del todo por estar la casa caída y las tierras no tienen labor las dichas mulas y esclavo según la presente ha fenecido».

22 p., 1 r., del censo del capitán Luis Pérez Hurtado, con principal de 442 p, afincado en la casa de bajareque y cogollo y su solar cercado de tapias en que vive. Curso: muy mal, porque «la dicha hipoteca y esta muy maltratada y el fiador que era un hijo suyo en que se abonaba dicho censo es ya difunto y sus bienes consumidos».

25 p., del censo del alférez Luis Francisco de Silva y Peña, con principal de 500 p., afincado en sus tierras de labranza y trapiche y en ellas una casa de tapias y teja. Curso: «todo lo cual está atrasado».

16 p., 5 r., del censo de doña María Langayo, difunta, y por ella Juan Félix de Colmenares, con principal de 331 p, afincado en sus fincas que por su muerte pasaron al Capitán Thomas de Colmenares, ya difunto. Curso: va bien, pero los bienes del uno como del otro se han deteriorado con la corta edad de los tiempos.

18 ½ p., del censo del alférez Julio de Aguilar Murillo, con principal de 370 p., afincado en sus tierras de labor en el valle de Borro, jurisdicción de la ciudad y lo que en dichas tierras está edificado y labrado, y unas casas de tapias y teja en la ciudad y 5 esclavos. Curso: va bien.

Hasta aquí los censos. El informe de fray Luis González prosigue con la relación de las dos cofradías que funcionan en el convento, la del Dulce Nombre de Jesús, y la de Nuestra Señora del Rosario. No tienen rentas fijas (!!), razón por la cual la cofradía del Rosario debe las misas de capellanías y las de los aniversarios, es decir, 340 pesos, a estas alturas casi incobrables porque unas yeguas que poseía la cofradía «de donde se pagan estos caídos está de calidad hoy que no llegan a diez potros su usufructo de ellas y dichas yeguas en mi tiempo nunca han parido mulas», y porque la cofradía no pide limosnas por las calles ni en el campo. Cuando en años pasados estuvo de visita «nuestro reverendo padre maestro» fray Manuel de Almodóvar, él les perdonó una deuda de 300 pesos, y también lo hizo así el reverendo padre visitador fray Andrés de Santo Domingo, con los 200 pesos que adeudaban, por lo que al presente cabe la posibilidad de un nuevo perdón. En cuanto a la cofradía del Dulce Nombre de Jesús, dice fray González que tampoco tiene ni un real de renta, y apenas le entra la limosna que se junta por lo que pide un devoto religioso, limosna que alcanza para pagar las 13 misas mensuales que se dicen por los cofrades vivos y difuntos.

Otra cofradía, llamada Nuestra Señora de la Soledad, a cargo del padre Bartolomé de Vizcaya, por muerte del maestre de campo Thomas de Colmenares, no sabe si tiene rentas, pero debe 100 pesos. Otra cofradía, la de Santa Rosa, apenas ha dado 10 pesos y su mayordomo ha tenido que suspender cuatro misas de obligación que tiene al año porque no tiene con qué pagarlas.

En cuanto al inventario de la iglesia, su pobreza salta a la vista. Y añade la queja por el alto precio del vino de celebrar (20 pesos la botija, cuando se consigue), la cera (20 reales, o 3 pesos la libra) y el incienso (6 pesos la libra). La lámpara del Santísimo Sacramento se alumbra con manteca, «por no poderse con aceite respecto de que aquí no hay quien lo conduzca». La vestimenta de los religiosos deja mucho que desear, por la falta de géneros (¡En El Tocuyo!) y por la suma pobreza del lugar que no da para limosnas ni para misas. Y firma, fray Luis González,

vicario, «en cuatro días del mes de diciembre de mil seiscientos y noventa y siete años»[728].

En sus comienzos, la iglesia de Mérida era débil en recursos económicos, razón por la cual tuvo una dispensa real que consistió en levantarle la obligación, durante siete años, de enterar en las cajas reales los dos novenos de su renta decimal. Transcurrido tal lapso, recibió Su Majestad, en 1609, la súplica de prorrogar aquella merced por veinte años más para que se pudieran comprar «algunas campanas, ornamentos y un sagrario para el santísimo sacramento de que tiene precisa necesidad»[729].

Una muestra que nos indica que también en Mérida operaba en sentido contrario la corriente dineraria, es decir, el hecho de ser los hacendados y hombres ricos los que sostenían los institutos eclesiásticos y a sus miembros, ante la falta de recursos de éstos, nos lo ofrece la manera cómo se financió el establecimiento de un convento de monjas en la ciudad de Mérida:

> Santa Fe, 26 de junio de 1629. Señor: Por parte de la ciudad de Mérida se presentó en esta Audiencia una Real Cédula de Vuestra Majestad en 18 de febrero de 1627 por la cual nos manda informemos a Vuestra Majestad si convendrá dar licencia a la dicha ciudad para fundar en ella un monasterio de monjas y si las mandas que algunos vecinos [...] hicieron para el dicho efecto son ciertas y seguras [...]. Y habiendo el dicho licenciado don Fernando recibido información con su parecer lo remitió a esta Audiencia y halló que de más que las mandas que se habían hecho de que a Vuestra Majestad se hizo relación por parte de la dicha ciudad de Mérida, doña Juana de Bedoya, viuda de Francisco de Gaviria con otras dos hijas suyas doncellas pretendía entrar a fundar dicho monasterio y para ello ofrecía una estancia con seis mil árboles de cacao y ocho negros para su beneficio y otros mil quinientos pesos en dinero para la obra y dos solares para edificar y otras muchas tierras como todo consta de estos autos que a Vuestra Majestad remitimos en esta ocasión...[En concreto ella ofrece] dos solares con una casa una cuadra de la plaza de esta ciudad y así mismo en el valle de las Acequias cinco leguas de esta ciudad tres estancias de pan coger y dos estancias de ganado menor y seis estancias de ganado mayor que tengo pobladas con casas y aposentos con cien cabezas de vacas, cuatrocientas cabezas de ganado menor y vientre yeguas de vientre que las dichas tierras son de tanta importancia y consideración que se pueden traer dos mil cabezas de vacas y cogerse cantidad de trigo tan aventajado como se da en aquel territorio y así mismo una legua de esta ciudad tierra suficiente buena e importante para el sustento de maízes y otras legumbres y más una legua de tierra en el valle que llaman de Mucuchis cinco leguas de esta ciudad cosa de grande consideración para ganado mayor y menor y así mismo ofrezco una estancia en los llanos de Gibraltar con seis mil árboles de cacao y ocho negros esclavos que la benefician que darán por lo menos mil y quinientos reales de a ocho de renta en cada un año. Y así mismo tres mil y quinientos pesos de a ocho reales. [Juana Bedoya agrega que las dotes darán un ingreso adicional de dos mil pesos de dote y trescientos de ajuar. Y pide dar al convento el hombre de Santa Clara. Y el cabildo merideño afirma que se han

---

[728] Ángel Francisco Manzanilla Félix, *Algunos Documentos en el Archivo General de la Nación relativos al Convento de Santo Domingo de la Ciudad del Tocuyo*. Internet: www.dominicos.org.ve/

[729] Alonso Arias de Reinoso, depositario general y regidor perpetuo de la ciudad de Mérida en el Nuevo Reino de Granada, y su procurador general, en *Documentos para la historia lingüística de Mérida. Siglos XVI-XVII*. Enrique Obediente Sosa, compilador, trascripción del Grupo de Lingüística Hispánica.

asegurado en esta ciudad demandas que se han hecho para la fábrica del convento por la cantidad de diez mil pesos de a ocho reales castellanos y doce negros][730].

La solicitud necesitó el punto de vista de la Audiencia, del Arzobispado, del Gobernador, en vista de poder asegurar al Rey que el convento se sostendrá sin ayuda monetaria suya y que será satisfechas su petición de saber «el valor que tienen y si todas son ciertas y seguras y si hay sobre ellas algunos censos, enajenaciones, hipotecas o empeños y así mismo se informará si se han hecho de las dichas dotaciones recaudos y escrituras firmes y no estando fechos haga que se otorguen con la seguridad y firmeza que convenga y averigüe lo que podrían rentar todas las dichas dotaciones»[731].

Claro, con el tiempo, el clero merideño tuvo un mejor desahogo, como lo indican los documentos donde se informa que en el siglo XVIII el convento de Santa Clara todavía poseía, al menos, dos haciendas, pero faltaría emprender un estudio más minucioso sobre la riqueza eclesial andina.

Y hablando del convento de las Concepciones de Caracas, si bien es verdad que disponía de algunas haciendas, por donación, también lo es que a ratos sufría momentos de apuros. Tal situación se deduce de la Real Disposición del 25 de octubre de 1741, que expide una autorización (*sic*) para que las dotes de las religiosas que tomasen hábito y el capital de los censos que se vayan redimiendo se empleen y conviertan en el aumento de las tres haciendas que posee en los valles de Ocumare y en la construcción de casas y tiendas en la ciudad, tal como se explicó líneas arriba[732]. A esto se agrega que para 1772, el estado de sus fondos, según envío del obispo, alcanzaba la cifra de más de 510.000 pesos de principal, pero de eso tiene perdidos o son de dudoso cobro más de 85.000 pesos por concepto de principal y réditos de censos[733]. Además, sépase que cuatro haciendas que poseía el convento en Caucagua, Santa Teresa y Ocumare vendieron entre 1800 y 1821 una cantidad de fanegas de cacao que representaron apenas el 1% del fruto exportado en tal periodo[734].

Repito: la iglesia colonial de todas las provincias que hoy forman Venezuela debía su lugar privilegiado en la sociedad al especialísimo papel de ser el custodio, la portadora y la difusora de la religión católica,

---

[730] *Ibíd.*, trascrito del Archivo General de Indias, Santa Fe, 21, R. 1, N 1/3.
[731] *Ibíd.*
[732] Ermila Troconis de Veracoechea, *Los censos...*, tomo I, p. 97.
[733] De una exposición del cabildo de Caracas a Su Majestad, en julio de 1781, donde se expone el estado de pobreza de la provincia, en Enrique Bernardo Núñez, *Ob. cit.*, p. 495.
[734] Cf. Yoston Ferrigni Varela, *Ob. cit.*

que era el desideratum de la vida cultural y espiritual de la época, y la guía graciosa para alcanzar la bienaventuranza en la otra vida. Su función en el proceso productivo material y en la economía en general fue importante, y descansaba en buena medida en aquella condición de ente tutelar. La documentación estudiada no permite afirmar que tal función llegó a convertirse en «un verdadero control del contexto agrario, marco fundamental que identificó y caracterizó la economía colonial venezolana»[735].

Las obras pías

He aquí otra figura que ha contribuido a alimentar la falsa idea de una enorme riqueza patrimonial en manos de la iglesia colonial, punto de partida para el ejercicio de su papel fundamental en la dirección de la política, la economía y el conjunto de la vida social de estas posesiones españolas. Por supuesto, el usufructo de los bienes constituidos en obras pías le daba poder y capacidad de dirección a la jerarquía católica, pero es posible demostrar también en este terreno que tal posesión no era absoluta, sino estaba controlada por sus dueños legítimos u originales y, cosa esencial, no sirvió como propiedad privada, en funciones de producción y generación de riqueza, en las manos de los sacerdotes, ni individualmente ni en asociación.

Comencemos por examinar la obra pía emblemática por excelencia, la de Chuao. El origen de ella está en el testamento de doña Catalina Mexía de Ávila, en 1669, en el cual se establece el destino de sus bienes y patrimonio, circunstancia que ya nos sirvió para aclarar la confusión de varios historiadores que reunían en un solo concepto su encomienda y su hacienda. En efecto, doña Catalina divide en tres sus posesiones: 1) la encomienda de indios en el valle de Chuao, con labranza de maíz, yuca, y algunas arboledas de cacao de poca cantidad, que la concede al alférez mayor Francisco de Aguirre Villela, «hombre principal y de calidad con obligaciones de hijos y con cortedad de caudal», por gozar de la gracia real para nombrar sucesor; 2) la hacienda de cacao en el mismo valle de Chuao, con sus esclavos y 46.000 árboles, que debe conservase así como está, para constituirse en obra pía; y 3) una hacienda en La Vega, con casas de tejas y algunos

---

[735] Niria Suárez de Paredes, "Consideraciones históricas sobre formas asociativas de carácter financiero vinculadas a la actividad agraria: el caso de la cofradía de San Pedro Parroquia El Sagrario del Estado Mérida, 1850-1900", en *Presente y Pasado. Revista de Historia*, Año 8, Nº 16, julio-diciembre de 2003, p. 71). Internet.

aperos para su beneficio, que debe venderse en almoneda a fin de pagar su funeral, y las deudas, los mandos y legados de su testamento[736].

Entonces, ¿cómo se organiza la obra pía? En primer lugar, ni la hacienda y arboleda de cacao ni los esclavos pueden venderse o enajenarse. El bien debe ser liberado de deudas y tributos. Puede aumentarse la plantilla de esclavos, con el objeto de aumentar la producción. La renta anual obtenida debe distribuirse de la manera siguiente: a) 2.000 pesos de limosna para mujer honrada pobre de Caracas, a dárselos el día de su matrimonio, o cuando se haga religiosa: b) un reparto anual a 10 mujeres pobres de un manto para ir a misa; c) una arroba de cera blanca para el día de San José a cada una de las iglesias de Caracas; d) 200 pesos al día de Santa Catalina Mártir, de los cuales 50 serán para redención de cautivos y la Casa Santa de Jerusalem, y 150 para los pobres enfermos del hospital; e) la limosna acostumbrada de cacao, el día de San Pedro, a los conventos de la ciudad; y f) el resto que quede de la renta debe repartirse en dotes para mujeres pobres, y en obras de misericordia y piedad. Se nombran como patronos de la obra pía al arcediano Marcos de Sobremonte, al provincial de la orden de San Francisco, Francisco de la Torre, y al alcalde ordinario de primer voto. Adicionalmente, se dan los nombres de los sustitutos de los dos primeros, quienes también serán vitalicios. Los patronos recibirán tres fanegas anuales de cacao a modo de regalo (El Sínodo de 1678 prohibió toda clase de regalos a los patronos, según reza el título XXII, § I, del libro cuarto, "De la enajenación de los patronatos que a la letra dice: «Como el derecho del patronato es de orden espiritual está prohibido venderlo o transferirlo. El patrono no puede aceptar dádiva alguna, bajo sospecha de simonía»[737]). Fuera de esto, el testamento ordena que se conceda libertad a los esclavos Juana la Chata, Serafina, Dominga, y Juan Lorenzo, además de otros que figuran en codicilos posteriores. En el inventario que deja se incluyen una lista larga de objetos (cuadros de santos, muebles, etc.) y los nombres de los esclavos[738].

En el transcurso de los años, trae el libro que estamos citando un valioso y pormenorizado recuento de las cuentas que rinde el mayordomo, de los inventarios de útiles, herramientas y esclavos de la hacienda, de su producción, del valor del cacao, etc. Hay que mencionar la decisión de los tres patronos de la obra pía, tomada en 1734 con autorización del obispo de Caracas, para vender a 5 esclavos por ser

---

[736] Varios Autores, *La obra pía de Chuao, 1568-1825*, Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1961, pp. 190, 198-200.
[737] Manuel Gutiérrez de Arce, *Ob. cit.*, tomo II, pp. 261-262.
[738] Varios Autores, *La obra pía...*, p. 223.

«viciados y perniciosos». Otro dato de valor es que la obra pía venía arrastrando varios censos afincados en ella. Uno es de 2.080 pesos, perteneciente a la misa de Nuestra Señora que se canta los sábados en la iglesia catedral. Otro es de 1.000 pesos, perteneciente al monasterio de religiosos de la Inmaculada Concepción. También figuran varias obligaciones: la de costear con 6 reales la misa de todos los días festivos en la catedral, la de costear la función de Viernes Santo en la noche, la de dar 3 fanegas de cacao al año a cada uno de los 3 patronos, como ya se dijo, y una fanega a cada uno de los religiosos de Santo Domingo, San Francisco y Nuestra Señora de la Merced. En 1736 se remide a la hacienda de un censo de 400 pesos a favor del convento de religiosas de la Inmaculada Concepción. Otra obligación existente en 1743 es la de una capellanía de 1.080 pesos con rédito anual de 832 reales. El sueldo del administrador y el del mayordomo se estima en 650 pesos. En 1756 se asienta que se dieron cartas de libertad a varios esclavos por la cantidad que allí se fija, y en la que fueron avaluados. En la cuenta de gastos de 1758 aparece la redención de los censos siguientes: 2.080 pesos pertenecientes a la misa de la Virgen, y 1.500 pesos pertenecientes a la misa de 10.

La obra pía de Chuao es un ejemplo de cómo este tipo de posesión no pasaba a ser un patrimonio de la iglesia, con la cual la jerarquía eclesiástica pudiera jugar en el mercado financiero para agenciarse nuevos y mejores ingresos. Lo que la iglesia obtenía de ella era el privilegio de contar con unos réditos para mantener o aumentar el culto, aunque también, como ente administrador, se convertía en finca para obtener algún provento con los mismos fines anteriores. Claro está, las confusiones al respecto pueden seguir ocupando páginas. Está el caso en la misma obra, muy valiosa, que hemos citado con largueza, de lo escrito por el profesor D.F. Maza Zavala, quien parece confundir hacienda y encomienda en las posesiones de doña Catalina, al querer establecer estas diferencias entre encomienda y propiedad territorial: 1) la propiedad territorial es a perpetuidad; la propiedad de encomienda es temporal; 2) la propiedad territorial es otorgada por los cabildos; la encomienda, por el gobernador o el virrey; 3) el latifundio contemporáneo tiene su origen en la propiedad territorial agraria, que en cierto periodo histórico «se combina con una modalidad feudal representada en la encomienda» y en otra «con una modalidad esclavista». Y termina su especulación diciendo que en la plantación «el capitalismo estaba presente, en una curiosa combinación con esclavismo y feudalismo» (!!)[739].

[739] *Ibíd.*, pp. 67 y 83.

La historiadora Ermila Troconis de Veracoechea ha escrito una interesante monografía sobre las obras pías. Allí expone diversos elementos a ser considerados. Al parecer, los patronos de las obras pías nombrados a perpetuidad, podían usar la facultad de nombrar ellos a su sustituto. Así ocurrió cuando don Pedro Jaspe de Montenegro lo hizo a favor de don Diego de Baños y Sotomayor, en 1691. La obra pía la había fundado doña María Marín Narváez, cuando se sintió gravemente enferma[740]. Veamos algunos casos:

El caso a continuación parece corresponden más bien a un censo. En efecto, un censo de 1.000 pesos pertenecientes al Hospital de Mujeres de Nuestra Señora de la Caridad tenía como deudores a don Francisco Domingo Galindo y Doña Gerónima de Tovar, con fianza en una hacienda con 10.000 árboles de cacao en el valle de Cuyagua. El administrador de las rentas del hospital, don Pedro Crespillo, demandó a los deudores por mora de créditos por 450 pesos, lo que obliga a ejecutar el embargo de la hacienda, el 19 de noviembre de 1725, con sus ganados, esclavos y aperos. Al hacer el remate no hubo comprador, lo que obligó a doña Gerónima a poner de manifiesto sus alhajas, de modo que fueron secuestradas todas sus pertenencias[741].

Esto también es otro censo: La mulata Juana Hipólita, esclava de la iglesia Catedral es puesta en venta por ser onerosa su manutención. La compra el señor don Juan Manuel de Herrera por 250 pesos, que se pondrá a censo[742].

El siguiente ejemplo, donde interviene la tía paterna de Simón Bolívar combina una donación a la iglesia con una capellanía. En efecto, doña Luisa Bolívar, ya viuda de don Martín Jerez de Aristeguieta, regala varias de sus alhajas al Santísimo Sacamento del hospital de San Lázaro, y establece una hipoteca sobre una hacienda de cacao en Yare, valles del Tuy, con 20.000 árboles de cacao, casa, acequia, tierras sin labrar (menos los esclavos), que vale más de 35.000 pesos, que ella había heredado de don Pedro Domingo de Ponte Andrade, que ya estaba gravada en 2.500 pesos de una capellanía fundada por sor María Jacinta de Ponte, religiosa del monasterio de la Inmaculada Concepción, y que tenía como capellán a Juan Félix de Aristeguieta, hijo de doña Luisa, y como fiador a Juan Vicente Bolívar, su hermano. Año 1762[743].

El interés del caso a continuación radica en varias circunstancias. Una, es la ya citada atribución ejercida por don Pedro Jaspe de Montenegro cuando en 1691 trasmitió a favor de don Diego de Baños y Sotomayor su patronato sobre la obra pía dejada por doña María Marín Narváez a favor del hospital de Nuestra Señora de la Caridad de Caracas lo hizo, en 1691. La otra circunstancia fue la posible venta de la hacienda San Nicolás, jurisdicción de San Felipe, donde se asienta la obra pía. El fiscal de Obras Pías, en 1807, se negó a la venta porque el precio de 12.636 pesos y medio real estipulado, era muy inferior a los más de 25.000 ó 30.000 pesos que vale. Se termina comprándola José Aniceto Ávila por 19.861 pesos[744].

El hospital de San Juan de Dios de La Guaira había sido fundado con los bienes dejados por doña Josefa de Gorlis, vecina de La Guaira, según testamento de fecha 30

---

[740] Ermila Troconis de Veracoechea, *Las obras pías...*, p. 39.
[741] *Ibíd.*, pp. 43 y 44.
[742] *Ibíd.*, p. 45.
[743] *Ibíd.*, p. 49, T. IV, N° 6, f. 364/433.
[744] *Ibíd.*, pp. 101 y 131.

d agosto de 1706. Los bienes eran una hacienda de cacao, en Toasana, con 42 esclavos, y herramientas. En 1711 se tomó posesión de la hacienda, y empezó también la fábrica del hospital. En 1775 la hacienda tenía 68 esclavos y 15.734 árboles de cacao, con promedio de producción anual, para los últimos 5 años, de 3.650 pesos. A estos ingresos se añadían las limosnas y curación de soldados, por 897 pesos, y los réditos de censos que llegaban a 340 pesos al año[745].

Si el bien de la obra pía podía venderse, también podía arrendarse. Es el caso de don Gabriel de Liendo que lo hace, en 1730, por la suma de 2.000 pesos al año durante 3 años, con prórroga que solicita por 3 años más. La hacienda en cuestión también vio aumentar sus tierras por compras hechas a Miguel Blanco Uribe, según información de su administrador en 1747. Incluso, se necesitaban más terrenos porque hay exceso de esclavos, lo que lleva a vender algunas piezas de esclavos con el objeto de comprar otra hacienda en Ocumare. No obstante, parece que Gabriel de Liendo no cumplía bien su contrato de alquiler, porque en 1743 el marqués de Toro, como alcalde ordinario, denuncia que debía 9.000 pesos[746].

La autora califica como obra pía el siguiente caso. Francisco Marín de Narváez, es el patrón de una obra pía fundada por su hermana, doña María Marín de Narváez, en beneficio de su alma, por medio de 1.000 pesos de plata que ha dejado a la cofradía de las Benditas Almas de la Catedral, ahora en poder de su mayordomo, licenciado Jesús de Arrechedera[747].

El Colegio de Niñas Educandas "Jesús, María y José", de Caracas, fundado por don Simón Malpica y doña Josefa de Ponte, se sostenía con el producto de la hacienda de caña de Tocorón[748].

Don Sebastián del Toro, marqués del Toro y vizconde de San Bernardo, compra a don Dr. Domingo Gómez de Castro una hacienda de cacao en el valle del Tuy, que está gravada en 500 pesos de censo a favor de obra pía de Cata. Redime el censo, pero inmediatamente los pide, a censo se entiende, para mejorar su trapiche en el valle de Macarao, dando como fianza su casa en Caracas, y como fiador al capitán don Ignacio de Lecumberri[749].

A doña Luisa Maza, natural de Maracay, se le dan 400 pesos, el 19 de julio de 1792, en calidad de dote, sacados de la obra pía fundada por don Diego de Ovalle, con el objeto de casarse con don José Millán Orta. Se le da un plazo de un año para la boda, y si no, se anula la dote. Pero, no le dan 400 pesos, sino 200, porque no hay más, y eso en marzo de 1793[750].

Con estos pocos ejemplos, obtenidos de la vasta recopilación que contiene la obra ya citada, se puede concluir que la obra pía tampoco significó un enriquecimiento del estamento eclesial a partir de su actividad financiera. En las obras pías que manejan haciendas, la iglesia luce como un intermediario, y de esa actividad, cuando la obra surte

---

[745] *Ibíd.*, p. 108. N° 12, f. 372/519, del t. XIII.
[746] *Ibíd.*, p. 140.
[747] *Ibíd.*, p. 196. t. XXIV, exp.1.
[748] *Ibíd.*, p. 182.
[749] *Ibíd.*, p. 199.
[750] *Ibíd.*, p. 254.

efecto, sale ganando la fama de la iglesia y el sostén de los templos y sus religiosos, además de la gente pobre, los enfermos, las novias sin dote, etc., etc., sin que nombremos, por supuesto, el alma del fundador, que encuentra despejado el camino del cielo.

Los diezmos de la iglesia

La renta decimal fue otro de los renglones de ingreso económico de la iglesia colonial. Como su nombre lo indica, representaba la décima parte de los ingresos anuales de los propietarios de bienes, principalmente, de las cosechas y producciones en el campo. Al ser contabilizada se la dividía en nueve partes, de las cuales dos ingresaban a las arcas reales. De acuerdo con una certificación del notario contador de las rentas decimales del Obispado de Caracas, las rentas decimales desde 1733 hasta 1737 valieron 476.140 pesos y 1 real, es decir, un promedio anual de 95.228 pesos. Y desde 1745 a 1749 valieron 357.283 pesos 4 reales, es decir 71.456 pesos 5 reales. Se responde así a una petición de Alejandro Blanco y Villegas, apoderado del cabildo y nobleza de Caracas, dirigida al Juez General de Diezmos para que diga el «valor que tuvieron los diezmos en sus remates en el lapso de 1733 a 1737 y 1745 a 1749, sin incluir otro ramo que el de las veredas de cacao como principal fruto de la provincia»[751]. Ahora bien, una relación de la hacienda real para 1748 asienta que los ingresos por concepto de los dos novenos de los diezmos ascendió a 1.293.608 maravedíes, cifra que corresponde, luego de hacer la reducción a pesos (272 maravedíes por peso) a 42.847 pesos de la renta decimal de ese año[752]. Por su parte, en el estudio tantas veces comentado de Guillermo Figuera, se dice que los diezmos de la diócesis de Caracas alcanzaron en 1788 la cifra de 153.793 pesos y 5 reales y medio, que se distribuyeron en las 146 parroquias que la constituían, más una parte que se destinó a la fábrica de la Santa Iglesia Catedral. En ese año, el diezmo alcanzó la cifra de 153.793 pesos y 5 reales y medio[753]. Como se observa, hay una disparidad muy grande en las cifras anuales del diezmo, no explicables acabadamente por las oscilaciones de los precios del cacao y por los disturbios de la asonada de Juan Francisco de León en 1749.

Los diezmos se cobraban en cada parroquia a través de un rematador, llamado así porque era el mejor postor en el remate de que se hacía de la respectiva recaudación. De acuerdo con el sínodo diocesano de 1687, el diezmo se dividía en cuatro partes, así: una cuarta parte al obispo y su mesa episcopal; una cuarta parte al deán,

---

[751] Archivo General de la Nación, *Boletín*, Nº 85, Caracas, tomo XXII, noviembre-diciembre de 1937, p. 85.
[752] *Ibíd.*, p. 8-10.
[753] Guillermo Figuera, *Ob. cit.*, tomo II, p. 9.

capítulo y a la mesa capitular; y las dos cuartas partes restantes se subdividía en nueve novenos, de los cuales dos novenos son de Su Majestad, 1 y ½ novenos van a la iglesia del partido; 1 y ½ novenos van al hospital, 3 novenos van a los curas de la iglesia del partido, y un noveno va al sacristán mayor de la iglesia[754]. En los libros contables que reproduce el padre Guillermo Figuera aparece la distribución del diezmo a 144 iglesias, y se cuentan 10 hospitales. Además, la cuenta episcopal se distribuyó en gastos generales, cuotas al Seminario conciliar, a la real orden de Carlos III, y un resto al padre Mariano Martí, en ese año de 1788[755]. La cuenta capitular se distribuyó en gastos generales, cuotas al seminario conciliar, a ministros de erección y apuntador de tallas, a misas y vestuarios de erección y rúbricas, y a la mesa capitular[756]. Es seguro que, fuera de estas asignaciones, llovieran sobre el reparto del diezmo muchas peticiones; por ejemplo, el mismo Figuera inserta en su libro que durante el quinquenio de 1796 a 1800 el Seminario de Mérida recibió de la renta decimal la cantidad de 7.292 pesos y 3 reales, más 9.479 pesos y 2 reales de principales de fondos corrientes que tenía el Rector del seminario, más el 3% del producto de capellanías, cofradías, etc., todo lo cual daba para mantener a 10 seminaristas, el rector, criados, catedráticos, y otros funcionarios. Al parecer, no se pidió dinero extra al rey[757]. En cuanto a Caracas, aunque el informe es el que suministra el obispo Narciso Coll y Pratt en febrero de 1813, los fondos de subsistencia para el seminario estaban formados por el 3% de los diezmos y de las rentas de capellanías, curatos y cofradías, y los réditos de algunos censos, todo lo cual produjo anualmente (según el último quinquenio) 7.298 pesos y 4 reales. Y a la universidad correspondió lo que impone a censo varios capitales que reditúan anualmente 1.935 pesos y 7 reales[758].

En este aspecto de los ingresos que recibía la Iglesia, es conveniente buscar las partidas donde figura la iglesia y el sacerdocio en el movimiento anual de la hacienda real, porque será de utilidad para quien asuma la tarea de trazar un panorama más amplio y completo del movimiento económico en los predios eclesiásticos.

---

[754] Manuel Gutiérrez de Arce, *Ob. cit.*, tomo II, p. 269.
[755] Guillermo Figuera, *Ob. cit.*, tomo II, p. 106.
[756] *Ibíd.*
[757] *Ibíd.*, p. 337.
[758] *Ibíd.*, p. 398.

Cuadro Nº 113
Sueldos a cargo de la Real Hacienda en 1730

Nombre	*Maravedíes*
Gobernador y Capitán General	650.000
Teniente de Gobernador	338.000
Contador de Cuentas	200.000
Oficiales reales, c/u.	200.000
Guardamayor	32.640
Oficios fúnebres (militares difuntos)	46.240
2 preceptores de Gramática	54.400
Situado de La Guaira, incluso el castellano	4.343.424
Gasto ordinario de la Real Contaduría	70.720
100 infantes de castillos de Cumaná	3.740.000
Infantería de Margarita	1.985.600
Gobernación de Trinidad	748.000
2 religiosos dominicos de Capaya y Caucagua	60.928
Curas doctrineros de la Provincia	1.921.059
2 curas de Margarita	130.560
17 religiosos capuchinos de Los Llanos	50 pesos c/u.
16 religiosos capuchinos	50 pesos c/u.
10 religiosos capuchinos de Guayana y Trinidad	50 pesos c/u.
20 misioneros Observantes de Píritu	112 pesos c/u

Fuente: *Boletín del Archivo General de la Nación*, Nº 85, Caracas, 1937, pp. 8-10)

Cuadro Nº 114
Entradas a la Real Hacienda, en maravedíes, año 1748

Ramo	*Maravedíes*
Almojarifazgo	3.853.454
Alcabala	4.775.759
Armada de Barlovento	3.360.413
Antigua armadilla	4.653.554
Dos novenos reales de diezmos	1.293.608
Penas de cámara	188.632
Venta de oficios	40.800
Media anata de oficios	1.461.168
Media anata de embarcaciones	71.101
Comisos y descomisos	1.103.545
Papel sellado	191.794
Hacienda de otras cajas	1.924.579
Tributos de indios	398.684
Composición de pulperías	594.456
Multas para fortificación La Guaira	43.350
M[illegible]das eclesiásticas	27.013
Multas para la guerra	163.200

Fuente: (*Ibíd.*).

Estos 17 ramos aportaron 24.145.129 maravedíes.

En 1749, 16 ramos produjeron 21.039.120 y 1/3 maravedíes, y el egreso de 27 partidas fue de 25.403.995 maravedíes, o sea, 93.397 pesos con 11 maravedíes, esto sin contar diversos pagos por cajas

reales ordenados por reales cédulas y órdenes (para gastos militare, a Su majestad, al virrey de Santa Fe, etc.[759].

Por otra parte, el funcionario Rosel de Lugo certifica las siguientes deudas de las cajas reales contraídas con sacerdotes:

Al cura de La Vega	816p, 6r
Al cura de San Diego	1.095p, 5r
Al cura de Capaya y Caucagua	783p
Al cura de Petare	539p, 5r, 11m
Al cura de Valle de la Pascua	831p, 20m
Al cura de Baruta	834p, 20m
Al cura de Guacara y Los Guayos	831p, 7r, 12m
Al cura de San Mateo	277p
Al cura de Caugua	737p, 5r, 8m
Al cura de Choroní, Chuao y Cuyagua	1.247p, 7r, 20m
Al cura de Caraballeda	311p, 5r, 30m
Al cura de Carayaca	670p, 3r, 7m
A los padres misioneros	11.200p
A los capuchinos de Guayana	21.600p
A los de Píritu	6.454p
A los de Cumaná	4.900p[760]

La función educadora de la iglesia

Signo de la época es la casi exclusividad que poseyó la iglesia para conducir la educación de los habitantes de la colonia, desde la enseñanza de las primeras letras a los aborígenes que salían de sus selvas y sabanas, hasta las nociones filosóficas de Aristóteles y Tomás de Aquino y la ciencia médica de Vesalio, impartidas a los jóvenes universitarios. El historiador Caracciolo Parra León es quizás el primero en hurgar en los archivos de una manera tal que logra reivindicar la real y sistemática presencia de un interés de la iglesia por la instrucción a lo largo de los trescientos años de régimen colonial. En una de las citas que hace de los discursos y preceptivas del obispado en orden a la función educadora de los ministros de la iglesia, queda manifestada la amplitud de tal función, no reducida a la simple escolaridad de los catecismos y el dogma, sino a la formación intelectual básica de los vecinos. Se trata de las palabras emitidas por el obispo Antonio González de Acuña en la ocasión de otorgar el título de primer rector del seminario de Caracas al maestro Juan Fernández Ortiz:

---

[759] *Boletín del Archivo General de la Nación*, Nº 85, Caracas, 1937, pp. 8-10.
[760] *Ibíd.*, p. 11.

> La buena educación de la Jubentud consiste en tener la yga [iglesia] dignos ministros Maestros del pueblo christiano, y seladores de su santo templo para que mando que en todas las diócesis se erigiese uno o más seminarios en que quando los pequeños abriesen los ojos de la raçon se hallasen eclesiasticamte enseñados...[761]

Está de más decir que la instrucción elemental no pasaba de ser la de inculcar las primeras letras, enseñar el abecedario, las cuentas de suma y resta, el catecismo y los rituales más sencillos de la misa, los pasos indispensables para la confesión, la comunión, el matrimonio y el bien morir; la formación de coros y el aprender a tocar algunos instrumentos musicales, el tejer y bordar para las mujeres, todo en armonía con las creencias básicas y fundamentales: el amor al rey, la devoción a Dios, a Cristo crucificado, a la virgen María y su santo misterio de pureza, y la esperanza de llegar libre de pecados para llegar al Cielo, que es la vida eterna, al haber rechazado toda herejía, toda apostasía. Aun con tal enseñanza, las mentes, por ser las propias de un espécimen singular de la Naturaleza que en todas las épocas y en todas las situaciones ha podido ejercer la privilegiada y muy suya función de pensar, quedaban abiertas a la indagación, a la duda, señales imposibles de advertir en el transcurso de pocos años, pero germinadoras de un vuelo más atrevido en ese siglo de maravillas intelectuales como fue el XVIII.

Nuestras provincias llegaron tarde a las prácticas de la mejor instrucción, la impartida en colegios seminarios y universidades. De los 40 seminarios conciliares que se fundaron en la América española entre 1563 y 1800 (8 en el siglo XVI, 18 en el siglo XVII, y 14 en el siglo XVIII), dos lo fueron aquí, en Caracas y en Mérida. Según anota Javier Vergara Ciordia, del Departamento de Historia de la Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de Madrid, apoyándose en diversas fuentes, entre las cuales figuran los escritos de los historiadores venezolanos Héctor García Chuecos e Ildefonso Leal, el seminario de Caracas fue objeto de una primera solicitud, cursada por el obispo Mauro de Tovar (1639-1653) ante el cabildo eclesiástico, pero el terremoto de San Bernabé de 1641 sepultó bajo escombros las primeras piedras de su construcción. En cambio, en 1670, comenzó a funcionar, gracias a la iniciativa del obispo Antonio González de Acuña (1670-1682) quien, por ser peruano de nacimiento, lo encomendó a la advocación de Santa Rosa de Lima. En 1673 se redactó su acta constitutiva, y comenzaron a funcionar las cátedras de teología, filosofía y gramática. El obispo Diego de Baños y Sotomayor (1683-1706) amplió el edificio, redactó sus constituciones y formalizó su inauguración oficial el 29 de agosto de 1696. También, trató de convertirlo en universidad,

---

[761] Caracciolo Parra León, *La instrucción en Caracas, 1567-1725*, Caracas, Parra León Hnos. Editores, 1932, edición facsimilar Caracas, Comisión Presidencial V Centenario, J.A. Catalá editor, 1998, Apéndice, p. 3.

en vista de lo cuantioso que resultaban los gastos para ir a estudiar en México, Bogotá o Santo Domingo. Para 1707, el Colegio Seminario de Santa Rosa tenía una cátedra de Prima de Teología, la de Vísperas no funcionaba porque no había recursos, la de Moral estaba vaca, aunque estaba dotada con 150 pesos por el arcediano Agustín de Palma, la de Artes estaba vaca, aunque con 150 pesos de renta, de los cuales 100 paga la iglesia y 50 salían de las rentas del colegio, y también funcionaban las de Mayores de Gramática y Menores de Retórica, las dos con 150 pesos, de los cuales 100 pagaba Su Majestad[762]. Los obispos Francisco del Rincón (1711-1717) y Juan José de Escalona y Calatayud (1717-1729) siguieron luchando por la universidad, hubo donaciones de los vecinos para ello, como la del rector del seminario, Francisco Martínez de Porras, quien donó dos fanegas de cacao. El marqués de Mijares y el marqués del Valle de Santiago donaron, cada uno, 25 pesos. Se reunieron en total 1.498 pesos. Cuando se convierte en universidad, en 1721, tenía 9 cátedras, una renta suficiente, obras de construcción adelantadas y «copiosa librería»[763].

El seminario de Mérida-Maracaibo fue fundado a iniciativa del primer obispo de Mérida, fray Juan Ramos de Lora, en 1785. Funcionaba en el antiguo convento de los padres franciscanos con el nombre de Real Colegio de San Buenaventura. Carlos III aprobó sus constituciones en 1786. Recibió luego un nuevo edificio, y estuvo afiliado a la Universidad de Caracas. Allí se impartían clases de gramática, filosofía, derecho canónico y real, y varias ciencias. El segundo obispo de Mérida, Manuel Cándido Torrijos (1791-1794) lo dotó de biblioteca con más de 30.000 volúmenes, y un gabinete de física. El 23 de septiembre de 1810 se convirtió en Real Universidad de San Buenaventura de los Caballeros (*Ibíd.* Ildefonso Leal suministra otras fechas). Por su parte, Guillermo Figuera anota que una real cédula del 20 de marzo de 1789 concedió a los estudios del seminario la posibilidad de que pudieran coronarse con los grados correspondientes en sus facultades. Y agrega que en el quinquenio de 1796 a 1800 el seminario recibió de la renta decimal, como se dijo arriba, 7.292 pesos y 3 reales, más 9.479 pesos y 2 reales de unos principales de fondos corrientes que tenía el rector del seminario, más 3% del producto de capellanías, cofradías, y otras obras, lo cual daba para mantener a 10 seminaristas, el rector, criados, catedráticos, y otros funcionarios. La matrícula se elevaba a 97 estudiantes, en dos cátedras de Derecho Civil y Canónico, 2 de Teología Escolástica, 2 de Filosofía, 3 de Latinidad y Elocuencia, 1 de Primeras

---

[762] Guillermo Figuera, *Ob. cit.*, tomo I, p. 164.

[763] Javier Vergara Ciordia, "Datos y fuentes para el estudio de los seminarios conciliares en Hispanoamérica: 1563-1800", en *Anuario de Historia de la Iglesia*, de la Universidad de Navarra; Pamplona, 2005, vol. XIV, pp. 239-300, www.redalyc.org/

Letras. Pronto, se abriría la de Medicina. Disponía de una librería. No se pedía dinero extra al rey. Y opinaba que la sede debía seguir en Mérida y no trasladarse a Maracaibo, por razones de clima y distancia, entre otras. En Madrid el conde de Casa Valencia le da su aprobación a este informe, el 11 de mayo de 1805[764].

La Universidad de Caracas es creada en 1721. Es que se le ha concedido facultad al Colegio Seminario Santa Rosa de Lima de Caracas para que pueda dar grados y erigirse en universidad, en la misma conformidad y con iguales circunstancias y prerrogativas que la de Santo Domingo, y debe llevar el título de Real. Su rector será designado por el obispo y contará con cuatro conciliarios y un claustro[765]. Para 1725, funcionaba con 4 facultades y 9 cátedras. La facultad de Teología tenía las cátedras de Prima, Vísperas y Moral. La de Cánones, la cátedra de Prima de Cánones; la de Leyes, la cátedra de Instituta de Leyes; la de Filosofía, la cátedra de Filosofía de los seculares, o Filosofía del clérigo. Además, estudios de gramática, con clases de menores, medianos y mayores, y estudios de música o canto llano. En 1784, se opera la separación entre lo que es Seminario tridentino y lo que es Universidad[766]. Leal agrega que está separación se produjo luego de un sonado pleito sucedido en noviembre de 1780 entre el obispo, el rector, el presbítero José Liendo y el maestrescuela Lorenzo Fernández de León, probablemente por conflicto de competencias, y en lo adelante el rector de la universidad duraría dos años en funciones, sería electo en claustro pleno de doctores, y jamás podría ser ejercido por un regular, sino por un secular, alternándose un lego y un eclesiástico[767]. En cuanto a las graduaciones de los alumnos, se graduada de bachiller en Teología quien hubiese cursado 4 años de prima y vísperas. Bachiller en Derecho era quien cursaba 5 años en prima de cánones y en leyes. El bachiller en Artes había cursado 3 años en filosofía. Bachiller en Medicina era primero bachiller en artes y luego 4 años de cursos y 2 de práctica. Cualquier bachiller podía después de dos años de estudios graduarse de licenciado. Los licenciados pueden graduarse de doctor y maestro. Para ingresar a la universidad se pedía la legitimidad de nacimiento y la limpieza de sangre. Y todo aspirante a doctor en teología debía seguir el estado eclesiástico. Los estudios comportaban gastos, muy crecidos en cuanto a la pompa de paseos y ceremonia de la graduación, pero también en cuanto a las tarifas de estudio, grado, y propinas a doctores y maestros[768]. Pero, se concedió de modo perpetuo y a título de

---

[764] Guillermo Figuera, *Ob. cit.*, tomo II, p. 335.
[765] Ildefonso Leal, *Cedulario de la Universidad de Caracas, (1721-1820)*, Caracas, UCV, 1965, p. 51.
[766] Javier Vergara Ciordia, *Ob. cit.*
[767] Ildefonso Leal, *Cedulario...*, p. 249
[768] *Ibid.*, p. 54 y ss.

pobreza dos grados a la orden de San Francisco, dos a la religión de predicadores, dos a la religión de Nuestra Señora de las Mercedes y dos a colegiales que mostraran virtud, pobreza y conocida calidad[769]. También, se recordaba en 1788 una provisión anterior según la cual se podía dar y conferir grados de bachiller en cualquier facultad a los estudiantes que haciendo justificación de su pobreza los pidieren, en la proporción de un estudiante de pobreza por 10 con la obligación de propinas y derechos[770]. En junio de 1742 se erigieron dos cátedras de Filosofía y Sagradas Escrituras, regentadas por religiosos de la orden de Santo Domingo del convento de San Jacinto[771]. Por supuesto, entre los reglamentos de la universidad estaba la advertencia, a todos los graduados, catedráticos y maestros, de jurar al ingresar en sus oficios y grados que no irían, ni enseñarían, ni aun con el título de probabilidad, la doctrina del regicidio y tiranicidio[772].

Por supuesto también, las disciplinas científicas encontraban muchas incomprensiones en el vulgo, dada la mentalidad de la época. Es ilustrativo, a ese efecto, las consideraciones que hizo en 1776 el médico Lorenzo Campins, sobre la razón que lo movió para incorporarse a la universidad al ver la escasez de médicos y el excesivo número de curioso y curanderos. Sin embargo, en los nueve años que tienen dictando la cátedra, no ha cambiado mucho la cosa, pues los que estudiaron la medicina no querían ejercerla, dada la tolerancia con la cual era protegida la práctica de esos curiosos y curanderos, principalmente de condición negros y mulatos. Pide, en consecuencia, que se le de autoridad como Protomédico y que la cátedra la siga regentando en propiedad. Tal condición le fue concedida en 1777 y, más tarde se le nombró médico de los reales hospitales y del seminario[773].

Por el lado del debate de las ideas, aunque el panorama era bien cerrado como se colige del peso fundamentalista de la religión, alguna procesión debía andar por dentro. Estamos ya en el siglo XIX. En mayo de 1801, la autoridad real ordena que se establezcan censores regios que revean y examinen todas las conclusiones que se hayan de defender en las universidades, y en los conventos y escuelas privadas de regulares y seculares de todos los pueblos, antes de imprimirse y repartirse, no permitiendo que se defienda ni enseñe doctrina alguna contra la autoridad y las regalías de la Corona. En tal sentido, los censores regios se guiarán por las siguientes consideraciones: 1)

---

[769] *Ibíd.*, p. 108.
[770] *Ibíd.*, p. 278.
[771] *Ibíd.*, p. 129.
[772] *Ibíd.*, p. 200.
[773] *Ibíd.*, p. 217, 221, 222.

cuidarán de no aprobar conclusiones inconducentes o sin uso en el Foro para la inteligencia del dogma o moral y en que no se verse la sólida y verdadera instrucción de la juventud; [...] 3) reprobarán las que se opongan a las regalías de la Corona, leyes del Reino, derechos nacionales, concordatos y cualesquier otros principios de la constitución civil y eclesiástica; [...] 5) no admitirán conclusiones opuestas a las bulas pontificias y decretos reales que traten de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora; 6) no consentirán que se sostenga disputa, cuestión o doctrina favorable al tiranicidio o regicidio, ni otras semejantes de moral laxa y perniciosa[774].

Según Figuera, las cátedras en la Universidad de Caracas, para febrero de 1813, restablecido el régimen colonial, eran Teología de Prima, Teología de Vísperas, Historia Eclesiástica y Lugares Teológicos, Escritura, Filosofía (estas dos últimas, impartidas por religiosos dominicos con gracia de borlas), Moral Práctico, Sagrados Cánones, Leyes, Medicina, Filosofía del Clérigo, Canto Eclesiástico, Elocuencia, Latinidad de Menores, Mínimos, Ministro de Primeras Letras (que enseña a niños pobres). Sus catedráticos recibían, en total, 200 pesos por la Real Hacienda, 1.080 pesos por el Seminario y 980 pesos por la Universidad. Los fondos de subsistencia se forman con 3% de los diezmos y de las rentas de capellanías, curatos y cofradías y los réditos de algunos censos, todo lo cual produce anualmente (según el último quinquenio) 7.298 pesos y 4 reales, para el seminario; y a la universidad entra lo que dan varios capitales impuestos a censo, con un rédito anual de 1.935 pesos y 7 reales. Los estudiantes son poco menos de 500, hasta el 26 de marzo del año pasado, fecha del terremoto. En el seminario hay 27 seminaristas becados. El informe lo suscribe el arzobispo Narciso. Pero, otro informe, en mayo del mismo año 1813, dice que al producirse el terremoto cursaban 347 estudiantes, reducidos ahora a 120, y que además de los 27 seminaristas becados, hay 60 porcionistas que pagan 150 pesos anuales[775].

En otras provincias funcionaron colegios, o cátedras colegiales, tal es el caso de Cumaná, donde funcionaba desde 1759 una cátedra de gramática. En 1775, el bachiller y presbítero Blas de Rivera solicitó la erección de una cátedra de filosofía, en razón de estar él leyendo un curso de filosofía según la escuela tomista desde hacía 3 años, y con el objetivo de alentar la carrera eclesiástica. En respuesta, el rey dijo que no siendo el estudio de la filosofía una carrera determinada, sino una ayuda a otras ciencias, recomendaba que se dictase un año filosofía y

---

[774] *Ibíd.*, p. 326.
[775] Guillermo Figuera, *Ob. cit.*, pp. 398 y 407.

dos años teología moral, si las condiciones de la ciudad daban para ello. Total, que en septiembre de 1782 autorizó lo dicho y estableció una dotación de 300 pesos anuales con cargo al ramo de tributo de indios. De nuevo, en este caso se incluyó en las reglas de la cátedra la prohibición de proponer conclusiones generales de filosofía o teología sin que pasasen antes por las manos del vicario juez eclesiástico, a efecto de que las vea y examine si contuvieren alguna doctrina errónea o peligrosa, en cuyo caso podría retenerlas sin permitir su defensa[776].

En Guayana, un informe del obispo, fechado el 15 de mayor de 1803, solicitaba, que también se apliquen a este seminario los 3.000 pesos comprados sobre la mitra de Caracas al seminario de nobles de Madrid, por ser insuficientes los medios que se han estipulado para dotarlo de cinco cátedras (Primeras Letras, Latinidad, Filosofía, Escolástica, Sagradas Escrituras), con 600 pesos cada una, es decir, 2.000 pesos del testamento de don Joseph Machado, más 7.347 pesos y 7 ½ reales de las temporalidades de los jesuitas. Se le responde el 11 de julio de 1804 que eso no se puede[777].

A contrapelo de la cerrazón del dogma, hacia la Universidad debían filtrarse los aires de un momento donde estaban ocurriendo movimientos tan trascendentales como la emancipación norteamericana y la revolución francesa, con su atmósfera de ideas renovadoras. Tal circunstancia debió de tener cierto terreno favorable que se fue formando con los años gracias a la incorporación a las jerarquías de la iglesia y, de manera preferente, a sus corporaciones docentes, de un muy nutrido grupo de sacerdotes nacidos en estas provincias. A continuación, suministramos una lista, extraída de la obra antes citada de Caracciolo Parra León, de los catedráticos del Seminario de Caracas que eran criollos, a los que se agregan algunos prelados de otras provincias de la América hispana, lista que ya habíamos reproducido en un escrito nuestro anterior[778]:

> Andrés Álvarez, caraqueño, preceptor oficial de Gramática (1634). Marcos de Sobremontes, caraqueño, preceptor oficial de Gramática (1637). Más tarde, en 1673, es profesor de Moral, y en 1677 pasa a ser Obispo de Puerto Rico, con lo se convierte en el primer nativo de Caracas que resulta purpurado. Diego de la Carrera, caraqueño, preceptor de Gramática (1645). Fr. Juan Mudarra de Castro, de Santo Domingo, profesor de Teología en el convento de San Francisco (1643). Fr. Alonso Palomino, margariteño, profesor de Cátedra de Vísperas (1662). Fr. Matías Coello, venezolano, profesor de Prima (1668). Fr. Francisco de Alvarado, de Santo Domingo, profesor de Moral (1650). Fr. Benito de Sobremontes, caraqueño, profesor de Moral (1653). Fr.

---

[776] *Ibíd.*, pp. 226, 244.
[777] *Ibíd.*, p. 335.
[778] Antonio García Ponce, *Guaicaipuro, Robinson y Bolívar*, Caracas, Ediciones de la Federación Médica Venezolana, 2004.

Bartolomé de la Rosa, de La Española, profesor de Moral (1668). Fr. Alonso de Herrera, de Puerto Rico, profesor de Moral (1670). Fr. Juan de los Reyes, de Santo Domingo, profesor de Moral (1672). Fr. Francisco González de Albornoz, margariteño, profesor de Gramática (1643). Fr. Juan de Torres, de Santo Domingo, profesor de Gramática (1645). Fr. Jerónimo de la Parra, venezolano, profesor de Gramática (1650). Juan Francisco de Viloria, de Trujillo, profesor de Teología (1705). Fr. Luis Bernabé del Barrio, caraqueño, profesor de Teología (1708). Fr. Juan José Merentes, caraqueño, profesor de Teología (1723). Fr. Mateo de Ilarraza, caraqueño, profesor de Artes (1653). Fr. Miguel de Ponte, caraqueño, profesor de Gramática (1667). Fr. Juan Vives, de Valencia, profesor de Gramática (1668). Fr. José de la Vega, de Maracaibo, profesor de Gramática (1670). Juan de Heredia Carvallo, caraqueño, profesor de Gramática (1673). Bernabé de Acuña, caraqueño, profesor de Gramática (1677). Juan Fernández Algarín, caraqueño, profesor de Gramática (1681). Juan Díaz de Vargas Machuca, caraqueño, Rector (1696-1701). Félix de Acuña, caraqueño, profesor de Teología de Prima (1696). Jerónimo Fernández de Escorcha, de Quíbor, profesor de Filosofía (1694) y Vice-rector (1696). Andrés Bravo de Laguna, caraqueño, profesor de Retórica (1687). Juan Dámaso Dávalos y Chirinos, de Coro, profesor de Gramática de Menores (1692) y de Filosofía (1701). Francisco Pérez Camacho, de El Tocuyo, profesor de Música (1696). Juan Francisco Cubillán, de Maracaibo, profesor de Casos de Conciencia (1713) y Vice-rector (1709-1717). Fr. Nicolás de La Torre, de La Guaira, profesor de Mística y Moral (1687). Fr. Basilio Antonio Carrasco, caraqueño, profesor de Mística y Moral (1718). Fr. Esteban de la Cueva, caraqueño, profesor de Gramática (1675). Fr. Álvaro Suárez, margariteño, profesor de Gramática (1690)[779].

Parra León advierte que no pudo localizar los archivos de los conventos de San Jacinto y Las Mercedes, por lo que es posible que el número de educadores criollos sea más numeroso. A pesar de que esta plantilla de catedráticos criollos encargados de la formación de los jóvenes antes de haberse creado la universidad, resulta modesta, es de todas maneras, bastante apreciable, y permite decir que el elemento criollo estuvo ocupado en la misión de inculcar conocimiento y cultura a la sociedad de la época. Los datos aportados por Parra León terminaron de refutar la vieja impresión, que se repite en nuestros días por boca de gente desprevenida, según la cual la época colonial fue un inmenso desierto en cuanto a las cosas del arte, la instrucción y el despeje de la mente que incitaban las ideas contenidas en los libros y discursos de pensadores, varios de los cuales no eran bien vistos por los comisarios del dogma.

Por otra parte, es de observar que miembros de la nobleza criolla que vistieron hábitos religiosos tuvieron acceso a cargos civiles, eclesiales y universitarios muy importantes.

Allí está Juan de Arrechedera, caraqueño. Su madre fue Luisa Catalina de Tovar, marquesa del Valle de Santiago por casarse en segundas nupcias con Domingo de Berroterán, el marqués. Tuvo distinguida actuación en sus funciones como clérigo

[779] Cf. Caracciolo Parra León, *Ob. cit.*, pp. 116 al 242.

en Caracas, y gracias a ello, fue nombrado Obispo y Gobernador y Capitán General de las Islas Filipinas en 1718. Hay que decir que este Arrechedera descendía, por vía paterna, del capitán Pedro Alonso Galeas, uno de los primeros fundadores de Caracas.

Nicolás de Herrera y Ascanio, nacido en Valencia, llegó a ser rector del Seminario de Santa Rosa entre 1709 y 1718. Su hermano, Juan Ascensio de Herrera y Ascanio es el bisabuelo, por vía materna, de la madre del Libertador Simón Bolívar.

José Mijares de Solórzano, caraqueño, rector de la Universidad de Santa Rosa (1732-1734), hijo de Juan Mijares de Solórzano, el primer marqués de Mijares, y de Teresa de Tovar y Pacheco; cuñado, por tanto, de Antonio de Pacheco, conde de San Javier. Gracias a su sólida formación, fue nombrado en 1739 obispo de Santa Marta.

Antonio de Tovar y Bañes, caraqueño, profesor de Artes del Seminario en 1716, profesor de Vísperas de Teología en 1719, profesor de Prima en 1725, nieto por vía materna de Juan de Mijares, el primer marqués de Mijares.

José Martínez de Porras, caraqueño, nombrado obispo de Puerto Rico en 1752, mitra que no pudo ceñir por morir antes de viajar a la isla. Ya se vio que su hermano, Francisco Martínez de Porras, también caraqueño, fue rector del Seminario en 1718 y el académico Ildefonso Leal lo enumera como rector de la Universidad en 1725. Estos hermanos tuvieron como su 5º abuelo a Damián del Barrio, de los primeros pobladores de Barquisimeto y El Tocuyo.

Entre 1696 y 1732, de los seis rectores del Seminario, tres fueron venezolanos.

Otros prominentes sacerdotes criollos llegaron a ser rectores de la Universidad caraqueña. Elllos son Gerónimo de Rada, caraqueño, rector en 1734; Carlos Francisco de Herrera, rector en 1739; Blas Arráez de Mendoza, de San Sebastián de los Reyes, rector en 1740; Juan Pérez de Hurtado, de El Tocuyo, rector en 1741; Gabriel Ramón de Herrera, caraqueño, rector en 1746; Francisco de Ibarra, de Guacara, rector en 1758; Bartolomé Antonio de Vargas, caraqueño, rector en 1771; Domingo de Berroterán, de Petare, nieto del primer marqués del Valle de Santiago (quien fue Gobernador de la Provincia de Venezuela), rector en 1772; José Domingo Blanco, caraqueño, rector en 1785; José Ignacio Moreno, caraqueño, rector en 1787; Juan Agustín de la Torre, de Carora, rector en 1789; Domingo Rogerio Briceño, de Trujillo, rector en 1791; José Antonio Osío, caraqueño, rector en 1793; Tomás Hernández Sanabria, caraqueño, rector en 1794; Juan Vicente Echeverría, caraqueño, rector en 1795; José Antonio Felipe Borges, de Cagua, rector en 1797; José Vicente Machillanda, de Ocumare, rector en 1799; Domingo Gómez de Rus, de La Victoria, rector en 180; Nicolás Antonio Osío, caraqueño, rector en 1803; José Bernabé Díaz, caraqueño, rector en 1805; Gabriel José Lindo, caraqueño, rector en 1807; Manuel Vicente Maya, de San Felipe, rector en 1811[780].

En fin, el codicilo del testamento de Francisco de Miranda, ya comentado en páginas anteriores, mediante el cual cede a la Universidad de Caracas sus libros de clásicos griegos en homenaje a los

[780] Ildefonso Leal, *Historia de la UCV...*, pp. 486-490.

principios de literatura y moral cristiana que la institución le inculcó, habla por sí solo.

Los jefes militares del Ejército de América

La fuerza militar fue el brazo armado de la conquista americana. Siguió siendo la hueste acorazada que en lo adelante consolidó palmo a palmo el territorio descubierto y colonizado ya no sólo por expedicionarios militares sino también por navegantes, aventureros, comerciantes, religiosos. Fue la punta de lanza para mantener a raya las ansias de ingleses, franceses, holandeses y otros europeos por apoderarse de la presa ya colonizada. Era en muchos casos la avanzada de las legiones que en Europa y el norte de África mantenían el imperio carolino. Fueron tantas las necesidades de usar la fuerza armada, que un signo de la época fue la institucionalización de las milicias, esa masa de criollos, indios, mulatos y pardos que eran llamados a las armas al toque de alarma ante la cercanía de filibusteros de toda laya que infectaban el Caribe.

Si la conquista fue una empresa militar, los siglos de estatuto colonial tuvieron en el ejército su guardia armada, su ente protector. Rebeliones acaudilladas por militares y destinadas a cambiar el status social o, por lo menos, deponer a una autoridad para entronizar un caudillo, no existieron, salvo la de Lope de Aguirre, si no contamos las pugnas y rivalidades que existieron entre los jefes y que condujeron al asesinato, como las ocurridas en tiempos de los Welser y el liderazgo de Juan de Carvajal, y entre Alonso Cobos y Francisco Fajardo. Hubo una que otra deposición de una autoridad, un gobernador, ejecutada por la fuerza, pero ninguna adoptó la entidad de una sublevación o un golpe de Estado, excepto, como ya se dijo, del movimiento de mucha envergadura que planteó el desconocimiento del rey, concebido y capitaneado por Lope de Aguirre, aunque no tuvo su origen ni sus motivaciones en estas tierras. Aquí, desde Margarita hasta Barquisimeto, estuvo teñido de su aspecto más perverso, que fue la degollina montada por el Tirano, no sólo contra las autoridades establecidas sino contra su propia hueste, en Margarita, Borburata, Valencia y camino a Barquisimeto. Sin embargo, es bueno repasar, aunque sea muy a la ligera, sus fundamentos, explicados en la famosa carta de Aguirre a Felipe II. En Valencia, le entrega al padre Contreras, de Margarita, la carta al rey donde intenta justificar su acción como una respuesta a las crueldades que en estas tierras americanas ejercen los oidores, virreyes y gobernadores, y tilda al virrey Cañate, del Perú, de «malo, lujurioso, ambicioso y tirano». Habla de «la disolución de los

frailes», que se dedican a procurar mercadurías, adquirir bienes temporales, vender los sacramentos, enemigos de los pobres, ambiciosos, soberbios y glotones; no quieren predicar a ningún indio pobre y viven en los mejores repartimientos, con una docena de mozas en la cocina y varios muchachos para que pesquen, maten perdices y les traigan frutas. Los oidores tienen 4.000 pesos de renta y 8.000 de ayuda de costa, y al cabo de tres años han reunido 70.000 pesos, más posesiones y heredamientos. Reafirma su obediencia a la iglesia de Roma y termina su misiva con el recuento, muy parcial, de los ajusticiamientos que ha dejado a su paso, empezando por la muerte que le asestó a quien nombró rey, don Fernando de Guzmán[781]. Y en otra carta, esta vez dirigida al gobernador Pedro Collado, quien lo ha llamado a recapacitar y volver a la obediencia, le dice:

> No hay para qué U. diga que andamos fuera del servicio del Rey, porque pretender yo y mis compañeros hacer por las armas lo que hicieron nuestros antepasados no es ir contra el Rey, porque al que nos hiciere las obras le tendremos por Señor, y al que no, no le conocemos, y así ha muchos días que nos desnaturalizamos de España, y negamos al Rey de ella, si es que alguna obligación teníamos de servirle, y así hicimos nuestro Rey, al cual obedecemos , y como vasallos de otro Señor bien podemos hacer guerra contra quien hemos jurado de hacerla[782].

Como es fácil observar, se trata de una insurgencia contra el status que es justificada políticamente por Aguirre en razón de los atropellos de los gobernantes contra sus vasallos, y que él reviste de legitimidad al rechazar el calificativo de insurrectos porque, por medio de las armas, ha desconocido la autoridad real y la ha sustituido mediante la conformación de un nuevo orden, el de él y sus marañones. El hilo de sangre y de autodepuraciones del "aguirrismo", suerte de paranoia macabra, habla de sus resultados.

Menudearon, en cambio, deserciones, actos de indisciplina y de insubordinación, apatía. Las crónicas de la época relatan muchos de estos casos, así como también los esfuerzos que debían hacerse para montar un contingente armado destinado a acompañar a misioneros en sus expediciones de sacar a los indios de sus montes, o a aplastar las rebeliones de indios y esclavos. Con el tiempo, el ejército se fue institucionalizando, y en su estructura se fueron conformando al menos tres cuerpos diferenciados, si seguimos la argumentación sostenida por el historiador Juan Marchena Fernández, profesor del departamento de Historia de la Universidad de Sevilla, que son: a) el ejército de dotación, compuesto por las unidades veteranas, regulares, profesionales, que formaban batallones en las diferentes guarniciones o que estaban acantonadas en las fortalezas defensivas de La Guaira, Puerto Cabello,

---

[781] José de Oviedo y Baños, *Ob. cit.*, tomo II, p. 326.
[782] *Ibíd.*, p. 341.

Barra de Maracaibo, Cumaná, Margarita, y Guayana, principalmente; b) el ejército de refuerzo, representado por unidades peninsulares que ocasionalmente venían a América a reforzar posiciones contra ataques de piratas o de unidades de potencias europeas, y c) las milicias, formadas por los pobladores entre 15 y 45 años, divididas en unidades de blancos, de pardos, de indios y de mulatos libres, llamadas a ejercicios ocasionales y a tomar las armas en situaciones de peligro, generalmente provocadas por incursiones de piratas. Tales milicias jugaron papel muy importante en detener e incluso derrotar las embestidas corsarias en diversas ocasiones. En general, Marchena llama Ejército de América a la fuerza armada regular proveniente de España o dirigida fundamentalmente por el mando español[783].

Las pérdidas de Curazao, en 1634, y de Trinidad, en 1797, se produjeron en el marco de las guerras entabladas por España contra Holanda e Inglaterra, y no a causa de incursiones de corsarios o piratas. En cambio, las rebeliones del negro Miguel, del Tirano Aguirre, de Andresote y de José Leonardo Chirino fueron sofocadas por la fuerza armada local. Sólo la rebelión de Juan Francisco de León, en 1741, ameritó el llamado urgente de refuerzos militares procedentes de Puerto Rico.

Marchena y Lynch coinciden en afirmar que fue durante el siglo XVIII cuando los mandos del ejército de América sufrieron una transformación en cuanto al origen peninsular o criollo de sus integrantes. Marchena dice: «Con respecto a los oficiales peninsulares, cuyo número fue disminuyendo drásticamente a lo largo del último tercio del siglo XVIII, dada la negativa de muchos a marchar a América desde las unidades españoles, la mayor parte de ellos se casaron en América con extraordinaria rapidez»[784]. Y Lynch dice: «La metrópoli no tenía el dinero ni la mano de obra necesarios para enviar regularmente a América tropas españolas en número importante, lo cual hizo inevitable e irreversible la americanización del ejercito colonial»[785].

Lynch da cifras que dicen que el número de oficiales criollos en el ejército de América era del 34% en 1740, del 33% en 1760 y del 60% en 1800%. Y Marchena dice, en un estudio firmado junto con Braulio L. Flores Morón, que de una cohorte de 606 oficiales regulares del Ejército de América destacados en las unidades de infantería, caballería,

---

[783] Juan Marchena Fernández, "El ejército de América y la descomposición del orden colonial. La otra mirada en un conflicto de lealtades", *Militaria, Revista de Cultura Militar*, Nº 4, Madrid, Universidad Complutense, 1992, p. 72.

[784] *Ibíd.*, p. 86.

[785] John Lynch, *Ob. cit.*, p. 307.

artillería y estado mayor en Venezuela, entre 1750 y 1810, los que eran de origen criollo pasaron del 18,4% en 1750-1777 al 60,9% en 1810[786].

Más todavía, Marchena ha confeccionado el siguiente cuadro donde se aprecia la proporción de soldados, según su nacimiento, en la tropa destacada en América:

Cuadro Nº 115
Relación de soldados españoles, criollos y extranjeros en el Ejército de América

	Siglo XVII		*1740-1759*		*1760-1779*		*1780-1800*	
	Nº	*%*	*Nº*	*%*	*Nº*	*%*	*Nº*	*%*
Peninsulares	587	80.85%	328	31.23%	173	15.75%	442	16.43%
Criollos	95	13.08%	731	68.76%	918	86.04%	2.171	80.70%
Extranjeros	17	2.34%	4	0.37%	7	0.63%	65	2.41%
Total estudiado	726		1.063		1.098		2.690	

(Juan Marchena, *El ejército...*, p. 87).

(Nota: Las sumas no corresponden exactamente, por no encontrar Marchena el origen geográfico de varios soldados).

Ahora bien, así como los conflictos entre la realeza y la nobleza criolla no llegaron al desideratum del rompimiento en más de tres siglos de régimen colonial, sino cuando una acumulación de causas, entre ellas la profundísima crisis de la nación toda española en la primera década del siglo XIX provocó el repentino estallido, así también el copamiento de los mandos del ejército por los criollos se desenvolvió dentro de un clima alterno de tirantez y entendimiento.

CAPÍTULO XVII

EL CABILDO Y EL REAL CONSULADO DOS BASTIONES DE LOS CRIOLLOS

La estructura burocrática montada por la Corona en la América aseguró su dominio colonial durante el no despreciable tiempo de tres siglos. El profundo desnivel entre el ente social metropolitano, uno de los más poderosos en el mundo de la época, y las comunidades aborígenes fue un terreno favorable para que tal estado de cosas se mantuviera, bien por la fuerza de las armas o por la hegemonía cultural.

---

[786] *Cf. Alberto Filippi (coord.),* Bolívar y Europa, *volumen III, Caracas, Editorial Arte, 1995, p.* 77.

No fue cosa secundaria el status de provincias, y luego de virreinatos, que le adjudicó la dirección política español a sus posesiones americanas, porque a través del traslado al Nuevo Mundo del espeso entramado jurídico-constitucional que había forjado en sus territorios europeos, hizo españoles a las generaciones que siguieron a los conquistadores, e incluso les permitió mucha prerrogativas en la conducción general de estos dominios. Es cierto que ninguno de los monarcas, Habsburgo o Borbones, pisaron tierra americana, ni siquiera Carlos V quien recorrió varias veces todos los rincones de su dilatado imperio, salvo este de allende el océano, pero, es valedero también reconocer la eficacia del monstruoso aparato administrativo, dirigido por el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, con sus miles de disposiciones, con la tramitación de miles de cédulas reales, aparato que sorprende en variados casos por la sensación de cercanía virtual que se establece entre Madrid, Aranjuez, San Ildefonso, Valladolid, Cádiz, o Sevilla allá, y Santiago de León de Caracas o Espíritu Santo de La Grita aquí. Pero, ¿no eran muy largos y hasta tediosos los meses y hasta años que pasaban los documentos oficiales y sus respuestas o sus aplicaciones en un ir y venir de un lado a otro? Es verdad, mas no hay que olvidar que se trataba de un problema general, en que la gente medía el paso del tiempo con el concepto de rapidez de la época. Se dirá también que el enjambre de disposiciones, normas, cédulas y reglamentos luce a nuestros ojos caótico y contradictorio, pero debe tomarse en cuenta lo que anota con perspicacia el jurista venezolano Rogelio Pérez Perdomo cuando dice que los monarcas españoles al mandar aplicar sus compilaciones legislativas daban un orden de prelación a las mismas, mientras que «los legisladores del presente generalmente no consideran necesario ordenar que se apliquen sus leyes ni establecen órdenes de prelación de manera expresa. Al contrario, derogan la legislación anterior»[787]. Y agrega que la recopilación de leyes de Indias fue entendida por los juristas de la época no «como un código que derogara la legislación indiana anterior o que el mismo Consejo de Indias o las audiencias lo tomaran como un derecho fijo, que no podía modificarse», razón por la cual la consulta de tal legislación es «extraordinariamente complicada y difícil»[788].

Para completar el cuadro, el cemento de unión que representó la religión católica y toda la estructura de la Iglesia fueron factor decisivo en la prolongada estabilidad de las Indias.

---

[787] Rogelio Pérez Perdomo, "Los abogados americanos de la monarquía española", en *Anuario de Historia del Derecho*, volumen XV, México, 2003. Internet.

[788] *Ibíd.*

La cohesión y permanencia de tres siglos de las Indias es perfectamente compatible, como sucede en los procesos sociales, con la presencia de pugnas y rivalidades en su seno. Ya en diversas páginas de este escrito hemos hecho alusión a ellas, y cómo su presencia abarca un abanico muy amplio de sectores, que no es posible encasillar en los estrechos moldes de la así llamada "contradicción principal entre clases dominantes y clases dominadas" más el añadido de las "contradicciones secundarias", éstas de marca e interés menor. Hay que tratar a la sociedad colonial como un ente vivo, y saber aquilatar en cuáles terrenos y en qué momento toma alta temperatura el roce social.

Son muchos los historiadores que se han referido, en estudios muy densos, a dos instituciones del periodo colonial que desempeñaron un rol de marcado interés en aquella estructura gubernativa impuesta por el español. Son el cabildo y el consulado.

El poder municipal, poder de los criollos

Fue inevitable que al no más pisar tierra los conquistadores y empezar ellos a fundar ciudades y villas, la Corona invistiera con los cargos de dirección gubernativa a esos españoles, muchos de los cuales iban a echar raíces aquí y dar paso a sus descendientes, ahora españoles criollos. Bien pronto, tales cargos de dirección se fueron diferenciando, unos pasaron a ser ejercidos preferentemente por españoles llegados a ese fin de la metrópoli, como ya vimos en el capítulo anterior, y otros quedaron en manos de los criollos, sobre todo los de señalada importancia como fueron los del cabildo de las ciudades.

De entrada, hay que repetir lo que ya se sabe del papel del cabildo en razón de ser el cuerpo de conducción de los asuntos municipales, en unión con las facultades judiciales de sus alcaldes. Según Solórzano Pereira, dos son los alcaldes ordinarios, o jueces, que ejercen la jurisdicción civil y criminal, y vigilan la provisión y el abastecimiento de los pueblos, con la visita correspondiente. Son electos cada año, de acuerdo con lo que reza la *Recopilación*, en su ley 1, título 10, libro 4, y en título 3, libro 5. Para el cargo, serán preferidos los primeros conquistadores, pobladores, y luego, sus hijos. Deben ser vecinos con casa poblada, encomenderos o no. Los militares de milicia pueden serlo, si tienen casa poblada. Pero, se puede permitir el nombramiento de alcaldes en personas que no sean tan nobles ni tan letrados ni tan entendedores, lo que ocurrió en algunos poblados. Queda prohibida la reelección inmediata, y habrá que esperar dos o tres años para volver a

ser alcalde. Ningún deudor de las rentas puede aspirar al cargo[789]. Hay poblaciones donde no hay alcaldes ordinarios, y sólo existe el corregidor (*Ibíd.*, p. 1855).

Otro componente del cabildo son los regidores. En las ciudades principales hay 12 regidores en el cabildo, y en ciudades más pequeñas y en las villas, ese número se reduce a 6[790]. A diferencia de los alcaldes ordinarios, el cargo de regidor se hizo vendible, y hasta perpetuo, escogido siempre dentro de los miembros de la nobleza criolla. La confirmación de que los regidores deben ser personas nobles se puede ilustrar con la siguiente cita donde se explica la razón por la cual se aprueba la solicitud de ingreso en la orden de Santiago, formulada por Miguel de Jerez y Aristeguieta:

> "...los ascendientes del pretendiente por su paterna han estado en lista para ser regidores cargoavientes lo que no pudiera ser si no estuvieran tenidos y reputados por tales hijosdalgo..."[791].

Otros funcionarios del cabildo fueron el alférez real, con voz y voto en las sesiones; el depositario general, los fieles ejecutores, el procurador general, así como los llamados Alcaldes de la Santa Hermandad, estos últimos creados por los reyes Católicos en 1476, para combatir el bandolerismo[792], electos por el cabildo cada año, aunque más tarde pasó el cargo a ser vendible[793].

Un ejemplo de las votaciones que se realizaban en el cabildo a principios de años es la de 1606, según el cuadro siguiente, donde aparecen nueve cabildantes con derecho a voto para nombrar titulares de siete cargos, entre quince candidatos que se presentaron. Asistieron el Gobernador y Capitán General Francisco Mejías de Godoy; el alcalde ordinario Diego de los Ríos, el contador Simón de Bolívar, el depositario general Garci González de Silva, y los regidores perpetuos Nicolás de Peñalosa, Martín de Gámez, Diego Becerril, Antonio Rodríguez, Mateo Díaz de Alfaro y Rodrigo de León. Los candidatos fueron Francisco de Rebolledo, capitán Gaspar de Silva, Pedro Gutiérrez Lugo, Alonso González Urbano, Alonso Martínez de Bidela, Juan de Ponte, Juan Cerrada, capitán Juan de Chabarria, Francisco de Carbajal, capitán Francisco Maldonado, capitán Francisco de Olalla, Sancho de Cuaco,

---

[789] Solórzano Pereira, *Ob. cit.*, tomo III, pp. 1844, 1848-1850.
[790] *Ibíd.*, p. 1844, ver ley 2, título 10, libro 4.
[791] Elizabeth Ladera de Diez, *Ob. cit.* p. 195, según documento tomado del Archivo Histórico Nacional de España, sección Ordenes Militares, año 1754, expediente 4.200 s/f.
[792] Julio Valdés, Joseph Pérez, Santos Juliá, *Historia de España*, Madrid, Edit. Espasa Calpe, 2006, p. 184.
[793] Solórzano Pereira, *Ibíd.*, p. 1852.

Alonso Rodríguez, y Juan Quintano, es decir, 14 candidatos para 7 cargos. La votación fue así:

Cuadro Nº 116
Votaciones en el Cabildo de Caracas en 1606

Votantes	*Para Alcalde O.*	*Alcalde O.*	*Alcalde S. H.*	*Alcalde S. H.*	*Fiel ejecutor*	*Procurador Gral.*	*Mayordomo*
De los Ríos	F. Rebolledo	G.de Silva	P. Gutiérrez L	A González U	A. Martínez B	Juan Ponte	J. Cerrada
S. Bolívar	J. Chabarría	G. de Silva	P. Gutiérrez L	A González U	Fco. Carbajal	Juan Ponte	J. Cerrada
G.González	F. Rebolledo	J. Chabarría	P. Gutiérrez L	A González U	A. Martínez B	Juan Ponte	J. Cerrada
N.Peñalosa	F. Maldonado	F. de Olalla	P. Gutiérrez L	S. de Cuaco	A. Martínez B	Juan Ponte	J. Cerrada
M.Games	F. Rebolledo	J. Chabarría	P. Gutiérrez L	A González U	A. Martínez B	A. Rodríguez	J. Cerrada
D.Becerril	F. Rebolledo	J. Chabarría	P. Gutiérrez L	J. Quintano	Fco. Carbajal	Juan Ponte	J. Cerrada
A.Rodríguez	G. de Silva	J. Chabarría	P. Gutiérrez L	A González U	Fco. Carbajal	Juan Ponte	J. Cerrada
M.Díaz A.	G. de Silva	J. Chabarría	P. Gutiérrez L	A González U	A. Martínez B	Juan Ponte	J. Cerrada
R. de León	G. de Silva	J. Chabarría	P. Gutiérrez L	A GonzálezU	A. Martínez B	Juan Ponte	J. Cerrada

Fuente (Santos Rodolfo Cortés, *Antología...*, pp. 81-85).

La académica Marianela Ponce, en su estudio de los juicios de residencia, hace un compendio de diversas atribuciones de los miembros del cabildo. Por ejemplo, toca a los regidores dirigir y administrar la ciudad, sus bienes, policía, urbanismo, abastos, licencias de mercaderes y oficiales, reconocimiento de cargos desde gobernador a pregoneros y verdugos; salud pública, admisión de médicos y boticarios, rechazo de invasión de piratas según las atribuciones que les encomiende el gobernador. El regidor más antiguo tiene derecho a ser alférez real. Son nombrados preferentemente por el rey y, mediante merced especial, por gobernadores y fundadores, y por los vecinos, o bien por éstos cuando no había disposición especial en las capitulaciones.

Los alcaldes ordinarios tienen derecho a voto en cabildo, del mismo modo que los regidores. Deben visitar ventas y mesones y establecer precios si no hay gobernador o corregidor.

Los alcaldes de la Santa Hermandad tienen como tarea la de perseguir a los malhechores en los campos y mantener el orden en zonas adyacentes a las ciudades y villas. No pueden conocer de los pleitos de indios, sino remitirlos al alcalde ordinario, salvo cuando se refiera a robo de ganado.

Los procuradores generales son representantes del común en los cabildos, con voz, pero sin voto. Actúan como defensores de los ciudadanos, de la ciudad, y del cabildo. Es costumbre que propongan al comienzo del periodo de sesiones una lista de puntos para el mejoramiento de la ciudad y sus habitantes.

El cabildo tiene escribanos, algo así como sus secretarios y notarios. Son nombrados por el Rey, o algún funcionario con su autorización. Muchas disposiciones regulaban su actuación, y el cargo se hizo vendible.

El fiel ejecutor se encarga de fiscalizar los pesos y medidas y lo ajustado en las mercancías, mediante visita periódica a las tiendas. Está facultado para establecer las ganancias de los mercaderes, y las de los productos de los sastres, zapateros, etc. Velaba por el abastecimiento de carne, pescado.

El alférez real tenía voto activo y pasivo en las sesiones del cabildo, y su categoría era igual a la de los regidores. También era un cargo vendible. Actuaba en muchas ocasiones, en los actos protocolares, como un representante simbólico del Rey.

Los alguaciles mayores y menores eran vigilantes del orden, encargados de poner en prisión a delincuentes y personas escandalosas.

Los regidores no pueden nombrar en esos cargos a sus hijos, ni los hermanos a hermanos, ni los suegros a sus yernos o viceversa, ni los cuñados a sus cuñados. No pueden tratar ni contratar en las ciudades y villas de su regiduría, ni tener tierras, ni tabernas de vino, etc. No pueden ser regatones ni ejercer oficios viles. Si tienen que ir presos, lo serán en cárcel decente[794].

A veces se obtiene la impresión de que unas mismas funciones cabalgan sobre varios funcionarios y miembros del gobierno de las ciudad, incluso del gobierno general. Es otra característica del sistema español de la época, lo que hace difícil a veces saber cuál es la atribución de uno y la del otro.

Otra información en cuanto a las responsabilidades de los integrantes de los cabildos se obtiene cuando se leen los juicios de residencia, porque allí se indaga acerca de los pecados, vicios e irregularidades que pueden cometer los alcaldes ordinarios y de la Santa Hermandad, los regidores, escribanos y demás ministros del Ayuntamiento, comunes, por lo demás, a los que pueden cometer los gobernadores y sus tenientes. El historiador José Llavador Mira los enumera así, tomando como referencia el juicio de residencia hecho al gobernador Fernando de Villegas en 1673: no rectitud en la administración de justicia (por amor, odio, temor, enemistad, o por

---

[794] Marianela Ponce, *Juicio de residencia*..., tomo I: pp. 413-454.

dádivas, promesas, ruegos, regalos, o parcialidad hacia personas poderosas); remisos y negligentes en averiguar y castigar pecados públicos, alcahueterías, usuras, juegos prohibidos, juramentos, blasfemias, o disimulo o dejación de ejecutar penas contra delincuentes; hacer juicios sin conocimiento de causa;no obedecer ni hacer cumplir reales cédulas, provisiones de la Real Audiencia, y amenazar y tratar mal a los que piden justicia; descuido y negligencia en la aplicación de las penas de cámara; no conservar ni defender la jurisdicción, preeminencia y el patrimonio real; no tener cárcel bien segura, reparada, y si por ello se ha dejado de hacer presos, o éstos se han fugado, o han tolerado que los alcaides no lleven libros; no tener carnicería pública, abastecida, así como venta de pescado, y si funcionan bien las carnicerías, pulperías y demás sitios de abasto; si compran vino y otras mercancías para revenderlas, o si entorpecen el comercio de cacao.

En cuanto a los procuradores generales y mayordomos de propios y rentas de la ciudad, deben averiguar si se cobran o no los remates o no los vigilan; y si los procuradores se han preocupado por el bien general.

En el trabajo de los fieles ejecutores debe averiguarse si visitaron carnicerías, plazas y lugares públicos de venta, y tabernas, y si ejecutan las penas de ordenanza por cohechos, dádivas, y ruegos.

Si el alcalde provincial y los alcaldes de la Santa Hermandad visitaron los términos de su jurisdicción, y si ventilaron desafíos, pendencias, muertes, hurtos, robos, y otros delitos. Si se entrometieron en causas que no es de su campo, y si aplicaron a la real cámara las condenaciones, llevando el libro correspondiente.

Si el alguacil mayor y los alguaciles menores han sido corteses, comedidos, no violentos ni amancebados con mujeres. Si por amistad, cohecho, dádiva, regalo no han apresado a gente buscada por la justicia. Y si, en cambio, han hecho presos a quienes no debieron serlo. Si cobraron las ejecuciones entre las partes, y las décimas y penas de cámara. Si han rondado de noche la ciudad, acudido a incendios, pendencias, riñas, y si han quitado o no armas a personas cuando se debía o no se debía. Si han encubierto cosas mal hechas y si han cobrado, sin que haya habido sentencia, las partes que le tocan por las denuncias. Si han entrado en casas de mujeres decentes con pretexto de buscar amancebados o delincuentes.

Si el alcaide de cárcel ha tratado bien a los presos, evitando su fuga, no abusando de las mujeres presas, si tienen al día los libros con entradas y salidas de presos, si están aparte los hombres presos de las mujeres presas. Si dejan ir a comer a sus casas a los presos, a cambio de dádivas o regalos, o si los tratan mal cuando no les dan nada. Si la cárcel está limpia y reparada, sin bodegas ni regatonerías, sin que se den en alquiler camas a presos, si se reparten limosnas o condenaciones entre los presos pobres.

La indagación hecha a la labor de los escribanos de registros públicos y reales reposa totalmente en averiguar si han recibido dádivas, cohechos, o si han metido o sacado cláusulas de documentos con aviesas intenciones.

A los abogados y procuradores del número se les indaga la posible comisión de cohechos o prevaricaciones[795].

En el estudio de residencias, ya citado, de la historiadora Marianela Ponce se insertan las preguntas del interrogatorio a que son sometidos los miembros de ayuntamiento y se llama a testigos para que atestigüen acerca del cumplimiento en el cargo, actos que casi repiten lo ya dicho por el historiador Llavador Mira. Así, se indagan los siguientes aspectos de la labor municipal:

> Yten si saven que los Rexidores que constan de la relacion huviesen cumplido bien y fielmente los oficios o si fueron omisos en ellos si se an ausentado de esta Ciudad mas del tiempo permitido sin la competente licencia si han ivido juntos en una casa o con otras personas de las que tuviesen voto en Cavildo si en las elecciones botaron por interés o dadivas y si en las causas de apelaciones al Cavildo sentenciaron dentro del termino de la Ley o si hicieron los nombramientos y demas diligencias prevenidas para semejantes casos con negligencia o si abogaron o agenciaron en ellas expresen las circunstancias y causas con el perjuicios que se siguieron.
> Yten si saven que dichos Rexidores huviesen tenido tratos de mercaderia o regatonerias de mantenimientos o si los hicieron vender a mas de los precios de Aranceles, si hicieron estos o los repartieron si fueron causa que otras personas vendiesen dichos mantenimientos por mas de lo tasado o si consintieron haser las costuras por mayor precio por interes dadivas y otros fines y si ciendo Diputados de Mes vicitaron personalmente las carnicerias tiendas y lugares puvlicos donde revenden los mantenimientos si disimularon al fraude los Pesos y medidas y si sacaron por las transgresiones las multas impuestas y no las aplicaron como devian o se quedaron con ellas.
> Yten si saven que otros Rexidores huvieren arrendado por si o por otras personas las Rentas Reales o las de Ciudad o si tuvieron parte o fueron fiadores o abonadores en los remates o si en los pertenecientes a rentas de Ciudad no procuraron el mayor aumento si fueron negligentes en que se tomase cada Año las Cuentas de Propios y demas ramos de Ciudad haciendo se reintegrasen los alcanses o si usurparon alguna cosa de ellos y lo repartieron entre si de los caudales llevaron alguna cantidad para otras partes o destinos indebidamente sin la competente licencia y si sin la de su Majestad impucieron alguna retribución o derecho sobre mantenimientos o mercaderias hentracen o saliesen de esta Ciudad o ci hicieron algun repartimiento dadivas ayuda de costas gastos superfluos o ligaron sin licencia lejitima cantidad que pasase de tres mil maravedis expresenlo todo con individualidad.

[795] José Llavador Mira, *Ob. Cit.*, pp. 283-294.

Yten si saven que el fiel ejecutor de dicho tiempo cumpliendo igualmente su oficio con legalidad o ci por omisión dexo de asistir a las Carnicerias Plaza y Luhares Puvlicos de la venta de mantenimientos tavernas Pulperías y tiendas y si saco las penas o multas a los transgresores o no las manifesto ante el Escribano y si en algo prozedio por dadivas o intereces o si se compuso con las Partes para quee no les hiciesen causa expresandolo todo con distinción casos y cosas.

Yten si saven que los Provinciales y Alcaldes de la Hermandad de dicho tiempo huviesen arreglados sus procedimietos a las Leyes de la Santa Hermandad o se las quevrantaron o no tuvieron Livros para sentar las condenaciones y multas que tuviesen impuestos y sacado para la Arca de la Santa Hermandad; si excedieron en sus oficios agraviando a algunas personas si llevaron derechos demaciados o no los sentaron en los precesos si en la Administracion de Justicia procedieron por amistad o por odio o si la dejaron de aser por dadivas o cohechos si visitaron los campos de esta Jurisdicción selando en hellos los desafios riñas Muertes Fuerzas Robos y demas delitos si prendieron y castigaron a los delincuentes y si excedieron en su Jurisdicción conociendo de causas tocantes a la Ordinaria resultando de ella algun alvoroto escandalo o daño como tambien si dejaron de aplicar a la Real Camara la parte que le tocava de las multas o si se quedaron con ellas y no las sentaron en el libro.

Yten si saven que los Alguaciles Mayores y Menores de dicho tiempo usasen devidamente sus oficios sin llevar derechos demaciados si fueron comedidos y corteces o trataron mal de palabras u obras e hicieron algun agravio o fuerza a alguna persona si vivieron amancevados o lo permitieron a otro si con los mandamientos de Justicia para prender alguno fueron omisos o dexaron de ejecutarlo por cohechos amistad o tros respectos o si prendieron a alguno sin dicho mandamiento no encontrandolo en actual delincuencia si covararon de las exequciones mas de lo que debian si recivieron en sus personas las penas de Camara: si fueron negligente en rondar de noche la Ciudad y en acudir a los incendios riñas y otros males si quitaron Armas que no eran prohividas y si de deajaron manifestar las que lo heran a la Justicia o disimularon el que las cargasen o encuvrieron alguna cosa mal hecha por dadivas ruegos y otros fines: si cobraron las partes de las denunciaciones antes de la sentencia y si con pretexto de vuscar delincuentes entraron en alguna Casa a solicitar Mugeres para torpezas o hicieron otros excesos expliquen los testigos los casos y circunstancia con individualidad[796].

Ahora bien, los juicios de residencia permiten tomar en cuenta la revisión que en ese momento se hizo de los archivos y protocolos que llevaban los escribanos públicos y del cabildo, de modo que tal revisión nos da otro panorama de cómo se manejaban los asuntos municipales. En este sentido, un resumen muy apretado de la exposición que hace Rafael Alcalde, asesor general de la Intendencia y revisor designado para la residencia, el 7 de septiembre de 1787, luego de examinar los archivos y protocolos llevados por los escribanos públicos y de cabildo, da cuenta de los diversos pleitos allí ventilados, auque el revisor formula diversas objeciones, tales como falta de firmas, omisión de diligencias, enmendaduras, tachado o corrección de sílabas y palabras sin las correspondientes salvas, etc. El resumen de los pleitos nos suministró el resultado siguiente: 59 pleitos sobre cobro de dinero en pesos; 29 sobre partición de bienes en herederos y testamentarías; 17 sobre esclavos: venta, libertad, pago de sus servicios, demandas de ellos; 6 sobre hechos de sangre con heridas; 3 sobre una acequia; 3 sobre injurias; 3 sobre excesos cometidos por funcionario en su cargo; 2 sobre acreditación de la propiedad de tierras; 2 sobre división de bienes; 2 sobre ladrón y cuatrero; y un pleito sobre cada asunto siguiente:

[796] Marianela Ponce, *Ob, cit.*, tomo II, pp. 71-72.

derrames de una hacienda, alquiler de una canastilla, sujeción de animales, falta de bienes para un recurso, venta y administración de una casa, propiedad de un pedazo de solar, reconocimiento de censos, tutela de hijos menores, dote, casamiento sin licencia, asesinato, embargo y remate de hacienda de cacao, venta de propiedad, gente escandalosa y perturbadora, merced y real confirmación de tierras, venta de tierras, elección en una cofradía, desocupación, camino de acceso a una hacienda, azotes, concurso de acreedores contra bienes, joyas de oro, estupro, preferencias en alquiler de un trapiche, adulterio, venta de un pedazo de solar, venta de casa, problemas en pulpería, compra de bodegón, remate de casas, nulidad de testamento, donación, otorgamiento de poder, alimentación, falta de los funcionarios del Cabildo a sus sesiones y no presentación de sus libros[797].

En cuanto al número de sentencias, damos a continuación un resumen del periodo ya dicho de cuatro años que, como los otros resúmenes arriba mencionados, es muy apretado, y sujeto a revisión para conformar mejor el panorama: 27 sentencias por omisiones en procedimientos y documentos:

En Caracas, 24 sentencias por no formar un libro de las penas de cámaras (donde se asentaban las multas); 23 absoluciones; 4 por fallas en carnicerías (ausencia, desaseo, ventas a cualquier precio); 14 por poca seguridad en las cárceles; 5 por no fijar arancel a la vista del público; 3 por no cumplir órdenes superiores (del Gobernador, de despachos, etc.); y una sentencia por cada uno de estos cargos: indolencia en castigar delitos públicos, negligencia en componer caminos, no tener los indios cajas ni labranzas de comunidad, posesión de tienda pública, no existir casa de Cabildo, mal trato a los asistentes al tribunal, falta de castigo de pecados públicos, cobro en exceso de derechos[798].

En San Felipe, las sentencias más comunes fueron: 16 por no promover las liquidaciones en diversos funcionarios (mayordomos de propios, etc.); 12 por no procurar sesiones del Cabildo; 11 por recibir funcionarios sin fianza; 10 por no llevar libros de penas; 6 por defectos administrativos; 5 por no presentar fianza para el cargo, y 4 absoluciones. Se agrega que en buen número de pueblos no hay ni se han procurado cajas ni labranzas de comunidad de los indios[799].

En Guanare se repiten mucho los siguientes problemas: abastecimiento de agua y de carne, precios de la carne, problemas de seguridad al no haber cárcel segura, y pululan los ladrones en las calles, ausencia de libro de penas y otros registros, hay problemas con puentes y caminos, problemas de amancebamiento, problemas con monto de aranceles y multas, maltratos a la gente[800].

---

[797] *Ibíd.*, pp. 107-129.
[798] *Ibíd.*, tomo II, pp. 241-285.
[799] *Ibíd.*, tomo II, pp. 287-344.
[800] *Ibíd.*, tomo III, pp. 11-89.

En Villa de Cura se aplicaron sentencias contra 10 alcaldes ordinarios, 4 alcaldes de la Santa Hermandad, 3 síndicos procuradores generales, 3 regidores y fieles ejecutores, 2 regidores decanos, un escribano público y de cabildo[801].

En Calabozo, la visita a la cárcel de la carnicería revela que está toda deteriorada y sin corral. La cárcel tiene dos cuartos sin seguridad. En el archivo capitular no se encontró libro de ordenanzas[802].

En Ospino no hay ordenanzas y no hay libros de asentar penas, no hay propios, los jueces actúan como cartularios, no hay pueblos de indios ni corregimiento. Y en Araure, faltan los artículos de primera necesidad[803].

En Carora no se encontró carnicería, pero sí una cárcel segura. No hay libro de ordenanzas, ni libro con las reales órdenes, ni de inventario[804].

En El Tocuyo, de cárcel lo que hay es un sucio calabozo. Y el alguacil no hace la vigilancia necesaria para evitar el contrabando. Entre las denuncias que hacen los testigos hay las siguientes: no hay sementeras de comunidad, no hay carnecería o está abandonada, descuido en calles y caminos[805].

En Coro, no hay carnicería, sino que cada cual mata y vende en su casa. Cárcel deficiente, fallas en las pesas. Un testigo declara que los alguaciles menores y alcaides de cárcel siempre fueron sambos y negros. Otras denuncias: calles sucias[806].

Barquisimeto no figura.

Es interesante ver cómo se hacía el juicio de residencia en los pueblos, y los costos que comportaba. El tasador general de la residencia debía llevar la relación de las costas, derechos y salarios por recibimiento y publicación del edicto de residencia, chasquis para llevar los edictos y su publicación, más dos pesos que se pagaban a los indios en la ocasión en que ayudaban a pasar un río, publicación de los edictos, viajes y ejecución de sentencias del juez receptor, peones, mulas, sillas de carga y bagaje para las caminatas; pagos a testigos; pagos por lo escrito y por escribir, papel; pago al relator y secretario de cámara, ejecución de sentencias, conducción a los reinos de España, cambio a plata fuerte; pago a escribanos por su labor, por repartimientos y liquidación de multas, por testimonio en el correo de autos. Luego, sucedía algo que llama la atención: el repartidor distribuía entre los funcionarios residenciados la suma de los gastos para su cancelación, más el reparto de pesos que sumaban las condenaciones[807].

---

[801] *Ibíd.*, pp. 114-166.
[802] *Ibíd.*, pp. 167-203.
[803] *Ibíd.*, pp. 205-275.
[804] *Ibíd.*, pp. 277-332.
[805] *Ibíd.*, pp. 333-393.
[806] *Ibíd.*, pp. 395-458.
[807] *Ibíd.*, pp. 271-275.

Por otra parte, cuando llegaba el juez receptor a una ciudad, un comisionado suyo reunía a toda la gente, tanto libres como tributarios, mediante pregonero que pulsaba una caja de guerra, notificaba el título del receptor y lo fijaba en las puertas de las casas reales. En la ocasión del juicio al gobernador Torres de Navarra, el propio juez general, don Francisco de Saavedra, ordenó al comenzar la residencia en El Tocuyo, que se constatara si en las casas capitulares o casa donde se celebraban los cabildos estaba fijada la tabla de fiestas, la tabla de arancel y si el archivo contenía las ordenanzas y demás buenas normas de gobierno, esto porque era imprescindible que todos esos papeles estuvieran siempre a la vista del público[808]. El juez receptor pedía la exhibición de todo lo relativo a los procesos civiles y criminales evacuados durante el periodo investigado. El alguacil de la residencia hacía el reconocimiento del estado de la cárcel y de la carnicería. El escribano presentaba la lista de las personas comprendidas en la residencia[809].

¿Cómo transcurrieron en el periodo de 5 años del gobernador Torres de Navarra las cuestiones referentes al número de cabildantes, y otros funcionarios, frecuencia de las sesiones, y si se respetaron o no las disposiciones sobre no reelección, etc.? Al momento de tomar posesión Torres de Navarra, el 24 de diciembre de 1782, estaban en Caracas los siguientes miembros y funcionarios del cabildo: dos alcaldes ordinarios, un procurador general, dos alcaldes de la Santa Hermandad, un alguacil mayor, un alcalde provincial, un depositario general, un fiel ejecutor, 14 regidores (de ellos, uno, Esteban de Otamendi, era también alcalde ordinario), un mayordomo de propios, un juez de difuntos, un fiscal del juzgado, un escribano del cabildo (el mismo que era ahora escribano de la residencia), dos escribanos públicos y de gobierno, seis escribanos públicos y del número, un escribano de difuntos, uno de la real hacienda, un anotador de hipotecas, un tasador, cuatro procuradores, 18 abogados (de ellos, diez licenciados y ocho doctores). Además, pero no eran del cabildo, 22 tenientes y corregidores de los pueblos de la jurisdicción[810].

En los años 1783-1786 fueron electos cada año, sin repetición de nombres, dos alcaldes ordinarios y dos alcaldes de la Santa Hermandad[811].

---

[808] *Ibíd.*, pp. 288 y 334.
[809] *Ibíd.*, pp. 335, 336, 337-339.
[810] *Ibíd.*, tomo II, p. 18
[811] *Ibíd.*, p. 24-25.

Del 24 de diciembre de 1782 al 13 de febrero de 1786 se celebraron 163 cabildos, es decir, uno semanal[812].

En Valencia tampoco se repitieron los nombres de alcaldes ordinarios ni de la Santa Hermandad durante los años de la residencia[813].

Los alcaldes ordinarios como sustitutos de los gobernadores faltantes

El cabildo así descrito contiene sólo sus características y atribuciones como una institución de la ciudad, provista, de acuerdo con la época, de mandatos llamémoslos citadinos, judiciales y en favor del buen vivir y la convivencia del vecindario. Pero, en el curso de los trescientos años de su existencia en estas tierras, tomó para sí otras funciones que rebasaban los linderos del simple tutelaje sobre la ciudad. Una de ellas surge del estado de contingencia, ensayo, y adaptación a una realidad inédita que experimentó la conquista española en sus primerísimos años, y es la de tomar las riendas del poder gubernativo de toda la provincia ante las vacantes no programadas, por supuesto, de los gobernadores y capitanes generales. Hay otras funciones que en esas mismas condiciones toma el cabildo, referentes a ciertas mercedes muy provisionales que concede hasta tanto llegue la confirmación real, pero pronto no volverán a repetirse. En cambio, la función vicariante gubernativa se va a consolidar con el paso de los años.

El historiador Ramón Aizpurua Aguirre ha escrito que fue en Coro, en 1533 cuando se opera el primer antecedente de la toma de poder gubernativo por parte de los alcaldes, que en este caso fue el alcalde Francisco Gallegos, al deponer a Bartolomé de Santillana, quien había sido nombrado teniente del gobernador Ambrosio Alfínger con facultad de suplirlo en su ausencia, la que en definitiva ocurrió al momento de su muerte[814]. Más tarde, se producen las vacantes de los gobernadores Tolosa y Villacinda, y es cuando Sancho Briceño, procurador general nombrado por la reunión de varios cabildos de las ciudades y villas de la provincia de Venezuela, solicita ante el rey que los alcaldes de los ayuntamientos llenan tales vacantes por muerte del gobernador, y mientras no llegue su sucesor. Una real cédula de Felipe II, del 8 de

---

[812] *Ibíd.*, p. 40.
[813] *Ibíd.*, pp. 347-349.
[814] Ramón Aizpurua Aguirre, entrada "Municipios", en *Diccionario de historia de Venezuela*, Caracas, Fundación Polar, CDROM.

diciembre de 1560, otorga a los alcaldes ordinarios ese derecho de gobernar en la jurisdicción de sus ciudades en la circunstancia dicha[815].

De allí en adelante, el apetito de poder de los cabildantes, es decir, de la nobleza criolla, que era el sector social de donde salían tales personajes, se incrementó. Pero, al cabildo de Caracas le surgió un rival en estos menesteres, y fue la Real Audiencia de Santo Domingo. En efecto, a la muerte del gobernador Alonso Pérez de Manzanedo, en 1564, desde Santo Domingo nombran a Alonso Bernáldez para llenar la vacante hasta tanto llegase el nuevo titular. Los capitulares caraqueños reclaman, apelan una y otra vez y, al fin, el rey, con fecha 2 de abril de 1676, es decir, un siglo después (a ese ritmo caminaban los años) atiende la súplica del cabildo capital de la provincia, que en combinación con el cabildo eclesiástico y el obispo, fray Antonio González de Acuña, habían pedido que la vacante provocada por muerte del gobernador maestre de campo Francisco Dávila Orejón, fuese llenada por los alcaldes ordinarios de Caracas, pero con jurisdicción que abarcara a toda las ciudades de la provincia, con el argumento de la existencia de cabildos muy cortos en algunas ciudades, de la práctica inexistencia en otras, y de estar compuesto en otras por mulatos (particularidad cierta, tal como se explicó páginas atrás). De esta manera, los criollos comienzan a saborear las delicias de sentarse en el más alto escalón del gobierno provincial, más todavía cuando cuatro meses después de aquella disposición real, una nueva real cédula saca del juego a la Real Audiencia de Santo Domingo, que ya no puede nombrar a ningún interino en la gobernación venezolana. Se contarán 14 oportunidades en que los alcaldes ordinarios de cada ciudad las gobernaron interinamente en ausencia del gobernador, y 12 en las que las funciones de poder de los alcaldes de Caracas cubrieron todo el territorio provincial[816]. En cuanto a si esta situación se presentaba en otras provincias, vale el caso de Cumaná, donde Luis de Arze ocupó interinamente, en 1632, el gobierno de la ciudad en su condición de alcalde ordinario, por muerte del gobernador don Cristóbal de Guido y Mallea[817].

Ya entrado el siglo XVIII, las prerrogativas del cabildo de convertirse en el ente gobernador interino de la provincia empezaron a mermar. En tal declive es posible que influyeron la tensión álgida entre el poder real y la nobleza criolla a propósito del conflicto con la Compañía Guipuzcoana, y la nueva política borbónica a la que a veces se le da el calificativo mayestático de "hispanización de la América". Sea como fuere, la creación de los cargos de Teniente de Gobernador y

---

[815] Cf. Santos Rodulfo Cortés (comp.), *Antología documental...*, p. 68.
[816] Santos Rodolfo Cortés, *Ibíd.*, p. 85; y Ramón Aizpurua Aguirre, *Ob. cit.*
[817] Antoinette Da-Prato Perelli, *Ob. cit.*, tomo III, pp. 63-86.

Auditor de Guerra y de Intendente del Ejército y Real Hacienda, ya comentados páginas atrás, la instalación en Venezuela de una real audiencia, y otros acontecimientos, contribuyeron a tensar más la cuerda unas veces, a aflojarla otras, pero en definitiva a subrayar el poder regalista sobre la nobleza de aquí y acullá. Los alcaldes ordinarios ya no fueron más sustitutos de los gobernadores.

Pleitos entre los cabildos y los tenientes de justicia mayor

Los líos de los ediles coloniales con los subalternos inmediatos del Gobernador y Capitán General llenan al menos dos siglos de la historia colonial. El así llamado Teniente Justicia Mayor es un funcionario nombrado por el gobernador, y juramentado y ratificado por la Real Audiencia, en quien aquél descarga por delegación sus atribuciones de gobierno y justicia en ciudades, villas, pueblos y lugares de la provincia, al principio sólo en Caracas, Trujillo y Maracaibo, para el caso de la provincia de Caracas, pero luego extendido a otras poblaciones. El historiador Gilberto Quintero, en su estudio completísimo sobre los tenientes de justicia mayor, suministra un panorama del asunto bastante detallado. He aquí varios de sus principales momentos:

Ante las diversas protestas de los cabildos de varias ciudades, el gobernador Gonzalo de Piña Ludueña (1597-1600) recibió, el 10 de julio de 1600, una real cédula que le ordenaba nombrar como tenientes a letrados, a fin de resolver los problemas creados por algunos tenientes de capa y espada, acusados de incapacidad y causante de muchos agravios[818].

Varios cabildos se quejaron ante la Real Audiencia de Santo Domingo por haber designado el gobernador Francisco de la Hoz Berrío (1616-1621) a tenientes interinos no letrados en once lugares, quienes, además, son innecesarios y caen en venalidad a causa del bajísimo sueldo con que se les remunera[819].

El cabildo de Caracas eleva su protesta ante los nombramientos de tenientes de justicia mayor que hace en 1628 el gobernador Juan de Meneses y Padilla (1624-1630) en El Tocuyo y Barquisimeto, en razón

---

[818] Gilberto Quintero, *El Teniente Justicia Mayor en la administración colonial venezolana. Aproximación a su estudio histórico jurídico*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1996, p. 120.
[819] *Ibíd.*

de no existir tales cargos en esas ciudades. El Rey ordenó la supresión de los dos cargos[820].

Por la misma razón, el cabildo caraqueño protestó por los nombramientos de tenientes en La Guaira, Valencia y otras poblaciones que hizo en 1674 el gobernador Francisco Dávila Orejón y Gastón (1673-1674). La protesta fue acogida por la Real Audiencia de Santo Domingo. En realidad, estaba contemplado en esa época que sólo cabía hacer nombramientos de tenientes para las ciudades de Caracas, Trujillo y Maracaibo[821].

Aquí puede apreciarse algo típico de la legislación de la época, y es que con el tiempo los gobernadores siguen nombrando tenientes en ciudades distintas a las tres anteriores y no hay protesta, o ésta reaparece después de reiteradas violaciones. Es así como en los años de 1786 a 1792 se contaban 58 tenientes; y 60 entre 1798 y 1799[822].

El historiador Alberto Sucre es citado en relación con el caso del gobernador Diego Jiménez de Enciso, marqués de Casal (1688-1692), a quien se acusa de nombrar tenientes totalmente incapaces, convertidos en azotes de las poblaciones, tanto que la Real Audiencia de Santo Domingo envió a Caracas a Diego Bartolomé Bravo como juez pesquisidor, quien abrió proceso al gobernador y lo envió preso a España[823].

El 27 de octubre de 1704, Juan Blanco de Villegas, alcalde ordinario de Caracas, envió al Consejo de Indias un memorial de denuncias de las arbitrariedades cometidas por los tenientes de justicia mayor[824].

Viendo la otra cara de la moneda, el gobernador Diego Portales Meneses (1721-1728) escribe que se ha relajado la administración de justicia en muchos pueblos por falta de tenientes que la impartan, y por la costumbre de los alcaldes ordinarios de tener visión parcializada de los problemas al repetirse en ese cargo edilicio los mismos nombres de parientes y allegados consanguíneos. A pesar de la crudeza de sus palabras, o quizás por ello, el gobernador salió mal parado, pues fue depuesto y encarcelado en dos ocasiones[825].

---

[820] *Ibíd.*, p. 121.
[821] *Ibíd.*, p. 122.
[822] *Ibíd.*, pp. 402 y 410-414.
[823] *Ibíd.*, p. 126
[824] *Ibíd.*, p. 127.
[825] *Ibíd.*, pp. 128-131

A todas estas, la Corona alteró un tanto su rumbo en el tema, y en 1738 concedió merced real al gobernador Gabriel Zuloaga (1737-1747) para nombrar tenientes de justicia sin previa confirmación de la Real Audiencia[826].

Ya establecida la Real Audiencia en Caracas, surge su proposición de reducir el número de tenientes, que se han multiplicado dada la benevolencia real, y establecer, en su lugar, veinte corregimientos, con una asignación de 500 pesos al año para cada corregidor. Quintero tiene la impresión de que tal reforma nunca se aplicó[827].

De todas maneras, se abrió un nuevo frente de roces, esta vez entre el cabildo y la Real Audiencia, provocado por el intento de los capitulares de conservar la vieja práctica de que fueran ellos los que juramentasen a los tenientes, vista la lejanía de Santo Domingo, lugar legal de realización de tal acto[828].

El gobernador Pedro Carbonell (1792-1799) apoyó en este asunto al cabildo[829]. En cambio, el Rey apoyó a la Real Audiencia, y santa palabra[830].

Existió otro fuerte encontronazo entre el Teniente Justicia Mayor y el cabildo cuando la mayoría de la población de San Felipe se amotinó, en 1741, contra el teniente Ignacio de Bassabal (o Bazazábal), nombrado por el gobernador Zuloaga para acabar con el contrabando. En la sublevación participaron activamente los alcaldes ordinarios Sebastián Moneda y Pablo Arias[831].

Se han reseñado estos choques porque ponen una vez más de manifiesto las pugnas suscitadas entre la realeza, el funcionario español y la nobleza criolla por las esferas de influencia de unos y otros en el mando colonial. A los tenientes se les acusa de ignorantes y venales a causa de su escasa preparación y sus bajos sueldos, elementos que se advierten con frecuencia al examinar los documentos. A los cabildantes se les acusa de actuar dentro de la estrechez de miras de sus intereses. A ambos se les acusa de debilidad ante el contrabando, uno de los

---

[826] *Ibíd.*, p. 132.
[827] *Ibíd.*, p. 140.
[828] *Ibíd.*, p. 183.
[829] *Ibíd.*, p. 209.
[830] *Ibíd.*, p. 220.
[831] Cf. Cristián Camacho, "La actividad contrabandista y el distanciamiento Estado-ciudadano durante la colonia en Venezuela", en *Procesos Históricos, Revista de Historia y Ciencias Sociales*, Mérida, Universidad de los Andes, vol. 1, Nº 2, 2002. Internet: http://redalyc.unamex.mx

grandes males del momento. La Corona, aun cuando detenta el poder absoluto, debe actuar con cierta imparcialidad, pero no lo logra en muchos casos. Es un mosaico de rivalidades, que se arrastran por falta de efectiva aireación en el juego libre de pareceres, algo impensable en aquella época.

El cabildo como tribuna excepcional de las demandas de los criollos

Fue sobre todo a fines del siglo XVII y a lo largo de todo el siglo XVIII cuando el aparente marco de atribuciones del cabildo fue desbordado con creces por la actitud reivindicativa de demandas y reclamaciones de hacendados y comerciantes criollos, al convertirse los regidores, los alcaldes, los síndicos procuradores y otros altos funcionarios del ayuntamiento en sus voceros directos y sin ninguna clase de circunloquios. El asunto debe llamar a reflexión, porque semejante actitud del cuerpo capitular tan en sintonía con un pliego de protestas, solicitudes, súplicas, emplazamientos, agravios en la esfera del comercio y la economía general, que copa la agenda de sesiones del cabildo, no despierta el reclamo que pudieran haber hecho las autoridades de una presunta extralimitación de funciones de los reclamantes, antes por el contrario, tal comportamiento merece atención y encuentra interlocutores aquí y en Madrid. Es a posteriori, cuando historiadores y comentaristas de la historia califican este sesgo que toma la actividad concejil como una distorsión interesada por haber convertido la "utilización del cabildo en un recurso más para la defensa de los privilegios de una clase", o sea, que es la "manipulación de un cuerpo meramente municipal", algo así como un vocero egoísta de "las apetencias de clase de una oligarquía", etc. Ciertamente, el cabildo no puede ser concebido sino como un cuerpo integrado casi en exclusividad por el sector de los criollos, por la élite de esa nobleza heredera de los conquistadores, ante la ausencia de grupos sociales muy bien diferenciados que le dieran mayor heterogeneidad y más riqueza de instrumentación política a una sociedad como aquella venezolana del siglo XVIII. Entraba en la propia naturaleza de las cosas ver a ese cabildo convertirse en algo así como la jefatura de reclamos de un gremio importante de la república, entendido este término de república en su acepción antigua de conducción de la cosa pública. La atenta lectura de la documentación generada en esa circunstancia así lo da a entender. Por lo demás, es necesario tomar en cuenta que Caracas, a

estas alturas ya se había convertido en el centro indiscutible de la vida política, cultural y comercial de toda la provincia, incluso con una bien detectada atracción sobre las principales ciudades de otras provincias (Cumaná, Margarita, Mérida y hasta Maracaibo) que aún caían bajo la dirección, en sus respectivas esferas, de la Real Audiencia y del Obispado de otras latitudes, tanto que faltó menos de un siglo para que fuera el centro real, efectivo y legal de la nueva entidad creada en 1777. Esto por un lado, porque mirando hacia otros ángulos, ¿a qué organismo, a qué tribuna pública, a qué vehículo de opinión, a falta del cabildo y ante tamaño problema como era el del mercado del cacao, entre otros, podía apelarse para exponer el asunto y encontrar soluciones?

Una de las primeras noticias que se han registrado de la toma de posición del cabildo en los avatares del comercio del cacao, y que van a continuarse como una cadena sin casi interrupciones a través del siglo XVIII, ocurre en 1693, cuando, según el acta de la sesión del 9 de marzo de ese año, se da la voz de alarma por la baja del precio del cacao en el mercado mexicano, debido a la competencia del fruto de Guayaquil. Si siguen así las cosas, ocurrirá la ruina total de la provincia y, entre otros problemas, cesará el flujo presupuestario para el presidio de La Guaira. El cuerpo aprueba solicitar del procurador general un informe completo de la situación[832]. El procurador, don Francisco Antonio de Bolívar, lo presenta en la sesión del 30 de marzo, y de nuevo lo hace en la sesión del 27 de abril. Ratifica que la causa de la baja de las cotizaciones del cacao criollo es la entrada del cacao barato de Guayaquil al puerto de Acapulco. Argumenta que el cacao es «el esencial medio y sustento y mantención de esta provincia», que de él se sustentan las milicias que nos defienden del enemigo, y salen los reales derechos para mantener el presidio del puerto de La Guaira con el que se guarnecen las fuerzas, sitios y caminos sostenidos por la renta real, y salen también las rentas decimales para formar las rentas eclesiásticas y las de los monasterios de religiosos con sus congruas situadas en los árboles de cacao, en los réditos que perciben de sus censos, y los tributos que mantienen el convento de religiosas de Caracas. Es así porque el comercio de esta provincia es con el de Nueva España. Y es el reino, con sus reales derechos, el que paga las fuerzas y milicias de Cumaná, Trinidad y Margarita, y de sus cajas reales se pagan las misiones. Ante tal informe, se aprueba la convocatoria de un cabildo abierto[833]. El reclamo es oído, y una real cédula, fechada en Madrid el 3 de marzo de 1695, ratifica una anterior disposición que prohibía el

---

[832] Enrique Bernardo Núñez (comp.), *Ob. cit*, p. 107.
[833] *Ibíd.*, p. 111.

comercio de cacao de Guayaquil hacia Acapulco. Cumaná se había sumado a la protesta[834]. Sin embargo, siguió la situación, porque hay barcos que desde el Perú siguen introduciendo cacao a México con el pretexto de unas averías en los barcos que los obligan a fondear en Acapulco y a descargar el fruto. El rey desestima la explicación y reprende al virrey de Nueva España por intentar éste legalizar la argucia con el expediente de pechar ese cacao con el doble de la tarifa[835].

La susceptibilidad de los hombres del cacao es tan grande que cuando los ediles Juan Ascencio de Herrera, Manuel de Urbina, Diego Blanco Infante, Antonio Alejandro Blanco Infante, y Blas de Landaeta, reciben la información del procurador general, Juan Julián Ibarra, de que están pronto a llegar a La Guaira porciones de cacao de Cumaná y Trinidad para participar en la feria de cacao con vistas a los embarques para Nueva España, lo cual resultará perjudicial para Caracas, acuerdan dirigirse al Gobernador y Capitán General, el 8 de noviembre de 1706, para que evite el arribo de la competencia oriental[836].

Una idea para apreciar cuánto han bajado los precios es dada por una información que trae la historiadora Leticia Vaccari, en su obra sobre los juicios de residencia en la provincia de Venezuela, al referirse a los libros de cuenta y papeles que hay en la casa de Francisco Martínez Rodríguez donde está asentado el cacao vendido por Juan Luis de Contreras en las partidas embarcadas a Nueva España y puerto de Veracruz en 1673. Dichos precios oscilan entre 44 ½, 47, 47 ½, y 48 pesos la fanega, en un embarque en dos navíos y una fragata, que alcanzó las 151 fanegas, aproximadamente[837].

Entre tanto, sigue bajando el precio de la almendra. Una exposición de Iñigo de Isturris, ahora procurador general del cabildo, informa, el 18 de junio de 1708, que durante 1707 siguió la competencia del cacao de Guayaquil y también de un nuevo abastecedor, la Martinica del rey de Francia, en contravención de las disposiciones reales. Los costos del cacao se han elevado, se gasta mucho en el cultivo de las arboledas, y suben los fletes y derechos reales, como alcabala, almojarifazgo, y armada de Barlovento. Los regidores piden, entonces, que el alcalde de primer voto lleve el informe presentado a un tribunal, con los testigos del caso[838].

---

[834] *Ibíd.*, p. 115.
[835] *Ibíd.*, p. 118.
[836] *Ibíd.*, p. 121.
[837] Leticia Vaccari (comp.), *Ob. cit.*, p. 230.
[838] Enrique Bernardo Núñez (comp.), *Ob. cit.*, p. 123.

El precio no siempre está a la baja, o a veces baja más que en otras ocasiones. Por ejemplo, en el cabildo del 11 de noviembre de 1709 el procurador general, Francisco Blanco Infante, dice que el último precio en feria fue de 18 pesos la fanega, pero que este año es de 8 pesos en Caracas. Propone que se le pida autorización al Gobernador Fernando de Rojas y Mendoza para embarcar cacao a España, donde se consigue mejor precio. Los alcaldes Juan de Ascanio y Juan de Ulloa, el depositario general Manuel de Urbina y los regidores aprueban la moción[839].

Una nueva cédula real que prohíbe el comercio de cacao entre Guayaquil y Nueva España se emite el 27 de junio de 1724[840].

Hay una argumentación producida en la Corte que pudiera servir de justificación, valedera o no, a la persistencia de la caída de precios, no obstante las cédulas reales emitidas. La argumentación explica que en 1720, a fin de estimular la entrada de cacao a España, los navíos de registro fueron relevados de pagar el derecho de tonelaje, con el objeto de que se incrementara el embarque del fruto de Caracas, Maracaibo, Cumaná, Margarita y Trinidad, pero nada cambió, y se siguió pagando el cacao a proveedores extranjeros a precios exorbitantes. Se añade que en los últimos 23 años el comercio español por Cádiz ha traído muy poco cacao. Es cuando surge una compañía en Guipúzcoa que se ofrece navegar con registro a Caracas mediante dos navíos al año, bien armados y que puedan hacer el corso en las costas. Se la aprueba en cédula real del 25 de septiembre de 1528. Llevará a Caracas géneros y frutos de los reinos de España y traerá cacao. Su puerto de salida y llegada será Cádiz, pero también San Sebastián. De este lado del océano, sus navíos podrán atracar también en Puerto Cabello, y sus factores internarse en tierra, acarrear los frutos, llevarlos a España y extender su navegación al Orinoco y hasta Río Hacha. Pueden apresar a cualquier comerciante trasgresor. Se permitirá a otros vasallos interesados en el cacao de Caracas actuar en este circuito. El botín obtenido de los corsarios y del comercio ilícito se repartirá entre el rey, los soldados, y se podrá a la venta en el mercado de Caracas, y si es cacao, podrá enviarse a Nueva España. Una cláusula de la real cédula dirigida a la Compañía Guipuzcoana establece que a todos los integrantes y dependientes de la compañía se les guardarán «todas las libertades y excepciones, preeminencias y prerrogativas que gozan los oficiales y gente de la tripulación de mi Real Armada a proporción del carácter, grado y empleo de cada uno sin que el integrarse directa o

---

[839] *Ibíd.*, p. 127.
[840] *Ibíd.*, p. 132.

indirectamente en este comercio sirva a ninguno de desdoro sino de nuevo blasón y lustre de su nobleza, empleo o carácter, como medio eficaz para su continua duración...»[841].

Nos hemos topado, pues, con la Real Compañía Guipuzcoana.

Ya nos hemos dado cuenta de que la Guipuzcoana no es la responsable de la caída de los precios del cacao. El fenómeno venía de mucho antes. Pero, ¿contribuyó en algo a las caídas después de 1728? Sí contribuyó. Y ¿obtuvieron algún beneficio en alguna ocasión los cosecheros y comerciantes del cacao? Sí lo obtuvieron. Veamos.

Ante todo, es bueno revisar algunos detalles del funcionamiento del tráfico comercial del cacao a Nueva España y a España, con el auxilio inestimable del minucioso trabajo realizado sobre el tema por el historiador tantas veces citado Robert J. Ferry. El cacao vendido en Veracruz lo llevaban diversos navieros, hacendados criollos que tenían barcos, y la inglesa Compañía del Mar del Sur (South Sea Company) desde 1713, mediante un contrato de asiento que le permitía traer a América la cantidad de 4.800 esclavos africanos al año durante 30 años[842]. Según Ferry, durante muchos años el comercio cacaotero con México fue simple: cualquier cosechero podía vender su cacao en el mercado local, de Caracas por ejemplo, a un mercader o directamente a un capitán o sobrecargo de un barco. Una posibilidad distinta era que el hacendado podía renunciar al pago al contado en Caracas si él utilizaba directamente un tercio del buque para su embarque (otro tercio era para los mercaderes compradores de cacao, y el tercio restante estaba a disposición del dueño del barco). Claro está, quien vendía su cacao en Caracas se ahorraba los riesgos de pérdida en la travesía porque los afrontaba el dueño del barco, pero si usaba directamente el tercio podía vender directamente su cacao en el mercado de Veracruz, por medio de un agente, a un precio más alto que en Caracas, lo que le compensaba el gasto invertido en los altos fletes y las mermas que por varias causas comportaba la travesía. Una idea de las ganancias obtenidas en este circuito comercial se aprecia en el examen de los libros contables de la compañía inglesa, donde se consigna la venta que se hizo en Caracas, en 1733, de 600 esclavos, y la compra de cacao, con el dinero obtenido, a 23 pesos la fanega, para venderlo después en Veracruz a 40 pesos. Ferry calcula que esta aparentemente simple operación reportaba una ganancia de 24.003 pesos[843].

---

[841] *Ibíd.*, p. 134.
[842] John Lynch, *Ob. cit.*, p. 136.
[843] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, pp. 179-187 y 135-138.

En 1721, el gobernador interino Antonio José Álvarez y Abreu, nombrado por el virrey de Nueva Granada, cambió las reglas de embarque al establecer la llamada "alternativa", según la cual el primer buque en atracar en La Guaira tenía que ser cargado en toda su capacidad antes de que el siguiente pudiera abrir sus bodegas para la carga siguiente, sistema que fue muy criticado por los cosecheros, tanto que Andrés de Urbina, dueño de más de 50.000 árboles, y reconocido como el mayor cosechero de Caracas, viajó a España expresamente a plantear el reclamo. Fue oído y aceptado su planteamiento, contenido en la real cédula del 25 de mayo de 1722, conocida con el nombre de "la cédula de Urbina". La "alternativa", de todas maneras, fue restablecida en 1731, ahora para beneficiar a la Compañía Guipuzcoana. En fecha posterior, el gobernador Zuloaga impuso, en 1744, la norma del repartimiento por padrón, es decir, la posibilidad de cargar cacao en el buque en proporción al número de árboles de que se era propietario, pero con la condición siguiente: si el cosechero, por equis razón no podía cumplir con su cuota en el buque atracado, no tenía derecho a ver aumentada su cuota, a modo de compensación, en el buque siguiente[844].

Hechas estas consideraciones, importantes para saber las reglas de embarque del cacao, volvamos a ver el papel que jugaba en todo esto el cabildo. En su seno y fuera de él, empiezan a destacarse los principales opositores a la Guipuzcoana, entre ellos el marqués del Toro, el conde de San Javier (que era Juan Jacinto Pacheco y Mijares) y su primo, Francisco de Ponte y Mijares. A veces, adoptan como táctica guardar el cacao en sus haciendas ante la fuerte depreciación del fruto, aunque el gobernador Martín de Lardizábal había establecido cuotas para el embarque del cacao, según las cuales, 20.000 fanegas irían a México, 30.000 a España, y quedarían 10.000 para el consumo local, distribución que sólo buscaba favorecer a la Guipuzcoana, según el criterio de los criollos, ya que al completarse el cupo a México, los cosecheros estaban obligados a vender a la Guipuzcoana y a cualquier precio, pues era la única autorizada, como ya se sabe, para comerciar con España. Pareciera natural que los cosecheros nunca cumplieron con el cupo a México debido a la táctica ya citada, aunque a España se pudieron despachar 40.000 fanegas en 1740. Ferry considera que ante tal situación, quedaba apelar a un recurso *non sancto*, el contrabando con los holandeses, que prometía mejores precios. Era, como se puede apreciar, un juego de posibilidades y de apelación a recursos, lo cual encendía los conflictos. La Guipuzcoana, por su parte, acometía el desprestigio de los hacendados, tildándolos de querer monopolizar el

[844] *Ibíd.*, pp. 179-187.

comercio cacaotero, y acusaban, no sin razón, a los ediles, en una ocasión, de pertenecer a la familia Solórzano, ligada con lazos de parentesco al conde de San Javier[845]. Su facultad de perseguir el contrabando empezó a crear dificultades, al acusársele de extralimitación en esa atribución. Por ejemplo, el obispo don José Félix Valverde, el 20 de mayo de 1734, denunciaba los excesos cometidos por varios comisionados de la Compañía, en Coro y su jurisdicción[846].

En una de sus sesiones, efectuada diez años luego de promulgado el establecimiento de la Guipuzcoana, es decir, el 30 de septiembre de 1738, el ayuntamiento pide al Gobernador que convoque un cabildo abierto a fin de estudiar el problema del bajo precio del cacao, atribuible ahora por los capitulares no a la concurrencia del cacao de Guayaquil (que, por lo demás, no hay elementos para afirmar que ha desaparecido), sino a la ausencia de compras por parte de la Guipuzcoana, debido a la gran acumulación que ha hecho del fruto, al tenerlo en cantidad superior al necesario para sus envíos a España. Advierten que si el cacao baja de 15 pesos la fanega, las perdidas serán cuantiosas[847]. Años después, en la sesión del 8 de febrero de 1745, se insiste en el cumplimiento de la real disposición que permite a los cosecheros embarcar la cantidad que sea de cacao a la carrera de Veracruz, sin restricción alguna. Y aclaran que el régimen del tercio de embarque opera para los navíos procedentes de España, pero no para los que van a Veracruz[848]. Esta afirmación nos está indicando que la versión de los sistemas de embarque que expresa el cabildo es diferente de la que se deduce de lo consignado por el historiador Ferry. Puede ser que las reglas del juego cambiaban con frecuencia, como es habitual en la legislación de la época, o que estamos ante el refrán que dice que "cada quien arrima la brasa para su sardina".

En todo caso, lo relevante es saber el sesgo que va tomando la reacción del cabildo ante la presencia de la Compañía Guipuzcoana. Los factores de la compañía vasca, entre ellos don Nicolás de Francia, se esmeran en modificar ciertas reglas, y el cabildo insiste en que Su Majestad no ha alterado sus anteriores cédulas que beneficiaban a los cosecheros. Por ejemplo, citan la real cédula del 24 de septiembre de 1735 que estableció un cupo de 20.000 fanegas al año a Veracruz, o sea, 100.000 en 5 años, cupo no cumplido ni siquiera en 70.000 en el quinquenio[849].

---

[845] *Ibíd.*, p. 179-187.
[846] *Boletín del Archivo General de la Nación*, tomo XXII, Nº 85, Caracas, noviembre-diciembre de 1937, p. 3.
[847] Enrique Bernardo Núñez, *Ob. cit.*, p. 152.
[848] *Ibíd.*, p. 156.
[849] *Ibíd.*, p. 169.

¿Qué es lo que está pasando? Los intentos por detener la baja de los precios del cacao no han dado resultado. Las prerrogativas obtenidas por la Guipuzcoana en cuanto al monopolio del comercio con España, a la facultad de practicar el corso, y de adentrarse sus factores en las tierras y ríos alejados de las costas en persecución del contrabando, y sus intentos de modificar las reglas del juego, han creado cierto clima de irritación, apreciable sobre todo en la complicidad con la cual algunos cosecheros de la cuenca del río Yaracuy ven la sublevación de Andresote. A esto se une un hecho que tendrá serias repercusiones, como fue la suspensión del asiento de esclavos de la Compañía inglesa del Mar del Sur. Recordemos cómo el serio parpadeo que sufrió el *boom* del cacao en las costas centrales de la provincia fue superado, y cómo la merma de los precios tuvo su otra cara en la bonanza desatada con los nuevos cultivos de cacao en las riberas del río Tuy. Ahora, daba la impresión de que el bajón en el suministro de de mano de obra esclava y las interferencias a veces muy indeseables de la Guipuzcoana enturbiaban aún más el panorama. Pero, las cosas no ocurrieron así, de repente. Al principio, la entrada en escena de la compañía guipuzcoana alentó el rubro cacaotero. Por ejemplo, entre 1730 y 1738, la presencia de dos compañías (South Sea y Guipuzcoana) hizo que el precio del cacao fuese 30% mayor que el promedio mínimo durante toda la primera mitad del siglo XVIII. Además, las dos importaban esclavos[850].

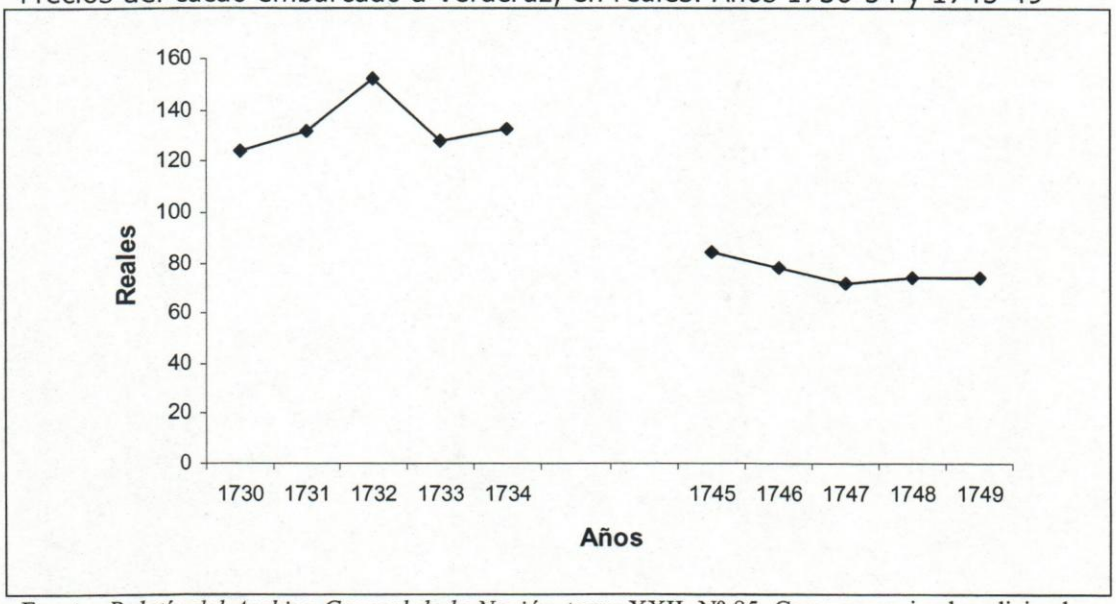
En 1739, estalla la guerra entre España e Inglaterra. Es la llamada "Guerra de la Oreja de Jenkins" (1739-1748). El asiento inglés es eliminado, y con él, el intercambio comercial promovido por los ingleses. Entre 1715 y 1732, la compañía inglesa envió a las posesiones españolas en América un promedio de 7 barcos anuales, más otros dos que fueron autorizados, con una carga de mercancías por valor de 2.101.487 libras[851]. En lo adelante, la carga de esclavos transportados por la Guipuzcoana entre 1739 y 1784 alcanzó la cifra de 350, una cantidad irrisoria si se compara con los 100 esclavos por año entre 1715 y 1728 y los 350 esclavos por año entre 1729 y 1739 que trajeron los ingleses[852]. En cuanto a los precios del cacao, la Guipuzcoana queda como el único gran comprador, desaparecida la inglesa, y de 18 pesos la fanega en 1735, pasó a 12 pesos en 1735, a 9 en 1741, y a 5 en 1749[853].

---

[850] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, p. 121-126.
[851] John Lynch, *Ob. cit.*, p. 136, 137.
[852] *Ibíd.*
[853] *Ibíd.*, p. 135-138.

Para agregar otros datos demostrativos de las oscilaciones de los precios del cacao, copiamos de seguidas lo que informa don Lorenzo de Arroyo, escribano real y teniente de registro y real hacienda:

Gráfico Nº 1
Precios del cacao embarcado a Veracruz, en reales. Años 1730-34 y 1745-49



Fuente: *Boletín del Archivo General de la Nación*, tomo XXII, Nº 85, Caracas, noviembre-diciembre de 1937, pp. 12-14. Recopilación por Augusto Mijares.

Los años que van de 1730 a 1734 muestran unos precios que oscilan entre 112 reales (14 pesos) y 160 reales (20 pesos) para luego deprimirse hasta llegar a 72 reales (9 pesos), precisamente en momentos cercanos a la rebelión de Panaquire.

El *boom* cacaotero del Tuy se vino abajo, entonces. Los hacendados tradicionales se vieron perjudicados, pero aguantaron la arremetida, gracias a sus viejas haciendas y dotaciones de esclavos. En cambio, el flujo de inmigrantes, sobre todo los venidos de Canarias, que se iniciaban en el negocio y que constituían una capa de cosecheros pequeños y medianos, sufrieron lo peor y muchos se vieron arruinados. Es de aquí de donde surge la protesta de Juan Francisco de León, en 1749, precisamente desde Panaquire, casi en el corazón de lo que se llama ahora Barlovento (Un resumen muy sucinto de la sublevación va más adelante, tomando como fuente el libro tantas veces citado de Robert J. Ferry, y la recopilación hecha por el renombrado académico Augusto Mijares, de los documentos al respecto que guarda el Archivo General de La Nación, publicada en el Nº 85 ya citado del *Boletín* del Archivo, pp. 1-184).

Desde 1738 se venía olfateando algo. En ese año, una real cédula aumenta las prerrogativas del gobernador, quien podrá nombrar y destituir tenientes sin la aprobación de la Real Audiencia. El gobernador Gabriel José de Zuloaga actuó en ese sentido, y argumentó que así se le daba más poder para controlar el contrabando. En 1739, la provincia es transferida por segunda vez a la jurisdicción del restablecido virreinato de Nueva Granada. En 1745, Zuloaga tiene sospechas de una conspiración montada por el conde de la Granja y Alejandro Blanco Uribe, quienes, dice, se han aliado con los isleños de la ciudad y sus cercanías. El conde, y su sobrino Francisco Ponte, planean viajar a la Corte a presentar sus quejas. Los sucesos comienzan en Panaquire cuando Juan Francisco de León, cansado de elevar tantas quejas contra los vizcaínos sin ser escuchado, desconoce la autoridad del teniente o cabo Echeverría, y marcha a Caracas en 1749, seguido de una buena cantidad de adherentes. Su gente ocupa la plaza Mayor y algunos edificios. El gobernador le pide, el 21 de abril de ese año de 1749, que se quede en la plaza y nombra a Joseph Pablo de Arenas, abogado de la Real Audiencia para que hable con él. León pide la destrucción de la Compañía, privarla de las mercaderías y factorías que tiene, prohibir que sus agentes ejerzan los cargos de tenientes o ministros de justicia, y que todos sus empleados se embarquen en el primer bajel o nao atracado en la bahía de La Guaira o, si no hay, que se apreste de inmediato una nao para ese fin. Al día siguiente, el 22, los factores de la Compañía ya están embarcados. El mismo 22, el cabildo de Caracas convoca a todos sus integrantes y a todas las demás personas nobles y ancianas a la sala principal del Palacio del Gobernador. A la convocatoria responden los alcaldes ordinarios Miguel Blanco Uribe y Juan Nicolás de Ponte, el regidor decano José Felipe de Arteaga, los regidores José Miguel Xedler y Juan de Ibarra, el procurador general Francisco de Tovar, el marqués de Mijares Francisco Mijares de Solórzano, el caballero de la Orden de Calatrava Juan de Solórzano, y Rui Fernández de Fuenmayor, Lorenzo de Ponte y Villegas, Sebastián Vásquez de Coronado, Sebastián de Arrechedera, el marqués del Toro Francisco Rodríguez del Toro, el marqués de Torre Casa Miguel de Urbina, Francisco Blanco, Fernando de Aguado y Páramo, Domingo Galindo, Eustaquio Galindo, Fernando Lovera, Antonio Xedler, el maestre de campo Luis Arias Altamirano, Pedro Blanco de Ponte, Antonio Muñoz, Juan Félix Blanco de Villegas, Pedro Miguel de Herrera, José Antonio Rengifo, Gabriel de Ibarra, Diego de Ibarra, Alonso de Ribas, Agustín Piñango, Juan Mejía, José de Bolívar, Juan de Meneses, el marqués del Valle de Santiago Francisco de Berroterán, Pedro de Liendo, Juan Arias, Pedro Solórzano, Gabriel Regalado de Rada, Alonso Lovera, José de Sojo, Miguel de Aristeguieta, Cayetano Arratia, José de Ibarra, Andrés de Ibarra, Juan de Frías, Silvestre de Liendo, Francisco Meneses,

Antonio Pacheco, Martín de Tovar, Mateo de Monasterios, Agustín de Herrera, Manuel Carrasco, Alejandro Blanco de Villegas, Gabriel de Rada, Miguel Blanco de Villegas, Juan Primo Ascanio, Lorenzo de Ponte, Tomás Garaván, Manuel Felipe de Tovar, Antonio de Ponte, Juan de Xedler, Alejandro Blanco de Monasterios, Antonio Xedler Inociarte, Miguel de Monasterios, Ignacio Xedler, Juan Hermoso, Juan de Vega, Javier de Solórzano, Pedro Manuel Mariñas, Bartolomé Mariñas, José Gabriel Solórzano, Bernabé de Silva, Miguel de las Mariñas, Francisco Verois, Juan de Ascanio, Gabriel de Landaeta, Antonio Blanco, Juan Alonso Muñoz, Mateo Plaza, Juan de Bolívar, Manuel de la Plaza, Andrés Manuel de Urbina, Antonio Landaeta, José Antonio Verois, Fernando Mejía, Mateo Blanco de Ponte, Antonio Blanco de Herrera, Andrés Madriz, Fernando José de Rada, Leopoldo de la Madriz, Cipriano de Landaeta, Bartolomé Monasterios, Juan Ignacio Solórzano, Cornelio Blanco, Fernando Espinosa. Se habla de la baja del precio del cacao a 8 pesos y se apoya la expulsión de los factores y otros empleados de la Guipuzcoana. León se retira pero regresa el 1 de agosto de 1749, ante el incumplimiento de algunas medidas propuestas por él, y el abandono de Caracas que hizo Luis Francisco Castellanos el 3 de mayo. Los ánimos se han enardecido. León envía comisionados a otras ciudades en busca de apoyo. Se practican arrestos, movilizaciones, los nobles retroceden en sus reclamaciones ante el carácter cada vez más violento que toman los hechos. El 3 de agosto hay un cruce de fuegos entre isleños de León y los vizcaínos en el camino de La Guaira, cerca de la fortaleza del puerto; retorna Castellanos a Caracas; desde Santo Domingo han llegado tres barcos con tropas, y el oidor Francisco Galindo Quiñónez y Barrientos abre las averiguaciones de rigor, ante las acusaciones de delitos de lesa majestad. León se retira de Caracas. En octubre salen de Cádiz 1.200 soldados en dos buques de guerra, y Julián de Arriaga llega a La Guaira el 28 de noviembre como nuevo gobernador encargado. Arriaga perdona a León y a los alzados y en su informe dijo que no halló pruebas de la participación directa de los personajes más encumbrados de la sociedad en las marchas y en el ataque de León a la fortaleza de La Guaira, y termina con la justificación de varias de las quejas levantadas durante los sucesos.

El cabildo y las personas nobles de la ciudad han mostrado su apoyo al gobernador, y lo ratifican, a poco de soliviantarse más gente por un momento. Deciden recoger las quejas de León y de los demás agraviados, y remitirlas a España, por medio del conde de San Javier[854]. Más tarde, el cabildo registra que se ha concedido poder a Alejandro Blanco y Villegas para que presente ante el gobernador y ante el rey los

[854] Enrique Bernardo Núñez, *Ob. cit.*, p. 173.

resultados de los tres procesos o tendencias que han corrido en esos meses: la lealtad de la provincia hacia el rey; los perjuicios causados por la Compañía Guipuzcoana; y la falsedad de los informes de los factores y accionistas de la compañía[855].

Estamos en presencia de un doble juego, o mejor dicho, de dos tendencias, que toman cuerpo en el seno de la nobleza criolla, y los cabildantes. Una conducta es la ardorosa protesta, otra es el respeto a la autoridad real. Hay el bando de los protestatarios ante todo, hay el bando de los regalistas ante todo, y hay los matices que mezclan elementos de una y otra posición. Si los reclamos a la compañía guipuzcoana es lo que está en el tapete, todos los de élite criolla se unen; si los leoncistas abren fuego contra el fuerte de La Guaira, los moderados hacen mutis. Y hay quienes ven pasar los acontecimientos desde sus haciendas. Es el consabido fenómeno de lo que se ha dado en llamar el juego político. Por ejemplo, en enero de 1741, es decir, antes de producirse la marcha levantisca de León, once viudas de Caracas, cosecheras de cacao, dirigieron una protesta al Consejo de Indias. Allí decían que sus propiedades producían más de 4.000 fanegas de cacao al año, cantidad muy disminuida para la venta, ahora que su precio es tan bajo. Existe el peligro de que perezca lo que han creado ellas y sus antepasados, a pesar de una momentánea expansión de los cultivos gracias al crédito eclesiástico. Cuando antes se podían comprar tres esclavos con la venta de 20 a 25 fanegas de cacao, ahora se compra sólo uno. Y, ¿quiénes son los responsables de esta situación? Los vascos. Tres años después, en 1744, unas 93 personas firman otro documento contra la Guipuzcoana. Ferry detecta que se trata de miembros de las familias más viejas de la provincia, varias de ellas sin origen vizcaíno, y poseedoras de considerable peso político en Caracas. Además, investigó que 76 de ellos (21 mujeres y 55 hombres) muestran blasones de hidalguía; que 38, o sea, la mitad de los 76 hidalgos, pudo identificarlos como propietarios de 64 haciendas con 781.500 árboles de cacao. Aparte, identificó a 58 plantadores de cacao que no firmaron ni se pudo conseguir en ellos alguna señal de su insatisfacción con el monopolio de los vizcaínos, lo cual no quiere decir que estaban satisfechos. Le llamó a Ferry la atención de que tres familias emblemáticas de la ciudad no aparecen con su firma en el documento, aunque el autor no puede por ello afirmar que estaban a favor de los vizcaínos o eran neutrales, en vista de la natural dificultad que siempre hay cuando se trabaja con documentación muy antigua y contentiva a veces de ambigüedades como son estos papales coloniales. Esas familias son la de Feliciano Sojo Palacios Gedler, alcalde ordinario varias

[855] *Ibíd.*, p. 176.

veces entre 1719 y 1744; la familia de Andrés Rodríguez de la Madrid Vásquez, y sus hijos Santiago y Salvador Rodríguez de la Madrid y Liendo; y la familia de Sebastián Arrechedera Tovar, y su padre, quien se casa con Luisa Catalina de Tovar y Mijares, hija de la más ricas familias caraqueñas. Coincidencialmente, los tres son de raíz vizcaína. Y agrega que, así mismo, algunos individuos con profunda raigambre criolla y no cercana conexión vasca, no estuvieron adelante en la franca oposición a la Compañía. Guardaron silencio José Bolívar Aguirre (20.000 árboles, 2 haciendas), las hermanas Josefa y Teresa Bolívar Arias (17.000 árboles, 2 haciendas), los hermanos José Domingo, José Manuel y Fernando Tovar Galindo (62.5000 árboles, 6 haciendas), el primo Martín Tovar Galindo (24.000 árboles, una hacienda), los hermanos Mauro y Antonio Tovar Mijares (27.000 árboles, 3 haciendas)[856]. Por el contrario, un personaje como Alejandro Blanco Uribe fue el líder del movimiento de protesta. No puede decirse lo mismo de José Bolívar Aguirre, tío de Simón Bolívar, quien fue visible partidario de los esfuerzos reales para suprimir la oposición a la Compañía, él condujo la milicia que buscó a León en una extensa marcha en Aragua y valles del Tuy en 1751, sin encontrarlo, y el gobernador Ricardos lo recomendó para el ingreso a una de las órdenes de Santiago, o Alcántara o Calatrava[857]. Adicionalmente, el gobernador Ricardos tuvo en sus manos una lista de las principales personas que se podían contar como «pacíficos y leales al Rey», entre ellos Domingo Galindo y Seijas, Pedro Luis Arguinzones, Feliciano Sojo Palacios, Agustín Piñango, Miguel de Aristeguieta, Antolín de Liendo, Mateo de Monasterios, José Bolívar y Miguel Rengifo[858].

¿Cómo terminaron los hechos? Después de las gestiones conciliatorias de Julián de Arriaga, un viraje inducido en la corte por el marqués de Ensenada, Zenón de Somodevilla y Bengoechea (1702-1781), condujo a una nueva represión del movimiento. Según investigación del americanista Demetrio Ramos Pérez, llevada a cabo en el archivo de Simancas, fue el ex virrey de la Nueva Granada, Sebastián de Eslava, quien asesoró al marqués de la Ensenada al presentarle un plan que contemplaba el endurecimiento de la actitud represiva, está vez conducida por el gobernador Ricardos[859]. Bajo la nueva y endurecida dirección del gobernador Ricardos, se ordena el arresto de Juan Francisco de León. Son detenidos Juan Félix Blanco, Miguel Blanco Uribe y Juan Nicolás Ponte, y enviados a España. Varios criollos son

---

[856] Robert J. Ferry, *Ob. cit.*, pp: 187-196.
[857] *Ibíd.*, p. 205.
[858] *Ibíd.*
[859] Demetrio Ramos Pérez, *Estudios de historia venezolana*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1976, pp. 650-674.

deportados a otros lugares, entre ellos Luis Arias Altamirano, su hermano Francisco Arias, Pedro Blanco de Ponte, Francisco de Paula Toro y Istúriz (el segundo marqués del Toro), Francisco Nicolás Mijares y Tovar (el tercer marqués de Mijares). También se arresta a Domingo Aguirre del Castillo, a Manuel de Sosa Betancourt, isleño y arcediano de la Catedral. El conde de San Javier y Francisco de Ponte fueron arrestados en Madrid. Se persigue u hostiliza a otros en Caracas. Una carta pastoral del obispo de Caracas, Manuel Machado y Luna, del 28 de agosto de 1751, condena el intento de León y llama a colaborar en su detención[860]. El gobernador Ricardos, que ha llegado en mayo de 1751 para sustituir a Julián de Arriaga, llama a todos, en agosto, a apresar a León, quien, según él, se ha fugado con 40 hombres a Curazao a bordo de un barco holandés[861]. Juan Francisco de León aunque proyectaba huir a Curazao, merodea luego durante varios meses por Píritu y, al fin, se rinde y pide clemencia, en diciembre de 1751. Lo embarcan en secreto en el barco Santa Bárbara con destino a España, junto con su hijo Nicolás, Matías de Ovalles, Pablo Cazorla, y don Gaspar y don Lorenzo de Córdoba[862]. Su casa es derruida, sembrada de sal y le colocan en la fachada una placa infamante. Su hacienda y esclavos son confiscados. Se pensaba arrasar Panaquire, pero no se hizo. El Rey ordenó que se quedara como estaba, pero previo el pago de un nuevo derecho de composición por la confirmación o reconfirmación de las propiedades de las tierras. Debe aclararse que, de todos modos, ningún miembro de la nobleza criollo fue acusado de traición, y que la más severa pena de prisión entre ellos fue de dos años[863].

La nueva política gubernativa no aquietó la pugna de los cosecheros con la Guipuzcoana. Por el contrario, contribuyeron a mantener viva la actitud de protesta del cabildo la salida del escenario del radicalizado Juan Francisco de León, las protestas de lealtad al rey de los criollos, el estímulo que obtuvieron éstos ante las vacilaciones de las autoridades, y la flagrante actitud contra los criollos de los factores de la Compañía, empeñados en favorecer sus privilegios. Madrid persistía, lógicamente, en su apoyo a la Compañía y eso se demuestra cuando se lee en sesión del cabildo, del 13 de diciembre de 1754, una carta del gobernador Ricardos, donde informa que Julián de Arriaga, secretario de Estado y del despacho universal de Marina e Indias, le dice que por cuanto los particulares dueños de los navíos "San Sebastián", "San Antonio" y "Santa Ana" han embarcado cacao que excede al de la Compañía, con notorio perjuicio de ésta, una junta general de

---

[860] *Boletín del Archivo General de la Nación*, Nº 84..., p. 118.
[861] *Ibíd.*, p. 119.
[862] *Ibíd.*, p. 180.
[863] Ferry, *Ob. cit.*, pp. 216-240.

interesados de la Compañía, presidida por el fiscal y comisario de Indias, don Manuel Pablo Salcedo, designado por el rey, resolvió reducir a una sexta parte en cada navío la concesión de llevar cacao, con la posibilidad de aumento a juicio de la Compañía, si hay más capacidad disponible[864].

Las cosas habían cambiado, de todas maneras, y la Compañía no podía ya actuar como antes. Una vez concluida la rebelión, en 1752, la Corona tuvo que revisar sus acuerdos con la Compañía y sometió la fijación de los precios del cacao a una junta evaluadora tripartita, integrada por el Gobierno, la Compañía y los mercaderes locales, además de reservar un sexto de la bodega de los barcos a los vecinos locales. De esta manera, según parecer de Eduardo Arcila Farías, «el comercio con la Nueva España quedó firmemente en poder de los mercaderes caraqueños»[865]. Más todavía, la Guipuzcoana tuvo que admitir la petición del Cabildo caraqueño de su participación en el capital de la compañía, la cual entregó 300 acciones por valor de 500 pesos cada una al de Caracas y 200 acciones al de Maracaibo[866]. Se sabe, además, que hacia 1761 entró en vigencia un acuerdo de Su Majestad que aumenta el precio del cacao en 3 pesos. Además, la Compañía anuncia ese mismo año las siguientes rebajas de sus frutos y efectos que lleva a Caracas: un 20% de rebaja en instrumentos de agricultura tales como azadas, rejas de arar, machetes, chícoras, palas de hierro, y acero, bronce y cobre para trapiches; un 14% de rebaja en harina, aguardiente de Navarra y de Andalucía, vino de Andalucía, y aceite; un 12% de rebaja en géneros de bayeta, miniquín, lamparilla, lanilla, etc.; un 10% de rebaja en ruán de Suiza y lienzos diversos; un 20% de rebaja en galones de oro y plata, trencillos y flecos de oro y plata, y encajes de oro y plata. A esto se añade una real orden que dispone que se reciban en las cajas reales de La Habana 100.00 pesos en moneda de cuño antiguo para ser llevadas a Caracas[867].

En la sesión del cabildo del 23 de febrero de 1767, vuelve a plantearse el problema del cacao de Guayaquil. Don Diego de Obelmejías, alguacil mayor, pide que no se exporte cacao sino después de haberse expedido 50.000 fanegas a los reinos de España, y 20.000 a Nueva España. Todavía en 1775, en la sesión del 17 de marzo, el cabildo pide a Su Majestad que se prohíba la introducción de cacao de Guayaquil en Veracruz[868].

---

[864] Enrique Bernardo Núñez, *Ob. cit.*, p. 181.
[865] Cf. Eduardo Arcila Farías, *Diccionario de Historia de Venezuela*, tomo II, Caracas, Fundación Polar, 1992, p. 5-6.
[866] *Ibid.*
[867] Enrique Bernardo Núñez, *Ob. cit.*, pp. 198, 199 y 206.
[868] *Ibíd.*, p. 211 y 226.

Es que la tensión entre el cabildo y el gobernador, a quien se agrega a partir de 1776 como firme apoyo el Intendente, ya es un fenómeno permanente. Ambos poderes son leales a la corona, pero cada quien a su manera. Los capitulares se sienten españoles, pero al mismo tiempo anida en ellos el sentimiento de ser responsables, en mucha medida y al modo como ellos lo entienden, del progreso y la prosperidad de su tierra. No es de extrañar, entonces, el tono de varias proclamas que lanza el cabildo donde se unen las quejas del productor con el orgullo del vecino, que no deben verse como los primeros esbozos de un movimiento de independencia, que sí aflorará unas cuantas décadas después, sino más bien como una ratificación de su responsabilidad en la conducción y marcha de un suelo donde nacieron y donde han entregado todos sus esfuerzos de empresarios. Allí están las palabras que salen de la sesión del 14 de mayo de 1779:

> Haber sufrido el dilatado tiempo de cincuenta años un comercio limitado y pasivo [que además de haberles irrogado tantos perjuicios cuantos pueden colegirse de un solo comprador y vendedor] ha ido insensiblemente enervando sus naturales fuerzas, y destruyendo sus sustancia, y robustez, hasta reducirla a la triste imagen que hoy representa[869].

A esta queja con aires de palinodia, se unen la exaltación de los rasgos naturales, geográficos y de lugar de la provincia, donde se hallan 11 ciudades, 8 villas, y diversos lugares, doctrinas y misiones, con más de 300.000 habitantes, sin contar las naciones bárbaras que no se han reducido. Una tierra que supo soportar la grave epidemia de viruela de 1763, que produce cacao, tabaco, añil (antiguo de hace 5 años), azúcar, café, algodón, grana silvestre, vainilla, zarzaparrilla, cañafístula, raíz de china, tacamahaca, palo brasil, caoba; que tiene cristales, oro, plata, cobre, plomo; con ganado y sus carnes y sus pieles. Su eje es el cacao, con un precio oscilando entre 1730 a 1768 en 7, 8, 9, 10 y hasta 14 pesos; y una producción que no ha bajado de 140.000 a 110.000 fanegas. Su mal es el contrabando en auge. Es que a partir de 1773 el cacao de Guayaquil ha inundado Nueva España, de modo que el giro de esta provincia cesó casi totalmente, y con ello desapareció la moneda, cuando antes entraban cerca de 300.000 pesos al año desde Veracruz. ¿Solución? Comercio libre y dirigido. Medida positiva fue el decreto del 16 de agosto de 1765 franqueando los puertos de la península a la libre navegación y comercio con las islas de barlovento y provincia de Yucatán. Y hay un signo de moderación en las palabras: la Guipuzcoana puede seguir haciendo el corso en las costas de la provincia para combatir el contrabando[870].

---

[869] *Ibíd.*, p. 257.
[870] *Ibíd.*

Meses después, el 13 de diciembre, el cabildo dirige una representación al rey en términos dramáticos:

> La dura opresión y calamidad en que se halla la Provincia de Caracas despojada de aquellas sabias y justas leyes que moderaban y afianzaban la equidad de su comercio con la Compañía Guipuzcoana [...] Las injurias y repetidos agravios con que vuestro Intendente en esta misma Provincia ha procurado denigrar el honor y conducta [de ellos][871].

Y a esto se agrega el «especioso motivo» de la guerra con Inglaterra, enarbolado por la Compañía, y también por el Intendente, quien ha prohibido que la Compañía reciba añil, cuero, algodón y otros frutos diferentes del cacao[872]. Y el gobernador ha querido prohibir el ofrecimiento gracioso de los cosecheros de aportar una contribución en dinero para enviar dos capitulares a España con el objeto de apelar contra aquellas disposiciones. Es más, el Intendente ha calificado de "garrama" (estafa) tal contribución[873].

El tono se hace más patético:

> ¿Es acaso que ha llegado el poder y opresión de la Compañía al extremo de que no nos sea permitido ya ni aun quejarnos a Vuestra Majestad de sus opresivas y violentas disposiciones? [...] ¿Puede ser jamás lícito en las leyes de la humanidad oprimir a un Pueblo y embarazarle los medios legítimos de su defensa?[874]

El cruce de palabras entre capitulares y autoridades españolas es, más que un diálogo, una discusión entre sordos. Véase:

El cabildo acusa al intendente de proferir expresiones desconsideradas hacia el síndico procurador general, y también de retardar los permisos para los paquebotes, en vista de que las pocas fragatas que han salido a Veracruz no han logrado detener la baja del precio del cacao a 6 pesos. Además, con el pretexto de la guerra, la Compañía no quiere pagar en plata (noviembre de 1779).

El Intendente acusa a los cosecheros de mantener un precio altísimo del cacao. Por ejemplo, la goleta del conde de San Javier vendió en México el cacao a 42 pesos. La cosecha de este año es muy copiosa. Es por culpa del mal mantenimiento de los navíos y de la manera no legal por medio de la cual pretenden los cosecheros hacer el reparto del cupo de cacao en los navíos a Veracruz, que no se han hechos los despachos, y da un plazo de 40 días para que se ejecute el envío,

---

[871] *Ibíd.*, p. 381.
[872] *Ibíd.*
[873] *Ibíd.*, p. 392.
[874] *Ibíd.*

porque la intendencia está dispuesta a otorgar permiso a toda embarcación que así lo solicite. Los capitulares velan más por sus intereses particulares que por los del público. El que ellos prohíban la extracción de maíz va en contra de los intereses de los labradores del grano pues se limitarán sus siembras y dependerán de los ricos cosecheros de cacao. Admite que es verdad que algunas cédulas reales han quedado suspensas por el estado de guerra con Inglaterra (diciembre de 1779).

El cabildo dice: hay pobreza, el comercio está estancado, se han perdido entre 4.000 y 6.000 fanegas de cacao a causa de la guerra. Piden al obispo que decrete permiso para poder comer carne en la cuaresma que viene. El síndico se queja de que ha quedado en el papel la disposición de llamar a la compañía a que reciba el cacao a 16 pesos la fanega, porque el factor de ésta lo rechaza mediante una y mil piruetas (que el cacao está picado, con mucho polvo, etc.) y con eso el cosechero tiene que venderlo por menos de 16 pesos. Propone, entonces, el nombramiento de peritos imparciales, es decir, un tercero en discordia, para examinar el fruto (febrero de 1780).

El Intendente, en respuesta al síndico, le impone una multa de 200 pesos[875].

La Corona, a todas estas, busca terciar. Una real orden, de 31 de julio de 1780, establece que, independientemente del estado de guerra, se lleve el precio del cacao a una cifra entre 40 y 46 pesos la fanega, y que la compañía, su vez, pueda aumentar el precio de los géneros y efectos que lleva a Venezuela.

Y llegamos al llegadero. Otra real orden, del 15 de febrero de 1781, teniendo a la vista la representación hecha por la Junta Particular de Gobierno de la Compañía Guipuzcoana, se la exonera de las cargas de costear el resguardo de mar y tierra de la provincia de Venezuela, y se las traspasa a la Intendencia, que podrá tomar los buques de la compañía en parte de pago de lo que debe a la Real Hacienda. De este modo, la compañía entra en la clase de un comerciante particular de la provincia. En consecuencia, el intendente Ábalos hace publicar, el 20 de abril de 1781, dicha orden real y agrega que «el comercio libre debe entenderse en toda su extensión, y para todos tiempos, con los reinos de España, islas y puertos de los dominios españoles, pues para con las

---

[875] *Ibíd.*, pp. 307, 346, 359, 422, 424.

potencias amigas o neutrales únicamente ha de subsistir durante la guerra, por vía de auxilio, y socorro de las presentes urgencias»[876].

Es el fin del monopolio vizcaíno. El júbilo en Caracas estalla, y el cabildo, en su sesión del 14 de mayo de 1781, expresa su «admiración para siempre al reinado de Vuestra Majestad como la época más feliz»[877]. En lo adelante, mejoraron las relaciones entre gobierno y cabildo. Así se infiere de los resultados de una junta celebrada el 28 de noviembre de 1785 entre el intendente Saavedra y el cabildo caraqueño, para reglamentar el comercio el cacao con Veracruz. Se destacan en el acuerdo dos puntos: 1) harán el comercio entre 10 y 12 embarcaciones, cuya propiedad estará repartida entre comerciantes y cosecheros; y 2) no se admitirán en este tráfico barcos de España, de Canarias, islas españolas de barlovento o sotavento, ni de los demás dominios de América, y ni siquiera de las otras provincias comprendidas en la Capitanía General e Intendencia de Ejército de Caracas. Bastante, ¿no?

Por supuesto, los avatares del comercio en general y del cacao en particular no dependían exclusivamente de las malas o buenas artes de la Compañía Guipuzcoana. En 1787, el cabildo pedía la rebaja de los derechos sobe el cacao, pues se seguían pagando 33 maravedíes de vellón por libra en tiempos en que la fanega se vendía entre 39 y 46 pesos pero cotizada hoy a 28 en Cádiz. Otra queja expuesta es la referente a la introducción en España de cacao extranjero y el pago de altos derechos en Cádiz[878]. Luego, vinieron los estragos de la guerra. La guerra de 1796 acabó con el comercio libre. Durante la guerra se vendieron 100.000 fanegas de cacao a 8 pesos, cuando antes el precio era de 18 a 20 pesos. Los 12.000 quintales de café que se vendieron a 10 pesos, antes se vendían a 16 o 20. Por concepto de añil, algodón y cueros ingresaron 2.595.750 pesos en un año de paz. Ahora en guerra, la cifra bajó a 1.287.500[879].

Mucho tiempo después de todos los conflictos reseñados, es decir, en 1805, el cabildo lanzaba sus críticas al gobernador y al intendente por su ceguera y pasividad al no abrir el comercio con los neutrales. Es verdad que se abrió con los Estados Unidos, pero apenas duró 11 días. Esos funcionarios se oponen a la introducción de negros[880]. Solicita el cuerpo capitular, en consecuencia, un comercio libre sin restricciones con las naciones amigas y neutrales, a fin de exportar toda clase de

---

[876] *Ibíd.*, p. 486.
[877] *Ibíd.*, p. 490.
[878] *Ibíd.*, p. 519.
[879] *Ibid.*, p. 552.
[880] *Ibid.*, p. 360.

frutos y traer plata, oro, negros, víveres, instrumentos de agricultura, hierro, lencería.

Incansable, verdaderamente, la actitud del cabildo en la defensa de un grupo social básico en la economía de estas tierras.

El cabildo y los comuneros de Mérida

Ha sido muy bien estudiada la rebelión de los comuneros de Mérida, a la que se le atribuye un aliento precursor independentista, aunque en realidad estuvo limitada a una justa reclamación, como lo indica el grito de combate proferido por los sublevados: «Abajo los malos ministros, y el mal gobierno. Viva el rey». Las causas del conflicto se pueden ubicar en el aumento de varios impuestos, entre ellos el de alcabala, que fue elevado al doble; el establecimiento del estanco del tabaco, y del aguardiente, todo lo cual hizo subir apreciablemente el costo de la vida. Es de resaltar el acuerdo del cabildo de La Grita, fechado de 22 de julio de 1779, dirigido al Intendente Ábalos, y también un memorial de agravios del día 29, dirigido al administrador general encargado de la Real Hacienda en Maracaibo, contador Josef Jiménez y Navia, donde enfilan todas sus críticas hacia el administrador subdelegado, doctor José de la Trinidad Noguera y Neira, y piden su destitución. Ente los promotores va a estar un noble de nombre Juan José García de Hevia. Hubo manifestaciones en diversos lugares de la región andina. Con la llegada de una tropa de refuerzos, el conflicto es aplacado, son juzgados algunos. La sentencia del 10 de octubre de 1780 del gobernador de Maracaibo, teniente coronel don Manuel de Ayala reparte condenas a prisión, destierro y multas. Fue en 1781 cuando estalló el movimiento neogranadino de El Socorro, con un acento más plebeyo («Nos el común», así empezaba uno de sus escritos). A partir de allí, se pronuncian Lobatera y San Antonio, y luego San Cristóbal, que lo hace el 7 de julio de 1781. Más tarde se agrega La Grita. García de Hevia es nombrado por los amotinados capitán general. Mérida se pronuncia el 27 de julio. En cambio, Trujillo rechaza con fuerza adherirse al movimiento. Con tal rechazo y con el desplazamiento de contingentes militares desde Maracaibo y Caracas, queda sofocada la sublevación[881].

Existieron otros campos de batalla, donde participaron en primera fila capitulares y señores propietarios al lado de gruesos contingentes de la población, como la rebelión de El Tocuyo de 1744, en respuesta a un

---

[881] Cf. Lucas G. Castillo Lara, "La gesta comunal. Del silencio al grito", en Varios Autores, Los comuneros de Mérida (Estudios), Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1981, pp. 91-159.

llamado del gobernador Zuloaga para levantar entre los pobladores un destacamento armado que acudiera a la defensa de Puerto Cabello, amenazado por incursiones de piratas y contrabandistas, rebelión que transcurrió entre mayo diciembre de aquel año.

El Real Consulado, una petición de los criollos

El establecimiento del Real Consulado de Caracas en 1793 obedeció a una vieja solicitud formulada por el cabildo de Caracas. Pero, a diferencia de la Real Audiencia y de la Intendencia, sus estatutos y reglamentos fueron redactados por los propios criollos interesados en la materia. En efecto, en julio de 1786, una junta presidida por el intendente Francisco de Saavedra, confeccionó una lista de personas a matricularse con vistas a la erección del tribunal dicho, lista que quedó integrada por 37 hacendados, 25 comerciantes y 14 mercaderes de Caracas; 6 hacendados, 4 comerciantes y 2 mercaderes de La Guaira; y un hacendado, 4 comerciantes y dos mercaderes de Puerto Cabello. Para entrar en su constitución los hacendados debían poseer por lo menos 30.000 pesos en heredades (propiedades agrícolas o bienes raíces), y los comerciantes exhibir igual cantidad de pesos, en inmuebles y capital de comercio[882].

La real cédula de erección del Consulado de Caracas, expedida en Aranjuez a 3 de junio de 1793 lo definía así:

> Su instituto será la más breve y fácil administración de justicia en los pleitos mercantiles, y en la protección y el fomento del comercio en todos sus ramos[883].

Es justo decir que dicha erección se entronca con el crecimiento que ha experimentado la colonia venezolana. En 1790, el intendente Saavedra había reconocido que la Provincia de Caracas, en menos de ocho años, había triplicado su comercio, y la agricultura experimentaba un «fomento asombroso». En los cinco años de funciones de su intendencia, agrega, el importe de los géneros procedentes de España pasó de 800.000 pesos a 2.600.000 pesos, y la producción de añil pasó de 70.000 libras a 600.000 libras, para recordar sólo dos rubros[884].

---

[882] Manuel Nunes Díaz, *El Real Consulado de Caracas (1793-1810)*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1971, p. 220 y 223.

[883] *Ibíd.*, p. 229. El autor hace cita textual del manuscrito que reposa en el Archivo General de la Nación, Real Consulado, Correspondencia, tomo I, 1786-1797.

[884] Tomás Sthor, *El circulante en la Capitanía General de Venezuela. El dictamen de Francisco de Saavedra (1790) y el informe de Joseph Diez Roble (1792).* Caracas, Ediciones del Banco Central de Venezuela, 1998, p. 134.

Siguiendo la extensa documentación sobre el Real Consulado recopilada por Eduardo Arcila Farías, hay que decir que las razones para su instalación consistieron en el considerable aumento y extensión del comercio después de decretada su libertad el 12 de octubre de 1778, y de otras gracias y franquicias, además de las diversas peticiones que se formularon para crearlo y destinarlo a proteger el tráfico, decidir breve y sumariamente los pleitos mercantiles porque ya no bastaban para ventilarlos los consulados de Lima y México y, en fin, por instancias de aquella junta celebrada en Caracas.

Estuvo formado originalmente por un prior, dos cónsules, nueve consiliarios, y un síndico con sus respectivos tenientes, más secretario, contador y tesorero. En calidad de tribunal funcionará con el prior y los cónsules, para conocer de los pleitos entre comerciantes y mercaderes, y los compañeros y factores suyos en sus negocios de comercio, compra, venta, cambio, seguros, cuentas de compañía, fletamiento de naos, factorías, etc. Se hará juicio rápido, en el que se oirá a una parte, luego a la otra, se buscará un arreglo, y si no, se dictará sentencia inmediata. Las pruebas a evacuar serán escritas y, cuando el juicio sea difícil, la sentencia podrá dictarse a los ocho días. Cuando el pleito pase de 800 pesos, podrá hacerse apelación ante un tribunal de alzada, formado por el intendente y dos colegas, escogidos entre ambas partes. La jurisdicción del consulado será la Capitanía General de Caracas, con diputaciones en Puerto Cabello, Coro, Maracaibo, Cumaná, Guayana, Trinidad y Margarita, ciudades donde las decisiones las tomarán dos colegas. En los demás pueblos suplirán los jueces ordinarios. Cuando se haga apelación se sentenciará en 15 días. Podrá tramitarse recurso de nulidad o de injusticia notoria al Consejo Supremo de Indias. Además, del tribunal habrá una junta, integrada por todos los miembros, a reunirse dos veces al mes y su dedicación estará en proteger y fomentar el comercio, procurar el adelantamiento de la agricultura, la mejoría en el cultivo y beneficio de los frutos, la introducción de máquinas y herramientas, y la facilitación de la circulación interior. Además, averiguará por medio de diputados, de personas idóneas y otros cuerpos, el estado del cultivo y el tráfico; estudiará la necesidad de construir buenos caminos en la vía Caracas-La Guaira; Caracas-valles de Aragua, Puerto Cabello-Valencia, y de limpiar el puerto de la Guaira, concluir su muelle, conservar la navegación de los ríos Tuy, Yaracuy, y afluentes del Orinoco. La junta será presidida por el prior, y a ella podrá asistir el intendente, en cuyo caso él la presidirá. El secretario escribirá una memoria anual.

Los fondos del consulado estarán formados por el derecho de avería, más las multas y penas que impongan el tribunal, los diputados

o los jueces de alzada. El derecho de avería será el 1% sobre el valor de todos los géneros, frutos y efectos comerciales que se extraigan e introduzcan por mar en todos los puertos, a excepción del dinero; el 3% de los que se extraigan e introduzcan de colonias extranjeras, excepto mulas y caballos, que pagarán un peso por cabeza, y ganado vacuno y lanar en pie que pagarán 1%, y negros y monedas de oro y plata de cuño mexicano que no pagarán nada. Ese impuesto se ejecutará en las aduanas al mismo tiempo que los otros impuestos.

El prior, los cónsules, el síndico, el secretario, el contador y el tesorero cobrarán un salario, y será para estos dos últimos de 1.000 pesos al año.

Los primeros nombramientos recayeron en connotadas figuras de la nobleza criolla, a saber: el conde de Tovar como prior, y su teniente será José Domingo Blanco. Juan José Mintegui será el primer cónsul (su teniente: Manuel de Clemente y Francia). José de Escoriguela será el segundo cónsul (su teniente: Nicolás del Toro). Los consiliarios serán el conde de San Javier, Joseph Cocho de Iriarte, Feliciano Palacios y Sojo, Andrés Ibarra, Francisco García de Quintana, Francisco Longa, Marcos de Rivas, Juan Bautista Echezuría, e Isidro Méndez, con sus tenientes Santiago de Ponte, Antonio Barreto, Martín Jerez de Aristeguieta, Fernando Ascanio, Manuel Monserrate, Ignacio Gedler, Juan Benítez, Joseph Joachín de Ansa, y Blas del Castillo. Síndico será Manuel Felipe Tovar (teniente: Juan Joseph de Echezuría). Secretario: Antonio Sublete. Contador: Gervasio de Navas. Y tesorero: Jayme Bolet.

Los oficios serán bienales, pero el secretario, el contador, el tesorero, el asesor y escribano del tribunal podrán ser perpetuos. Los porteros serán blancos, honrados y de buena conducta, y también podrán serlo a perpetuidad[885].

Más tarde, con fecha 24 de septiembre de 1795, el rey accede a una petición venida de Caracas y ordena que en lo adelante, la composición del consulado atienda a la igualdad en número de hacendados y comerciantes, por lo que deben alternarse esas dos clases por bienios en los empleos de prior y sindico; y repartirse los de cónsules en la forma más conveniente para «evitar toda especie de superioridad entres dos profesiones que contribuyen igualmente a la prosperidad del Estado»[886]. Es una disposición real que termina de

---

[885] Eduardo Arcila Farías (comp.), *El Real Consulado de Caracas*, Caracas, Edime-UCV y Madrid, Talleres Gráficos, 1957, pp. 57 y ss.

[886] Ibíd., p. 98.

despejar las dudas acerca de una supuesta desigualdad de nobleza o hidalguía entre hacendados y comerciantes.

Pero, ¿hizo algo el Real Consulado?

Hay indicios que sugieren una respuesta afirmativa. El rey aprueba las disposiciones de apertura y composición de caminos y da permiso para que el ingeniero Francisco Jacot se encargue de esas obras y de la construcción del muelle de La Guaira. Al consulado se le piden noticias de los precios corrientes de los principales efectos comerciables de la plaza, sus seguros, fletes y cambios sobre los puertos de América y España; cuáles son los efectos que abundan y cuáles los que escasean; el estado de las cosechas y si se han sucedido inundaciones, terremotos, piratería, naufragios, incendios; la entrada y salida de buques, sus cargamentos, procedencia y destino; y algo muy especial, si hay publicaciones con temas al respecto. Son sustituidos, por poco inteligentes y poco íntegros, los negros y mulatos que hacían los reconocimientos del añil para graduar sus calidades, y se colocan en su lugar seis veedores instruidos y prácticos en la materia. Hay fuerte reprimenda por el nombramiento, superfluo y derrochador, de Bernardo del Toro como diputado en la corte, con sueldo de 2.000 pesos anuales. Se aprueban las obras de conducción de aguas hasta el muelle de La Guaira y de conservación y reparación de su encañado y fuente. Se aprueba la construcción de un muelle de madera en Maracaibo. Se aprueba la erogación de 9.500 pesos para limpiar y mantener la navegación por el río Tuy. Se aprueba la erogación de 3.000 pesos, y si es necesario más en el futuro, para el camino a los valles de Caucagua, en vista del incumplimiento de lo prometido por los hacendados para sufragar la obra, dizque por las malas cosechas. Se aprueba la negativa del consulado de desviar 10.000 pesos para contribuir a los gastos de vestuario y armamento de las milicias de la provincia. Se aprueba erogación de 4.000 pesos anuales para obras de riego en Cumaná. Se auxiliará en la medida de lo posible a Cumaná por el terremoto de diciembre de 1797. Se aprueba erogación de 6.000 pesos anuales para ayudar al cultivo el algodón en Guarenas, Mariches, Charallave y Paracotos. Se autoriza erogación para la construcción de un muelle de piedra en La Guaira. Se autoriza erogación para la reparación de los muelles de Puerto Cabello. Se aprueba un plan de reparación del camino Cumaná-Barcelona por 36.000 pesos, y también un plan para la defensa del Manzanares, y limpieza del Neverí. Se dan facilidades al comercio con naciones neutrales por haber perjudicado mucho la guerra el desempeño de la agricultura y el comercio. Incluso, el consulado envió representantes a Madrid en 1799 y en 1805 a pedir que se restableciera el libre comercio con las naciones neutrales, tal como lo preveía la real

orden derogada de 1797, en razón de la paralización del tráfico con España a causa de las hostilidades con Inglaterra que prácticamente han bloqueado las costas americanas, o al menos las venezolanas[887].

Aunque estas obras se combinan con noticias no muy estimulantes como la negativa de un permiso, en 1801, para establecer una imprenta con cargo al fondo de avería y la promesa de su reintegro al obtenerse utilidades, o como la imposibilidad de establecer, en 1805, una academia de matemáticas, física y química por no permitirlo el estado de los fondos, ni tampoco sabemos si todas las obras se llevaron a cabo, en una situación en que se nota la interferencia de la guerra, el terremoto, las malas cosechas, las solicitudes inapropiadas de militares, al menos los documentos trasuntan unas miras animadas de buena voluntad.

En definitiva, es muy notorio el espíritu de progreso que ha animado el funcionamiento del Real Consulado, si nos atenemos a las razones esgrimidas para su fundación. Nos encontramos con un nuevo lenguaje, en donde a los antiguos términos de frutos, agricultura, conquista, pacificación, se agregan los de máquinas, herramientas, planes, inversiones, y en donde se notan los aires que llaman a la apertura de caminos, drenaje de ríos y mejoramientos de puertos, procesos tribunalicios rápidos, que traducen acciones y preocupaciones descritas con un vigor que contrasta con la supeditación a la ruda naturaleza de los primeros tiempos. Y son los criollos, son los principales productores y agentes activos de la sociedad, los promotores del nuevo *élan*.

CONCLUSIONES

1) El conjunto de elementos políticos, económicos, sociales y culturales que durante 300 años normaron la vida en sociedad de los habitantes de los territorios de la América española que hoy constituyen el país Venezuela, puede llamarse **sistema colonial venezolano**.

Los diversos elementos del sistema colonial fueron, en lo político, el régimen monárquico, el lo social, el régimen estamental, en lo económico, los regímenes de la encomienda, las misiones, la esclavitud, y la circulación de mercancías, con la existencia del mercado y el trabajo libre; y en lo cultural el régimen eclesiástico católico, y las diversas

[887] *Ibíd.*, pp. 81, 91, 100, 106, 125, 126, 127, 129, 135, 146, 147, 163, 175, 204, 237, 242.

manifestaciones artísticas, literarias y culturales en general, vinculadas en líneas generales a las ideas del llamado antiguo régimen español.

La unidad de tales regímenes y manifestaciones para formar el sistema colonial no supone negar las diferencias, pugnas y tensiones (como las existentes, por ejemplo, entre el trono y la colonia, entre nobleza y estado llano, entre amos y esclavos, entre comercio y economía natural, y en el seno del mundo religioso); ni tampoco niega la existencia de elementos al margen del sistema, como los aborígenes selváticos, ni manifestaciones en embrión como el artesanado. De todas maneras, priva la unidad de elementos en el sistema, que pervive durante tres siglos.

2) El calificativo de colonial no debe chocar con la especial ordenación jurídica de **provincias del reino** que se le dio a las gobernaciones de la Venezuela de hoy, ante todo por la especial categorización dominante en todo el ámbito legal del Imperio español, imperio que jerarquiza sus dominios en reinos, virreinatos y provincias. Junto con el hecho de tratar la Corona española a nuestras provincias como dominios suyos —y, en cierta manera, contener tal trato muchas diferencias en tono de subestimación con respecto al trato con las provincias de los reinos peninsulares—, los españoles criollos, los indígenas y los pardos eran considerados como vasallos del rey, al igual que los peninsulares, y varios de esos criollos fueron hasta admitidos a audiencia real en el trono madrileño. En este sentido, el término colonial no es peyorativo sino enunciativo, con sus bondades y sus maldades. Es totalmente diferente a lo sufrido por España, cuando en el año 711, los árabes cruzaron el estrecho de Gibraltar y la ocuparon, y hubieron de dominar toda Europa los islamitas si no los hubiera parado Carlos Martel en Poitiers en 750. Posteriormente, la ocupación árabe adoptó la denominación de Califato de Córdoba, desligado del de Bagdad. Y es diferente también del sistema colonial creado por las grandes potencias europeas desde fines del siglo XIX. Por supuesto, también el término que ahora adopto de sistema colonial venezolano no guarda ninguna vinculación con lo que algunos teóricos llaman el sistema neocolonial del siglo XX.

3) Los regímenes económicos descritos no forman parte de lo que se llama "formaciones económico-sociales", autónomas, acabadas en sí mismas y sucediéndose (superándose) unas después de otras gracias a una dinámica de aplicación universal. Esto quiere decir que en la época estudiada no existió, como algo independiente y de dimensión totalizadora, una formación económico-social calificada como feudal (gracias a la existencia de las encomiendas), ni esclavista (gracias a la

existencia de la esclavitud) ni capitalista (gracias a la existencia de la circulación mercantil).

4) La encomienda es la retribución que hace la Corona a los conquistadores y descendientes por su labor, mediante el reparto de un número de indígenas, quienes conservan sus antiguos predios y son catequizados. No hay ninguna connotación feudal porque no existen relaciones feudo-vasalláticas entre el conquistador y el gobernador, o virrey o rey; y no existe derecho de señorío porque ni el indio (que es libre y vasallo) ni las poblaciones están sometidos al dominio jurisdiccional (jurídico-legal) del encomendero. La encomienda aparece y desaparece, y el sistema colonial persiste.

5) Las misiones no son empresas ni feudales ni capitalistas ni corporativistas. Son conglomerados de indios que temporalmente no pagan tributo, que trabajan por un jornal y que son dirigidos en lo temporal (en los comienzos) y en lo espiritual por un religioso, quien dirige la misión sin fines de lucro.

6) El régimen de la esclavitud se asemeja mucho a la esclavitud de otras épocas y otras latitudes en el sentido de que rige el principio de *partus sequitur ventrem*, pero está enmarcada dentro del sistema colonial que le ha impuesto las siguientes limitaciones, de ninguna manera excepcionales: compra de la libertad, donación graciosa de la libertad, reconocimiento del derecho de propiedad de las haciendillas, posibilidad de recibir remuneración y, sobre todo, empleo del trabajo esclavo para una producción destinada a la circulación de mercancías.

7) El derecho de propiedad de los españoles nace de la gracia real, al principio, y de la compra-venta, luego, y está amparado por numerosas fórmulas legales basadas, inicialmente en el derecho de conquista, y en las Partidas y cédulas reales. La propiedad de la tierra surge paralela a la encomienda y no por transformación de ésta en aquélla. Tampoco se incrementa, en lo fundamental, por el recurso fraudulento de las llamadas composiciones, normativa perfectamente legal en su época.

8) Los descendientes de los conquistadores españoles o de los señores llegados más tarde forman el estamento de la nobleza criolla, que es la clase más dinámica, más creadora, con más iniciativa y con mejor formada conciencia dirigente. En lo político, de ella va a surgir el núcleo rector del movimiento de independencia que va a dar lugar al derrumbe del sistema colonial y a la fundación de la República. En lo económico, funda las empresas agrícolas, ganaderas y comerciales de verdadera importancia, en oposición a los resultados económicos menguados de la

encomienda y la misión. Y en lo cultural, da origen a los colegios, seminarios y universidades y a otras manifestaciones artísticas, literarias y culturales de cierto interés.

9) La iglesia es la institución rectora de la vida espiritual, moral y cultural de la población, y ejerce su rectoría como privilegio único y no compartido. Gracias a ello, y no al revés, la iglesia tiene mucha voz en los asuntos políticos y de dirección administrativa y judicial a escala local y territorial de la colonia. Su función económica es derivada y esencialmente diferente de las actividades bancarias y financieras de la Venezuela republicana de los siglos XIX y XX, y lo que va del XXI.

10) El sistema colonial venezolano es algo vivo y cambiante, visto a lo largo de tres centurias. Pero, no es armónico. En su seno se desarrollan pugnas, tensiones, contradicciones y luchas, donde cabe destacar las movilizaciones de los indígenas por la defensa de sus antiguos moradas, de su integridad humana y por una vida y un futuro mejores. La de los esclavos por no ser tratados como bestias sino como seres humanos. Y la de los criollos en general por la defensa, el progreso y el respeto del suelo donde nacieron.

11) España, punto de nacimiento del sistema colonial venezolano, no fue el imperio rapaz, hundido en la oscuridad de la Edad Media y degenerada su gente por la concupiscencia y el oro. Sobre ella recae mucha culpabilidad en torno a los males sufridos por los habitantes de estas tierras en aquellos siglos, pero su empresa conquistadora y colonizadora se inscribe dentro de lo acontecimientos más resaltantes que dieron lugar a lo que en esos momentos se llamó el mundo moderno. En la historia han quedado inscritos los debates, no ocurridos en otras potencias europeas, que sus mentes más lúcidas protagonizaron para explicar el fenómeno de estas tierras inéditas.

ANEXO

DE LA LIBERTAD DE COMERCIO DE ESPAÑA A INDIAS

Para fomentar la población en nuestras Américas, la agricultura y consumos de renglones de Europa en ella y en España la navegación, agricultura y algunas fábricas son indispensables la libertad de comercio de la metrópoli a Indias, la extinción del contrabando en ellas y la provisión cómoda de negros.

Sin libertad no se puede dar comercio floreciente, utilidades bien repartidas, instrucción mercantil, cálculo, economía, aplicación, actividad, construcción y marinería nacional, y establecidas las reglas y contribuciones convenientes que sirvieren de norte al comercio y Ministros de América, sin que les restase arbitrio de interpretar para abusar en el ejercicio de sus funciones; debía ser tal la libertad de comercio a Indias que el que quisiere hacer alguna expedición o envío a cualquier parte de América, no tuviese más que hacer que presentarse al Administrador de la Aduana respectiva para que le concediese la licencia, en cuyo despacho debía de entender, pues desde que se pide permiso para un registro hasta conseguirle, pasa mucho tiempo, se pierde la oportunidad, y sin tenerle no se pueden hacer acopios ni sirve la especulación.

Aunque muchos creen que lo que se lama libertad de comercio a Indias desde el año de 78 nos ha arruinado y ha acabado con las poderosas casas de Cádiz, no es así.

En Cádiz a favor del sistema de flotas y registros que conseguían los más poderosos, un corto número de éstos, nacionales y extranjeros a nombre de españoles, practicaban cuasi todo el comercio de Indias, generalmente hablando, sin economía ni aplicación, encareciendo todas las cosas y enriqueciendo a muchas casas extranjeras establecidas en aquella plaza sólo para venderles reglones que debían acopiar en las fábricas o ciudades inmediatas a ellas en los tiempos más propios de hacer las compras, y para comprarles los frutos que se extraían del extranjero, en cuyas conducciones pudiéramos ocupar muchas embarcaciones aún de las del tráfico de Indias, criar y mantener mucha marinería nacional, proporcionando las cosas de modo que el flete de nuestros buques fuese igual, o poco más, que el de los extranjeros.

De aquel estanco a favor de la industria nacional encadenada y del resto de las provincias de España que, poco o nada, participaban del fructífero riego del comercio y navegación resultaban cuatro casas ricas en Cádiz, otras tantas en América particularmente en Nueva España, donde todavía claman algunos viejos por su comercio de monopolio que hacían por costumbre a favor del sistema y de mucho dinero suyo o ajeno, que retenían de flota a flota, o hasta la salida de los azogues, comprando uno o más renglones y vendiéndolos a precios excesivos por la seguridad de que no habían de tener concurrencia en dos o tres años, lo que disminuía los consumos y favorecía el contrabando y además algunos Maestres de flotas, criaturas del Prior y Cónsules, que sólo con ir y venir de Veracruz ganaban 40, o 50 mil pesos, que en el día se distribuyen entre el comercio por lo mucho menos que les cuesta los envíos de fondos a España y los dueños de los infinitos buques que regresan con plata y frutos.

Del sistema de libertad ha resultado, o resultará precisamente, como lo ha acreditado la experiencia en todas partes, el mayor consumo de renglones nacionales y extranjeros, que la concurrencia dará su verdadero valor a las cosas, que las utilidades se distribuyan, que la nación se haga comerciante, marinera y constructora, que los hombres trabajen con instrucción, aplicación, economía y espíritu mercantil, de que nos dan ejemplo los catalanes, y que muchos discurrirán y ganarán más que los pocos que se enriquecen en Cádiz, que aunque se hayan perdido estos se han ganado muchos cuya mejoría de fortuna interesa al Estado por lo que contribuye a la población y es conforme con el derecho que tienen los hombres de poder ejercer su industria en común.

El atraso de muchas casas de Cádiz, no procede de la libertad de comercio, y como dicen, del trastorno de los negocios; pues si este principio fuera ruinoso lo hubiera sido para las establecidas en los demás puertos habilitados: viene de no trabajar sobre ellos como lo exige el sistema de libertad, y en fin, para practicarle como antes hasta establecerse en Cádiz con mucho dinero propio, o ajeno. ¿Quién consigue esto? Cuatro particulares en perjuicio de la industria y actividad nacional, que se aletargaría, pues en tal sistema no se necesita de vigilancia, economía, etc. Y volveríamos a no tener marina mercantil y a pagar 14 pesos fuertes por el flete de Cádiz a Veracruz, de un barril de carga, que en el día lo llevan muy contentos por 2 1/3 a 3 pesos fuertes, sucediendo a proporción lo mismo en todos los renglones de Europa que se conducen a la América, y de los que se traen de ella, de donde ya se envían muchas producciones como el algodón a 2 pesos de a 128 cuartos quintal, que antes estaban olvidadas, porque su poco valor y mucho volumen no resistían un flete excesivo y no por esto faltan buques para la navegación a aquellos puertos ni dejan de medrar los dueños de ellos tanto como antes los navieros de Cádiz.

Si las presentes circunstancias en relación a los intereses del comercio nacional no permiten la libertad general del de España a Indias parece que no puede subsistir ninguna tan poderosa que se oponga a la de hacerse con las producciones del suelo de la metrópoli y efectos de sus fábricas cuyo fomento, el de nuestra agricultura y navegación, necesitan del mayor consumo que no se puede conseguir sin libertad que es lo que ha facilitado el beber vino, aguardiente y el gastar otros renglones de España a infinitas gentes de América, que antes se pasaban sin ellas porque sus facultades no eran en razón del pecio a que se vendían.

A favor de la libertad ejercida por los puertos habilitados en la Península, entre otras ventajas, se consigue la extracción cómoda de todas las producciones del reino y en las partes más interiores de él la mayor equidad en los precios del cacao, azúcar y demás renglones de América que se consumen.

(Párrafos de "Noticias de las provincias de Maracaibo y Barinas", de autor anónimo, c.1787, en Antonio Arellano Moreno (recop.), *Relaciones geográficas de Venezuela*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1964, pp. 413-433. Arellano Moreno dice que este informe fue obtenido en Londres por el doctor Luis M. Salas, quien se lo entregó al académico Diego Nucete Sardi, quien, a su vez, lo publicó en el Boletín de la Academia Nacional de la Historia, tomo XXXVIII, Nº 150).

BIBLIOGRAFÍA

Hemos dividido la bibliografía, para comodidad de su búsqueda, en los siguientes apartes: A) Fuentes documentales originales, que son los documentos que se encuentran en repositorios tal como fueron escritos, o transcritos al estilo de la labor del Hermano Nectario María; B) Fuentes documentales impresas, que son las recopilaciones de documentos originales, pero impresas en libros. Muchas de estas recopilaciones están precedidas de estudios introductorios muy densos, razón por la cual se hace mención de su autor; C) Bibliografía general, donde están incluidos libros y revistas impresas; y D) Bibliografía *online* (en línea), que incluye libros, revistas, documentos y otros materiales a los que se ha tenido acceso vía internet por los buscadores al estilo de Google. Se incluye aquí un CDROM por ser de las nuevas tecnologías.

A) Fuentes documentales originales

ARCHIVO ARZOBISPAL, Carpeta *Censos referentes a convento Concepciones, de 1692 a 1727*, 13 documentos, Caracas.

BIBLIOTECA NACIONAL, *Matrículas de las parroquias de Caracas y demás pueblos de su diócesis*, 1759.

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, *Santo Domingo*, leg. 197-B, en Archivo de la Academia Nacional de la Historia, colección Caracas, Matrículas de indios, año 1688, 32, v.t II-138.

B) Fuentes documentales impresas

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, *Boletín*, Nº 85, Caracas, tomo XXII, noviembre-diciembre de 1937.

ARCILA FARÍAS, Eduardo (comp.), El Real Consulado de Caracas*, Caracas, Edime-UCV y Madrid, Talleres Gráficos, 1957.*

ARELLANO MORENO, Antonio (Recop.), *Relaciones geográficas de Venezuela*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1964.

CARROCERA, Buenaventura de. *Misión de los capuchinos en Cumaná*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1968.

_____ *Misión de los capuchinos en Guayana*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1979.

_____ *Misión de los capuchinos en los llanos de Caracas*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1972.

CORTÉS, Santos Rodulfo (comp.), *Antología documental de Venezuela. 1492-1900. Materiales para la enseñanza de la historia de Venezuela*, Caracas, Talleres Tipográficos Santa Rosa, 1960.

DA PRATO-PERELLI, Antoinette. *Las encomiendas de Nueva Andalucía en el siglo XVII, 1688, (traslado y estudio preliminar)*, Caracas, Academia Nacional de la Historia, *1990.*

DÁVILA, Vicente. *Encomiendas*, tomo I, Caracas, Tipografía Americana, 1927.

DEL REY, José, S.J. *Documentos jesuíticos relativos a la historia de la Compañía de Jesús en Venezuela*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1966.

FIGUERA, Guillermo. *Documentos para la historia de la iglesia colonial en Venezuela*, tomo I, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1965.

GÓMEZ CANEDO, Lino. *Las misiones de Píritu. Documentos para su historia*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1967.

GUTIÉRREZ DE ARCE, Manuel. *El sínodo diocesano de Santiago de León de Caracas de 1687. Valoración canónica del regio placet a las constituciones sinodales indianas*. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1975.

LEAL, Ildefonso (comp.) *Cedulario de la Universidad de Caracas (1721-1820)*, Caracas, UCV, 1965.

MIJARES, Augusto (recopilador) en *Boletín del Archivo General de la Nación*, tomo XXII, Nº 85, Caracas, noviembre-diciembre de 1937.

MILLARES CARLO, Agustín (edit.), *Protocolos del siglo XVI*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1966.

NÚÑEZ, Enrique Bernardo (compilador), *Cacao*, Caracas, Banco Central de Venezuela, 1972.

OLAVARRIAGA, Pedro José de. *Instrucción general y particular del estado presente de la provincia de Venezuela en los años de 1720 a 1721*, Caracas, Ediciones Fundación Cadafe, 1981.

PEÑA VARGAS, Ana Cecilia. *Misiones capuchinas en Perijá, documentos para su historia, 1682-1819*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1995.

PONCE, Marianela. *El control de la gestión administrativa en el juicio de residencia al Gobernador Manuel González Torres de Navarra*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1985.

RECOPILACIÓN DE LEYES DE LOS REYNOS DE LAS INDIAS, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1997, facsimilar de la edición de Madrid, Julián de Paredes, 1681.

TROCONIS DE VERACOECHEA, Ermila. *Los censos en la iglesia colonial venezolana (Sistema de préstamos a interés)*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1982.

_____ *Las obras pías en la iglesia colonial venezolana*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1971.

VACCARI, Leticia (comp.), *Juicios de residencia en la provincia de Venezuela – I – Don Francisco Dávila Orejón Gastón. 1673-1677*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1983.

C) Bibliografía general

i) Libros

ARCILA FARÍAS, Eduardo. Economía colonial de Venezuela, 2a ed., Caracas, 1973.

_____ *El régimen de la encomienda en Venezuela*, Caracas, Instituto de Investigaciones de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, 2ª. edición, 1966.

ARTIGAS DUGARTE, Yuleida y Castillo, Robert Darío. *Linajes de la élite colonial merideña: Gavirias y Avendaños (siglos XVI y XVII)*, Mérida, Editorial Venezolana, 1998.

AVELLÁN DE TAMAYO, Nieves. *La Nueva Segovia de Barquisimeto,* Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1992.

BARMAN, Janice y YOUNG, Leni. *Guía de Venezuela*, Caracas, Ernesto Armitano editor, 1986.

BELENGUER, Ernest. *El imperio de Carlos V. Las coronas y sus territorios*, Barcelona, Ediciones Península, 2002.

BIORD, Horacio. *Niebla en las sierras. Los aborígenes de la región centro-norte de Venezuela (1550-1625)*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 2005.

BOHORQUEZ-MORAN, Carmen L. *Francisco de Miranda, Précurseur des Indépendences de l'Amérique latine*, Paris, Éditions L'Harmattan, 1998.

BOLÍVAR, Simón. *Obras completas*, vol. I, Madrid, Maveco de Ediciones, 1992.

BRAUDEL, Fernand. *Carlos V y Felipe II*, Madrid, Alianza Editorial, 1999.

BRICEÑO PEROZO, Mario. *Temas de historia colonial venezolana*, tomo II, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1986.

BRITO FIGUEROA, Federico. *Historia económica y social de Venezuela*, Caracas, Ediciones Biblioteca UCV, 1987.

CAMPO DEL POZO, Fernando. *Historia documentada de los agustinos en Venezuela durante la época colonial*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1968.

CARCELLER CERVIÑO, María del Pilar. "Nobleza cortesana, caballería y cultura. La casa ducal de Alburquerque", en María Concepción Quintanilla Raso (Dir.), *Títulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad política. Fundamentos en la Castilla medieval*, Madrid, Sílex Ediciones, 2006.

CASTILLO HIDALGO, Ricardo Ignacio. *Asentamiento español y articulación interétnica en Cumaná (1560-1620)*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 2005.

CASTILLO LARA, Lucas Guillermo. "La gesta comunal. Del silencio al grito", en Varios Autores, *Los comuneros de Mérida (Estudios)*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1981.

_____ *Apuntes para la historia colonial de Barlovento*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1981.

_____ *Materiales para la historia provincial de Aragua*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1977.

CAULÍN, Antonio. *Historia corográfica de la Nueva Andalucía*, edición facsimilar, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1992.

CORTÉS, Santos Rodolfo. *El régimen de las "gracias al sacar" en Venezuela durante el periodo hispánico*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1978.

DÍAZ SÁNCHEZ, Ramón. *El marqués de Varinas, desagravio de un aventurero*, Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1956.

FELICE CARDOT, Carlos. *La rebelión de Andresote (Valles del Yaracuy, 1730-1733)*, 2ª edición, Bogotá, Editorial ABC, 1957.

FERRERO KELLERHOFF, Inés Cecilia. *Capacho: un pueblo de indios en la jurisdicción de la villa de San Cristóbal*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1992.

FERRIGNI VARELA, Yoston. *La crisis del régimen económico colonial en Venezuela, 1770-1830*, Caracas, Ediciones del Banco Central de Venezuela, 1999.

GANSHOF, François Louis. *El feudalismo*, Barcelona, Ariel, 1985.

GARCÍA PONCE, Antonio, *Adiós a las izquierdas*, Caracas, Alfa Grupo Editorial, 2003.

_____ *Guaicaipuro, Bolívar y Robinson* (Caracas, Ediciones de la Federación Médica Venezolana, 2004.

GIL FORTOUL, José. *Historia constitucional de Venezuela*, tomo primero, Caracas, Parra León Hermanos Editores, 1930.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Alfonso F. *El Oriente venezolano a mediados del siglo XVIII, a través de la visita del Gobernador Diguja*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1970.

HUMBOLDT, Alejandro de. *Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente, hecho en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 y 1804*, Caracas, Ediciones del Ministerio de Educación, 1956.

IRAZÁBAL, Carlos. *Venezuela esclava y feudal. Ensayos de interpretación dialéctica de algunos episodios de la historia de Venezuela*, Caracas Pensamiento Vivo C.A. Editores, 1964.

JIMÉNEZ G., Morella A. *La esclavitud indígena en Venezuela (siglo XVI)*. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1986.

LADERA DE DIEZ, Elizabeth. *Contribución al estudio de la "aristocracia territorial" en Venezuela colonial. La familia Xerez de Aristeguieta, siglo XVIII*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1992.

LASERNA GAITÁN, Antonio Ignacio. *Tierra, gobierno local y actividad misionera en la comunidad indígena del Oriente venezolano: La visita a la Provincia de Cumaná de don Luis de Chávez y Mendoza (1783-1784)*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1993.

LEAL, Ildefonso. Historia de la UCV, *Caracas, Ediciones del Rectorado de la UCV, 1981.*

LLAVADOR MIRA, José. *La Gobernación de Venezuela en el siglo XVII*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1969.

LÓPEZ BOHÓRQUEZ, Alí Enrique. La Real Audiencia de Caracas (Estudios), *Mérida, Ediciones del Rectorado de la Universidad de los Andes, 1998.*

LÓPEZ GARCÍA, José Tomás. *Dos defensores de los esclavos negros en el siglo XVII*, Maracaibo, Biblioteca Corpozulia; Caracas, UCAB, 1982.

LOVERA DE SOLA, Roberto J. *La larga casa del afecto*, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República, 2000.

LYNCH, John. *La España del siglo XVIII*, Barcelona, Editorial Crítica, 3ª edición 2004.

MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan y FLORES MORÓN, Braulio L. "Los laberintos de la fortuna - El ocaso del orden colonial en Venezuela y la generación militar de Simón Bolívar", en *Alberto Filippi (Coord.),* Bolívar y Europa*, volumen III, Caracas, Editorial Arte, 1995.*

MAZA ZAVALA, D.F. "De las perlas al petróleo", en Varios autores, *Venezuela quinientos años*, Caracas, Citibank Venezuela, 1997.

MIJARES, Augusto. *Lo afirmativo venezolano*, en Obras completas, tomo IV, Caracas, Monte Ávila Editores y Comisión Centenaria Augusto Mijares, 1998.

MORALES ÁLVAREZ, Juan M. *El mayorazgo del padre Aristeguieta, primera herencia del Libertador*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1999.

MORGAN, Lewis. *La sociedad primitiva*, Madrid, Editorial Ahiso, Editorial Pluma, 1980.

MORÓN, Guillermo. *Historia de Venezuela*, USA, Británica, 1979

MOXÓ, Salvador de. *Feudalismo, señorío y nobleza en la Castilla medieval*, Madrid, Real Academia de la Historia, 2000.

NUNES DÍAZ, Manuel. El Real Consulado de Caracas (1793-1810), *Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1971.*

OSORIO C., Eduardo, *Historia de Mérida. Conformación de la sociedad colonial merideña 1558-1602*, Mérida, Universidad de los Andes, 2005,

OVIEDO Y BAÑOS, José de. *Historia de la conquista y población de la provincia de Venezuela*. Caracas, Ediciones Fundación Cadafe, 1982 (La primera edición es de 1723)

PARÉS, Carmen Helena. *Huellas ka-tu-gua. Ensayos*, Caracas, UCV, 1995.

PARRA LEÓN, Caracciolo. *La instrucción en Caracas, 1567-1725*, Caracas, Comisión Presidencial del V Centenario, J.A. Catalá, editor, 1996, edición facsimilar de Parra León Hmnos. Editores, Caracas, 1932.

PICÓN-PARRA, Roberto. *Fundadores, primeros moradores y familias coloniales de Mérida (1558-1810)*, tomo III, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de Historia, 1990

PINTO C., Manuel, *Los primeros vecinos de Caracas*, Caracas, Ediciones del Cuatricentenario de Caracas, 1966.

POPPER, Karl R., *La miseria del historicismo*, Madrid, Alianza Editorial, 1984.

QUINTANILLA RASO, María Concepción (directora), *Títulos, grandes del reino y grandeza en la sociedad política. Fundamentos en la Castilla medieval*, Madrid, Sílex Ediciones, 2006.

QUINTERO, Gilberto. *El teniente justicia mayor en la administración colonial venezolana. Aproximación a su estudio histórico jurídico*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1996.

QUINTERO, Inés. *Francisco de Miranda*, Caracas, Biblioteca Biográfica Venezolana, 2006.

RAMOS PÉREZ, Demetrio. *Estudios de historia venezolana*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1976.

ROJAS, Reinaldo. *El régimen de la encomienda en Barquisimeto colonial, 1530-1810*. Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1992.

ROJO, Zulay. *El mayorazgo de los Cornieles*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1997.

SOLÓRZANO PEREYRA, Juan. *Política indiana*, Madrid, Fundación José Antonio de Castro, 1996.

STHOR, Tomás. El circulante en la Capitanía General de Venezuela. El dictamen de Francisco de Saavedra (1790) y el informe de Joseph Diez Roble (1792). Caracas, Ediciones del Banco Central de Venezuela, 1998.

SUÁREZ, Santiago Gerardo. "Instituciones panvenezolanas del periodo hispánico", en Varios Autores, *Los tres primeros siglos de Venezuela...*, pp. 277-375.

_____ *Las fuerzas amadas venezolanas en la Colonia*, Caracas, Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 1979.

VALDÉS, Julio; Pérez, Joseph; y Juliá, Santos. *Historia de España*, Madrid, Editorial Espasa Calpe, 2006.

VARIOS AUTORES (Federico Brito Figueroa, Eduardo Arcila Farías, Ramón A. Tovar, D.F. Maza Zavala), *La obra pía de Chuao*, Caracas, 1568-1825, Universidad Central de Venezuela, 1961.

Varios Autores (Hermann Oropeza, Pedro Cunill Grau, Santiago Gerardo Suárez, Fabricio Vivas Ramírez), *Los tres primeros siglos de Venezuela, 1498-1810*, Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, 1991.

VARIOS AUTORES (Miguel Arroyo, J.M. Cruxent y Sagrario Pérez-Soto), *Arte prehispánico de Venezuela*, Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, 1971.

VILAR, Pierre. *Pensar históricamente*, Barcelona Editorial Crítica, 2004.

VIVAS RAMÍREZ, Fabricio. "La economía colonial", en Varios Autores, *Los tres primeros siglos de Venezuela, 1498-1810*, Caracas, Fundación Eugenio Mendoza, 1991.

ii) Revistas

ALMARZA, Ángel, "La limpieza de sangre en la provincia de Caracas durante el siglo XVIII", en *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, tomo LXXXVII, Nº 348, Caracas, octubre-diciembre de 2004, pp. 127-160.

CHACÓN, Zully,"Los hierros del conde de Tovar: la lucha de la élite ganadera contra el abigeato", en *Boletín de la Academia Nacional de la Historia*, tomo LXXXVII, Nº 348, Caracas, octubre-diciembre de 2004, pp. 67-83.

CIVRIEUX, Marc de. "Los caribes y la conquista de la Guayana española (Etnohistoria kari'ña)", en revista *Montalbán*, N° 5, Caracas, UCAB, 1976.

REVISTA DE INDIAS, del Departamento de América, Instituto de Historia, CSIC; volumen LXIII, N° 227 (enero-abril), Madrid, 2003.

TROCONIS DE VERACOECHEA, Ermila. "Tres cofradías de negros en la Iglesia de "San Mauricio" en Caracas", en Revista *Montalbán*, N° 5, Caracas, Universidad Católica Andrés Bello, 1976.

_____ *El corregimiento de indios de El Tocuyo en los siglos XVII y XVIII*, multigrafiado, s/f.

iii) Prensa

GUERRERO, Gustavo. "Papel Literario", diario *El Nacional*, Caracas, 12 de junio de 2005.

D) Bibliografía *online*

ANES Y ÁLVAREZ DE CASTRILLÓN, Gonzalo. www.casinodemadrid.es

ARCHIVO GENERAL DE INDIAS, Patronato, 195, R. 23, ff, 1 r.-9v,

http://produccion.serbi.ula.ve

AUBET, M. E. *Los fenicios en la Península Ibérica*, un extracto de "Spagna", en *I Fenici*, Milán, Ed. Bompiani, 1988, 226-242.

BARALT, Rafael María y Díaz, Ramón. *Resumen de la historia de Venezuela, desde el descubrimiento de su territorio por los castellanos en el siglo XV, hasta el año de 1797*, tomo primero, Curazao, Imprenta de la Librería de A. Bethencourt é hijos, 1887, p. 413. Digitalizado por Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2005.

BARBESÍ DE SALAZAR, Ligia. "Genealogía social de los Gobernadores de la Provincia de Maracaibo, 1787-1812", en revista *Procesos Históricos*, Nº 006, Mérida, Universidad de los Andes, 2004.

BODU AYALA, Gilberto *Algunos linajes de Venezuela*, www.gilberto.bodu.net/

BOLETÍN DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE GENEALOGÍA, Nº 7, Caracas, mayo de 1992.

CAMACHO, Cristián. "La actividad contrabandista y el distanciamiento Estado-ciudadano durante la colonia en Venezuela", en *Procesos Históricos, Revista de Historia y Ciencias Sociales*, Mérida, Universidad de los Andes, vol. 1, Nº 2, 2002. http://redalyc.unamex.mx

COMITÉ CENTRAL DEL P.C.(b) de la URSS, *Historia del Partido Comunista (bolchevique) de la URSS*, tomo 1, capitulo IV, Moscú, Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1939.

DE LAS CASAS, Bartolomé. *Brevísima relación de la destrucción de las Indias*, prólogo, en *www.ciudadseva.com/ Hogar electrónico del escritor Luis López Nieves*.

ENGELS, Federico. *Anti-Dühring, o la subversión de la ciencia de Eugenio Dühring (Introducción al estudio del socialismo)*, Madrid, Editorial Ayuso, 2ª. edición, 1975.

_____ *Del socialismo utópico al socialismo científico*, en Marx-Engels, *Obras escogidas*, Moscú, Editorial Progreso, 1981.

_____ *El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado*, en C. Marx y F. Engels, *Obras escogidas*, Moscú, Editorial Progreso, 1981.

FERREIRA ESPARZA, Carmen Adriana, "El crédito colonial en la provincia de Pamplona-Nueva Granada: usos del censo consignativo", en revista *Signos Históricos*, de la Universidad Industrial de Santander, Nº I.1, junio de 1999.

_____ *La economía espiritual entre lo terrenal y lo celestial. Pamplona. Siglo XVIII*. Bucaramanga, Universidad Industrial de Santander, 2001.

FERRY, Robert J. *The Colonial Elite of Early Caracas, Formation & Crisis 1567–1767*, *Berkeley*, University of California Press, 1989, http://ark.cdlib.org/ark:/13030/ft5r29n9wb/

FRANK, André Gunder. *Capitalismo y subdesarrollo en América* Latina, 1965, texto completo en http://www.eumed.net/cursecon/textos

GONZALBO AIZPURU, Pilar. "Reseña de libros", en revista *Estudios de Historia Novohispana*, www.ejournal.unam.mx/historia_novo/ehn/EHNO1608.

LANGUE, Frédérique. "El añil en la Venezuela ilustrada", revista *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, BAC, mis en ligne le 22 février 2005, référence du 20 avril 2007, disponible sur: http://nuevomundo.revues.org/document770.html

_____ "Orígenes y desarrollo de una élite regional. Aristocracia y cacao en la provincia de Caracas, siglos XVI-XVIII", en revista *Nuevo Mundo Mundos Nuevos,* BAC, mis en ligne le 22 février 2005, http://nuevomundo.revues.org/document769.html

MANZANILLA FÉLIX, Ángel Francisco. *Algunos Documentos en el Archivo General de la Nación relativos al Convento de Santo Domingo de la Ciudad del Tocuyo.* www.dominicos.org.ve/

MARCHENA FERNÁNDEZ, Juan. "El ejército de América y la descomposición del orden colonial. La otra mirada en un conflicto de lealtades", *Militaria, Revista de Cultura Militar*, Nº 4, Madrid, Universidad Complutense, 1992.

MARTÍNEZ LÓPEZ-CANO, María del Pilar. "El crédito eclesiástico en Nueva España", revista *América Latina en la Historia Económica*, Nº 6, julio-diciembre de 1996.

MARTÍNEZ VARA, Tomás. "Algunas reflexiones sobre el comercio colonial", en *Cuadernos de Estudios Empresariales*, Nº 4, Madrid, Editorial Complutense, 1994.

MCCAA, Robert. "¿Fue el siglo XVI una catástrofe demográfica para México? Una respuesta basada en la demografía histórica no cuantitativa" (traducción de Carlos Aguirre), en *Cuadernos de Historia*, N° 15, Santiago de Chile, diciembre de 1995.

OBEDIENTE SOSA, Enrique (compilador). *Documentos para la historia lingüística de Mérida. Siglos XVI-XVII*. Trascripción: Grupo de Lingüística Hispánica.

PALACIO C., Germán A. *En búsqueda de conceptos para una historiografía ambiental*, Bogotá, 2001, germanpalacio@hotmail.com

PELEADO SÁNCHEZ, Fernando. *Google, Internet*, o mpeleatos@wanadoo.es

PÉREZ PERDOMO, Rogelio. "Los abogados americanos de la monarquía española", en *Anuario Mexicano de Historia del Derecho*, volumen XV, México, 2003.

PERFETTI, María Eugenia. "Vida cristiana de los esclavos en la Venezuela colonial. Estudio de la normativa eclesiástica venezolana", en revista *Anales*, de la Universidad Metropolitana, Caracas, Vol. 4, Nº 2 (Nueva Serie), 2004.

PIMENTEL, Juan de. *Relación de Caracas*, Venezuela desde la UCAB.

RAMÍREZ MÉNDEZ, Luis A. "El sistema de regadío en una sociedad agraria: el caso de Mérida colonial", en *Procesos Históricos, revista semestral de Historia, Arte y Ciencias Sociales*, Nº 9, Mérida, enero 2006.

RAMOS GUÉDEZ, José Marcial. "Mano de obra esclava en el eje Barlovento-Valles del Tuy durante el siglo XVIII", en revista *Mañongo*, vol. IV, Nº 24, Valencia, Universidad de Carabobo, 2005

_____ *Una "Sublevación" de los esclavos de la Provincia de Caracas, 1749: fuentes documentales.*

RUIZ A., Isabel E. "La Gobernación de Cumaná dentro del giro de la Real Compañía de Comercio de Barcelona (1761-1785)", en revista *Mañongo*, Valencia, Universidad de Carabobo, Nº 26, 2006.

SALAZAR ACHA, Jaime de. "La limpieza de sangre", en *Revista de la Inquisición*, Madrid, volumen 1, Madrid, Universidad Complutense, 1991, pp. 289-308, www.ucm.es/BUCM/revistas/der/

SALAZAR, Sheila. "Cacao y riqueza en la provincia de Caracas en los siglos XVII y XVIII", en *Tierra Firme*, vol. 22, N° 87, Caracas, julio de 2004.

SANOJA OBEDIENTE, Mario. *Integración latinoamericana y las poblaciones originarias de América*, Red Voltair.net – Question.

_____ *La historia que regresó del frío. Guayana siglo XVIII*. 5 de agosto de 2004.

SANZ AYÁN, Carmen. www.casinodemadrid.es

SUÁREZ DE PAREDES, Niria. "Consideraciones históricas sobre formas asociativas de carácter financiero vinculadas a la actividad agraria: el caso de la cofradía de San Pedro Parroquia El Sagrario del Estado Mérida, 1850-1900", en *Presente y Pasado. Revista de Historia*, Año 8, Nº 16, julio-diciembre de 2003.

VALERY SALVATIERRA, Rafael. *La familia tachirense Moreno Pacheco*.

VERGARA CIORDIA, Javier. "Datos y fuentes para el estudio de los seminarios conciliares en Hispanoamérica: 1563-1800", en *Anuario de Historia de la Iglesia*, de la Universidad de Navarra; Pamplona, 2005.

WOSEBER, Gisela von. "La función social y económica de las capellanías de misa en la Nueva España del siglo XVIII", en revista *Estudios de Historia Novohispana*, www.ejournal.unam.mx/historia_novo.

AIZPURUA AGUIRRE, Ramón. "Municipios", en *Diccionario de historia de Venezuela*, Caracas, Fundación Polar, CDROM.

FUNDACIÓN POLAR, *Diccionario de Historia de Venezuela*, Caracas, CDROM, 1998.

SUMARIO

Introducción 3

Capítulo I
¿Quién descubre a quién? 8

Capítulo II
El choque de dos mundos 18

Capítulo III
La esclavitud indígena: un trofeo de la codicia 29

Capítulo IV
El sistema de las encomiendas 39

Encomiendas de Cumaná

Las encomiendas en la Provincia de Cumaná hacia 1688

La visita de Fernando de la Riva Agüero a la Nueva Andalucía en 1688.
Encomenderos, antecedentes de la encomienda, trámites para la obtención de la encomienda y posesión de la misma. Número y características de los indios encomendados.
Quejas contra el encomendero y vicios de la encomienda. Alegatos en su defensa que hacen los encomenderos. Medidas tomadas por el Oidor Fernando de la Riva Agüero.

Capítulo V
Encomiendas en las otras provincias 84

Capítulo VI
Fin de las encomiendas. Encomienda y propiedad de la tierra 100
Diferencia entre la tierra de la encomienda y la tierra de propiedad del español.
La propiedad de la tierra, ¿usurpación o derecho de conquista?

Capítulo VII
Características elementales de las encomiendas. 122
Encomienda y esclavitud. Encomienda y feudalismo

Capítulo VIII
El sistema de las misiones 129
Misiones de Cumaná
Misiones de Cumaná.
El comienzo.
Cuadro sinóptico de los pueblos a cargo de los sacerdotes capuchinos, con especificación de sus fundadores, y lugar y año de su fundación.

Algunas características adicionales de estos pueblos.
Levantamientos indígenas e invasiones de piratas.
Normas y ordenanzas de las misiones.

Capítulo IX
Misiones de Píritu 169
Cuadros de resumen de los pueblos de la misión de Píritu.
Problemas y polémicas en Píritu.

Capítulo X
Misiones de Guayana 186
Los pueblos, su población.
Epidemias, levantamiento de indios e invasiones de piratas.
Pleitos con las autoridades administrativas.

Capítulo XI
Misiones de los Llanos de Caracas 201
Fundación de pueblos.
Roces con autoridades, relaciones de trabajo y acuerdos entre congregaciones.

Capítulo XII
Misiones de los jesuitas 208

Capítulo XIII
Crítica de las encomiendas y misiones 210

Capítulo XIV
La esclavitud negra 227
Cuantía de la esclavitud.
El africano, más productivo que el indio.
El esclavo puede ser también asalariado y hasta propietario.
La esclavitud podía no ser vitalicia.
La condición artesanal de algunos esclavos.
Las agrupaciones de las cofradías.
El horizonte de los negros libertos.
Las pugnas y roces entre los esclavos.
¿Hizo crisis el sistema basado en el trabajo esclavo a finales de la colonia por una merma histórica de su productividad?
El silencio de la Iglesia ante la esclavitud negra.
Lugar de la esclavitud en la historia.
Dos enfoques a elegir.

Capítulo XV
La nobleza criolla 262
La fortuna patrimonial.
La propiedad de la tierra.
La situación en Los Andes.

La situación en Cumaná.
Otros renglones.
Cacao, el gran fruto de los propietarios criollos.
La privanza.
Nacimiento, la sangre.
Diferenciación jurídica.
◇ Limpieza de sangre.
◇ Fueros y normas protocolares especiales.
◇ Títulos de nobleza.
Papel de la endogamia y de las estrategias matrimoniales en la formación y existencia de la nobleza criolla.
¿La nobleza criolla formó parte de un régimen de castas? El régimen de las "gracias al sacar".

Capítulo XVI
El funcionariado real colonial 325
El Gobernador y Capitán General.
El Intendente del Ejército y Real Hacienda.
Los magistrados de la Real Audiencia.
El Obispo, la iglesia católica. Los censos, las capellanías y las obras pías de la Iglesia.
Los diezmos de la iglesia.
La función educadora de la iglesia.
Los jefes militares del Ejército de América.

Capítulo XVII
El Cabildo y el Real Consulado, dos bastiones de los criollos 399
El poder municipal, poder de los criollos.
Los alcaldes ordinarios como sustitutos de los gobernadores faltantes.
Pleitos entre los cabildos y los tenientes de justicia mayor.
El cabildo como tribuna excepcional de las demandas de los criollos.
El cabildo y los comuneros de Mérida.
El Real Consulado, una petición de los criollos.

Conclusión 440

Anexo 444

Bibliografía 446

Índice onomástico (para el momento de la impresión)